

Contenido

PRESENTACIÓN	4
CAPÍTULO I.....	6
CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE LA VIOLENCIA Y VULNERACIONES DE DERECHOS DEL PUEBLO INDÍGENA ZENÚ EN EL MARCO DEL CONFLICTO SOCIO-POLÍTICO COLOMBIANO	6
INTRODUCCIÓN.....	6
1. EL PERIODO COLONIAL.....	8
2. LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX.....	12
3. LA PROBLEMÁTICA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO EN COLOMBIA	15
3.1. La tierra en La década del 70.....	18
4. DESARROLLO NORMATIVO: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991	23
5. CONTEXTUALIZACIÓN Y DINÁMICAS DE VIOLENCIA.....	28
5.1. Montes de María	28
5.1.1.Momentos de mayor presión	29
5.1.2.Ingreso de fuerzas subversivas.....	30
5.1.3.Presencia de paramilitares.....	30
5.1.4.Conformación de BACRIM.....	34
5.1.5.Rutas de desplazamiento	35
5.2. Norte de Córdoba	36
5.3. Alto San Jorge.....	38
6. IMPACTO DIFERENCIAL DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS COLOMBIANOS	41
6.1. Pueblos Indígenas: Demografía y Etnocidio	42
CAPÍTULO II.....	46
MARCO JURÍDICO	46
1. DERECHOS COLECTIVOS O ÉTNICOS.....	47
1.1. Título de propiedad colectiva	47
1.2. Autonomía y Gobierno Propio.....	47

1.3.	Jurisdicción especial indígena.....	48
1.4.	Diversidad Étnica e identidad cultural.....	48
1.5.	Consulta previa	48
1.6.	Vida colectiva	49
2.	DERECHOS POLÍTICOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES	49
2.1.	Seguridad, Orden social y Paz.....	49
2.2.	Libre locomoción	50
2.3.	Igualdad ante la ley	50
2.4.	Prohibición a la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.....	50
2.5.	Libertad de expresión	51
2.6.	Libertad de pensamiento y conciencia	51
2.7.	Libertad de asociación y movilización	51
3.	DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES	52
3.1.	Soberanía alimentaria.....	52
3.2.	Atención psicosocial	52
3.3.	Dominación y explotación	53
3.4.	Educación.....	53
3.5.	Salud	53
3.6.	Generación y libre disposición de las riquezas	54
3.7.	Derecho al desarrollo.....	54
3.8.	Bienes culturales.....	54
3.9.	Ambiente sano.....	55
3.10.	Recreación	55
3.11.	Familia.....	55
4.	DERECHOS AL CUIDADO Y TRATO PREFERENCIAL	56
4.1.	Mujeres indígenas.....	56
4.2.	Niños y Niñas indígenas	56
4.3.	Discapacitados indígenas.....	56
4.4.	Indígenas en situación de desplazamiento.....	57

5. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL.....	57
5.1. Atención humanitaria	57
5.2. Restitución y retorno	58
5.3. Verdad.....	58
5.4. Justicia.....	58
5.5. Reparación	59
CAPÍTULO III	60
ANÁLISIS DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PUEBLO ZENÚ ..	60
1. DERECHOS COLECTIVOS Y/O ÉTNICOS	60
2. DERECHOS POLÍTICOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES	105
3. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES	142
4. DERECHO AL TRATO DIFERENCIAL	209
5. DERECHO A LA REPARACIÓN	221
CAPÍTULO IV	255
POBLACIÓN INDÍGENA ZENÚ EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO	255
1. CONDICIONES DE VULNERACIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO.....	258
2. CABILDOS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO	266
2.1. DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	270
2.2. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	277
2.3. DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	316
CAPÍTULO V	336
GRÁFICAS DE LA SITUACIÓN DE DERECHOS DEL PUEBLO ZENÚ EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, CÓRDOBA Y SUCRE.....	336
CAPÍTULO VI.....	398
MARCO GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DE DERECHOS DEL PUEBLO ZENÚ	398

PRESENTACIÓN

Teniendo conocimiento de los contextos generales que enmarcan las circunstancias de vida de nuestras comunidades, debíamos emprender una tarea analítica y reflexiva sobre las condiciones en las cuales se desarrollan nuestros derechos fundamentales. Ésta no es más que la necesidad de contener en un solo documento el acervo probatorio de los hechos que dan fundamento a la declaratoria de estados de cosas inconstitucional y comprueban el riesgo inminente de desaparición que envuelve a nuestro pueblo.

En este documento presentamos la contextualización de la violencia y vulneración de derechos del pueblo indígena Zenú, seguido del marco jurídico con los derechos tutelados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos en el marco de la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Colombia, además de un análisis general de la situación de 33 derechos, consolidada por departamentos y municipios, en el que se identificaron las diversas acciones de garantía por derecho tutelado; seguidamente, encontramos un capítulo donde podremos evidenciar la situación de la población Zenú en condición de desplazamiento forzado y relacionamos por último las acciones afirmativas para la garantía de los derechos de pueblo Zenú y las líneas de acción para su cumplimiento. De manera sustantiva, hemos ilustrado, con tortas, matrices y diagramas, el estado de la vulneración de los derechos fundamentales del pueblo Zenú, a nivel general.

Para dar una visión global del estado de las vulneraciones a los derechos, hemos construido un semáforo general de afectaciones que nos permite visualizar el estado de cada derecho por municipio y por cabildo. El semáforo da información sobre tres variables: derecho garantizado, derecho en riesgo de vulneración y derecho vulnerado. Para su manejo en el documento los semáforos están ubicados como anexos.

El contenido de este documento se convierte entonces, en el fundamento para la construcción de las acciones afirmativas y la identificación de las líneas de acción a partir de las cuales establecemos las necesidades concretas y los ejes problemáticos sobre los cuales, deben recaer la formulación de los planes, programas y proyectos para encaminar nuestra salvaguarda étnica y con ello superar el estado de cosas inconstitucional que empaña nuestra pervivencia como pueblo indígena.

CAPÍTULO I

CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE LA VIOLENCIA Y VULNERACIONES DE DERECHOS DEL PUEBLO INDÍGENA ZENÚ EN EL MARCO DEL CONFLICTO SOCIO-POLÍTICO COLOMBIANO

INTRODUCCIÓN

Desde la formación de Colombia como república no ha cesado la violencia sociopolítica en el país, con picos de confrontación durante el siglo XIX pasando por agudos periodos violentos desde mitad del siglo XX hasta nuestros días; la guerra ha sido una constante en la construcción del Estado-nación. Tanto factores externos como internos han influido en el mantenimiento y agudización del conflicto; como factores externos podemos ubicar la penetración económica, política y militar e intereses de otras repúblicas en el país; como factor interno se puede resaltar la concentración excesiva de la tierra en manos de pocos latifundistas y el abandono y la desidia estatal, materializada mediante la violencia económica en casi todas las regiones del país, con especial relevancia en la zona norte del territorio nacional donde habita el pueblo Zenú.

El conflicto armado colombiano es uno de los pocos escenarios de confrontación político militar que aún se sostiene en América después de la caída del bloque soviético y el fin de la guerra fría, lo que sin duda alguna implica que las distintas causas que lo originaron pervivan en el tiempo y los hechos victimizantes se multipliquen y expandan en el territorio. Durante los decenios transcurridos desde 1946, la suma acumulada de víctimas de distintos hechos violentos es alarmante: cientos de muertos, numerosos desaparecidos, al menos en las últimas décadas seis millones de personas han sido desplazados, el patrimonio de los colombianos afectado y la violencia de género como una constante.

La confrontación ha contribuido al mantenimiento del modelo de desarrollo terrateniente que ha logrado afianzarse en el campo, ocasionando una pobreza estructural que persiste y se mantiene mediante la inequidad y la exclusión. El ex Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo Salazar, al referirse a las últimas cifras disponibles sobre la concentración de la propiedad de la tierra afirmó (Instituto Agustín Codazzi 2012): “el 4.2% de la tierra (parcelas menores de 5 hectáreas) está en manos del 67.6% de los propietarios, al paso que el 46.5% de la tierra (propiedades de más de 500 hectáreas) la posee el 0.4% de los propietarios”.¹

Después de décadas de violencia y despojo constante de tierras, el Estado expidió la ley 1448 de 2011 que contempla mecanismos de reparación para todos aquellos que ostentan la calidad de víctimas de la violencia desde el año 1985. En el tema de tierras contempla mecanismos de devolución y retorno pero sus dispositivos se han tornado ineficaces al punto que la restitución, rehabilitación y garantías de no repetición no se han cumplido o se han tornado excesivamente lentos. La ley de Víctimas y los decretos que la complementan pretenden atender a un gran universo de víctimas, dar cuenta de algunos de los sufrimientos padecidos y la responsabilidad de los distintos actores del conflicto como pasos iniciales para reparar el daño ocasionado.

Resulta claro, que el problema del territorio y el reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra están en el centro de la reivindicación de los pueblos indígenas colombianos. Es importante aclarar que los territorios indígenas afrontan la presencia de colonos en los resguardos, numerosas licencias de exploración y explotación minera se adelantan en el territorio ancestral, desconociendo en muchas ocasiones la consulta previa, sin dejar de lado la constante presencia de distintos actores armados, entre otras problemáticas que afectan a la totalidad de los pueblos indígenas.

Con lo anteriormente expuesto, pretendemos poner en contexto la situación actual por la que atraviesa el pueblo Zenú derivada de la violencia cíclica arraigada en el país durante

¹ Para mayor información de esta cifra e indicadores ver: Juan Camilo Restrepo Salazar y Andrés Bernal Morales: La Cuestión Agraria, Penguin Random House Grupo Editorial, Bogotá, 2014, pp. 126 - 127

los últimos años, lo que demanda la intervención del Estado en busca de proveer soluciones que vayan desde una profunda reforma agraria, hasta un modelo económico y político incluyente que contribuya a una reconstrucción cultural y étnica acorde a una particular cosmogonía que caracteriza al pueblo Zenú como una nación culturalmente diversa, todo en el marco de la construcción de escenarios de verdad, justicia y reparación para los miembros que lo conforman.

1. EL PERIODO COLONIAL

Con el fin de comprender la situación actual del pueblo Zenú, se hace necesario llevar a cabo un recuento analítico de algunos de los hechos e instituciones del periodo colonial, que nos permite comprender la realidad de los Zenú en lo concerniente al territorio y otras vulneraciones de derechos que aún se mantienen en el tiempo.

Para la historiografía oficial, la Colonia va desde el año 1550 hasta el 1810 con el llamado grito de independencia, el cual implicó la sublevación de los criollos contra las autoridades españolas en territorio de la Nueva Granada. Los cronistas españoles afirman que el territorio Zenú durante el periodo colonial era mucho más extenso que lo que actualmente es ocupado. Existe un consenso que señala como el territorio se encontraba dividido en tres zonas, Fincenú, Pancenú y Zenufana: “el Panzenú –en la hoya del San Jorge- era zona productora de alimentos, donde las comunidades aprovechaban la natural fertilidad de sus suelos para la agricultura y la riqueza de su fauna acuática; el Zenúfana – en el Cauca y el Nechí- región de ricos aluviones auríferos, era tierra de mineros y abastecía de materia prima a las comunidades orfebres, algunas de las cuales se encontraban en el Finzenú, tierra de especialistas ubicada en la hoya del Sinú y zonas aledañas” (Falchetti, 1995: 19).”

En estos centros urbanos habían grandes asentamientos humanos con características culturales idénticas, generalmente el gobierno estaba conformado por caciques, existía

especialidad y división del trabajo agrícola y se encontraban en un estadio cultural avanzado. Con la llegada de los exploradores españoles, Rodrigo de Bastidas, Pedro de Heredia, Pedrarias Dávila, entre otros, la situación para los indígenas prehispánicos cambió considerablemente. Además de las ya conocidas características de la conquista - como la muerte generalizada y sistemática de indígenas, la ocupación del territorio, actos de tortura y pillaje, desplazamiento, destrucción de la identidad cultural y ancestral, enajenación por medio de la ideología religiosa, muerte por razones biológicas- los conquistadores establecieron y adecuaron algunas instituciones para el control del territorio y el saqueo de los recursos, pues el ánimo que los impulsaba durante casi tres siglos de dominio colonial era la búsqueda de oro, el control territorial y la venta y explotación con fines comerciales de esclavos, ello sería el inicio de los albores del capitalismo internacional.

La mita y la encomienda, dos instituciones coloniales que trataremos brevemente a continuación, fueron implementadas en los territorios conquistados, además del llamado “Requerimiento”, este último efectuado por necesidades prácticas ante el descenso demográfico de las culturas indígenas en lo que hoy llamamos Colombia. El Requerimiento era un escrito leído en castellano en presencia de los indígenas en el cual el rey de España conminaba a los nativos para que pacíficamente se sometieran a la autoridad del Rey y del papa católico romano, “consistía en algunas explicaciones sobre la creación del mundo y la humanidad según el cristianismo, así como sobre el poder del Papa en la tierra, y exhortaba a los indígenas a que se convirtieran al cristianismo y se sometieran al poder de la Corona de España o serían esclavizados y exterminados junto con sus mujeres y sus hijos (Támara, 1998: 3).”.

Ya para mediados del siglo XVI los españoles habían establecido la encomienda alrededor de la gran hacienda terrateniente, en la cual los nativos debían pagar tributos, además del trabajo personal que realizaban para los encomenderos. En términos generales los Zenú eran obligados a recolectar bejucos para elaborar cuerdas con fines comerciales “la

preparación de casabe para el alimento de cerdos y otros animales de granja consumidos principalmente por los españoles, la recolección de miel de abejas en los campos para su exportación, la caza del manatí para el aprovechamiento comercial de su grasa, entre muchas otras actividades que debían realizar los zenúes aparte del cultivo de maíz, que era de las pocas actividades que se encontraban decretadas como de tributación obligatoria por ordenanza de los reyes de España, sin embargo, ésta tampoco se escapó de la usura de los encomenderos, ya que estos obligaban a los indígenas a trabajar individualmente en grandes extensiones de cultivos sin la adecuada colaboración de sus semejantes, para así explotar mayor terreno por número de indígenas activos en sus encomiendas y obtener mayores beneficios económicos (Támara, 1998)."

A diferencia de otras culturas prehispánicas la mita no fue una práctica extendida en América y existieron pocos casos al interior de los poblados Zenú, los Incas y la cultura Chibcha la conocieron, esta institución obligaba a que cada comunidad indígena tenía que suministrar obligatoriamente a las autoridades españolas un número de trabajadores, durante varios meses al año bajo condiciones que rayaban perfectamente con la esclavitud. Existían diferentes tipos de mita como la agraria, la mita minera o la de obrajes en las incipientes fábricas de tejidos. Como institución fue responsable en gran medida de la desintegración de los pueblos originarios, en especial por la ruptura entre las comunidades y la tierra.

Para mediados del siglo XVII las autoridades españolas oficializaron algunos resguardos para el pueblo Zenú. Siendo la región más importante San Andrés de Sotavento, "la Corona Real Española por Cédula Real del Rey Carlos III, decretó la creación del Gran Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, con una extensión de 83.000 hectáreas.". Si bien la posesión territorial fue delimitada en su momento, fenómenos como la colonización, el desarrollo de la ganadería extensiva y los apetitos de grandes terratenientes sobre los recursos físicos del territorio llevaron a la pérdida paulatina de la tierra adjudicada por la corona española "eran como buldóceres que aplastaban no sólo

los cultivos de los indios sino sus derechos ancestrales sobre la tierra de las sabanas. Los señores blancos echaban los animales para destruir las huertas de los indígenas, con el fin de expandir sus tierras, porque los españoles no podían concentrarse todos en Tolú. En efecto, se fueron irradiando desde allí en todas direcciones. En su afán monopólico sobre la tierra, no respetaron los resguardos definidos por Villabona y Vargas Campuzano, cuyas ordenanzas se fueron quedando en el olvido.”. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. (Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas: 29).

Con la llegada del orden republicano la situación de los pueblos indígenas, incluido el Zenú, cambió, pero fue más un cambio de fondo que de grado, pues muchas de las instituciones coloniales perduraron, sobre todo lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra y las relaciones de producción atrasadas que se derivan del control terrateniente sobre la misma. El resguardo y el cabildo fueron instituciones heredadas de la corona española que aún se mantienen como medio de protección de los indígenas frente al territorio y sus formas identitarias de gobierno -el resguardo fue creado para defender a los indígenas del tratamiento de esclavos que le daban los encomenderos, pero también para obligarlos a pagar tributos- aún así los resguardos guardaban un doble propósito pues a través de ellos el Estado “ordenaba la repartición de los Resguardos para «hacer de los indios hombres libres en pie de igualdad con todos los demás ciudadanos», pero en realidad fue un medio para despojarlos de las tierras y convertirlos en terrazgueros, el mecanismo clásico de despojo para «liberar la mano de obra y ponerla a trabajar en condiciones serviles». El general Reyes aceleró por la Ley 104 de 1919 la repartición de los resguardos y el «castigo a los indios que estorben el proceso»”. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. (Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas: 545)

Algunos teóricos sostienen que los inicios del capitalismo mercantil en Colombia guardan relación con la hacienda capitalista, la cual introdujo modificaciones en las relaciones sociales por medio de la abolición del sistema esclavista permitiendo la entrada de capital

foráneo al sistema hacendatario colombiano, otros por su parte aseguran que el modelo económico colombiano nunca ha sido independiente y el problema de la concentración de la tierra aún sigue siendo el detonante de viejas disputas civiles y guerras como las acontecidos en todo el siglo XIX y XX en Colombia.

En resumidas cuentas el periodo colonial implicó serias violaciones a los derechos de los Zenú motivado por razones económicas, políticas e incluso religiosas. Durante el periodo colonial perdieron gran parte de su territorio, su cultura, sus tradiciones como pueblo. Muchos Zenú fueron esclavizados bajo figuras como la encomienda, la hacienda y en menor medida la mita. Algunas de las instituciones económicas lograron transformarse y mutar con el tiempo pero persiste la pérdida del territorio bajo el dominio de la hacienda ganadera y la explotación minera.

Si bien los Zenú continúan con formas propias de gobierno, es claro el proceso de aculturación que conllevó, entre otras, a la pérdida de la lengua propia, algunas de sus características, cosmogonía y mestizaje, tan común éste último en todos los pueblos indígenas colombianos. Los Zenú tienen conciencia de la injusticia que ha caracterizado la historia hasta ahora de su pueblo y tal injusticia se expresa en torno a la pérdida de vidas, territorio, bienes y cultura propia. En síntesis el carácter sistemático y generalizado de violaciones a sus derechos se remontan desde la época de exploración y conquista con la llegada de los invasores españoles sobre tierras “americanas” y ahora persiste y se expresa bajo otras formas y dinámicas que en general apuntan hacia lo mismo, la desaparición física y cultural de los Zenú como una nación multicultural dentro del sistema estatal colombiano.

2. LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX

El siglo XX en Colombia es uno de los periodos con mayor trascendencia en la consolidación del Estado-nación. Después de finalizar la última de las guerras civiles de

finales del siglo XIX, la llamada guerra de los Mil Días, Colombia perdió una importante porción de territorio, dentro de la que se destaca el departamento de Panamá.

La década de 1920 se conoce como el periodo de la “prosperidad al debe” o “la danza de los millones” por varias razones. En primer lugar por la indemnización estadounidense por la pérdida del canal de Panamá, los altos precios internacionales del café y una serie de empréstitos internacionales que generaron la base para el establecimiento de las primeras industrias y construcción de obras públicas en Colombia. Grandes proyectos urbanísticos tomaron rienda, la construcción de puentes aéreos, vías férreas, vías de comunicación, ciudades. Pero también fue un periodo convulsionado en la política local. Por una parte aparece en escena política el Partido Socialista Revolucionario, el cual adelanta poderosas huelgas con consignas económicas y por primera vez consignas de tipo político contra la penetración extranjera del capital internacional, particularmente en la región dominada por la *United Fruit Company*; por otra parte este periodo es conocido por ser el final de la llamada hegemonía conservadora, en el poder desde 1886. A finales de la década ocurrió la masacre de las bananeras en Ciénaga, Magdalena, y el país entra en una crítica situación financiera por la crisis de 1929 que afectó las finanzas del Estado. En ese contexto el mundo rural se encontraba invisibilizado y la situación de los pueblos indígenas, como el Zenú, prácticamente se encuentra perdido en los anaqueles de la historiografía oficial.

No obstante, las primeras décadas del 20 estuvieron enmarcadas en la resistencia al sistema socioeconómico por medio de las movilizaciones indígenas, la recuperación de tierras de resguardo, incluso las tierras despojadas por explotaciones mineras, lo cual habría de prolongarse por décadas al ser mantenido el sistema socioeconómico que privilegia la usurpación de sus territorios. El historiador Carlos Medina subraya precisamente el levantamiento indígena orientado por Quintín Lame, durante el gobierno de Concha (1914-1918), contra la expansión desmedida de la ganadería, tales

levantamiento ocurren en la emergencia de diversos movimientos de resistencia por medio de protestas, luchas indígenas, campesinas, mujeres, luchas estudiantiles etc.

La década del 20 es importante para nuestros pueblos ancestrales porque los indígenas en unión con otros sectores se movilizan para encontrar mejorías en su estilo de vida, en todas las ocasiones fueron fuertemente reprimidos por el Estado con políticas contrainsurgentes, justificadas en el anticomunismo “Así, en 1928 se expide la Ley 69 sobre Defensa Social del 30 de octubre, conocida como la «Ley Heroica», mediante la cual se prohíbe la existencia de organizaciones que ataquen el derecho de propiedad y la familia, castiga a quienes promuevan huelgas «violatorias de las leyes que las regulan», restringe el derecho de opinión, censura las publicaciones y se confina en colonias penales a todo individuo que promueva la publicación de los impresos prohibidos”

Ahora bien, en medio de ese panorama modernizador que envuelve al país en las primeras décadas del siglo XX persiste un problema estructural: el monopolio de la tierra a manos de grandes terratenientes, “el problema de la tierra para las comunidades indígenas no es tampoco un problema resuelto. La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento (2013), conceptúa que el 34% de los 768 resguardos coloniales y nuevos carece de las condiciones para garantizar con seguridad el futuro de las comunidades, debido a la relación entre población y superficie y otros factores como la baja calidad o el agotamiento de los suelos. Dicha Comisión hace un estimativo de 1.192.628 hectáreas adicionales necesarias”. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. (Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas: 55)

Aunque el problema agrario será un tema particular de la contextualización histórica del pueblo Zenú no deja de ser importante mencionarlo en la medida que transversaliza toda la lucha indígena por la tierra y el territorio. En conclusión las primeras décadas del siglo XX fueron el comienzo de la consolidación de patrones económicos, territoriales y políticos que definirían de alguna forma el periodo liberal de 1930, la oposición

terrateniendo a la reforma agraria y el impulso y resistencia emergente de diferentes clases sociales al modelo de desarrollo dependiente y desequilibrado existente en Colombia. Aunque los Zenú durante este periodo de tiempo no son protagonistas de la escena política y territorial, los hechos que ocurren temporalmente en el país afectan directamente al pueblo pues el modelo socioeconómico de tenencia y concentración de la tierra, desigualdad en los patrones de ingreso, movilidad social, debilidad institucional, presencia precaria del Estado han incidido en la prolongación del conflicto armado que ha logrado afectar al pueblo Zenú impactándolo culturalmente, al punto que la misma Corte Constitucional señala que se encuentran en peligro de desaparición física y cultural.

3. LA PROBLEMÁTICA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO EN COLOMBIA

Colombia nunca ha superado el problema de la tenencia, concentración y relaciones precapitalistas en el agro del país. Desde la formación como República muchas de las instituciones coloniales se mantuvieron en pie, de ellas el latifundio, el peonato, la servidumbre y otras relaciones de producción lograron mutar y adaptarse en el tiempo, incluso hasta entrados los albores del siglo XXI. El signo palpable de su permanencia es el régimen latifundista de monopolio sobre la tierra y muy especialmente las relaciones sociales en el campo y las zonas mineras del país.

El siglo XIX en Colombia atravesó diferentes y complejas guerras civiles, la mayor parte de ellas debido a consideraciones económicas, políticas y de clases, entre las élites que configuraron la política tradicional hasta nuestros días. La constitución de 1886 fundó el llamado periodo regenerador y dio comienzo a la hegemonía conservadora, cohesionado en torno al partido conservador quien representaba el sector terrateniente y comercial, espacio que culminaría en 1930 con la llegada al poder del partido liberal.

A inicios del siglo XX Colombia presentaba una economía desarticulada, dependiente del capital extranjero, con fuerte atraso en el campo, altos índices de pobreza y violencia.

Inserta en una división del trabajo internacional que obligaba y mantenía una economía primario exportadora con productos de escaso valor agregado y poca importancia para el desarrollo capitalista, café, banano, flores, algodón, eran algunas de las materias primas producidas que nunca permitieron a Colombia desarrollarse sobre la base del sector industrial, como si ocurriría en países como Inglaterra o el mismo Estados Unidos.

Sin embargo, las primeras décadas del siglo XX fue un periodo donde nuevamente se dieron las discusiones en torno al modelo económico, primario exportador o sustitutivo de importaciones, las relaciones con la Iglesia católica, el carácter de la educación, el problema agrario y los nuevos conflictos con actores sobresalientes como los obreros, estudiantes, indígenas entre otros. La década del 30 empieza con un gobierno de corte liberal que busca insertar al país a la economía internacional por medio de modificaciones en la estructura industrial, la tenencia de la tierra y el desarrollo de la infraestructura con el objetivo de impulsar el comercio nacional, atraer inversiones y generar la base para un crecimiento auto sostenible y rentable en los términos que la burguesía liberal busco diseñar.

En el tema de tierras el gobierno implementó la ley 200 de 1936, el primer tímido intento por adelantar una reforma agraria, no con el objeto de distribuirla “entre los que la trabajan” sino con la intención de volverla económicamente rentable, de allí que su propósito no fuese retributivo sino que buscaba aumentar la productividad y la legalidad de los títulos sobre la tierra “en el caso colombiano, las reformas se proponen desde el Gobierno, sin tener en cuenta los reclamos campesinos, y es por eso que estas reformas no avanzaron en función del campesinado sino en función de la clase latifundista y burguesa: lograron acelerar la incorporación de la tierra al sistema capitalista de mercado. No solo fueron tímidas y poco profundas las reformas agrarias propuestas por los gobiernos colombianos, desde la década del treinta hasta el presente, sino que realmente nunca ha existido un interés profundo por consolidar una reforma agraria que afecte los privilegios de la estructura de la propiedad privada sobre la tierra.” (Comisión

Histórica del conflicto y sus víctimas: 213) en todo caso la respuesta de los conservadores y la clase terratenientes ante cualquier intento de reforma en la estructura agraria fue siempre violenta.

Las décadas del 40 y siguientes sentarán las bases para la continuidad de un sistema productivo organizado en torno a la extrema concentración de la propiedad latifundista sobre la tierra y la exclusión de las comunidades indígenas, muchos de ellos obligados por la fuerza a abandonar sus tierras, otros expulsados a nuevas áreas de colonización por medio de la ampliación de la frontera agrícola en un contexto de desorden de las formas de apropiación de las tierras baldías y ausencia de legitimidad de la propiedad, otros conminados a masivas tomas de tierras con respuestas violentas del Estado, en una situación donde los gobernantes fijaron las características del régimen por medio del uso permanente de las armas para la preservación y protección del sistema señorial hacendatario como ocurrió con los desalojos violentos contra arrendatarios y aparceros bajo el cobijo de la ley 100 de 1944.²

En el año 1946 hasta la formación del Frente Nacional acontece un periodo de Violencia política que ocasionó la muerte de 193.017 personas aproximadamente, 393.648 parcelas abandonadas y 2.003.600 desplazados (Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas: 421). En 1957 los representantes del partido liberal y conservador deciden dar inicio al Frente Nacional, el cual no fue un periodo de ruptura con la violencia que lo precedió sino una continuación de viejas disputas entre liberales y conservadores quienes siempre utilizaron la guerra para imponer sus propios intereses económicos, políticos e incluso político-administrativos, utilizando al pueblo en la misma.

² Fernán González proporciona un realce mayor a los hechos de violencia ocurridos en las transiciones, en primer lugar hacia los gobiernos liberales, en 1930 y en segundo lugar hacia los conservadores en 1946: “en los años treinta los episodios violentos tuvieron lugar en algunas localidades; en los cuarenta y cincuenta generarían una crisis general de la vida política, al coincidir con un ambiente muy polarizado en torno a los intentos de modernización de la República liberal y al surgimiento de una movilización populista”: ver : *Poder y violencia en Colombia* , (2014), Bogotá, CINEP, p. 33, p.p. 249 y siguientes.

En esas condiciones fue que la dirigencia del país implementó el llamado Frente Nacional en un contexto de apoyo norteamericano a través de planes como el LAZO o la “Alianza para el progreso”, así como desplegaron una limitada reforma agraria provista con la Ley 135 de 1961 y la aplicación de un plan de guerra contrainsurgente y anticomunista diseñado dentro de los parámetros de la Doctrina de la Seguridad Nacional estadounidense, el cual, según algunos teóricos de la violencia, habría de tener profundos alcances en el desarrollo del conflicto social armado. En esa situación el gobierno adelanta una campaña militar contra las comunidades indígenas y campesinas en las llamadas “repúblicas independientes” -como Marquetalia- el mito fundacional las FARC.

3.1. La tierra en La década del 70

El Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica reconoce la relevancia del problema agrario y lo califica de “corazón” del conflicto colombiano: “la tierra está en el corazón del conflicto colombiano. No solo porque nunca se hizo una verdadera reforma agraria, y la tierra sigue siendo una promesa incumplida para buena parte de los indígenas y campesinos, sino porque no se ha podido modernizar la tenencia y uso de los recursos naturales”(De Subiría Samper, S :225)

La siguiente gráfica ilustra porqué todavía el conflicto agrario es uno de los puntos nodales de permanencia de la guerra interna y la situación de pobreza que persiste en el país.

Tabla 1 Distribución de la propieda rural en Colombia 1960-200

	1960		1970		1984		1997		2002	
	Miles Has.	Prop.	Miles Has.	Prop	Miles Has.	Prop	Miles Has.	Prop	Miles Has.	Prop
Menores de 5	99,8	737,3	868,7	678,5	1.147,10	987,9	1.447,10	1391,90	2.189,40	2.333,0
Entre 5 y 20	1.855,90	225,4	1.835,3	219,3	2.558,50	336,8	3.232,80	444,5	4.480,20	615,3
Entre 20 y 50	1.957,10	74.6	2.213,80	84,2	3.193,10	136	3810,40	170,9	5.623,10	254,3

Entre 50 y 200	3.815,50	52,3	4.636,20	60,2	6.430,30	96,6	6.408,60	19,1	5.289,20	30,8
Entre 200y 500	2.674,80	11,5	3.030,40	13,2	3.714,30	19	3.329,50	117,3	10.360,50	170,2
Más de 500	4.606,40	4,8	5,054,70	5,4	5.189,70	6,7	6.408,60	5,7	24.254,10	13,9
Total	15.895,50	1.105,90	17.372,10	1.060,80	22.233,00	1.583,00	24,987,20	2.149,40	52.196,50	3.453,50

Claudia Lucía Rincón: Estructura de la Propiedad y Mercado de tierras. 1997.

La anterior tabla ilustra la distribución de la propiedad rural por años. Desde la década del 60 hasta el año 2002 la tendencia en la concentración de la tierra ha ido creciendo, lo que demuestra que más que una reforma agraria, lo que ha existido es una contrarreforma agraria por medio de dinámicas violentas y políticas estatales que en todo caso siempre han protegido la gran propiedad latifundista por encima de la economía campesina o popular. Ciertamente la lucha por la tierra y contra el latifundio improductivo durante la década del 60 y 70 contribuyó a delinear los contornos del conflicto armado interno y hacer palpable la grave desigualdad social que afronta Colombia “el Censo de 1973 arrojó resultados de pobreza, medida por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), del 70.5% y el coeficiente de GINI estaba sobre los 0,5, una magnitud de extrema desigualdad. (Duncán G: 250).

Los años 70's fueron prolíficos en hechos, pues nacen algunas de las guerrillas más importantes, como las FARC, el ELN, el EPL, esta última con cierta fuerza en la región del Alto Sinú, en San Jorge, y relativa orientación maoísta. Fue en ese contexto que el gobierno de Carlos Lleras Restrepo crea la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) como un medio para impulsar transformaciones en el campo mediante el fortalecimiento de los pequeños propietarios y tenedores de tierras. La meta del gobierno en su momento fue la de organizar a un millón de campesinos y en un lapso corto de tres años, se logró organizar alrededor de 950.000 usuarios quienes conformaron 450 asociaciones campesinas. La ANUC fue el movimiento campesinista más importante de los 70, en un corto lapso de tiempo cientos de fincas fueron invadidas, más de 500 los

terrenos ocupados, y muchas de las tomas de tierras se adelantaron sin indemnización y con fines de expropiación.

Con la ANUC se trata de dar un respaldo a la nueva legislación agraria y un medio de resistencia contra las presiones de los terratenientes, quienes siempre se opusieron a la reforma agraria, por ello el gobierno de Lleras Restrepo reformó la ley agraria en 1968 para atender las demandas de arrendatarios y aparceros. No obstante al interior de la propia ANUC diferentes líneas políticas comienzan a florecer y los temores de las élites dan lugar a la fragmentación de la asociación de usuarios campesinos, emergiendo dos líneas sobresalientes, la línea Sincelejo (antiestablecimiento) y la línea Armenia (proestablecimiento).

La línea Sincelejo es quizás la línea más radical que tuvo la ANUC en su momento. Además de impulsar masivas tomas de tierras a través del *mandato campesino* propendía por el abstencionismo electoral y el cuestionamiento político del orden establecido, en solo Sucre “los terrenos recuperados fueron los siguientes: “Villaluz, El Recreo, Membrillal, La Aldea en el Piñal y Los Araújos en Palma de Vino. Vale la pena anotar que estos terrenos sólo se encontraban en el municipio de Los Palmitos [...] Hubo setenta y cuatro terrenos de grandes terratenientes que fueron recuperados en los diferentes municipios de Sucre.”. (Pérez, J:80) El hecho que las posiciones de la ANUC línea Sincelejo fuesen antiestablecimiento llevó a que el gobierno cortara todo tipo de ayuda económica y tratara de fracturar por dentro el movimiento organizativo, aun así la línea campesinista en unión con otros sectores como la clase obrera, sectores universitarios, académicos logró mantenerse, sobre todo por el apoyo que obtuvo hasta el punto que la lucha por la tierra y contra el latifundio improductivo en ese periodo se acrecentó “este fenómeno era notable en Sucre, donde fue necesario declarar la emergencia económica y buscar un acuerdo concertado entre los campesinos y los terratenientes, que se hallaban enfrentados en la lucha por la tierra. De la misma manera como la lucha por la tierra avanzaba, el Incora aceleraba la creación de empresas comunitarias campesinas, que no

eran sino otra forma de explotación de la misma tierra por la que los campesinos luchaban. Los terrenos eran negociados por el Incora, se los apropiaban y después los adjudicaban a los campesinos.”. (Pérez, J: 60) la respuesta del Estado a las movilizaciones campesinistas siempre fué violenta, al punto que en algunos de sus congresos habían más personas capturadas que personas debatiendo sobre la política organizativa y la visión estratégica de la ANUC.

En esa situación la soñada repartición de tierra entre las que lo trabajan se vio frustrada a través del Pacto de Chicoral suscrito en 1972 en el cual “el gobierno de Pastrana Borrero, consolidó el poder latifundista ganadero y la transformación capitalista de la agricultura basada en la propiedad terrateniente iniciada en las décadas anteriores. Se selló cualquier posibilidad de democratización de la propiedad sobre la tierra por la vía institucional. La única opción que le quedó al campesinado desposeído consistió en darle continuidad a los procesos de colonización o adelantar tomas de tierras, como en efecto ocurrió a lo largo de los años 70.” (Estrada, J: 300). Es así como “en 1971 se habían podido expropiar tan sólo el 1% de las superficies legalmente afectables. El gobierno de Pastrana (1970 – 1974) suspende cualquier distribución de tierras y, en 1972, los dos partidos acuerdan abandonar del todo los proyectos de reforma agraria, para, mediante las Leyes 4 y 5 de 1973, legalizar más bien una contra-reforma agraria.”.

Si bien la lucha por la recuperación de la tierra fue esencialmente campesina, desde la ANUC los indígenas obtuvieron apoyo en la defensa de sus tierras y territorios, incluso en el segundo congreso se crea una Secretaria indígena que reconoce que tanto los campesinos como los indígenas tienen intereses comunes y enemigos comunes representado por el sector terrateniente, el Estado e incluso la Iglesia. Lo que diferenciaba la lucha de los indígenas respecto a los campesinos es que los primeros no simplemente buscaban la recuperación de la tierra, sino la reivindicación étnica del territorio, la recuperación de la historia y la defensa de sus tradiciones culturales, incluso la recuperación implicaba una acción colectiva como pueblo en la reconquista de lo que les

fue arrebatado desde la misma colonia, esta concepción residía en que los indígenas eran los descendientes legítimos de los primeros pobladores, el pueblo originario de América.

No obstante, diferencias internas al interior de la ANUC llevan a que los indígenas, fundamentalmente del sur del país, logren separarse debido a tesis extremo izquierdistas que sostenían que los indígenas eran campesinos y que el periódico indígena creado a instancias de la Secretaría tenían un sentido “racista” e “indigenista”.

En síntesis se identifican dos momentos en el devenir de las luchas agrarias en esta etapa: el primero, aunque tenue, se manifestó antes de la aprobación de la legislación agraria de 1961; el segundo, se desata en torno a la creación y consolidación de la ANUC, siendo 1971 el año de mayor actividad, en cuanto a invasiones de tierras. En el mismo orden la política nacional desvarió en torno a los permanentes estados de sitio, la imposición del bipartidismo, políticas de guerra sucia, crisis de legitimidad del sistema político, la justicia y las fuerzas armadas, en un contexto de reflujo del movimiento social, político y popular a finales de la década del ochenta. Por último lo que deja entrever este periodo es que el problema de tierras y al territorio sigue haciendo parte de las tareas políticas del pueblo indígena colombiano, los territorios devastados por la gran minería, el fortalecimiento de la economía hacendaria basada en la piscicultura, el latifundio improductivo y la violencia paramilitar ocasionaron la pérdida y el despojo de millones de hectáreas y en los nuevos escenarios de justicia transicional se hace necesaria justicia material, verdad sobre los hechos y reparación por medio de la titulación de nuevos territorios en sintonía con la cultura y las formas de relación con la tierra y el territorio.

Como consecuencia de los periodos anteriormente descritos y ante la necesidad del reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas, el Estado colombiano, se ve abocado a ingresar al ordenamiento jurídico nacional un compendio normativo con el fin de reconocer y salvaguardar la riqueza cultural y étnica que las comunidades indígenas aportaban al país. Si bien, la base jurídica internacional incentivó

la creación de otras normas de carácter proteccionista, el estado de los derechos pueblos indígenas residentes en el territorio nacional no difiere en gran medida de la situación de sistemática de vulneración que desde épocas pasadas pervive en las comunidades indígenas del país.

A continuación se describen los principales desarrollos normativos desde el ingreso del Convenio 169 de la OIT al ordenamiento jurídico nacional y su relación con la situación actual de vulneración de derechos fundamentales de la son es víctimas los pueblos indígenas en Colombia.

4. DESARROLLO NORMATIVO: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991

Con la Ley 21 de 1991 Colombia se convierte en el segundo país latinoamericano en incorporar en su legislación el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, lo que significó un gran avance para dichos pueblos, pues el tratado establece una serie de derechos a favor de éstas comunidades, lo cual conlleva a los países que ratificaron el convenio a un estricto cumplimiento de lo allí plasmado. Dentro de los aspectos principales consagrados en el Tratado se encuentra la protección a la integridad económica, social y cultural de los pueblos indígenas y el respeto por su autonomía, al igual que el derecho a ejercer su propio control de desarrollo y el derecho a la consulta previa respecto de aquellos temas que puedan afectarles. En este orden de ideas, establece la importancia de los pueblos indígenas con su territorio, su propiedad y posesión ancestral, lo que implica la responsabilidad de cada Gobierno de respetar y garantizar la circunscripción y titularidad de las tierras.

El respeto por la Dignidad Humana, la primacía del interés general sobre el particular, la protección a la vida, a la libertad, entre otras, se constituyen como el pilar fundamental del Estado Social de Derecho, instituido en la Constitución Política de Colombia, confiando

así a las autoridades de la República la obligación de proteger a todas las personas residentes en el territorio Nacional. Así pues y de acuerdo a los principios fundamentales mencionados anteriormente, la Asamblea Constituyente de 1991 implementó en la Carta Magna un gran avance para los grupos étnicos en busca de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas. De esta manera, el artículo 7° Constitucional otorga un reconocimiento especial a las diversas culturas existentes en nuestro país, lo que obliga al Estado a adoptar medidas especiales para salvaguardar la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas, al igual que el hábitat natural del que dependen. De igual forma, el artículo 10 superior otorga un reconocimiento especial a las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, pues los reconoce como idioma oficial en sus territorios y les confiere el derecho a una educación bilingüe, respetado con ello el desarrollo de su integridad cultural.

Ahora bien, dentro de los derechos fundamentales instituidos en la Constitución Política de 1991, la igualdad ante la ley reviste una importancia significativa, pues establece una equivalencia general sin discriminación por razones de sexo, raza, origen, lengua, religión, opinión política o filosófica, exigiendo así al Estado que asuma medidas que aseguren que los pueblos indígenas gocen de los mismos derechos y oportunidades otorgadas al resto de la población. Aunado a lo anterior y de acuerdo con la sentencia T-188 de 1993 de la Corte Constitucional “las comunidades indígenas gozan de un status constitucional especial” lo que implica que el Estado debe brindar una especial protección a estos grupos étnicos.

Teniendo en cuenta que en Colombia toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, es deber del gobierno nacional adoptar medidas para garantizar a las comunidades indígenas una eficaz protección laboral, evitando cualquier tipo de discriminación y garantizando una remuneración equitativa a la labor desempeñada. Lo anterior incluye el derecho a estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social y demás prestaciones económicas que la ley contempla.

En lo referente a los servicios de salud, es deber del Estado garantizar el goce efectivo de este derecho, consagrado en el artículo 49 de la Carta Magna. Así pues, el gobierno debe prestar de forma efectiva los servicios de promoción, prevención y recuperación de la salud y saneamiento ambiental de los grupos étnicos existentes en el territorio nacional, respetando con ello las prácticas curativas y medicinas tradicionales utilizadas por dichos grupos. La prestación del servicio debe idearse y dirigirse con la colaboración de las comunidades y con base en las condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales en las que se encuentren.

Colombia siendo un país pluricultural otorgó mediante su normatividad la potestad a los pueblos indígenas de decidir sobre sus territorios, razón por la cual, el derecho al territorio debe ser respetado pese a que no se encuentre titulado. Así las cosas, el artículo 63 de la Constitución Política, establece que las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Es deber del Estado respetar la relación que existe entre las comunidades y el territorio, pues su relación es símbolo de armonía y espiritualidad. En este sentido, para salvaguardar el derecho de propiedad y posesión, el gobierno nacional está en la obligación de adoptar medidas tendientes a la recuperación de territorios que ancestralmente pertenecían a determinado grupo étnico.

Por otra parte, se hace imprescindible recalcar la importancia que la Carta Magna confirió a la promoción de la integridad cultural al estipular en sus artículos 68 y 70 el derecho a una educación propia, basada en el respeto a sus costumbres y creencias transmitidas de generación en generación, buscando con ello preservación de su identidad, su lengua, sus usos y prácticas tradicionales, fortaleciendo así su capacidad social de decisión sobre su propio destino.

En concordancia con lo anteriormente expuesto y ante la gran importancia e injerencia de las comunidad indígenas en nuestro país, El constituyente de 1991 consagra una

circunscripción electoral especial para la elección de dos senadores, logrando con ello una participación un poco más activa dentro del poder público colombiano. En este mismo sentido, reconoce en el artículo 246 superior el derecho a una jurisdicción propia, en donde los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. Respecto al tema, la Corte Constitucional mediante la sentencia C – 139 de 1996 presenta cuatro elementos centrales de la jurisdicción especial indígena: 1) la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas; 2) la potestad de éstos de establecer normas y procedimientos propios; 3) el respeto a la Constitución y la ley dentro del principio de maximización de la autonomía; y 4) la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. Así las cosas, refleja la potestad de los pueblos indígenas en el ámbito jurisdiccional y legislativo, pues contempla la creación de normas y procedimientos de acuerdo a sus costumbres y prácticas ancestrales siempre y cuando se encuentren en concordancia con los preceptos estipulados en la Carta Magna.

Así mismo, los artículos 286 y 287 constitucionales reconocen a los territorios indígenas como entidades territoriales autónomas, en donde ejercerán funciones de gobierno propio como la administración de los recursos económicos y la recaudación de impuestos. De la misma forma, el artículo 330 de la citada norma, presenta unas funciones que ejercerán las autoridades indígenas de forma autónoma en sus territorios, tales como la aplicación de normas legales sobre el uso del suelo y poblamiento de sus territorios, diseñar las políticas, planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su jurisdicción, promover las inversiones públicas dentro de esta y velar por su debida ejecución, percibir y distribuir sus recursos, velar por la preservación de los recursos naturales, entre otros.

Otro punto importante de resaltar es el carácter democrático y participativo del Estado colombiano, razón por la cual, la consulta previa enmarcada en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT y elevada por la Corte Constitucional como derecho fundamental de carácter colectivo de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, que le permite a las comunidades poder participar y decidir en los asuntos que puedan afectarles respecto de proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando con ello la protección de su identidad cultural, social y económica, en la medida que dichas acciones pueden perturbar también sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual.

Principalmente la consulta previa se presenta cuando se van a adoptar decisiones respecto de la explotación de recursos naturales en las comunidades indígenas. De igual forma, deben ser beneficiarios de las utilidades que se deriven de la explotación de los recursos mineros existentes en sus territorios y en caso de soportar cualquier perjuicio como resultado de dichas actividades, deberán recibir una indemnización como compensación.

En definitiva, la Constitución Política de Colombia de 1991 pretendía un reconocimiento de derechos para los pueblos indígenas existentes en el territorio nacional, lo que permitiría su participación dentro del Estado Social de Derecho. Así las cosas, la autonomía otorgada por la Carta Magna a las comunidades indígenas ha traído consigo una igualdad efectiva pero no material frente a los derechos sociales, económicos y culturales, eliminando así las diferencias entre los pueblos y el resto de la población, pero que no ha sido suficiente para garantizar la supervivencia cultural y física.

Pese a la entrada en vigencia de muchas de las normas descritas anteriormente, la situación de vulneración de derechos de las Pueblos indígenas persiste en el tiempo, pues si bien se cuenta con instrumentos jurídicos y políticos relevantes, el contexto socioeconómico y el conflicto armado presentes en el país, no han permitido el goce efectivo de las garantías otorgadas por el Estado a estos sujetos, titulares de especial protección.

Particularmente la situación de derechos del pueblo Zenú presenta unas dinámicas excesivas de vulneración que confluyen entre la presencia de actores de conflicto en sus territorios, importancia geoestratégica de los mismos para el desarrollo de actividades ilícitas y una extrema pasividad del Estado frente a las garantías constitucionales y legales que le asisten a todos la pobladores de la zona. A continuación se describen estas dinámicas de vulneración.

5. CONTEXTUALIZACIÓN Y DINÁMICAS DE VIOLENCIA

Las dinámicas de violencia existentes en los departamentos de Córdoba y Sucre, donde se encuentra asentada la mayor cantidad de población Zenú en el país se ha desarrollado a partir de tres momentos: el ingreso de fuerzas subversivas; la influencia paramilitar y la conformación de las bandas criminales. Es importante tomar en cuenta, que estos fenómenos no se dieron de manera simultánea en toda la región, sino que correspondieron a unas prácticas y condiciones específicas; por lo tanto este apartado se referirá a tres zonas específicas: Montes de María, Norte de Córdoba y Alto San Jorge.

5.1. Montes de María

La región de Montes de María, se encuentra ubicada en el departamento de Sucre y Bolívar, abarcando los municipios de Carmen de Bolívar, María la Baja, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, El Guamo y Zambrano (en el departamento de Bolívar) y los municipios de Ovejas, Chalán, Coloso, Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San Antonio de Palmito y Toluviejo (en Sucre).

Esta región se caracteriza por ser una zona montañosa, con corredores de salida al océano Atlántico; la mayoría de su población subsiste con la agricultura de pancojer, la cual es sembrada en pequeñas parcelas, o en tierras arrendadas. Además uno de los productos base de la economía, especialmente en Ovejas, Chalán y Colosó, es la siembra de tabaco.

Montes de María, es considerada una región con corredores estratégicos para los grupos armados; especialmente para el paso de armas y estupefacientes; debido a la salida al mar que se tiene por el golfo de Morrosquillo. Según los pobladores de la región³, este corredor se está utilizando desde hace unos 30 años; y tuvo como principal propósito en los años 80, el ingreso de armamento; posteriormente se acondiciono para el transporte de drogas; este fenómeno imperó desde mediados de los noventa. Además gran parte del territorio, es usado como caleta para armas y drogas, debido a su disposición geográfica.

La dinámica de violencia en esta región, se conjuga alrededor del posicionamiento de los grupos armados sobre dicho corredor; pues es indispensable, para el actor que sea, poder disponer de los canales de flujo de armas y de dinero resultante del tráfico de drogas.

5.1.1. Momentos de mayor presión

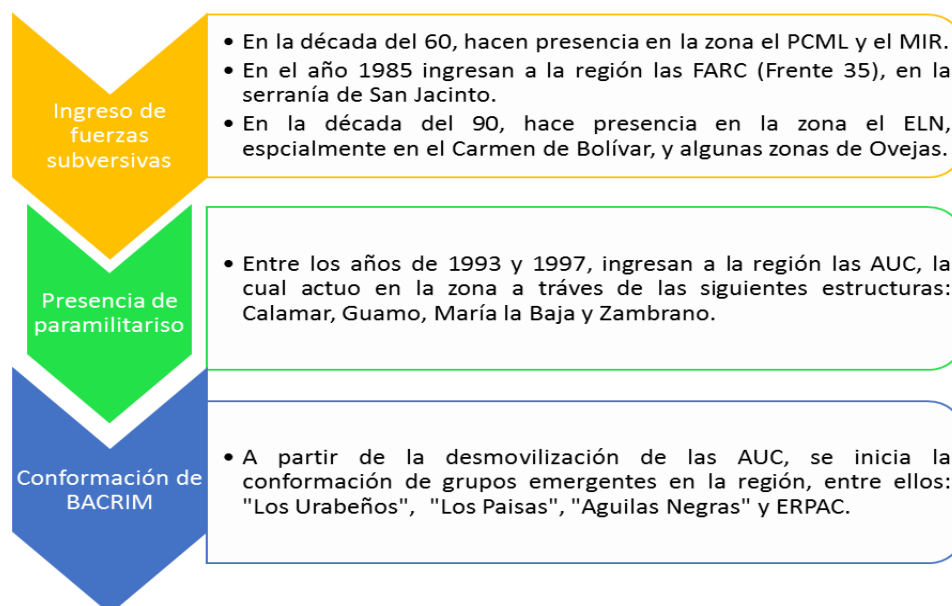


Figura 1. Momentos de Mayor presión en materia de conflicto armado en la zona Montes de María. Plan de Salvaguarda Étnica
Zenú.2014

³ Habitantes del municipio de San Onofre. Entrevistas realizadas los días 4 y 5 de febrero de 2015. Los entrevistados solicitan no usar sus nombres en el documento.

Para los habitantes de Montes de María, los momentos de mayor presión se dieron en tres etapas cúspides, los cuales se presentan en el siguiente gráfico:

5.1.2. Ingreso de fuerzas subversivas

Según consideraciones de la comunidad, específicamente, en los municipios de Colosó, Chalán, Ovejas y San Onofre, la presencia de las FARC y el ELN, se hacía de forma esporádica en los centros poblados; según los testigos “las tropas de la guerrilla permanecían en el monte, uno no los veía por ahí tan fácil”⁴. Además informa, que el proceder de estos grupos con la población civil, se enmarco en dos dinámicas: por un lado, la presión sobre terratenientes, ganaderos y propietarios; y por otro lado, procesos de las mal llamadas “limpiezas sociales”, a partir de asesinatos selectivos contra la población.

Una de las mayores problemáticas, se presenta a partir de la estigmatización de la que fue objeto la población civil, debido a la presencia de las FARC y el ELN en sus territorios; para esta época la mayor presión la tenían por parte de la Fuerza Pública, las cuales en varias oportunidades prohibieron el ingreso de alimentos a veredas de los municipios de Colosó, Chalán, Ovejas y San Onofre, argumentando que dichos víveres eran ingresados para la guerrilla; lo que generó desabastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad.

5.1.3. Presencia de paramilitares

Comenta la población que aproximadamente desde 1993 hace ingreso a la región las AUC, a través de ejércitos privados que combatían el secuestro y la extorsión de los grupos insurgentes. Los comuneros afirman que la llegada de los paramilitares se dio de la siguiente forma:

⁴ Entrevista Comunero – 4 de febrero de 2015. Habitante municipio de Colosó. Solicita mantener su identidad en reserva, debido al temor latente en la zona frente a la presencia de grupos armados.

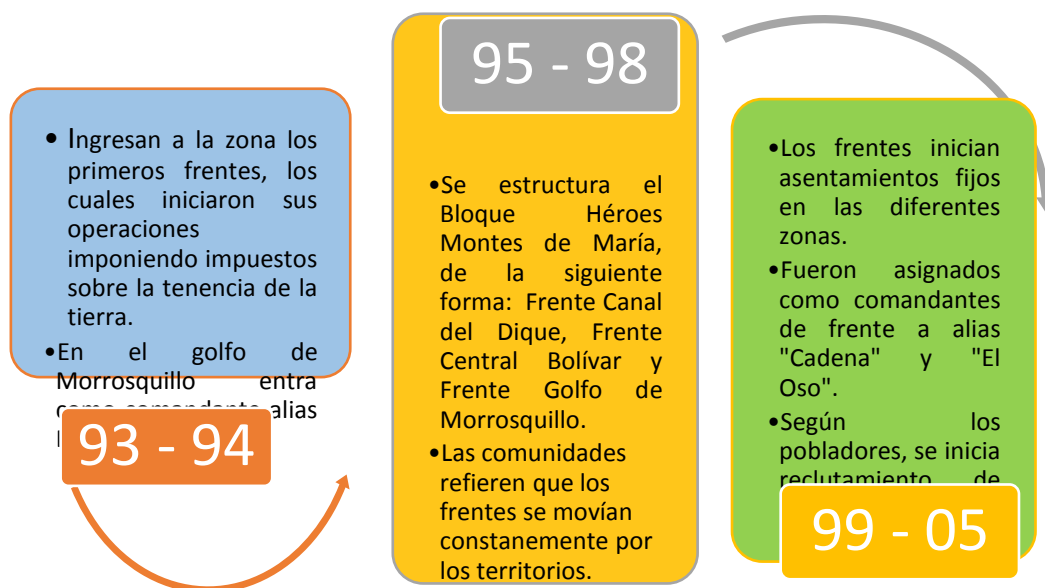


Figura 2. Línea de tiempo ingreso de grupos paramilitares en la zona Montes de María. Plan de Salvaguarda Étnica Zenú.2014

La llegada del paramilitarismo a la región Montes de María, trajo consigo una cruda violencia contra la población civil; las primeras operaciones se limitaban a cobrar impuestos o “vacunas” por la tenencia de tierras y animales; pero poco a poco, la guerra sucia contra la población excedió sus límites.

Las comunidades comentan que los primeros cobros de impuestos⁵ se dieron de la siguiente forma:

Tabla 2: Relación cobro de impuestos ilegal Zona: Montes de María

COBROS EXTORSIVOS REALIZADOS ENTRE 1993 Y 2005	
CONCEPTO	VALOR
Impuesto por hectárea	\$ 5.000
Impuesto por vaca, caballos, burros o cerdos	\$ 20.000
Impuesto por solares o patios	\$ 10.000
Impuesto por hectárea sembrada	\$ 30.000

Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Zenú.2014

⁵ Varían según la zona, pero en promedio son los mismos valores.

Dichos cobros fueron aumentando año a año, al punto de que varias familias preferían vender sus tierras y animales; para no acrecentar su deuda y no perder la vida.

Así mismo, no se le permitía a la población tener cerdos o burros por fuera de las cercas o potreros; “si los encontraban por los caminos, mataban al burro y mataban al dueño”⁶. Por otro lado, la comunidad declara que los terratenientes sacaron frutos de esta presión, de hecho buscaron apoyo paramilitar para forzar a la población a vender sus tierras por precios irrisorios.

Ahora bien, otra modalidad de ataque a la población se dio a través, de la presión ejercida sobre comunidades asentadas en los montes y que se dedicaban a la agricultura; estos casos fueron reportados en los municipios de Toluviéjo, Colosó, Chalán y San Onofre. La comunidad refiere que veredas como Paloalto, fueron estigmatizadas por vivir en zona montañosa, acusándolos de colaborar con la guerrilla; esta población debió desplazarse a los cascos urbanos, pues no se les permitía el ingreso de insumos o productos de primera necesidad. Los comuneros informan que en los días de mercado, eran retenidos en puntos estratégicos para requisar los productos comprados; en el municipio de Toluviéjo y Colosó, no se permitían compras que excedieran los \$ 70.000 pesos.

Es importante aclarar, que lo expuesto anteriormente, generó una fractura económica a nivel local, pues desencadenó una escasez de alimentos sin precedentes; debido a la expulsión de sus tierras la población tuvo que cambiar de ocupación (de agricultores pasaron a ser mototaxistas). Por lo tanto, la ruptura entre generaciones se hizo más evidente, “sólo los viejos quieren dedicarse a la agricultura, pero ya no pueden; y los jóvenes ya no quieren sembrar”⁷.

⁶ Comunero municipio de San Onofre. Entrevista 5 de febrero de 2015.

⁷ Comunero municipio de Toluviéjo. Entrevista 15 de enero de 2015.

Pero, la guerra contra la población se evidenció en su peor forma, casos de desapariciones, masacres, torturas y asesinatos selectivos, fueron el pan de cada día, para la población de los diferentes municipios pertenecientes a la región de Montes de María.

En los cabildos de Toluviejo, se reportaron casos de asesinatos selectivos y masacres, como el ocurrido en el corregimiento de las Piedras; además la comunidad comenta que a partir de las 6 de la tarde era obligatorio refugiarse en sus hogares, pues entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana, pasaban tropas paramilitares “echando tiros a quien encontrarán”⁸, además disparaban contra las casas, por eso muchas veces los pobladores preferían ir a dormir al monte.

En las comunidades de San Onofre, continua el miedo, sus rostros muestran angustia al contar cada uno de los dolorosos momentos que debieron vivir. Casos de desapariciones y torturas, se encuentran en los recuerdos de esta población; así mismo el hallazgo de fosas comunes en diferentes puntos del municipio, han sido muestra de la persecución que debieron soportar. Las mal llamadas “limpiezas sociales”, fueron los primeros asomos de una violencia sin precedentes contra la población civil. Otras acciones consistían en obligar a las mujeres a asistir a fiestas de tropas, obligarlas a lavar sus ropas; además de esclavizar en muchos casos a los hombres a cumplir jornadas de trabajo sin paga ni alimentos, con amenazas de muerte; “hasta el amor propio es golpeado, no ser capaz ni de proteger a su mujer y sus propias hijas, eso me decía todas las mañanas, al salir a trabajar”⁹.

Según las comunidades, aquellas víctimas que decidieron denunciar, fueron asesinadas, lo que conllevó a varias familias a abandonar la región por temor a futuras represalias. El miedo de la población no se limitó al que tenían por los grupos armados, sino que se extendió a la institucionalidad, pues no entienden aún como información tan delicada llegaba a manos de los victimarios. A partir de esto, las denuncias frente a estos casos escasean, y sólo hasta ahora salen a la luz testimonios de hechos contra estas poblaciones.

⁸ Capitán Cabildo Las Piedras, municipio de Toluviejo. Entrevista 15 de enero de 2015.

⁹ Habitante de San Onofre. Entrevista 5 de febrero de 2015.

Cabe mencionar, que para este momento, la población tiene un temor mayor, y es el saber que varios de los procesados por paramilitarismo, especialmente por la Ley de Justicia y Paz, están recobrando su libertad; hecho que los aterroriza pues temen que vuelvan a la zona e identifiquen a los testigos de los procesos.

5.1.4. Conformación de BACRIM

A pesar de la desmovilización de las autodefensas, el conflicto aún persiste en la región; entre el año 2005 y 2006, se desmoviliza el Bloque Héroes de los Montes de María.

Refieren los comuneros que la tranquilidad vivida después de la desmovilización, duro poco; la conformación de bandas criminales y su operación en la zona, generó nuevas formas de violencia contra la población.

Según datos suministrados por los pobladores, en la región Montes de María, tienen operación las bandas emergentes de “Los Urabeños”, “Los Rastrojos”, “Los Paisas” y ERPAC; es importante mencionar que para la población de la zona las bandas criminales están siendo operadas por tropas paramilitares disidentes de la desmovilización.

La forma de operación de estas bandas, gira en torno al narcotráfico y la extorsión; además su movilización es de cierta manera clandestina. Comenta un cabildante que “antes sabíamos quiénes eran, pero ahora, uno no sabe quién es quién, además hasta del vecino hay que desconfiar”¹⁰. Es evidente que el temor de la población continua, y no solo por la existencia del grupo armado, sino porque para ellos el nexos con los paramilitares es visible: las mismas rutas y caletas. Así mismo las comunidades informan que los asesinatos selectivos se continúan dando, siendo las víctimas en mayor medida jóvenes.

¹⁰ Cabildante San Onofre. Entrevista 5 de febrero de 2015.

Según los pobladores, las extorsiones se realizan vía telefónica; muy pocas veces la amenaza se hace de manera personal. Es importante recalcar, que al preguntar por la existencia de grupos armados en la actualidad, la mayoría de las respuestas son “por acá ya no hay de eso”, o, “uno sabe que están por ahí, pero no se sabe quiénes son”, o, “de eso no se debe hablar”; para la población en general el temor frente a la existencia de las bandas criminales está ligado a dos factores: por un lado, para ellos las bandas criminales son miembros de las autodefensas que no quisieron desmovilizarse, y se reorganizaron; y segundo, su modalidad de actuar de manera clandestina, genera desconfianza hacia cualquier individuo de la comunidad, pues para ellos cualquiera puede ser parte de la BACRIM o un colaborador; por eso temen hablar del tema, y “prefieren pensar que de la violencia no van a descansar”¹¹.

5.1.5. Rutas de desplazamiento

Los Montes de María, como escenario de guerra de los grupos armados, es ajeno al fenómeno del desplazamiento; aunque las comunidades no hayan considerado pertinente presentar un listado de sus desplazados, si comentaron cuáles fueron las rutas de migración.

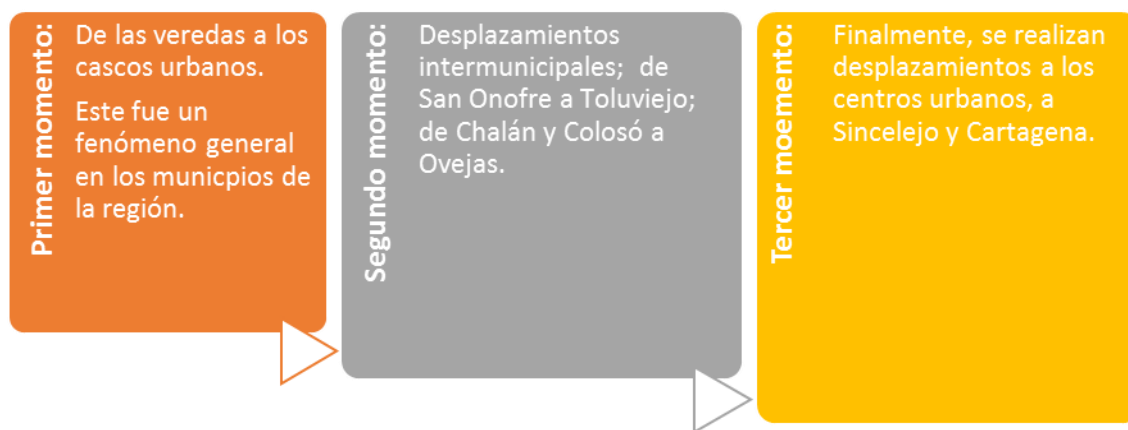


Figura 3. Rutas de desplazamiento en la zona Montes de María. Plan de Salvaguarda Étnica Zenú.2014.

¹¹ Comunero de Toluviéjo. Entrevista 15 de enero de 2015.

Es importante indicar, que cada familia desplazada, tuvo que afrontar mínimo dos de estos desplazamientos; siendo las siguientes las causas del mismo:

1. Muerte o desaparición de algún familiar o allegado a la familia.
2. Amenaza directa por parte del grupo armado ilegal.
3. Temor frente al accionar de los grupos, como masacres o asesinatos selectivos.

En la actualidad, el desplazamiento se está dando en mayor medida en busca de oportunidades laborales.

5.2. Norte de Córdoba

El pueblo Zenú concentra el mayor número de población en los municipios ubicados al norte de Córdoba, como son San Andrés de Sotavento, Tuchín, Chinú, Chima, Ciénaga de Oro; y como parte del departamento no fueron ajenos a los hechos de violencia vividos en la región.

Frente al tema de violencia, las comunidades se refieren a tres momentos específicos:

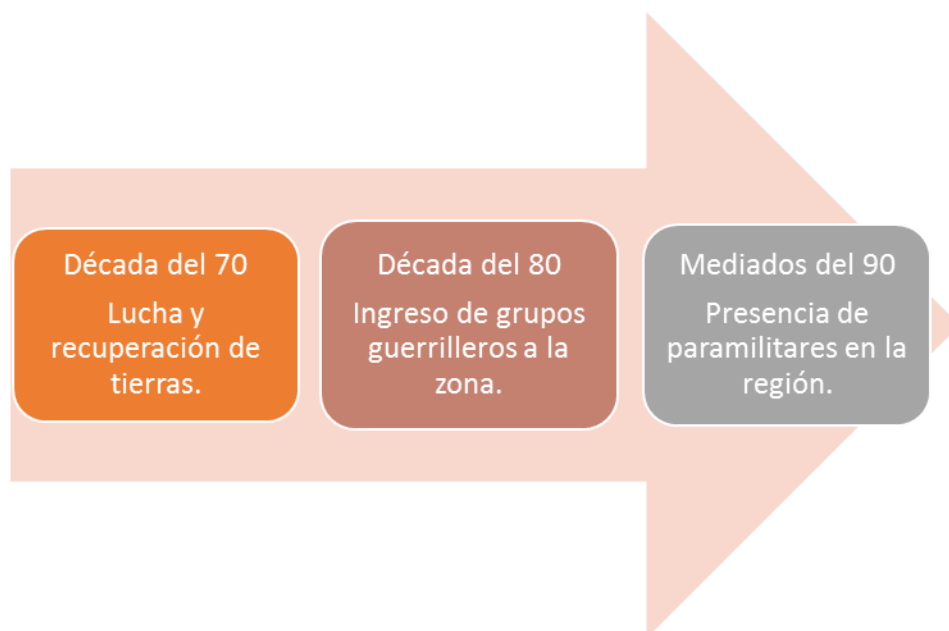


Figura 4. Periodos de picos de violencia en la Zona Norte de Córdoba. Plan de Salvaguarda Étnica Zenú.2014

En los municipios de Tuchín y San Andrés de Sotavento, se realizaron procesos de recuperación de tierras, para los cuales la población se organizó con la ANUC como asociación campesina. Los objetivos fueron claros recuperar territorios ancestrales dentro del polígono del Resguardo Colonial de San Andrés de Sotavento; durante este proceso la persecución al pueblo Zenú se dio de manera abierta, por parte de los terratenientes. Así mismo, el pueblo Zenú considera indispensable iniciar un proceso de auto-reconocimiento y rescate de la cultura e identidad como pueblo indígena; por ello busca tener encuentros y contactos con el CRIC, dentro del proceso de reivindicación como pueblo indígena.

Durante esta organización, el pueblo Zenú fue estigmatizado por su adhesión a las causas de la lucha territorial; los terratenientes y la fuerza pública, acusaban a los indígenas de ser colaboradores y simpatizantes de los grupos subversivos; lo que acarreo una fuerte persecución al pueblo Zenú, durante estos años.

En la década de los 80, se hacen visibles las incursiones de los grupos armados al margen de la ley, en la zona; según la población los grupos que ingresaron a la zona fueron el Quintín Lame y las FARC; durante el transcurso de la década se fortaleció la presencia de las FARC.

Los comuneros comentan que la presencia de estos grupos en el territorio era esporádica, además su accionar se limitó a la extorsión o vacunas, sobre los poseedores de tierras. Comentan que se presentaron casos de asesinatos selectivos, pero la comunidad se niega a precisar más datos.

A finales de los 90 entre 1997 y 1999, llegan a la zona los paramilitares; según la comunidad esta fuerza hace presencia como un proyecto de defensa de los terratenientes y ganaderos, para evitar las extorsiones de la guerrilla. La persecución a los líderes y autoridades indígenas no se hizo esperar, pues la estigmatización provocada desde los

años de recuperación de tierras, se hizo latente para este periodo, lo que generó el asesinato de diferentes líderes del pueblo Zenú.

Se observó en la comunidad mucho temor a hablar sobre estos temas, sus argumentos se basan en que el paramilitarismo logró permear diferentes esferas de la sociedad cordobesa, especialmente la política y las administraciones locales. Los cabildantes, aseguran que muchos alcaldes fueron puestos a dedo por las AUC, y que sus programas de gobierno contestaban a las necesidades del mismo grupo. En muchos cabildos, los comuneros afirman que no se vieron afectados por el conflicto, o que en sus territorios no se evidenció el conflicto vivido a lo largo y ancho de Córdoba; pero sus respuestas son una clara evidencia de que el temor todavía circunda la zona.

En cuanto a la presencia de BACRIM, la población comenta casos de extorsión por parte de los “Rastrojos”, a través de llamadas telefónicas, en las que se piden altas sumas de dinero pro respetar la vida de familiares. Capitanes de cabildos menores¹² comentan, que se sabe de la presencia de estas bandas, pero que aparte de observar a sujetos ajenos a la comunidad deambular por los territorios, no saben más a cerca de ese asunto.

5.3. Alto San Jorge

La región denominada alto San Jorge, se encuentra ubicada al sur del departamento de Córdoba, y comprende los municipios de Tierralta, Ayapel, Montelíbano, La Apartada, San José de Uré, Puerto Libertador, Planeta Rica y Pueblo Nuevo; zona con alta presencia de yacimientos de ferroníquel, oro y carbón. Así mismo, esta región presenta un importante interés para los grupos armados por cuanto, limita con el Urabá chocoano y antioqueño, convirtiéndose en un corredor importante, tanto por la siembra como tráfico de narcóticos.

¹² Especialmente en Tuchín y San Andrés de Sotavento, han comentado fuera de las reuniones que son víctimas de extorsión por parte de los “Rastrojo”.

Según los cabildantes, podría definirse la línea del tiempo del conflicto de la siguiente manera:



Figura 5. Línea de tiempo conflicto armado en la Zona Alto San Jorge 1967-1991. Plan de Salvaguarda Étnica Zenú. 2014

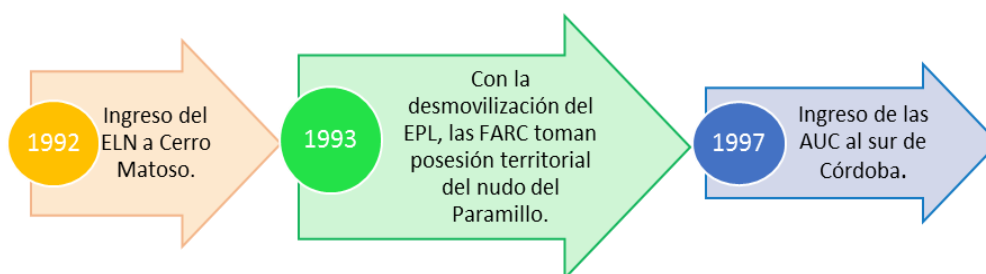


Figura 6. Línea de tiempo conflicto armado en la Zona Alto San Jorge 1992-1997. Plan de Salvaguarda Étnica Zenú. 2014

Como se observa en la línea del tiempo, se ha dado el ingreso de diferentes actores armados en la zona; lo que conlleva a un constante enfrentamiento por el control territorial; siendo los mayores afectados la población civil.

La presencia de las FARC se ha dado a través del Bloque José María Córdoba y los frentes 57, 58 y 18; por su parte el ELN hizo presencia por medio de los Frentes de Guerra Norte y el Astolfo González. Según los comuneros la presencia de ambos grupos se trazaban como un control territorial, las FARC impulsaron y desarrollaron el cultivo de estupefacientes además de controlar su tráfico; por su parte el ELN centro sus acciones en extorsiones a las empresas de extracción minera, así como el flujo de insumos por el corredor estratégico.

El ingreso de las AUC, se da a partir del despliegue dado desde el Urabá chocoano y antioqueño, por parte de este grupo armado; su objetivo principal fue intentar apoderarse del corredor existente entre los departamentos del Choco y Antioquia con la costa Atlántica. Es importante mencionar, que la disputa territorial entre fuerzas subversivas y paramilitares generó daños directos a la población, entre ellos desplazamientos, asesinatos selectivos y amenazas.

Las comunidades durante, las visitas realizadas a lo largo del proyecto, enfatizaron o fueron recurrentes en presentar a las AUC como los mayores actores de vulneración de derechos.

Los cabildos menores que se encuentran en la región de Alto San Jorge, han debido soportar varios atropellos a sus derechos por parte de los paramilitares; los comuneros mencionan los siguientes como las principales vulneraciones al pueblo Zenú en esta región:

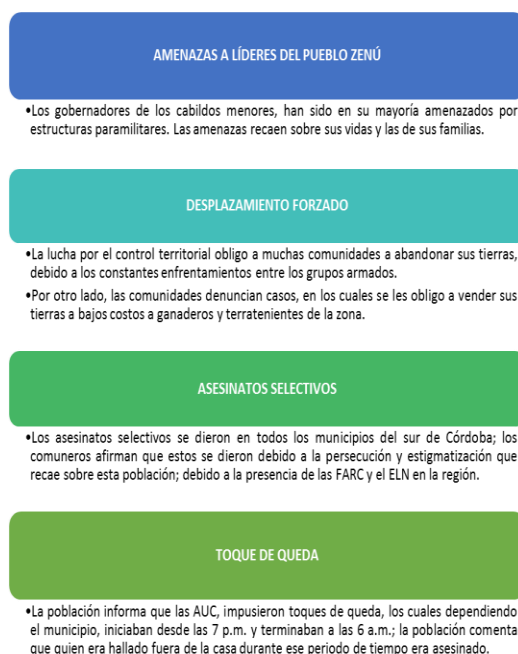


Figura 7. Principales vulneraciones por causa de conflicto armado en la Zona Alto Sal Jorge. Plan de Salvaguarda Étnica Zenú.2014

El impacto de los hechos anteriormente descritos, ha traído consigo una relación inversa entre conflicto y demografía, puesto que el impacto diferenciado de la confrontación presupone y aniquilación del pueblo tanto física como culturalmente.

6. IMPACTO DIFERENCIAL DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS COLOMBIANOS

El conflicto armado interno, por el que ha atravesado el país en las últimas décadas ha sido fruto de la injusticia social, la inequidad en la distribución de las tierras, aunado a la exclusión social y política en la que se han visto inmersos los grupos guerrilleros existentes en el territorio nacional.

Así pues, desde el inicio de la guerra librada por dichos actores armados, han sido innumerables las transgresiones y vulneraciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidos por estos grupos contra la población civil indiscriminadamente, razón por la cual el Estado colombiano se ha visto condenado por la comunidad internacional, al ser responsable tanto por su omisión como por su acción en los advenimientos por los cuales han sido víctimas colectividades enteras de personas, las cuales se supondría deberían encontrarse protegidas en el ejercicio de sus derechos y deberes, así como tener garantizados el goce efectivo de los principios que constitucionalmente se encuentran consagrados.

De igual forma, dentro del marco del conflicto armado interno comportan de manera indistinta crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que han traído consigo el quebrantamiento de derechos de personas jurídicamente protegidas, como es el caso de los pueblos indígenas, lo que ha significado a estas comunidades un detrimento étnico, cultural, económico, ambiental, social y a sí mismo a su organización política, el cual ha obligado al Estado colombiano a través de sus altas cortes a pronunciarse sobre estas situaciones en específico, por lo tanto la Corte Constitucional a través de su auto de

seguimiento 004 del 2009 evidenció que los pueblos indígenas de Colombia, atraviesan por situaciones que generan un evidente peligro de exterminación cultural o física a razón del conflicto armado interno. Por consiguiente decretó que el Estado colombiano estaba en la obligación de prevenir las causas del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas, y atender a la población indígena desplazada con el enfoque diferencial que para ello se requería, ordenando así mismo el diseño e implementación de un programa de garantía de los derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento.

6.1. Pueblos Indígenas: Demografía y Etnocidio

Nuestro pueblo indígena Zenú se encuentra principalmente asentado en territorio ancestral, en jurisdicción de los departamentos de Córdoba y Sucre, siendo uno de los pueblos que aún conserva sus resguardos con título colonial, pero durante las décadas del siglo pasado, por diferentes motivos, hemos venido presenciando la pérdida no sólo de miembros de la comunidad sino también de nuestras tierras, especialmente en el seno del conflicto armado interno, el cual ha sido motor transcendental de las distintas situaciones de despojo por las que hemos tenido que atravesar, ya que nuestros terrenos han sido invadidos por grupos guerrilleros y paramilitares a razón de su estratégica ubicación geográfica para el tráfico de drogas, siendo en consecuencia campo de enfrentamiento de los distintos actores.

De esta manera, el accionar bélico de los grupos mencionados anteriormente, aunado al de algunas unidades y miembros de la Fuerza Pública, al introducirse por la fuerza de las armas dentro del territorio ancestral de nuestro pueblo Zenú, se han convertido en un riesgo cierto e inminente para la preexistencia misma y los procesos de arraigo étnico y cultural, que se han venido desarrollando para salvaguardar los derechos fundamentales individuales y colectivos durante las últimas décadas.

En este orden de ideas, la Corte Constitucional a través del auto 004 de 2009, identifica tres factores que constituyen las principales causas de exterminio de la cultura indígena que desde épocas milenarias pervive en nuestro país. Los tres factores son:

- I. Confrontaciones que se desenvuelven en territorios indígenas entre los actores armados, sin involucrar activamente a las comunidades indígenas o a sus miembros, pero afectándolos directamente.

Estas confrontaciones, hacen referencia especialmente a aquellas incursiones que los grupos ilegales al margen de la ley realizan dentro o cerca de los territorios indígenas, lo que ha conllevado en muchas ocasiones a enfrentamientos entre éstos y la Fuerza Pública, al igual que la ocupación de lugares sagrados y la instalación minas antipersonas en sus campos y el establecimiento de bases militares sin su consentimiento, lo que ha dejado como víctimas a comunidades indígenas enteras.

- II. Procesos bélicos que involucran activamente a los pueblos y comunidades indígenas y a sus miembros individuales en el conflicto armado.

Este factor es uno de los más comunes que se presentan, pues involucran directamente a los individuos de la comunidad, es decir, se da mediante señalamientos a personas determinadas, utilización de miembros indígenas como informantes ya sea por parte de los grupos armados ilegales o por la Fuerza Pública e invasiones a los predios que hacen parte la colectividad. Es así como de dichas acciones se desprenden amenazas, desapariciones forzadas, homicidios y en algunas ocasiones “falsos positivos” por parte de la Fuerza Pública.

Igualmente, se presenta el asesinato selectivo a líderes y autoridades tradicionales, buscando con ello, intimidar e infundir temor en toda la población, desplazamientos masivos y represalias en contra de aquellas personas que de alguna u otra forma han

intentado hacer valer sus derechos. Por otra parte, el confinamiento a familias y pueblos indígenas se hace evidente con la imposición de restricciones de movilidad o la toma de las principales vías de acceso a las comunidades, generando así, un desabastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles, bienes y servicios básicos y ayuda humanitaria.

Otra característica que se exhibe del factor en estudio, es el reclutamiento forzado de menores de edad, la prostitución forzada, la violencia sexual y el enamoramiento de mujeres y jóvenes indígenas como estrategia bélica, el apoderamiento de cultivos, productos, animales e insumos básicos, así como la ocupación y utilización de escuelas, viviendas y lugares comunitarios como escudo durante enfrentamientos por parte de los grupos armados ilegales.

III. Procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado interno que afectan los territorios tradicionales y las culturas indígenas.

En este elemento, se identifica el constante despojo territorial del que son víctimas comunidades indígenas principalmente por los intereses económicos que recaen sobre la tierra y sus recursos naturales, aunado a la falta de titulación de las mismas, lo que facilita en gran medida el accionar de los grupos insurgentes presentes en el territorio nacional. Así mismo, el desarrollo de actividades económicas tanto ilícitas como el cultivo de coca para la comercialización a diferentes partes del mundo, como lícitas de explotación de recursos naturales y las fumigaciones a cultivos sin el consentimiento de la población, lo que sin duda alguna, genera no sólo un detrimento a los terrenos, sino también imposibilita a la colectividad indígena a cosechar sus propios productos para su sostenimiento.

De esta manera, los factores expuestos anteriormente, tienen como común denominador, la pobreza, la inseguridad alimentaria y la deficiente o nula prestación de los servicios de

salud que afecta principalmente a los niños, el desplazamiento forzado, la desintegración étnica y cultural de los pueblos indígenas presentes en el territorio colombiano.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se hace necesario evidenciar la situación por la que nuestro pueblo indígena Zenú atraviesa desde décadas anteriores, pues ha sido uno de los que más ha soportado las consecuencias que ha traído consigo el conflicto armado interno colombiano. Así las cosas, desde la incursión de los grupos armados ilegales en nuestro territorio, nuestra comunidad ha sido víctima de innumerables violaciones a los Derechos Humanos y transgresiones al Derecho Internacional Humanitario, vulnerando no sólo los derechos que nos han sido otorgados por la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad, sino también, desconociendo la calidad de sujetos de especial protección que nos cubre.

En este orden de ideas, la ubicación geoestratégica en la que está asentada nuestra comunidad Zenú ha ocasionado que grupos guerrilleros y paramilitares en su búsqueda por el control social, político y económico atenten contra la población a través de amenazas, desplazamientos, desapariciones forzadas, homicidios a líderes y miembros Zenú, violencia sexual, reclutamientos forzados, señalamientos, masacres, pérdida de territorio, entre otros, lo que sin duda alguna ha traído consigo la extinción paulatina de nuestra etnia. Razón por la cual, la Corte Constitucional a través de sus diferentes pronunciamientos, especialmente con el auto 004 de 2009, ha ordenado al Estado colombiano salvaguardar la integridad cultural de los pueblos indígenas existentes en el territorio, dentro de los cuales hace referencia a nuestro pueblo Zenú, pues algunas etnias han desaparecido y muchas más se encuentran en inminente riesgo como consecuencia del conflicto armado interno colombiano.

CAPÍTULO II

MARCO JURÍDICO

Mediante la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional, debido a que los patrones de vulneración de derechos de la población desplazada han perdurado en el tiempo, sin que la institucionalidad del Estado haya dado soluciones coordinadas, efectivas y racionales. De este punto surgen una serie de autos de seguimiento y desarrollo, entre ellos, el auto 004 de 2009 que ordena la realización de Planes de Salvaguarda étnica debido al inminente riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas, a causa del conflicto armado interno, el cual está cimentado en el artículo 7 de nuestra Constitución Política, donde el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

Ello está en consonancia con el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, en países independientes y la adhesión del Estado Colombiano en el marco normativo de la Ley 21 de 1991, la cual reza, en el artículo 4:

Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. (Ley 21 de 1991)

El Estado Colombiano, dando respuesta a la situación de la población indígena en condición de desplazamiento forzado y en relación a la política pública para las víctimas del conflicto armado, incorporó el enfoque diferencial para la contestación a las vulneraciones de esta población, emitiendo, así, el decreto Ley 4633 “por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a las comunidades y pueblos indígenas”

El desarrollo de esta plataforma normativa se establece sobre los derechos tutelados para la superación de las vulneraciones, en el marco del conflicto armado. De éstos, se conformaron cinco bloques: Derechos Colectivos o Étnicos, Derechos Políticos y Libertades Fundamentales, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Derechos al Cuidado y Trato Diferencial y por último Derecho a la Reparación Integral.

1. DERECHOS COLECTIVOS O ÉTNICOS

1.1. Título de propiedad colectiva

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Arts. 7, 9, 63, 329
Bloque de constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: Arts. 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
Leyes y Decretos: Decreto 2164 de 1995. Decreto 1088 de 1993. Decreto 1397 de 1996.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia T – 433 de 2011, Sentencia T – 634 de 1999, Sentencia T – 188 de 1993.
Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia Sawhoyamaya Vs. Paraguay; Sentencia Moiwana Vs. Surinam

1.2. Autonomía y Gobierno Propio

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Arts. 1, 7, 9, 10
Bloque de constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: Arts. 6, 7 y 8
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia T – 601 de 2011, Sentencia T – 049 de 2013, Sentencia SU – 510 de 1998.

1.3. Jurisdicción especial indígena

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Art. 264
Bloque de constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: Arts. 5, 9, 10
Leyes y Decretos: Ley 270 de 1993 (Art. 12) Decreto 2164 de 1995 (Art. 2)
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia T – 344 de 1998, Sentencia C – 713 de 2008

1.4. Diversidad Étnica e identidad cultural

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Arts. 1, 2, 7, 13, 70
Bloque de constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: Arts. 1 y 2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 27.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia T – 282 de 2011, Sentencia SU – 510 de 1998, Sentencia T – 384 de 1994, Sentencia T – 1022 de 2001

1.5. Consulta previa

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Parágrafo del Artículo 330
Bloque de constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: Art. 6 y 7
Leyes y Decretos: Decreto 1320 de 1998
Jurisprudencia Corte Constitucional

Sentencia SU – 039 de 1997, Sentencia T – 428 de 1992, Sentencia T – 880 de 2006, Sentencia C – 030 de 2008, Sentencia T – 769 de 2009, Sentencia T – 547 de 2010, Sentencia T – 116 de 2011, Sentencia T – 129 de 2011, Sentencia C - 027 de 2012
Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia Saramaka Vs. Surinam, Sentencia Sarayaku Vs. Ecuador

1.6. Vida colectiva

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Arts. 8, 11 (Derivado de la protección constitucional a la vida), 79, 330
Bloque de constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: Art. 5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 27.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia T – 282 de 2011

2. DERECHOS POLÍTICOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

2.1. Seguridad, Orden social y Paz

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Arts. 2, 9, 22
Bloque de Constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: Art. 12 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Art. 3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 19, numeral 3, literal b.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia T – 025 de 2004, Auto 004 de 2009, Auto 092 de 2008, Sentencia C – 225 de 1995.

2.2. Libre locomoción

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Art. 24
Bloque de constitucionalidad: Declaración Universal de los Derechos Humanos: Art. 13. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos: Art. 12. Convención Americana de Derechos Humanos: Art. 22.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia T – 202 del 2013
Corte Interamericana de Derechos Humanos Sentencia Comunidad Moiwana Vs. Surinam, Sentencia Ituango Vs. Colombia, Sentencia Mapiripán Vs. Colombia, Sentencia Valle Jaramillo Vs. Colombia.

2.3. Igualdad ante la ley

Principales fuentes de derecho
Constitución Política de Colombia: Art. 13.
Bloque de constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: Art. 3. Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 1 y 24. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 2 (numeral 1), 3 y 26. Declaración Universal de los Derechos Humanos: Arts. 1, 2 y 7.
Jurisprudencia Corte Constitucional: T – 856 de 2003
Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala

2.4. Prohibición a la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Art. 12.

<p>Bloque de constitucionalidad:</p> <p>Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 5.</p> <p>Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos: Art. 7.</p> <p>Declaración Universal de los Derechos Humanos: Art. 5.</p>
<p>Corte Interamericana de Derechos Humanos:</p> <p>Sentencia Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala</p>

2.5. Libertad de expresión

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Art. 20.
<p>Bloque de constitucionalidad:</p> <p>Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 19.</p> <p>Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 19.</p> <p>Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 13.</p>
<p>Jurisprudencia Corte Constitucional:</p> <p>SU – 510 de 1998</p>

2.6. Libertad de pensamiento y conciencia

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Art. 18.
<p>Bloque de Constitucionalidad:</p> <p>Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 18.</p> <p>Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 18.</p> <p>Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 12.</p>
<p>Jurisprudencia Corte Constitucional:</p> <p>Sentencia C – 728 de 2009, Sentencia T – 342 de 1994.</p>

2.7. Libertad de asociación y movilización

Principales fuentes del derecho
--

Constitución Política: Arts. 37 y 38.
Bloque de constitucionalidad:
Convención Americana sobre Derechos Humanos: arts. 15 y 16.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 21 y 22.
Declaración Universal de los Derechos Humanos: Art. 20.

3. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

3.1. Soberanía alimentaria

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Art. 44.
Bloque de constitucionalidad:
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 25.
Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 26.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 11.
Jurisprudencia Corte Constitucional:
Auto 004 de 2009

3.2. Atención psicosocial

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Art. 49.
Bloque de Constitucionalidad:
Convenio 169 de la OIT: Arts. 24 y 25.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 25.
Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 26.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 12.
Jurisprudencia Corte Constitucional:
Auto 004 de 2009

3.3. Dominación y explotación

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Arts. 1, 7, 8, 13, 63, 72, 80, 286, 287, Parágrafo del Artículo 330.
Bloque de constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: Arts. 2, 4, 5 13, 14, 15, 18, 19.
Leyes y Decretos: Ley 99 de 1993, Decreto 1320 de 1998, Decreto 0205 de 1996, ley 685 de 2001.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia SU –039 de 1997, Sentencia T – 380 de 1993, Sentencia T – 652 de 1998, Sentencia C -030 de 2008, Sentencia C-175 de 2009, Sentencia C 891 de 2002, Sentencia C- 366 de 2011.

3.4. Educación

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Arts. 1, 7, 10,44, 67, 68, 69, 70,71.
Bloque de constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: Arts. 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Leyes y Decretos: ley 115 de 1994, Decreto 804 de 1995, ley 1098 de 2006, Decreto 2406 de 2007, ley 1381 de 2010, Decreto 2500 de 2010, Decreto-ley 4633 de 2011.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia C- 208 de 2007, Sentencia T -110 de 2010, Sentencia C- 937 de 2011.

3.5. Salud

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Arts. 7, 48, 49, 50.
Bloque de constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: Arts. 24 y 25.
Leyes y Decretos: ley 21 de 1991, Resolución 5870 del Ministerio de Salud de 1992, ley 100 de 1993, ley 691 de 2001, ley 1164 de 2007, ley 1438 de 2011, ley 1450 de 2011, Decreto-ley 4633 de 2011.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia T- 379 de 2003, Sentencia T 652 de 1998, Sentencia C-033 de 2010.

3.6. Generación y libre disposición de las riquezas

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Art. 1, 7, 8, 80, 95, 246, 329, 330.
Bloque de constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: Arts. 7, 13, 14, 15, 18, 19.
Leyes y Decretos: Decreto 1088 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto 2001 de 1998, Decreto 1320 de 1998, ley 1185 de 2011.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia T-601 de 2011, Sentencia T-009 de 2013.

3.7. Derecho al desarrollo

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Arts. 1, 7, 70, 330.
Bloque de constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: Arts. 2, 7, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 27, 30.
Leyes y Decretos: Ley 982 de 1999, Decreto 4679 de 2010, ley 1450 de 2011, Decreto ley 4633 de 2011, Reglamentación plan estratégico programa presidencial indígena 2010-2014 Directiva 08 de 2012.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia T- 601 de 2011, Sentencia T-025 de 2004, Auto 004 de 2009.

3.8. Bienes culturales

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Arts. 1, 7, 8, 10, 12, 63, 70.
Leyes y Decretos: ley 397 de 1997, ley 340 de 1997, Decretos 833 de 2002, 763 y 2491 de 2009 que la reglamentan. Ley 1589 de 1998, Ley 1164 de 2007, ley 1381 de 2010, Decreto 1003 de 2012.
Bloque de constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia T-257 de 1993, sentencia C- 882 de 2011.

3.9. Ambiente sano

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: 8, 49, 80 95, 79, 58, 63
Bloque de constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: Arts.
Leyes y Decretos: Ley 99 de 1993 Ley 1320 de 1998, Ley 491 de 1999
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia T- 452 de 1992, sentencia T- 528 de 1992, Sentencia C- 030 de 2008, Sentencia C - 461 de 2008, Sentencia C- 702 de 2010.

3.10. Recreación

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Art: 44, 52, 64, 67.
Bloque de constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: Art. 1, 2, 4, 5, 7.
Leyes y Decretos: ley 181 de 1995.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia C-520-94

3.11. Familia

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: 5, 13, 15, 28, 33, 42, 68.
Bloque de Constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: 3, 5, 8,
Leyes y Decretos: ley 311 de 1996, ley 294 de 1996, Ley 1098 de 2006.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia T-001 de 2012, sentencia T- 760 de 2012.

4. DERECHOS AL CUIDADO Y TRATO PREFERENCIAL

4.1. Mujeres indígenas

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Arts. 13, 40, 43, 53.
Bloque de Constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: Art. 20, 21, 22, 44 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Preámbulo, Art. 2, 7,16. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: Arts. 1-16. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer: Arts.1-13.
Leyes y Decretos: Ley 248 de 1995, Ley 800 de 2003, Ley 948 de 2005, Ley 1257 de 2008 y sus decretos reglamentarios 4463, 4796, 4798, 4799 de 2011, Ley 1433 de 2011, Decreto-ley 4633 de 2011.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia T – 025 de 2004, Auto 131 de 2007, Auto 102 de 2007, Auto 092 de 2008, Auto 092 de 2008, Auto 237 de 2008, Auto 036 de 2009, Auto 004 de 2009.

4.2. Niños y Niñas indígenas

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: Art. 44
Bloque de Constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: Art. 17, 21, 22. Convenio de Ginebra (IV) relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra: Arts 14, 17, 23, 24, 38, 50, 94.
Leyes y Decretos: Ley 1098 de 2006, Decreto-ley 4633 de 2011.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Auto 130 de 2007, Auto 167 de 2007, Auto 169 de 2007, Auto 170 de 2007, Auto 171 de 2007, Auto 251 de 2008, Auto 010 de 2009, Sentencia T-030 de 2000.

4.3. Discapacitados indígenas

Principales fuentes del derecho
--

Constitución Política: 7, 13, 47, 49.
Bloque de Constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: 21, 22.
Leyes y Decretos: Ley 361 de 1997, Ley 762 de 2002, ley 1618 de 2011, Decreto ley 4633 de 2011.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Auto 053 de 2008, Auto 006 de 2009.

4.4. Indígenas en situación de desplazamiento

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 34.
Bloque de Constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12.
Leyes y Decretos: Ley 387 de 1997, Ley 1448 de 2011, Decreto ley 4633 de 2011.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia T- 025 de 2004, Auto 004 de 2009, Auto 382 de 2010, Auto 163 de 2012.

5. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL

5.1. Atención humanitaria

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: 2, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 22, 48, 51.
Bloque de Constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12.
Leyes y Decretos: ley 387 de 1997, Decreto 2569 de 2000, ley 1448 de 2011, Decreto- ley 4633 de 2011.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia C-579 de 2001, Sentencia C-1051 de 2001, Auto 176 de 2005, Auto 177 de 2005, Sentencia T-585 de 2006, Auto 218 de 2006, Auto 266 de 2006, Sentencia C-278 de 2007, Auto 052 de 2008, Auto 082 de 2008, Sentencia C-1199 de 2008, Sentencia T - 576 de 2008, Auto 007 de 2009.

5.2. Restitución y retorno

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: 7, 70, 246, 286, 287, 329, 330.
Bloque de Constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: 7,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Leyes y Decretos: Ley 387 de 1997, Decreto 250 de 2005, Decreto 1660 de 2007, Decreto 4829 de 2011, Decreto- ley 4633 de 2011, Decreto 790 de 2012.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia T-188 de 1993, Sentencia SU 510 de 1998, sentencia T-025 de 2004, Sentencia T- 821 de 2007, Auto 004 de 2009.
Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia Yakie Axa Vs. Paraguay, Sentencia Awas Tingni Vs. Nicaragua.

5.3. Verdad

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: 2, 5, 13, 29, 229, 246, 288, 289.
Bloque de Constitucionalidad: Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 y 1977: Arts. 32 y 33.
Leyes y Decretos: Ley 742 de 2002, Ley 795 de 2005, Ley 1448 de 2011, Decreto – ley 4633 de 2011.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia T- 025 de 2004, Sentencia C-370 de 2006, Sentencia T- 821 de 2007, Sentencia T- 1001 de 2008, Sentencia T- 444 de 2008, Sentencia C- 1199 de 2008, Sentencia C - 175 de 2009, auto 004 de 2009, Sentencia C-651 de 2011.

5.4. Justicia

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: 2, 5, 13, 29, 229, 246, 288, 289.
Bloque de Constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12.
Leyes y Decretos: Ley 742 de 2002, ley 795 de 2005, ley 1448 de 2011, Decreto – ley 4633 de 2011.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia T- 025 de 2004, Sentencia C-370 de 2006, Sentencia T-

821 de 2007, Sentencia T- 1001 de 2008, Sentencia T- 444 de 2008, Sentencia C- 1199 de 2008, Sentencia C - 175 de 2009, auto 004 de 2009, Sentencia C-651 de 2011.
--

5.5. Reparación

Principales fuentes del derecho
Constitución Política: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 30, 36, 39, 48, 51, 67, 68, 70, 71.
Bloque de Constitucionalidad: Convenio 169 de la OIT: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12.
Leyes y Decretos: ley 975 de 2005, ley 1448 de 2011, Decreto 4800 de 2011, Decreto 4803 de 2011, Decreto - ley 4633 de 2011, Decreto 4829 de 2011, Decreto 790 de 2012.
Jurisprudencia Corte Constitucional: Sentencia T-025 de 2004, Sentencia SU 254 de 2012, Sentencia C-099 de 2009, Auto 004de 2009.

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PUEBLO ZENÚ

1. DERECHOS COLECTIVOS Y/O ÉTNICOS

Sin duda alguna, la medición de las condiciones para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas se tasa principalmente en el acceso y goce de sus derechos colectivos. El Pueblo Zenú, reconocido como una de las etnias en grave riesgo de desaparición física, étnica y cultural por la Corte Constitucional, muestra a continuación un análisis sobre las circunstancias y factores que amedrentan cotidianamente la posibilidad de ejercer el derecho a la titulación del territorio colectivo, la autonomía, el gobierno propio, la vida colectiva, la diversidad e identidad cultural, así como el derecho a la consulta previa. Derechos estos, que han tenido un desarrollo normativo importante para nuestro pueblo; ya lo establecen a nivel constitucional, los principios relativos a la protección de la diversidad étnica y cultural, así como el derecho al territorio, al gobierno propio y la autonomía de las entidades territoriales especiales. De igual forma, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio 169 de la OIT ratificados por el Estado colombiano que establecen la obligatoriedad de consultar de manera previa, libre, informada y culturalmente adaptable las decisiones que puedan afectar de manera directa o indirecta la pervivencia de los pueblos, y con ello evitar la vulneración de los demás derechos colectivos.

Se puede establecer que una característica propia del Pueblo Zenú es la capacidad de adaptabilidad a las condiciones históricas para asegurar su pervivencia étnica y cultural. Esta cualidad se evidencia en los ciclos que enmarcan el ejercicio de nuestros derechos colectivos, los cuales deben comprenderse de manera concatenada:



Figura 8. Ciclos que enmarcan la adaptabilidad a los acontecimientos históricos y el ejercicio de los derechos colectivos del Pueblo Zenú. Esquema elaborado a partir de la información allegada en el marco del Plan de Salvaguarda Étnica Zenú 2014.

Estos ciclos deben contextualizarse desde el proceso de re-indigenización acontecido en la década del 80, suceso que para el Pueblo Zenú no puede desligarse del movimiento campesino de recuperación de la tierra dado en los años 70. Este proceso implicó una mirada interna al pasado, cuando aparece la Cédula Real del Resguardo Mayor de San Andrés de Sotavento que reconocía el derecho de los Zenú sobre el territorio del resguardo colonial, con ello, se legitiman las ocupaciones y retomas de las tierras y es así como emerge el movimiento indígena. Dese entonces, las formas de organización de los Zenú han estado ligadas a la articulación con los procesos nacionales de movilización indígena, que estaban en boga de la recuperación de los territorios ancestrales, la defensa de la autonomía y el ejercicio del gobierno propio. Este último, enfocado desde la conformación de los cabildos en virtud de lo establecido en la ley 89 de 1890.

Dicha ley fue por muchos años la única herramienta jurídica que sustentaba el ejercicio de los derechos colectivos del Pueblo Zenú, además de ser la base de discusión junto con el Convenio 169 de la OIT para el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia.

Con la figura del Estado Social de Derecho establecido por la Constitución del 1991, es que empieza un nuevo marco de acción para el ejercicio de la autonomía y el gobierno propio del Pueblo Zenú, a la vez que convoca directamente a la participación política y al acceso a recursos del Estado para el funcionamiento de los resguardos indígenas por medio de proyectos, situación que a la fecha constituía una limitación para el desarrollo de nuestra población, en la medida que en cabeza de los poderes locales de los municipios estaba la asignación de dineros para los programas y proyectos que atendían las necesidades de nuestras comunidades.

Empero, pese a la existencia de un marco constitucional que amparaba los derechos de los Zenú, y aun siendo sujeto protegido mediante diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional, el modelo de desarrollo nacional y la agudización del conflicto armado sumado al desarrollo de megaproyectos en la región generaron un espectro de amenaza para la pervivencia de Pueblo Zenú, que en menos de 30 años había iniciado un proceso de re-indigenización cuya lucha ha cobrado la vida de cientos de líderes de la estructura orgánica de gobierno propio y el desplazamiento forzado de miles de familias indígenas, trayendo como consecuencia el despojo y la desestabilización de la vida colectiva y la identidad étnica y cultural.

A partir de la información recolectada durante el trabajo de campo del Plan de Salvaguarda Étnica, logramos identificar elementos de análisis que explican los fenómenos que inciden en el ejercicio de los derechos colectivos, los cuales a la postre, han encaminado una senda de vulneraciones sistemáticas que confirman la tesis de la Corte

Constitucional de reconocer a los Zenú como un pueblo en riesgo inminente de desaparición:

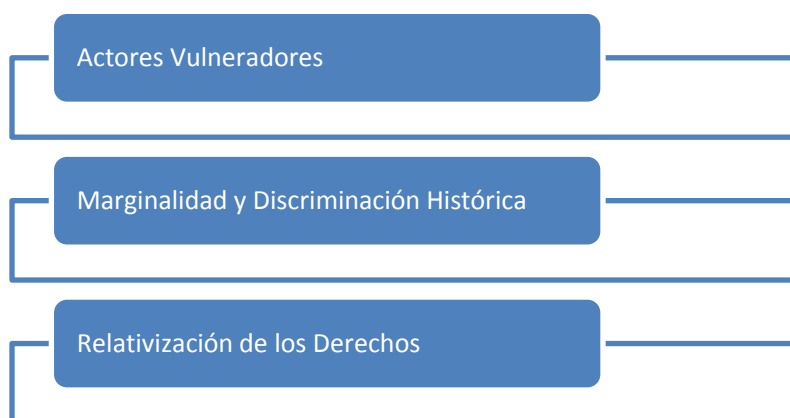


Figura 9. Elementos de análisis identificados en el marco del Plan de Salvaguarda Étnica Zenú para la comprensión del ejercicio de los derechos colectivos del Pueblo Zenú.

Es claro que el riesgo inminente de desaparición étnica y cultural se debe a la acción de estos tres elementos. En primer lugar se encuentran los actores vulneradores, en el cual, se puede identificar como principal vulnerador al Estado colombiano, que en calidad de primer garante constitucional de los derechos del Pueblo Zenú, ha sido inoperante frente al ejercicio de los mismos de forma oficial. Entendiendo esto, como la oferta institucional que de forma efectiva y garantizada permitiría a los Zenú el acceso a los recursos mínimos para encaminar su desarrollo y pervivencia, tales como el registro de reconocimiento étnico, celeridad en el otorgamiento y legalización de territorios, coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena y el gobierno propio, respeto por las autoridades tradicionales, aseguramiento del disfrute del territorio para la vida colectiva, reconocimiento del enfoque diferencial en los diferentes programas de oferta estatal, etc.

Por su parte, los poderes locales a nivel departamental y municipal, también abonan el terreno de vulneración estatal al desconocer las autoridades tradicionales, irrespetar su autonomía, marginalizar la identidad indígena del ser Zenú y amparar la acción de terceros por encima de los intereses de las comunidades del Pueblo Zenú, esto podrá observarse

de manera detallada en la descripción analítica realizada por municipios que desarrolla este acápite.



Figura 10. Actores Vulneradores de los Derechos Colectivos del Pueblo Zenú identificados en la consecución del Plan de Salvaguarda Étnica Zenú.

Actualmente, pese a las adecuaciones normativas que ha emprendido el Estado colombiano para garantizar dichos derechos, todavía queda un camino largo por recorrer de facto en la concreción de los mismos, los cuales son esenciales para la vida de nuestro pueblo y constituyen la base para la primacía del principio constitucional del pluralismo y la protección de la diversidad étnica y cultural.

A lo largo del presente análisis del estado de derechos colectivos evidenciamos las graves circunstancias que amenazan de manera cotidiana, permanente y sistemática la pervivencia del Pueblo Zenú. Ello se refleja desde aspectos elementales como el derecho a la identidad y al auto-reconocimiento étnico, materializado de forma operativa en el trámite de registro de reconocimiento étnico ante el Ministerio del Interior, aproximadamente solo un 30% de las comunidades o parcialidades Zenú gozan del ejercicio de este derecho de manera plena.

A la vez, nuestro derecho fundamental al territorio colectivo, se ve vulnerado por la falta de celeridad en los procesos de constitución, saneamiento, legalización y ampliación de resguardos. Actualmente, solo se cuenta con la recuperación de 23000 ha de un total de 73000 ha reconocidas como parte del Resguardo Colonial.

Un hecho gravísimo, que se desprende de la ausencia de registro de reconocimiento étnico, es la vulneración constante del derecho a la consulta previa, derecho reconocido por el Convenio 169 de la OIT, y conceptualizado en sus formas de aplicación por la Comisión del Pacto Internacional de Derechos Políticos, Económicos y Culturales, cuya Observación #3 recuerda a los Estados miembros el carácter vinculante y la obligación de respetar y garantizar que cualquier decisión que afecte de manera directa o indirecta sea consultada de manera previa, libre informada y culturalmente apropiada a los pueblos involucrados.



Figura 11. Efectos de la marginalización y la discriminación histórica que ha sufrido el Pueblo Zenú. Hallazgos en el proceso de análisis de derechos del Plan de Salvaguarda Étnica Zenú. 2014

A la vez, nuestros derechos a la vida colectiva y la identidad étnica y cultural, se ven amenazadas por efectos del conflicto armado, o por factores de discriminación y marginalización lo que ha conllevado a la invisibilización de la condición del ser indígena Zenú.

En igual sentido, los efectos del conflicto han traído la persecución, amenaza y desplazamiento forzado de nuestras autoridades tradicionales, siendo una situación que deviene en la desestructuración del gobierno propio y la posibilidad del ejercicio de la jurisdicción especial indígena. Esta última, con pocos desarrollos a causa de la falta de articulación y colaboración armónica con la jurisdicción ordinaria. Por su parte, las acciones de las fuerzas militares y la policía nacional también aportan en este marco de debilitamiento de la vida colectiva del Pueblo Zenú al no garantizar de manera coordinada y respetuosa de la autonomía del gobierno propio Zenú, las condiciones de movilidad dentro de los territorios indígenas, así como para la seguridad en la integridad de los líderes y autoridades tradicionales.

En relación a la intervención de terceros se evidencia con preocupación lo que puede denominarse como una relativización de derechos con amparo de las autoridades del Estado, para beneficio de terceros, cuyas acciones se explican en relación al ejercicio fundamental del derecho a la consulta previa, el canje de un derecho por otro, se ha convertido en una práctica amparada y des-regularizadora de las formas establecidas a nivel constitucional para el ejercicio de este derecho. Esto se prueba con los procesos iniciados de consulta previa con empresas multinacionales y nacionales que en procura del desarrollo de sus megaproyectos aseguran la gestión oportuna y celera del registro de reconocimiento étnico en un tiempo exprés, cuando normalmente una respuesta del Estado a una solicitud directa tomaría al menos más de tres años, generando con ello un espectro de decisión amarrada y casi que obligada al aval de los proyectos por parte de la población Zenú.

Por otra parte, vale mencionar que la incursión de los actores armados en territorio Zenú, ha desestabilizado la estructura orgánica del gobierno propio, los homicidios selectivos, la usurpación del manejo administrativo de los recursos y la participación política han limitado el desarrollo de la vida colectiva de nuestras comunidades.

En igual medida, la presencia de cultos religiosos entorpece el respeto por las creencias tradicionales y cosmogónicas, poniendo en riesgo el acervo cultural y ancestral del Pueblo Zenú.

Para dar una mirada detallada sobre el estado de los derechos, presentamos a continuación un análisis del bloque que comprende los derechos colectivos del Pueblo Zenú por municipio, queriendo develar de esta forma las graves afectaciones y circunstancias que amenazan la pervivencia física y cultural del Zenú.

1.1. Departamento de Bolívar

1.1.1. Municipio de San Jacinto

En el Municipio de San Jacinto del Departamento de Bolívar, se encuentran los Cabildos Arenas, Palmas y Faror, cuyo derecho a la titulación del territorio colectivo no ha podido ser ejercido debido a que están a la espera del registro de reconocimiento étnico como cabildos independientes de San Jacinto. Su proceso de organización partió desde 1997 luego de un hallazgo arqueológico en la zona; sin embargo, debido al fuerte impacto del conflicto armado que vivió el municipio, desde 1998 hasta el 2000 el proceso organizativo se estancó, retomándolo nuevamente en el 2001, actualmente están adscritos al Cabildo Mayor del Pueblo Zenú y a la espera del reconocimiento como Cabildo de San Jacinto para de forma autónoma ejercer su derecho propio.

Factores como el conflicto armado de influencia en la zona han diezmado su capacidad de autonomía y organización, de tal suerte que cuentan con una estructura de gobierno propio emergente, limitada por la acción de las autodefensas quienes han prohibido cualquier tipo de reunión o encuentro. Empero a esta circunstancia, han desarrollado un proceso de reconocimiento y estructuración de la ley de origen y el derecho propio. En igual medida, pese a no tener territorio colectivo, algunos miembros ponen al servicio de

la comunidad del cabildo sus propiedades individuales para la siembra de algunos productos básicos, además de apoyar a quienes no tiene propiedad alguna.

A todas luces, los derechos colectivos de estos tres cabildos se encuentran en constante vulneración, contraviniendo el marco de derechos internacionales y nacionales que cobijan su ejercicio. Sus procesos de organización se deben principalmente a la autodeterminación interna y el empeño por no agotar su pervivencia.

En el caso del Cabildo Faror, se evidencia temor en sus habitantes debido a que muchos de ellos viven en situación de desplazamiento y se encuentran amenazados, esta circunstancia dificulta el desenvolvimiento de las prácticas tradicionales y de la vida colectiva de manera tranquila y pacífica.

Respecto del derecho de identidad étnica y cultural, se evidencia una fuerte pérdida de la raíz ancestral, empero ello no ha sido impedimento para iniciar un proceso de recuperación incipiente que se concreta en la representación de autoridades tradicionales legitimadas para el rescate de las prácticas tradicionales y la legislación propia. Esto demuestra la necesidad de un acompañamiento por parte del Estado para el fortalecimiento de las instituciones propias, y el ejercicio de la jurisdicción especial indígena.

Es imperativo además emprender acciones de protección jurídica en razón de los territorios individuales habitados de manera colectiva por las comunidades de los Cabildos para así, impulsar procesos de legalización de territorio y con ello el acceso a mediano plazo a los recursos que garantizan su derecho autonómico.

1.2. Departamento de Córdoba

1.2.1. Municipio de Cereté

El Municipio de Cereté ubicado en el Departamento de Córdoba, cuenta con ocho cabildos adscritos a dos resguardos principalmente, La Coroza Argentina, Las Cuevas y Sinú Medio adscritos al Resguardo Indígena Zenú de San Pedro Alcántara; El Palmar, Berenjena Severa, y Tres Marías adscritos al Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento; y finalmente El Retiro de los Indios y Rusia sin encontrarse a la fecha vinculados a algún resguardo del Pueblo Zenú.

En relación a la accesibilidad al derecho al territorio, la situación resulta compleja, si se tienen en cuenta que ninguno tiene adjudicación de territorio colectivo, incluso la propiedad de las parcelas que de manera individual poseen los miembros de los Cabildos, en su mayoría no presentan escrituras.

Un factor que agrava esta circunstancia, y que vulnera directamente el derecho al auto-reconocimiento étnico y la identidad, es la carencia del registro de reconocimiento étnico ante el Ministerio del Interior, algunos de los cabildos están a la espera de la consolidación de este proceso desde hace más de 11 años. Por su parte, el Cabildo del Retiro de los Indios se encuentra en la fase del estudio etnológico. Esta situación generalizada para la mayoría de los Cabildos del municipio, evidencia la grave vulneración de los derechos más mínimos y esenciales, reconocidos por la Constitución y el Bloque de Constitucionalidad, trayendo como consecuencia el desamparo sistemático que deviene la imposibilidad de interlocutar con las autoridades locales para la gestión de proyectos o la participación en la configuración de los Planes de Desarrollo. Tampoco se evidencia la presencia de un enlace indígena que sirva de puente entre la institucionalidad local y los Cabildos del Pueblo Zenú.

Un hecho gravísimo, que se desprende de la ausencia de registro de reconocimiento étnico, es la vulneración constante del derecho a la consulta previa, cuyo estado fue documentado en la recopilación de información durante el trabajo de campo, que permitió conocer cómo se han generado una gran cantidad de proyectos sin el respeto de las consideraciones que sobre ellas pudiesen tener las comunidades de los Cabildos; de hecho, algunas de ellas, han perjudicado de manera directa las condiciones de vida en términos sanitarios, ambientales, dietarios, políticos y económicos generando incluso desplazamiento y desfragmentación en el seno de las comunidades¹³.

De hecho la queja más recurrente, se da en torno a la falta de capacitación, pues si bien en la mayoría de los casos se desconoce el derecho, en los que si se ha dado inicio a procesos de pre-consulta, las condiciones resultan siempre adversas para los miembros del Pueblo Zenú sin lograr el efectivo cumplimiento de los acuerdos allegados, como es el caso de Ecopetrol y el proceso de pre-consulta efectuado con el Cabildo de Tres Marías¹⁴. En igual sentido, los Cabildos de Berenjenas, Sinú Medio y Coroza Argentina presentan quejas de vulneración por construcciones de infraestructura, exploraciones sísmicas, construcción de acueductos comunitarios, vías, etc.

Paralelo a esta circunstancia de desprotección estatal, se suma la presencia de actores del conflicto armado a lo largo del territorio municipal, lo cual limita profundamente la vida colectiva y el ejercicio de la autonomía al interior de los Cabildos.

Respecto de las condiciones para el ejercicio del derecho fundamental al gobierno propio, cabe resaltar que ninguno de los Cabildos goza de infraestructura para el debido

¹³ Tal es el caso de la Autopista de la Sabana construida en 2007, en el cual se vulneró el derecho a la consulta debido a que el MinInterior declaró la inexistencia de comunidades indígenas en la zona, este proyecto trajo como consecuencia la división geográfica de la comunidad del Retiro de los Indios, quienes vieron afectados sus derechos patrimoniales al tener que vender sus propiedades por bajos precios y luego salir desplazados hacia el municipio de Cereté.

¹⁴ Hacia 2013, el proceso de pre-consulta se realizó con el fin de dar inicio a una exploración sísmica. Ecopetrol acordó en ir al cabildo en julio de 2014, fecha en la que se celebraron unos contratos para la construcción de la casa y local indígenas con dotación de muebles y enseres. Para ello la comunidad compró el lote en 2014 por \$6.000.000 pero a la fecha Ecopetrol no ha vuelto.

funcionamiento de la gobernabilidad, los miembros deben encontrarse por lo regular en la casa del Capitán de turno o sesionar en la institución educativa.

En relación del ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena, la mayoría de Cabildos reporta que debe hacer uso de la legislación propia, sin embargo la operatividad de la aplicación de la justicia se ve limitada por no contar con espacios suficientes y material pertinente que contribuya a la consolidación de un escenario de justicia a partir de los principios de la ley de origen, derechos mayor o derecho propio. En igual sentido, hay una queja generalizada, por la falta de coordinación y entendimiento con la jurisdicción ordinaria.

Otro fenómeno que afecta la vida colectiva y la identidad étnica y cultural es la discriminación, siendo un aspecto que genera sobretudo un sentimiento de vergüenza en la juventud Zenú, y por ende una especie de refugio en prácticas aculturizantes. Hay una preocupación por parte de los viejos y adultos pues sus hijos no tienen acceso a entornos de recuperación de la memoria, conocimiento ancestral, prácticas tradicionales y demás aspectos que contribuyan a la pervivencia material y cultural de la ancestralidad Zenú.

1.2.2. Municipio de Chimá

En el Municipio de Chimá se encuentran los cabildos 17 de Junio, Arache, Boca Catabre, Campo Bello, Carolina, Chimá Urbano, Corozalito, Las Marías, Malemba, Pimental, Punta Verde, Sabanacosta, Santero, Santo Domingo, Sitio Viejo y Tambor.

En relación al ejercicio de los derechos colectivos de estos cabildos hay dos escenarios que deben ser mencionados para comprender las limitaciones que enfrenta el Pueblo Zenú: Por un lado, esta es una zona ubicada en la Ciénaga, cuyas condiciones naturales han diezclado con el paso del tiempo, la sequía ha traído consigo la imposibilidad de generar prácticas agrícolas impulsando la ganadería. El carácter jurídico que envuelve a la Ciénaga

limita la posibilidad de reclamación de territorio en esta área, debido a que es un sitio de conservación natural y perteneciente al Estado, por lo que no se puede clasificar en la categoría de tierras baldías. Ello, sin embargo no impidió que la mano terrateniente se haya apropiado de algunas zonas de la Ciénaga transformando además su condición hacia la de llanura.

Por otra parte, el territorio histórico que comprendía la base del asentamiento del Zenú ha sido despojada y usurpada por acción de fuerzas terratenientes, el proceso de toma de las zonas de baldíos y algunas de las fincas en esta zona por parte del movimiento indígena se debilitó por parte de la acción del terrateniente. Ahora bien, luego de dichas expropiaciones por parte de terceros y en aras de garantizar el derecho al acceso al territorio colectivo, el INCODER ha emprendido una serie de ofertas, sin embargo el elevado costo de la tierra frena cualquier proceso de adjudicación. En igual sentido las zonas donde actualmente se asientan los Cabildos del Municipio, en su mayoría tienen problemas con las escrituras, algunos ni siquiera les presentan lo que complejiza cualquier proceso de legalización de territorio colectivo.

A la fecha, el Cabildo de Boca Catabre tiene asentamiento en una finca recuperada y otorgada finalmente en comodato por el INCODER. Sin embargo el fenómeno de invasión terrateniente frustra cualquier proceso de vida colectiva. Por su parte el Cabildo Campo Bello, tiene dos fincas recuperadas, empero, un desconocimiento estadístico y censal por parte del DANE frustró la posibilidad de acceder a recursos que pusieran en funcionamiento las dos fincas mencionadas, al momento gozan de un territorio colectivo pequeño ya titulado. Respecto del Cabildo de Corozalito, a la fecha se encuentra pendiente de una compra por parte del INCODER.

De los dieciséis Cabildos se tiene conocimiento cierto de que nueve no tienen territorio colectivo y que por lo menos una tercera parte aún no cuenta con el registro de reconocimiento étnico ante el MinInterior.

Otro escenario que debe ser abordado, es el ejercicio del gobierno mayor y la jurisdicción especial indígena. Durante el trabajo de recolección *in situ* se pudo constatar que hay una injerencia por parte de actores de los partidos políticos

En otros casos se evidencia la carencia del registro de reconocimiento étnico por lo que se diezma la posibilidad de consolidación de procesos autonómicos y de gobierno propio. En relación a este punto, se deja entrever la necesidad de acceder a recursos de las transferencias y del Sistema General de Participaciones, precisamente para proyectar programas que fortalezcan la autonomía y la capacidad de supervivencia y desarrollo propio de estos Cabildos.

Respecto de la gobernabilidad indígena, hay una preocupación generalizada por la falta de empoderamiento de las autoridades tradicionales, y en el marco de los nuevos decretos de autonomía y protección jurídica de los territorios indígenas resulta necesario fortalecer el gobierno propio. Aunado a ello, se requiere de un fortalecimiento de los procesos democráticos internos para la consolidación de la participación política.

Por su parte la vida colectiva y la identidad étnica y cultural se siguen viendo afectadas hasta que no se materialice el derecho al territorio colectivo. En igual sentido se evidencia con preocupación la falta de operatividad de la jurisdicción especial indígena, debido a falta de conocimiento para la aplicación de la ley de origen y el derecho mayor, por lo que en la mayoría de los casos se recurre a la jurisdicción ordinaria con quien no se dan procesos de articulación y fortalecimiento.

1.2.3 Municipio de Chinú

En el Municipio de Chinú se encuentran los Cabildos de Aguas Vivas, Bajo Palmital, BGarpicar, Bleo Berdinal, Cacaotal, Capirrá, Carranzó, Chinu Urbano, EL Chorrillo, El Pital, Raicero, El Tigre, Flecha Sevilla, La Floresta, Las Lomas, Los Algarrobos, Nuevo Oriente,

Retiro Los Pérez, San Mateo, Santa Rosa, Termoeléctrica y Villa Fátima. A la fecha ninguno cuenta con adjudicación de territorio colectivo ni percibe recursos de transferencias, sin embargo todos se encuentran registrados ante el Ministerio del Interior.

Esto constituye una grave afectación para el desarrollo de los demás derechos colectivos, si bien internamente como pueblo han iniciado un proceso conjunto de introspección cultural y ancestral, las limitaciones en cuanto al acceso de recursos para poner en funcionamiento sus territorios precariza la posibilidad de ejercer un proceso autónomo.

Se evidencia que hay una necesidad de incorporar la jurisdicción especial indígena como parte del fortalecimiento del gobierno propio, empero, esta se ve como un modelo por armar, es decir, se encuentra en un proceso de interiorización por parte de los miembros de los cabildos, quienes consideran que debido a los acontecimientos de su historia particular, han perdido en gran parte sus usos y costumbres culturales. La forma de ejercer la ley propia es una de ellas, sin embargo, es una prioridad en la agenda del cabildo mayor para lograr una revitalización cultural.

Respecto de la vida colectiva y la identidad, se mantiene la observación que no es posible profundizar en un proceso de supervivencia de la ancestralidad Zenú hasta que no se genere un proceso sistemático de garantías para el otorgamiento y titulación de los territorios colectivos; estos Cabildos se encuentran comprometidos con el rescate de su cultura y tradición como legado principal para las generaciones venideras. Sin embargo, bajo acciones constitutivas de gobernabilidad propia han hecho un esfuerzo por fortalecer no solo la operatividad de los Cabildos Menores sino por la organización de estos a nivel municipal en aras de generar estrategias de defensa de sus derechos.

En relación al derecho fundamental a la consulta previa, se conoce de un proceso reciente con la empresa Pacific Rubiales quien adelanta consulta con el fin de obtener aval para ejecutar exploración sísmica en cercanía a este territorio. Se está a la espera de los

resultados de estas exploraciones para la consecución de un nuevo proceso sobre la fase de explotación. En igual medida se sabe de un proceso próximo para garantizar este derecho por parte de la empresa ISA para la expansión de redes eléctricas y torres de energía en la zona. Frente a este punto, hay una preocupación generalizada por parte de todos los Cabildos sobre el ejercicio de la territorialidad en un municipio con tanta pluralidad de actores.

En relación a la coordinación y articulación con las entidades gubernamentales todavía se siente un abandono por parte del Estado, en la medida que se precisa de mayor acompañamiento para los procesos de fortalecimiento de gobernabilidad propia y jurisdicción especial, igualmente, es necesario generar una sinergia institucional para el empoderamiento y la participación política efectiva de estos cabildos en la configuración del poder local, atendiendo los principios de la ley de origen y del derecho mayor.

1.2.4. Municipio de Ciénaga de Oro

En este Municipio se encuentran los Cabildos de Barro Prieto, Cerro Pando, El Bugre, El Curial, El Templo, La Gran China, Las Piedras, Playa Blanca, Punta de Yañez y San Antonio de Táchira. Todos conformados por habitantes tradicionales de este territorio, parcialidades heredadas desde la ancestralidad de sus familias. En esta zona no se evidencian procesos de recuperación, empero muchos de los comuneros de las parcelas no poseen título de propiedad o tienen registros notariales.

El acervo territorial que tienen estos Cabildos, permite entrever la vulneración histórica y sistemática que ha tenido el pueblo Zenú, en relación a la titulación de su propiedad colectiva y el desconocimiento de los derechos sobre el territorio ancestral. La consolidación de estos Cabildos se ha dado principalmente por la necesidad de mantener el acervo cultural y ancestral de los antepasados, por lo que su vínculo con el territorio si determina el grado de identidad y pervivencia.

En relación al derecho de autodeterminación e identidad, la mayoría de los Cabildos cuentan con el registro de reconocimiento étnico del MinInterior, sin embargo el Cabildo Cerro Pardo no lo ha obtenido y esto ha representado un perjuicio para su comunidad, en la medida que se han presentado problemas con la presencia histórica de una cantera cercana al asentamiento, lo cual ha devenido en enfermedades, sequías y explotación.

Respecto del ejercicio del derecho al gobierno propio, vale resaltar, el ejercicio de empoderamiento que han tenido las mujeres en algunos de los Cabildos, se han dado procesos de capacitación para el desarrollo de la gobernabilidad y la participación lo cual ha generado un sentido de identidad y pertinencia en la búsqueda de solucionar las necesidades a las que se ven enfrentados como población indígena. Se destaca además la búsqueda de estrategia para el empoderamiento de las autoridades tradicionales, así como de las garantías para el cumplimiento de sus funciones.

Por otra parte, es notoria la injerencia de partidos políticos en las dinámicas de las estructuras de gobierno, generando un escenario de aculturización de las prácticas democráticas propias de la población. La preocupación radica fundamentalmente en poder tejer alianzas sin tener el riesgo de perder el legado ancestral buscando siempre el agenciamiento de proyectos que beneficien a las comunidades de los Cabildos.

En relación a la jurisdicción especial indígena, se presenta como un proceso a construir, debido a que hay poco conocimiento sobre las formas de ejercerla, y a que no identifican hechos que pudiesen ser considerados como faltas en sus dinámicas cotidianas. En los Cabildos no hay infraestructura adecuada para la aplicación de las faltas, en caso de que fuera necesario se haría uso del cepo de San Andrés.

El ejercicio a la autonomía y de la vida colectiva se ve claramente amenazado en razón de la territorialidad, y es el derrotero principal que se enfrenta, en la medida que es la

condición elemental para el acceso a recursos que puedan impulsar el financiamiento de sus programas, planes y proyectos.

1.2.5. Municipio de La Apartada

Los Cabildos La Playa, La Virgen y Tierra Santa se encuentran asentados en el Municipio de la Apartada, estos fueron conformados debido a una condición de desplazamiento generalizada en la cual los comuneros encontraban la necesidad de mantener la pervivencia del ser Zenú.

Respecto del derecho a la autodeterminación y la identidad étnica y cultural, el Cabildo La Playa no ha obtenido el registro de reconocimiento étnico, sin embargo está adscrito al Resguardo de Altos de San Jorge, y se encuentra posesionado ante la Alcaldía Municipal. Por su parte, el Cabildo de Tierra Santa, goza de registro de reconocimiento étnico en el Ministerio del Interior y se encuentra adscrito al Resguardo de Altos de San Jorge.

En relación a la adjudicación y titulación del territorio colectivo, estos dos Cabildos no cuentan con la garantía de este derecho, siendo un aspecto que frustra de manera directa el ejercicio de la autonomía. La condición de cabildo urbano, limita de forma pervivencia de los usos y costumbres de la cultura Zenú.

En estos momentos la jurisdicción indígena se encuentra en proceso de construcción, de interiorización, sin embargo, las condiciones en el espacio habitado no son las ideales para desplegar su lógica de vida cultural, debido a que este espacio es compartido por otro grupo social perteneciente a la junta de acción comunal y esto interfiere en ocasiones con la autonomía como población indígena.

1.2.6. Municipio de Lorica

En este Municipio se encuentran los Cabildos de San Nicolás de Barí, Campano de los Indios, El Carito, El Bolao Las Estancias y Finzenú, adscritos al recién creado Resguardo de San Sebastián de Urabá que se encuentran en proceso de legalización luego de una lucha por el reconocimiento del título colonial.

Respecto del derecho de autodeterminación e identidad étnica y cultural, todos los Cabildos tienen el registro de reconocimiento étnico del Ministerio del Interior y se han posesionado ante la Alcaldía Municipal, siendo este un primer paso, desde el espectro legal, hacia la conformación del gobierno propio.

En relación al derecho de la titulación del territorio colectivo, su estado actual se configura a partir de las siguientes circunstancias, que evidencian por demás la sistemática e histórica vulneración de este derecho esencial, que esbozan desde la pervivencia de prácticas coloniales de dominación hasta la expropiación de las tierras y desconocimiento de los derechos adquiridos y fundamentados en los títulos coloniales de estas comunidades: El Cabildo de San Nicolás de Barí por intermedio de los miembros del cabildo indígena y su junta directiva están gestionando el proceso de conformación del resguardo indígena, los trámites adelantados con INCODER se encuentran en la etapa de inclusión en el listado que se generó en la Minga de La María en Piendamó, Cauca. Estos trámites se realizaron según la normatividad exigida según el decreto 2164 de 1995. El proceso de reconfiguración del resguardo se dinamizó a partir de 2006 gracias al apoyo de líderes indígenas de Lorica que brindaron la asesoría y aportaron copia de la escritura pública 172 de diciembre 29 de 1908.

En esta escritura se autoriza al personero municipal para que perfeccione la cesión de los terrenos pertenecientes a los extinguidos resguardos de San Sebastián de Urabá y San Nicolás de Bari de la jurisdicción de Lorica, aduciendo que la etnia indígena ha

desaparecido por su mezcla con la raza española y la africana y que estos terrenos se encuentran abandonados. Esta escritura desconoció la ocupación ancestral de los territorios, y permitió que en la época actual, la comunidad reconozca la historia del despojo de su territorio y pueda allegar la documentación requerida ante el INCODER y ante el Ministerio del Interior para la reconstitución de su resguardo. Los trámites que los cabildantes incluyen un derecho de petición ante INCODER para la adjudicación de tierras a nivel colectivo de los cabildantes, además se solicita la priorización para la asignación de tierras dado que en la minga de la María se incluyeron cuatrocientos cabildos para ser sujetos de titulación colectiva.

Por su parte, el Cabildo Campano de los Indios, se enfrenta a una realidad gravosa respecto de su derecho al territorio, teniendo en cuenta que las tierras donde realizan su principal actividad económica pertenecen a un terrateniente, con quien tienen un acuerdo de producción primaria agrícola, en la cual él se beneficia de dos terceras partes de la cosecha obtenida, la extensión de este territorio abarca aproximadamente las 1000ha. Esta relación evidencia la pervivencia de prácticas coloniales y serviles a las que se someten los comuneros de este Cabildo.

El Cabildo El Carito, se enfrenta a la carencia de tierras para trabajar, solamente cuentan con algunas parcelas. La comunidad de este cabildo vendería la mayoría de sus tierras a terratenientes. Entre los años noventa y primera década del 2000, llegarían personas a comprarles sus parcelas a buenos precios, las cuales venderían dadas sus necesidades económicas. Estas compras elevarían exorbitantemente el precio de la tierra, haciéndola ahora de difícil adquisición para la comunidad.

Finalmente, otra problemática territorial ha sido el irrespeto a su derecho a la consulta previa. En el Carito, Surtigas realizaría la instalación del servicio de gas y no le consultaría al cabildo sobre ello, constituyendo con ello una violación a su derecho fundamental

Por último, el Cabildo de Finzenú que en la actualidad está en proceso de legalización del título colonial para la instauración del resguardo de San Sebastián de Urabá. Con el ánimo de superar las limitaciones que trajo consigo el proceso de recuperación de tierras de hace más de 20 años, el cual luego culminó con la negociación por parte del INCODER con el dueño del territorio. Las 30 ha fueron parceladas y entregadas a los comuneros quienes más adelante se vieron obligados por necesidad económica a venderlas a muy bajos precios a nuevos terratenientes.

La comunidad ha querido frenar ese proceso, pero no cuentan con los recursos económicos para comprarles a sus compañeros. La entrega de las tierras a título personal, más no colectivo, los hizo vulnerables a los acaparadores de tierra, situación que demuestra la imperiosa necesidad de dar garantías especiales de protección a los territorios indígenas para evitar de esta forma la incursión de terceros en estos territorios. La comunidad intentó que estas tierras fueran entregadas a título colectivo, pero al no estar reconocido el cabildo oficialmente en ese momento, no pudieron lograr este propósito.

Este contexto histórico ha enmarcado las limitaciones para el desarrollo de la vida colectiva de estos cabildos, empero la organización y la búsqueda de estrategias para la protección de su pervivencia física y cultural ha consolidado la posibilidad de establecer una organización municipal de cabildos en Lorica.

Sin embargo, la lucha por la reivindicación del derecho a sus territorios ha imposibilitado el desarrollo de la jurisdicción especial indígena, así como el planteamiento de una plataforma político administrativa que les permita sentar las bases para la formulación y agenciamiento de proyectos y programas que impulsen la pervivencia del Pueblo Zenú asentado en este municipio.

1.2.7. Municipio de Momil

En el Municipio de Momil se encuentran los Cabildos de Cerro Mohán y Momil Urbano, cuyos derechos colectivos están totalmente vulnerados al no tener titulado territorio colectivo, no gozar del registro de reconocimiento étnico, ni de la oferta institucional para hacer parte de los programas institucionales que fortalezcan el desarrollo de la vida colectiva indígena.

Tampoco se evidencia programas de coordinación con la jurisdicción ordinaria para el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena.

1.2.8. Municipio de Planeta Rica

En este municipio se encuentran posesionados ante la Alcaldía, los Cabildos El Redentor y La Esperanza. Ambos se encuentran en el registro de reconocimiento étnico como parcialidad indígena ante el Ministerio del Interior, teniendo en primera medida garantizado su derecho a la autodeterminación y reconocimiento de su identidad étnica y cultural. A su vez, el Cabildo El Redentor está adscrito al Resguardo de Altos de San Jorge; por su parte el Cabildo La Esperanza está adscrito al Resguardo de San Andrés de Sotavento.

Respecto del derecho al territorio colectivo, la autonomía y la gobernabilidad propia, la vulneración se concreta a partir de las siguientes circunstancias: El Cabildo El Redentor no tiene territorio colectivo, con el agravante de que el espacio donde tiene su asentamiento es compartido con la Junta de Acción Comunal JAC. Esta situación genera un escenario de conflicto constante por la convergencia de las formas de organización, por un lado el ejercicio de la gobernabilidad propia y por otro el acatamiento de los estatutos de la JAC.

A la vez, el Cabildo se ha tenido que enfrentar a formas de gobierno devenidas de la incursión de los grupos armados ilegales tales como las bandas criminales, que bajo el apelativo de los paisas y las águilas negras operan en la zona, estos dos grupos se han disputado el poder en la zona y han promovido la violencia y el miedo en la población.

Las represarías que ha sufrido la población han sido muchas y constantes, no han atentado sólo contra los individuos sino contra su vida colectiva, esto se ha manifestado en desplazamientos forzados a otras zonas, desplazamiento dentro de la misma zona o lo que es lo mismo, la no movilidad libre dentro de su territorio, toques de queda después de ciertas horas, muerte de líderes comunitarios, asesinatos de comuneros y amenazas a líderes religiosos, hubo restricción de las visitas institucionales, infiltrados dentro de las reuniones de la comunidad y de la comunidad con externos, prohibición de prácticas a partir de ciertas horas, entre otros aspectos que fracturaron su vida cotidiana y la posibilidad del ejercicio de la gobernabilidad propia y la jurisdicción especial indígena.

El Cabildo La Esperanza no posee un territorio colectivo en el cual llevar una vida social de base y ejercer ahí sus actividades económicas, sociales y políticas. Enmarcamos la anterior como una condición indispensable para la población ya que la cultura es un fenómeno localizado y no se puede pensar al pueblo indígena sin un territorio colectivo. Estos han tenido repercusión y disputa con los terratenientes, pues aseguran los comuneros que no tienen ningún tipo de concesión con ellos para aprovechar un poco de tierra para trabajar o para ser contratados en los latifundios.

Los grupos al margen de la ley han creado dispositivos de control social y dominio territorial divergentes al cabildo y la junta de acción comunal con la que comparten el espacio social vivido. En este sentido estos grupos han entrado a tomar el dominio territorial a través de la violencia, obviando la autonomía que el pueblo indígena tiene y vulnerando sus derechos colectivos de todas las formas posibles.

Por otra parte, la gobernabilidad y las autoridades tradicionales se han visto gravemente amenazadas al punto de que el fundador del Cabildo fue obligado a desplazarse fuera del territorio. En igual medida la actual gobernadora es víctima de amenazas de muerte por parte de fuerzas paramilitares.

1.2.9. Municipio de Pueblo Nuevo

En este municipio se encuentran el Cabildo Municipal, el Cabildo El Contento, Cabildo El Peniel, Cabildo el Varal, Cabildo Los Ángeles y el Cabildo Unión y Fortaleza.

Respecto de su derecho fundamental a la autodeterminación todos están adscritos y posesionados ante el Resguardo de Altos de San Jorge y ante la Alcaldía Municipal, sin embargo muy pocos Cabildos cuentan con el registro de reconocimiento étnico por parte del Ministerio, a saber, EL Contento y Los Ángeles. Por su parte, el Cabildo Municipal, El Peniel, El Varal y Unión y Fortaleza se encuentran a la espera de la realización de los estudios etnológicos para poder tener herramientas que permitan el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera colectiva.

En la actualidad ningún Cabildo de este municipio cuenta con un territorio colectivo que les permita llevar a cabo su vida social y cultural en óptimas condiciones, es decir, la ausencia no les permite construir una vida social de base, tampoco les permite una apropiación simbólica del espacio, el cual es considerado por ellos como un recinto sagrado, tierra de antepasados, lugar de inscripción de una historia además de ser un proveedor de riquezas y mercancías que garantiza la producción de la economía familiar y comunitaria.

El modelo de gobierno propio aún es un modelo en construcción pues como todo proceso cultural requiere de la interiorización de los comuneros, aspecto que no ha sido posible de realizar al no contar con un territorio colectivo no pueden gozar de una autonomía y desplegar en él una jurisdicción especial indígena y difundir sus valores y tradiciones de la

forma adecuada pues los poblados de tipo urbano son espacios de confluencia de diversos actores sociales y culturales, en este sentido las prácticas comunitarias de carácter ancestral son más difíciles de mantener.

1.2.10. Municipio de Purísima

En este Municipio se encuentran los Cabildos El Arenal, El Comején, San Juan de las Palmas, El Tigre, El Hueso y Arroyo Hondo.

Estos Cabildos conformaron de manera independiente el Reguardo de San Pedro Alcántara al encontrar que sus territorios se hallaban bajo titulación de resguardo colonial. Sin embargo a la fecha están a la espera de la legalización de dicho resguardo por parte del Estado.

Por otra parte, el Cabildo El Arenal cuenta con el registro de reconocimiento étnico, y el Cabildo Comején tiene legalizadas las tierras recuperadas en la movilización indígena, en embargo hoy día, estas resultan insuficientes en relación al crecimiento demográfico.

En relación a los derechos colectivos, el proceso de gobernabilidad propia ha sido frustrado por la incursión de los actores del conflicto armado, cuyas vulneraciones más dolientes al proceso de autonomía y jurisdicción especial cobro la vida del Capitán.

Los Cabildos deben enfrentarse además, al poderío establecido por terratenientes en los límites de sus territorios. Por lo que se considera imperante establecer medidas jurídicas de protección especial a este territorio.

1.2.11. Municipio de Sahagún

En este Municipio se visitaron los Cabildos Menores de Colomboy, Escobalito, Guayabal la Y, Kilometro 35, Paloquemao, Pisaflores, Pitalito, San Matías, Santiago Abajo y Venado.

En relación a la titulación de la propiedad colectiva, persiste una queja generalizada por parte de todos los Cabildos debido a las dificultades que enfrentan para la tramitación ante el INCODER, en ello no solo se prueba la falta de respuesta y operatividad del Estado sino la corroboración de que las instituciones hacen parte de los sujetos vulneradores de los derechos colectivos del Pueblo Zenú, con el agravante de ser el Estado mismo el primer garante del ejercicio de los derechos y la protección de los bienes jurídicos de la población colombiana.

Los Cabildos de Colomboy y Escobalito están adscritos al Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento. Sin embargo no tienen territorio colectivo debido en gran medida, en el caso de Colomboy a que el registro de reconocimiento étnico ante el Ministerio del Interior fue otorgado de forma parcial sin el cumplimiento de los requisitos como la realización del estudio etnológico, lo que implica que no sea incluido en los procesos para el goce efectivo de sus derechos; por su parte Escobalito, pese a tener el registro étnico, aún se encuentra a la espera de la respuesta de solicitud de adjudicación por parte del INCODER.

Por su parte Guayabal la Y no cuenta con registro de reconocimiento étnico, ni con territorio colectivo. En relación al Cabildo Kilometro 35 se encuentra adscrito al Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, no tienen titulación de su territorio; y se enfrentan a problemas con la Junta de Acción Comunal – JAC porque no facilita el trabajo de las autoridades indígenas al no respetar la autoridad tradicional ni respetar su derecho fundamental a la consulta previa con ella. Además su derecho a la autonomía se ve gravemente vulnerado por la incursión de grupos paramilitares en sus territorios. Actualmente la fuerza pública, en cabeza de la policía, entra de forma arbitraria a la comunidad insultando a las autoridades indígenas.

Se presenta el problema de no conocer el estado actual en que se encuentra el territorio, si está en manos del INCODER o del antiguo dueño de la finca o si está como baldío; debido a crecimiento de la población del cabildo la cantidad de tierra es mínima para poder seguir conservando la identidad cultural y étnica. Quienes poseen el territorio ancestral, son los grandes hacendados, tienen dominado y cercado el territorio.

Se evidencia fuerte injerencia de los partidos políticos en las dinámicas político administrativas de los cabildos. A la vez hay una vulneración al derecho de la vida colectiva y de la identidad cultural al no respetar el derecho fundamental a la consulta previa en casos como la imposición de programas y organizaciones por los entes territoriales y el Estado (Red Unidos, Familias en Acción, Juntas de Acción Comunal) sobre el cabildo, dificultándole su trabajo de unidad y autonomía; tampoco hay enlace indígena en el municipio que permita la sinergia y la articulación interinstitucional.

En esta situación de vulneración incide también la presencia de empresas privadas multinacionales, con proyectos para la exploración sísmica, telecomunicaciones, gasoductos, redes eléctricas, etc; el desarrollo de la industria ganadera a gran escala generó el cambio del uso de la tierra y confino a la comunidad y su libertad de locomoción, al imponer cercamientos territoriales con alambres eléctricos, agentes armados y de seguridad.

La relativización de los derechos es un fenómeno que se agudiza y se mantiene de forma sutil pero evidente, esto se concreta en lo que se puede denominar “el cambio de un derecho por otro”, tal es el caso reportado en el Cabildo de Santiago Abajo que no cuenta con el registro de reconocimiento étnico del Ministerio del Interior, al respecto se solicitó en el año 2012 por parte, tanto del cabildo menor como del mayor, el Ministerio les comunicó que era difícil porque solo había 3 antropólogos y muchos pueblos, más de 1.000 solicitudes para el estudio etnológico; entonces como era difícil les dijeron que por medio de la gobernación o la Alcaldía consiguieran contratar un antropólogo que valía 5

millones para hacer el estudio y que la organización no podía hacerlo. En la Alcaldía les dijeron que les pagaban el antropólogo pero que la comunidad tenía que votar por ellos en las elecciones de marzo de 2014. Actualmente, para las elecciones regionales de gobernación y municipio, el Secretario de Gobierno les comunicó otra vez lo mismo. Esta realidad constituye una clara amenaza contra los derechos fundamentales del pueblo Zenú.

Conflictos internos gestados por actores externos, como lo es el hecho de que las empresas al querer limitar las acciones de los cabildos imponen y propician la creación de juntas de acción comunal para de esta forma marginalizar la participación y el ejercicio de los derechos colectivos de las comunidades del Pueblo Zenú.

Otro hecho que constituye una clara prueba de vulneración al derecho al territorio, el respeto por las autoridades tradicionales y el ejercicio de la autonomía es la situación que enfrentan los Cabildo Venado, Guayabal, Venecia y Urbano: Autopistas de la Sabana le prohibió a la comunidad la salida ancestral que han utilizado toda la vida para ir a la carretera hacia Ciénaga de Oro o Sahagún y ahora deben dar una vuelta de 3 km porque el lodo de la mina daña el camino que usan los estudiantes, obligándolos entonces a transitar por potreros ajenos y así poder llegar a tomar clases. Por su parte, en el Cabildo de Venado CorAseo clausuró un camino ancestral de más de 100 años asegurando el impedimento del tránsito de los comuneros mediante la presencia de un vigilante armado. Sumado a ello, los paramilitares y las bacrim transitan por el territorio cuidando propiedades privadas atemorizando a la población y con ello afectando la vida colectiva.

1.2.12. Municipio de San Andrés de Sotavento

El Municipio de San Andrés de Sotavento se encuentran los Cabildos Menores de Alta Rivera Roma, Alto Santa Ana, Arroyo del Medio, Bajo Grande, Bajo Lata, Bajo Norte, Bocas de Jarro, Bajo Palmito, Bellavista/Recuperación, Berlín, Brillante Norte, Buenos Aires Sur,

Calle Larga, Cartagenita, Casita Argentina, Casita Sur, Celeste Imperio, Senegal, Costa Rica, Cruz De Mayo, Cruz del Guayabo, Cuesta Abajo, Dividivi, El Banco, El Charcón, El Contento, EL Delirio, El Mamón, El Mora, El Hoyal, EL Peine, Flores de Mocha, Gardenias, Guayabo Sur, Guayacanes Sur, Hoja Ancha, Jefén, La Gloria, La Siria, La Tambora, Los Andes Recuperación, Los Carretos, Los Castillos, Los Correas, Los Gaviria, Majagual I, Majagual II, Nueva fortuna, Nueva Unión, Palmas Verdes, Palmitos Sur, Patio Bonito Norte, Patio Bonito Sur, Plaza Bonita, Providencia Sur, Pueblecito Sur, Paraíso Plaza Bonita, Recuperación, San Gregorio, San Isidro I, San Isidro II, Santa Fe de la Cruz, Santa Isabel, Santo Domingo, Venecia, Villa Rosita Sur, Villa Rosita Arriba, San Francisco, Tierra Grata y Mala Noche.

En relación al ejercicio de los derechos colectivos por parte de los comuneros de los Cabildos Menores en el Municipio de San Andrés de Sotavento, la información recolectada *in situ* revela hechos vulneradores que ponen en grave riesgo su pervivencia física y cultural como pueblo indígena.

Al respeto del territorio como derecho esencial colectivo, se demostró que aproximadamente el 32% de los Cabildos se amparan en acciones que encaminan la efectivización del derecho a la titulación colectiva, el 68% restante presenta vulneración absoluta de este derecho. Esta situación se da por factores asociados a la celeridad de respuesta institucional en el proceso de legalización y constitución por parte del INCODER, idoneidad de los títulos, esclarecimiento de posesiones, problemas con la compra de las tierras a adjudicar y problemas relacionados con las tradiciones de las tierras y la existencia de las escrituras.

En relación a la ampliación, saneamiento y delimitación de los territorios colectivos, todos los Cabildos presentan una condición de vulneración absoluta, si se tiene en cuenta que las respuestas institucionales se dan con mucha diferencia en relación a los tiempos legalmente establecidos para tal fin, cabe destacar que en el caso de las ampliaciones,

dicha solicitud corresponde a una realidad fáctica: la densidad territorial resulta insuficiente en relación al crecimiento demográfico del pueblo Zenú, con lo que se diezman las condiciones de vida colectiva digna.

Frente a este último derecho, su desarrollo se ve permeado por la injerencia de actores armados en la zona, quienes en un escenario de usurpación de la gobernabilidad y jurisdicción especial establecieron en algunos casos toques de queda, pretendiendo además la dominación de algunas propiedades o el acceso a recursos de los cabildos. Se reconoció principalmente como sujetos vulneradores, a integrantes de las fuerzas paramilitares.

Respecto del ejercicio de la jurisdicción especial indígena y de la gobernabilidad indígena está se ha desarrollado bajo el acompañamiento de capacitaciones que permitan empoderar a las autoridades tanto en el manejo de recursos como en la aplicación de la ley de gobierno propio.

1.2.13. Municipio de San Antero

En el municipio de San Antero se encuentran los Cabildos de Porvenir, La Planada, Naranjo III y Bajo Grande.

En relación a la situación jurídica del territorio el Cabildo Porvenir, emprendió dos procesos de saneamiento territorial, con lo que se espera dar solución a la presencia de terceros tales como la empresa ECOPETROL, Oleoducto Central, y al Oleoducto Bicentenario, turistas y los colonos.

Por su parte, el Cabildo La Planada ha emprendido acciones de legalización de su territorio y está a la espera de la compra de tierra por parte del INCODER para la conformación del resguardo de San Pedro Alcántara.

La realidad del Cabildo Naranjo III dista bastante de los demás, en la medida que no tienen territorio colectivo titulado ni han iniciado proceso de saneamiento. En igual sentido, el Cabildo Bajo Grande presenta problemas con el derecho al territorio colectivo, pues al no tener una titulación colectiva sobre su territorio, se ven obligados a habitarlo junto con los campesinos, los afrocolombianos y los terratenientes que también viven allí. Aunque no expresaron tener ningún tipo de problemas con los dos primeros, señalan que el problema es con los terratenientes, pues ese terreno era baldío y se lo apropió la Finca Nueva España, cambiándole sus dueños el nombre por Las Nubes y Los Ángeles, hecho que comprueba la necesidad imperante de establecer medidas jurídicas especiales para garantizar el desarrollo de los demás derechos colectivos de este cabildo.

1.2.14. Municipio de San Carlos

En este Municipio se encuentran los Cabildos de El Hato, Yayal, Rabo Largo, Miraflores, La Costa, La Coroza Medio, Colosina y Buena Parte. Ninguno de estos cabildos tiene el registro de reconocimiento étnico del Ministerio del Interior, situación que denota una grave vulneración para estos Cabildos en la medida que frena cualquier posibilidad de desarrollo de los derechos colectivos, que en principio se relacionan directamente con la titulación de un territorio colectivo para la vida como población indígena.

En relación a la gobernabilidad, se enfrentan serios problemas de infraestructura, ninguno de los Cabildos tiene sede propia, por su parte en los Cabildos de La Costa y la Colosina se sesiona en la institución educativa del municipio y en la casa del Capitán respectivamente.

La mayoría de los cabildos de este municipio se encuentran adscritos al Resguardo Colonial de San Andrés de Sotavento, salvo el Cabildo Rabo Largo que es independiente. De igual forma, cabe resaltar que todos los cabildos se encuentran posesionados ante la Alcaldía.

Es de destacar que los problemas de acceso al territorio en el caso del Cabildo de Miraflores se ve limitado, pues los terratenientes que los rodean han comprado casi todo el territorio; la comunidad lucha con los terratenientes para que les vendan y así iniciar un proceso de constitución de resguardo. Antes de conformar el cabildo solicitaron tierra al INCODER pero no se consiguió viendo una vez más, frustrado su derecho al territorio.

Se evidencian las problemáticas en cuanto al derecho a la diversidad étnica e identidad cultural, reflejado en una pérdida de la cultura, los usos, costumbres y tradiciones por la influencia de la cultura occidental, tampoco hay capacitación para el ejercicio de los derechos colectivos de la jurisdicción especial indígena y el fortalecimiento de la gobernabilidad propia; los niños no reconocen la tradición del sombrero vueltiao, se ha perdido el manejo tradicional de la tierra y los cultivos.

En relación al derecho a la consulta previa presentamos el estado de la garantía del mismo, todos los cabildos relacionan la importancia de la capacitación para evitar vulneraciones.

En el Cabildo de Miraflores los problemas en cuanto al derecho a la consulta previa son que no conocen sobre el tema ni se implementa; se hará una pavimentación del casco urbano al tanque elevado pasando por la mitad del cabildo y no se ha hecho consulta. En 2014 UniAguas, para el paso del acueducto en el sector de la carretera de Miraflores les exigió a las 5 familias comprar los materiales y poner la mano de obra para instalar el acueducto, maltratando a estas familias vulnerables y no se hizo consulta previa para 1 km. de trabajos. En 2014 el señor Fray Monterrosa represó el agua del canal La Coroza con el fin de hacer unas represas para pescado ocasionando inundaciones, y también estableció una cantina en donde se producen muchas riñas, y no se hizo consulta.

En el Cabildo EL Hato se evidencia que la relación entre las autoridades indígenas y la jurisdicción ordinaria existe, además de acciones concertadas con la Policía y colaboración

entre ambas partes. Los problemas en cuanto al derecho a la consulta previa son que no se recibe información, se va a construir una carretera del Km. 11 a Ciénaga de Oro que pasaría por el cabildo y no se ha hecho consulta; se van a construir unas torres de energía de ISA en el cabildo y no se ha hecho consulta; y no hay capacitación.

El Cabildo La Coroza presenta vulneración al territorio y bienes propios así como al derecho a la consulta, debido al caso que en un terreno baldío del Estado a la orilla del canal el capitán tenía 100 árboles de guayaba agria que fueron tumbados por el INCODER y el consorcio Mocarí; y la CVS dijo que estos tenían que responder por los daños; esto ocurrió hace 6 meses y no se ha hecho nada al respecto.

El Cabildo Colosina también presenta hechos vulneradores del derecho a la consulta previa, relacionado con la pavimentación de la carretera de Ciénaga de Oro a Montería y no se han comunicado con el cabildo que queda sobre ella. Se construyó la subestación eléctrica San Carlos, de la Gobernación, que ahora pasa a manos de ElectriCaribe; se hizo sin consulta y el cabildo no tiene un buen servicio de energía eléctrica.

En el Cabildo Buena Parte, los problemas en cuanto al derecho a la consulta previa se deben a la carencia del registro de reconocimiento étnico del MinInterior. En 2011, se construyó el acueducto sin consulta y UniAgua no beneficia a todas las familias del cabildo. Hace 6 o 7 años ElectriCaribe instaló la energía eléctrica en calle larga sin consulta, se instalaron postes de madera y son peligrosos para las casas y la comunidad.

1.2.15. Municipio de San Pelayo

Tiene el Cabildo Chamarras, pero no cuenta con titulación del territorio colectivo, pese a estar posesionados ante la Alcaldía Municipal y adscritos al Resguardo Colonial de San Andrés de Sotavento aún no alcanzan a obtener el registro de reconocimiento étnico.

Al momento no se tiene sede para el funcionamiento del Cabildo por falta de recursos, además se han enfrentado al desconocimiento de su gobernabilidad y jurisdicción especialidad. Debido a la falta del registro étnico, han visto como se ha perdido beneficios otorgados para el Cabildo, se han presentado ocasiones de desconocimiento y ocultamiento de los mismos tanto por la Alcaldía como por la Gobernación.

Se evidencia además la intromisión de terceros en las parcialidades. Todas estas circunstancias evidencia el grado de vulneración y riesgo de desaparición a la que se enfrentan los comuneros Zenú de este Cabildo.

1.2.16. Municipio de Tuchín

En el Municipio de Tuchín de Cariñito, Guacayanes, Guaimaral, Flechas, El Manguito, Cruz Chiquita, Cerro de Paja, Andes Norte, Castilleral, Majagual, Calle del Medio, Bomba, Bella Vista, Bella Isla, Belén, Barbacoas, Centro Alegre, San Benito, Vidauto, Vidales, Tolima, Tierra Altica, Sitio Nuevo, Santander, La Laguna, San Juan de la Cruz, Loveran, Sabana Nueva, Paraiso Integral, Nueva estación, Nueva Esperanza, Molina, Mata de Caña, Villa Nueva y Santa Clara.

La situación de la población Zenú en este municipio es alarmante, pese a que todos los Cabildos tienen la resolución del Ministerio del Interior del registro de reconocimiento étnico, no gozan de ningún programa o acceso a recursos municipales que impulsen su desarrollo como pueblo indígena.

Llama la atención que el registro de reconocimiento étnico fue otorgado mediante la intervención de la empresa Pacific Rubiales quien en menos de seis meses logró lo que las autoridades indígenas por solicitud directa no habían conseguido durante doce años.

Respecto de la relación con los poderes locales, se hace un llamado de atención, debido a que los acaldes de turno han manifestado negativa para brindar garantías de participación a estos cabildos, impulsando además la injerencia de las juntas de acción comunal por encima de los intereses de dichos cabildos.

1.3. Departamento de Sucre

1.3.4. Municipio de Chalán

En este Municipio se visitó el Cabildo Menor Chalé que actualmente está posesionado ante la alcaldía municipal y se encuentra realizando las gestiones para que el Ministerio elabore el concepto etnológico para conseguir el registro de reconocimiento étnico, este aspecto influye en la no inclusión del mismo en el espectro de políticas, programas y proyectos dirigidos a garantizar el goce efectivo de sus derechos, así mismo, representa una limitante fundamental para el ejercicio de los derechos colectivos ligados al territorio.

El territorio fue recuperado por los indígenas hace 20 años, y parcelado y entregado por el INCORA a los mismos, sin embargo, como consecuencia del proceso organizativo posterior a la recuperación de tierras, el cabildo fue constituido tan sólo hace 12 años. Pese al acceso a la tierra que lograron, la incursión de grupos armados y las problemáticas asociadas al conflicto armado impidieron el uso de los espacios cotidianos, el pleno ejercicio de la gobernabilidad y el derecho al acceso a una vida colectiva autónoma durante los últimos años.

Debido a la ausencia de acompañamiento, el cabildo no cuenta con desarrollo de la jurisdicción especial indígena razón por la cual se hace necesario el fortalecimiento del proceso de apropiación y empoderamiento de la comunidad en materia de ley de gobierno propio.

Adicionalmente, se evidencia injerencia de proyectos de exploración sísmica por parte de la empresa Pacific Rubiales sin consultar previamente al pueblo indígena, vulnerando directamente el derecho fundamental a la consulta previa con el que cuentan.

1.3.2. Municipio de Coloso

En el Municipio de Coloso se encuentra el Cabildo La Esmeralda. Con registro de reconocimiento étnico, adscrito además al Resguardo Colonial de San Andrés de Sotavento. Respecto de la situación jurídica del territorio, mantienen las tierras recuperadas y adjudicadas en 1983 por el INCORA, aunque aún no posee titulación del territorio colectivo, aspecto que denota una situación irregular para el ejercicio de los derechos colectivos propios de estas comunidades.

1.3.3. Municipio de Corozal

En el Municipio de Corozal se encuentran los Cabildos Menores de San José de la Pileta, Las Peñas, La Esmeralda, El Mamón, Chapinero y Cantagallo.

Respecto del derecho a la identidad y autodeterminación étnica puede establecerse que las comunidades han tenido un proceso organizativo que ha permitido la constitución de Cabildos de manera autónoma, contando con el aval la adscripción al Resguardo Colonial de San Andrés de Sotavento. Desde el punto de vista institucional, por muchos años la consolidación del proceso organizativo y las posesiones formales estuvieron sujetas a la voluntad política de las alcaldías de turno; sin embargo, a la fecha todos los Cabildos se encuentran posesionados ante la Alcaldía Municipal, marco desde el cual han generado el proceso de inscripción en el registro de reconocimiento étnico del Ministerio del Interior, a la fecha solo el Cabildo El Mamón goza de dicho registro con lo que se le ha garantizado este derecho fundamental; caso contrario se refiere de los demás Cabildos Menores del Municipio, en el cual su derecho está determinado por la consecución del estudio

etnológico, para lo cual ya se han hecho las solicitudes con los censos respectivos. Llama la atención en particular, el caso del Cabildo San José de Pileta que en dos oportunidades ha enviado los documentos para el registro y a la fecha no obtenido respuesta alguna, lo cual representa una clara vulneración de su derecho a la identidad étnica, perjudicando en cadena el ejercicio de los demás derechos colectivos.

Respecto de la Autonomía y la Gobernabilidad Propia, el Cabildo La Esmeralda presenta un grave caso de usurpación de jurisdicción e irrespeto por las autoridades propias del Pueblo Zenú a causa de la imposición de la Junta de Acción Comunal por parte de los hacendados del territorio.

En relación al derecho fundamental al territorio, ninguno tiene titulación colectiva, la tenencia de la tierra se hace necesaria teniendo en cuenta el crecimiento demográfico proporcionado al desarrollo territorial. Por otra parte, en el caso del Cabildo El Mamón, siendo el único que ha iniciado la solicitud de adjudicación de territorio, ve frustrado su derecho debido a los altos costos generados por la especulación en el valor de las tierras de la zona por parte de los hacendados.

El derecho a la jurisdicción especial indígena, ha tenido poco desarrollo en la medida que hace falta mayor acompañamiento y coordinación con la jurisdicción ordinaria para su fortalecimiento.

1.3.4. Municipio de Coveñas

En este Municipio se visitaron los Cabildos Menores de El Mamey y Bellavista, que se encuentran adscritos al Resguardo de Reparo Torrente actualmente en proceso de conformación, se evidencia poca claridad en el estado del proceso titulación del territorio colectivo y la información que se les está proporcionando a los cabildantes. En las luchas por la conformación del resguardo se ha destacado la resistencia de los entes territoriales

y departamentales frente a la cesión de autonomía al resguardo indígena, razón por la cual se ha puesto trabas al proceso de constitución legal yendo en detrimento del ejercicio de la gobernabilidad del pueblo.

Los cabildos no cuentan con territorio titulado, aspecto que ha llevado a la relativización de los derechos y a la sustitución de un derecho por otro. La evidencia está en el caso del uso de la consulta previa con la empresa Oleoducto del Caribe –OLEOCAR y Ecopetrol en la que los cabildantes han desarrollado estrategias de facilitación y consentimiento de la intervención a cambio de la compra de terrenos para desarrollar su vida colectiva, así como de la inversión en proyectos para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales tales como la inversión en educación, la siembra de la caña flecha y la construcción de una casa indígena. Esta realidad en la que los pueblos deben elegir un derecho sobre otro representa una amenaza clara contra los derechos fundamentales del pueblo Zenú.

El cabildo no cuenta con desarrollo de la jurisdicción especial indígena razón por la cual se hace necesario el fortalecimiento del proceso de apropiación y empoderamiento de la comunidad en materia de ley de gobierno propio.

1.3.5. Municipio de Ovejas

Se visitaron dentro del municipio los Cabildos Menores San José de Málaga y Vilú, ambos reconocidos por el Ministerio del Interior mediante registro de reconocimiento étnico. Los cabildos no poseen un desarrollo apropiado de la jurisdicción especial indígena, este aspecto debe ser fortalecido porque su desconocimiento puede producir a largo plazo vulneraciones a sus derechos, a saber, al ejercicio del Gobierno propio, la autonomía y el territorio. La injerencia de grupos armados dentro del territorio del Cabildo Vilú ha vulnerado el derecho a la vida colectiva.

1.3.6. Municipio de Sampués

En el Municipio de Sampués se visitaron los Cabildos Achiote, Bella Vista, Bosa Navarro, Cabildo Urbano, Calle Larga, Costa de Oro, Crucero, El Retiro, Escobar Abajo, Escobar Arriba, Guaimaro, Huertas Chicas, Huertas Chicas Arriba, La Isla de San Francisco, La Lucha y Cacao, Lomas de Piedra, Mata de Caña, Pan Señor, Piedras Blancas, Sabanas de la Negra, Siloé y Villa Nueva.

En Sampués los cabildos tienen 1060 ha otorgadas, que resultan insuficientes para el desarrollo de la vida colectiva, el crecimiento demográfico de las comunidades y la incursión del conflicto han generado graves afectaciones para el desarrollo organizativo de los cabildos.

La presencia mayoritaria de terceros en sus territorios ha motivado la solicitud de saneamiento en algunos territorios, procesos que a la fecha no han obtenido respuesta por parte del INCODER. Igualmente, se está a la espera de legalización de tierras debido a problemas con la titulación de los predios.

La estructura orgánica de gobierno propio ha sido vulnerada al perder parte de sus líderes, quienes fueron asesinados por las AUC.

1.3.7. Municipio de San Antonio de Palmito

En el Municipio de San Antonio de Palmito se encuentran los cabildos de La Gran Vía, Área Urbana, Centro Azul, Chupundun, EL Barzal, EL Martillo, EL Olivo, Algondoncillo, GUami, San Miguel, La Granja, Los Castillos, Media Sombra, Pueblecito, Pueblo Nuevo, San Antonio de Palmitos, San Martín y Palmar Brillante.

En el municipio de San Antonio de Palmito hay una necesidad latente para obtener la titulación de territorios colectivos, toda vez, que las pocas hectáreas que tienen no son suficientes en relación al crecimiento demográfico, por lo que se han visto en la obligación de arrendar tierras para el cultivo de sus productos. La especulación de las tierras y la dificultad para legalizar se suman a este fenómeno que vulnera de manera directa su derecho fundamental al territorio.

Por su parte, aunque tienen acceso a algunos recursos estos resultas insuficientes para la atención de las necesidades primarias de sus comunidades.

No se evidencia oferta institucional para el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena ni para la participación indígena.

1.3.8. Municipio de San Onofre

En el Municipio de San Onofre se visitaron los Cabildos de Vista Hermosa, Sincelejito, Rincón del Mar, San Onofre, Pajonal, todos con el registro de reconocimiento étnico pero sin el ejercicio de sus derechos colectivos, empezando por la titulación de territorio colectivo.

El cabildo de Sincelejito, a pesar de contar con el número de resolución otorgada por el Ministerio del Interior en el año 2010, no cuenta en la actualidad con titulación colectiva y el terreno en que distribuyen las veredas está compuesto por invasiones, caseríos y la cabecera del corregimiento en donde se encuentra su iglesia y plaza principal.

Las tierras a las cuales se accede para la producción agrícola no son propias en su gran mayoría; afirman aún persiste la institución del terraje y estas tierras son descritas como cedidas, prestadas, a la media, y en menor medida, aunque presente, arrendadas por hectárea semestralmente a los integrantes del cabildo. En palabras del capitán, son

numerosos los casos actuales de agricultura “nómada”, por cuanto varias familias se comprometen a trabajar por varios meses en predios dándoles valro con su trabajo mientras se alimentan de la siembra del mismo, para abandonarlo poco antes de los 20 meses destinado su utilización a potreros ganaderos.

Varias hectáreas fueron parceladas por el INCODER a población general. Una familia de pajonal y 6 en Buenaventura se vieron beneficiadas por dicha parcelación. Los líderes afirman que existen varios proyectos productivos de asignación/titulación de predios a familias campesinas por parte de la autoridad agrícola para incentivar y otorgar garantías jurídicas a los pequeños productores del sector.

La región fue victimizada por grupos paramilitares que, precedidos por guerrilleros del frente 35 de las FARC que abandonaron la zona tras su asedio a principios del milenio, controlaron la región y tenían censados los miembros que entraban y salían de los corregimientos evitando tener contactos indeseados con las autoridades municipales y más aún, con la fuerza pública. A finales de los noventas, el campamento de alias “El Oso”, perpetrador de varias masacres estuvo encausado al asedio de la población civil y mandos medios como “Cadena”, tuvieron a San Onofre como centro de operaciones por su ubicación estratégica respecto al Golfo de Morrosquillo como corredor de droga. Dicho campamento quedaba ubicado en cercanías al corregimiento de Vista hermosa, pues el sector permite tener visibilidad del acceso por mar y tierra al área de influencia del tráfico de droga en el sector.

En lo que ha corrido del año, han transcurrido 8 asesinatos, entre ellos 2 integrantes del cabildo. Se desconoce la autoría y la razón de los mismos, pero las narrativas diarias suelen referir los “colinos”, a modo de residuos del fenómeno paramilitar que han pervivido en la zona y que intentan recuperar el control de rutas de narcotráfico. El Clan Úsuga (antes Urabeños) siguen operando en el casco urbano y han circulado panfletos en los últimos meses amenazando a prostitutas, drogadictos, vendedores de microtráfico y

pandillas locales. Los líderes atribuyen dichas amenazas, más que a un proceso activo de limpieza social en el sector, a un intento de recuperar y monopolizar el flujo de droga y el micro tráfico local por parte de bandas organizadas.

El cabildo de Rincón del mar a pesar de contar con el número de resolución otorgada por el Ministerio del Interior en el año 2010, no cuenta en la actualidad con titulación colectiva y el terreno en que distribuyen las veredas está compuesto por invasiones, caseríos y la cabecera del corregimiento en donde se encuentra su iglesia y plaza principal.

En la actualidad es región de interés para varias empresas entre el Sector Turismo y el transporte de crudos pesados. OLECAR S.A, transportadora de hidrocarburos de Ecopetrol ha iniciado procesos de concertación con el cabildo.

1.3.9. Municipio de Sincelejo

En el Municipio de Sincelejo se encuentran los Cabildos de Laguna Flor, Babilonia, Buenavista, Buenavistica, Cerrito La Palma, Cerro Naranjo, Chocho, Cruz del Beque, Flores de la Gallera, La Arenera, La Gallera, Alto San Antonio, La Peñata, Uribe Uribe, Las Huertas, Lomas del Tigre Buenos Aires, Policarpa, Sabanas del Potrero, San Antonio, San Jacinto, San Martín, San Miguel, San Nicolás, San Rafael de Galapa, Urbano y la Mireya.

En este municipio ninguno de los Cabildos visitados goza del registro de reconocimiento étnico ni de la titulación de territorio colectivo. A la vez no se beneficia de proyectos o programas con enfoque diferencial que puedan fortalecer el desarrollo de su vida colectiva. Tampoco existen procesos de articulación o cooperación interinstitucional para el fortalecimiento del gobierno propio, protección a las autoridades tradicionales y el ejercicio de la jurisdicción especial indígena.

1.3.10. Municipio de Tolú

En el Municipio de Tolú se encuentra el Cabildo de Puerto Viejo cuyo registro fue otorgado por parte del Ministerio del Interior se realizó el día siete de marzo de 2012.

La comunidad del cabildo de Puerto Viejo se encuentra en dos procesos de consulta previa con las empresas OLEODUCTO DEL CARIBE -OLECAR-, Y PACIFIC RUBIALES, los cuales se iniciaron de forma consecutiva en diciembre de 2012.

A manera de antecedente es necesario referenciar que desde el 2009 el cabildo se encuentra en relación con la empresa ECOPETROL. Esta empresa realiza las primeras reuniones en el año 2009 con la Junta de Acción Comunal de Puerto Viejo, cuando las autoridades del cabildo se percatan del asunto, surgió la incomodidad, debido a que este estaba constituido desde el año 1999. Para ese momento la empresa entablaba los diálogos con la Junta de Acción debido a que por allí pasa la línea 18 del oleoducto Caño Limón Coveñas. Es entonces cuando se da una reunión masiva con la comunidad, sin que haya ocurrido una convocatoria al cabildo.

En esa primera reunión en 2009 la Junta Directiva del Cabildo manifiesta su inconformidad por el desconocimiento que la empresa ECOPETROL, realiza del cabildo. La razón que los funcionarios de la empresa aducen es que el cabildo no estaba reconocido ante el Ministerio del Interior. Por tal motivo se recurre a la asesoría del Cabildo Mayor de San Andrés de Sotavento. En 2009 ocurre el reconocimiento de las autoridades del cabildo de Puerto Viejo por parte del Cabildo Mayor de San Andrés de Sotavento y de esta forma se obtiene, a corto tiempo, el aval y reconocimiento por parte de la Alcaldía del Municipio de Tolú.

En octubre de 2011 se realiza el Estudio Etnológico del Ministerio del Interior quedan reconocidas 112 familias que conforman una población de 645 habitantes. En este primer

censo faltaron por acreditar 60 familias que no pudieron asistir a la convocatoria. Al cabo de dos años, con la visita de Mirian Sierra del Ministerio del Interior, se incorporaron las familias restantes. Y la población sigue creciendo debido a la conformación de nuevos núcleos familiares.

La consecución del lote para la realización de las reuniones del cabildo se logró con el apoyo de políticos de Tolú, este se consiguió en 2002, la construcción de la casa indígena se realizará por medio de la consulta previa con OLECAR, por la construcción del oleoducto que va desde Coveñas hasta Puerto Bahía en Cartagena, como parte de uno de los acuerdos. El proceso de este acuerdo se encuentra en la etapa de legalización del documento público del lote, para ingresar los documentos y empezar la construcción con una inversión de ciento veinte millones. La consulta previa con OLECAR comienza a realizarse el cuatro de diciembre de 2012, se llevan seis días de diferencia con la de Pacific Rubiales y se afirma que no fue fácil. Además del acuerdo para la construcción de la sede indígena, se realizará una cartilla que trabaja los usos y costumbres de la comunidad, la construcción del Plan Vida Integral, y becas de estudio para algunos jóvenes que terminan la educación media.

Se tiene once bachilleres que están estudiando por medio de los créditos de ICETEX, e ingresan a la Universidad. Los acuerdos con OLECAR beneficiaran además a algunos pocos jóvenes con estudios técnicos. Para los jóvenes que terminen en los próximos años, se tiene la esperanza que por medio de la responsabilidad empresarial se pueda contar con otros recursos para que estos, continúen sus estudios superiores.

La consulta con Pacific Rubiales inicio enfocándose en un proyecto del Comedor Escolar, como este se encontraba deteriorado se pensó en adecuarlo con todos los requerimientos de infraestructura para que los niños tuvieran un mejor servicio. El autoanálisis en retrospectiva considera que aparentemente esta era una buena idea, pero cuando la junta analiza el panorama, se estimó que la adecuación del comedor era una

responsabilidad de Estado, a través de la alcaldía municipal y el Instituto de Bienestar Familiar. Por tal razón se pensó en transformar la negociación de acuerdos con Pacific Rubiales. Se consultó con el Cabildo Mayor y se contó con el respaldo del cacique para realizar una mejor negociación. La Junta del cabildo de Puerto Viejo discutió la idea y el veintinueve de septiembre de 2013, en asamblea general se socializa la idea con los cabildantes de transformar los preacuerdos, incorporando la voluntad de los cabildantes de destinar los recursos para la compra de tierra. El treinta de septiembre se le informa a la empresa Pacific Rubiales.

Haciendo uso de la autonomía como pueblo indígena se le informa a la empresa que si no se llega a un acuerdo de compra de tierra se para el proceso de Consulta Previa. Esta decisión encuentra una mayor justificación cuando se analiza que en 2013 la Gobernación de Sucre dio participación por medio del recurso de transferencias, si bien muchos de los cabildantes tienen acceso a un pedacito de tierra se quería arrendar un lote de tierra para realizar actividades de seguridad alimentaria por medio del trabajo comunitario, en este proyecto se recibirían semillas, y el dinero para pagar el arriendo, la comunidad aportaba la mano de obra, pero fue imposible porque no se conseguía la tierra. Por tal motivo estos recursos de transferencias no se recibieron.

De esta forma se consolida la compra de una finca de 10 hectáreas de tierra en inmediaciones del centro poblado.

1.3.11. Municipio de Tolú Viejo

En el Municipio de Tolú Viejo se encuentran los Cabildos de Varsovia, Queveva, Palmira, Los Altos, Las Piedras, La Venta y la Esperanza, La Unión, La Piche, Gualón y Caracol.

Entre los años 2000 y 2003 las autodefensas entraron a su territorio. En este periodo a través de amenazas obligaron a varios miembros de su comunidad a vender sus tierras.

Así también se apropiarían de unas tierras que la comunidad había invadido y explotaba colectivamente tras el abandono de sus dueños. Actualmente las tierras de Varsovia se encuentran concentradas en manos de colonos del interior del país.

Otra problemática territorial es la expedición de títulos y licencias ambientales para la explotación y procesamiento de piedra caliza en su territorio sin el requisito de la consulta previa. Así también como la persecución que están afrontando los mineros artesanales por parte de las autoridades ambientales y de policía que no les permiten trabajar por carecer de los permisos correspondientes.

La comunidad denuncia que los títulos entregados corresponden a áreas de reserva forestal y nacimientos de agua. Y que la explotación minera en su territorio ha llevado a la tala de árboles y la reducción del nivel de los afluentes de agua.

2. DERECHOS POLÍTICOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

2.1. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

2.1.1. Municipio de San Jacinto

Los miembros Zenú que hacemos presencia en el municipio de San Jacinto, ubicado en el departamento de Bolívar, presentamos grandes problemas de seguridad en la medida que no todas las personas pueden circular libremente por los territorios donde se ubican nuestros cabildos, lo anterior obedece a la presencia constante de los grupos armados en la zona. Nuestra comunidad actualmente vive atemorizada, pues las continuas amenazas mediante panfletos están latentes y las autoridades no militares y de policía no brindan la seguridad necesaria para impedir dichos ataques. Desde hace algún tiempo, varias familias han tenido que salir desplazadas de sus cabildos, pues son obligadas a abandonar sus tierras para salvaguardar sus vidas. Las vías de acceso a nuestros cabildos se encuentran

en condiciones deficientes, lo que no nos permite movilizarnos fácilmente, sumado a las limitaciones de los grupos armados. No hay asociaciones de ningún tipo por el constante temor que tiene la comunidad.

En este capítulo se aborda el análisis de la vulneración de derechos fundamentales tutelados en los marcos jurisprudenciales, siendo la primera parte de este acápite, donde se da cuenta del estado de la situación de vulneración de los derechos políticos y libertades fundamentales del pueblo indígena Zenú. Estos derechos se encuentran organizados de la siguiente manera: Seguridad, Orden social y Paz; Libre locomoción; Igualdad ante la ley; Prohibición a la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; Libertad de expresión; Libertad de pensamiento y conciencia; y finalmente la Libertad de asociación y movilización.

2.2. DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

2.2.1. Municipio de Cereté

La comunidad indígena Zenú que reside en el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba hemos visto vulnerados nuestros derechos políticos y libertades fundamentales. Nuestras comunidades ven como factores en común la delincuencia y la inseguridad que se ha generado, ya que en todo el municipio se presentan robos y cada vez más se puede ver crimen organizado, tráfico de drogas o la reincidencia de la población reinsertada. Es también un factor común el descontento con el Estado, ya que nuestras poblaciones sienten abandono por parte del mismo, la falta de presencia, la falta de agilidad en sus respuestas y la inexistente coordinación entre la fuerza pública y los cabildos han creado falta de confianza en las instituciones estatales.

A pesar de que la violencia ha bajado con relación al pasado, aún existen rezagos de estos grupos, un ejemplo de esto es La Corozuela Argentina, donde se ha dado reincidencia de la

población reinsertada por medio de las BACRIM, razón por la cual se vive una violencia latente, donde se ofrecen recompensas de tres millones de pesos por policía muerto. La población siente abandono por parte del Estado y además siente desconfianza del mismo, muchas veces no denuncian su situación debido a que la respuesta de las autoridades es lenta, insuficiente o inexistente en algunos casos; razón por la cual consideramos que debe haber una mayor coordinación entre las autoridades nacionales y las de los cabildos.

Una de las principales consecuencias es la población desplazada, en nuestro municipio existen alrededor de 100 familias en esta situación, hay que aclarar que somos receptores de desplazados, pero no hay familias que hayan tenido que salir de este territorio en esa condición. Las personas que se encuentran desplazadas tienen problemas como falta de vivienda, falta de programas integrales de estabilización no solo del individuo, sino de la familia y el cabildo, reclutamiento de jóvenes, falta de ayuda humanitaria (aunque existe, se brinda de manera tardía e inadecuada).

En la mayoría de las ocasiones no existe atención psicosocial para la población desplazada, no existe un programa de atención con enfoque diferencial y la ayuda humanitaria no se ha prestado en los tiempos y condiciones adecuadas para el resarcimiento colectivo e individual del daño ocasionado con la violencia sociopolítica del país.

Nuestras comunidades también vemos vulnerados nuestros derechos por parte de los propietarios de tierra, en muchas ocasiones los dueños de fincas ocupan o cercan el espacio público. Un hacendado cerró la vía de Severá a Caño Viejo Palotal, margen derecha del caño Bien Común; el señor Carlos Milanés Espinoza compró la finca a Lázaro María Pérez y cerró la vía que tenía la comunidad para ir del corregimiento Severá a Caño Viejo Palotal y Montería; Al margen izquierdo del caño Bien Común el señor Carlos Milanés Espinoza compró también la finca e hizo una vía que actualmente está intransitable y que también es usada por la comunidad y el alcalde no la arregla porque está en terreno privado. Como este hay varios casos similares que se presentan en los

cabildos, incluso los caminos a las escuelas han pasado por esta situación, obligando a los estudiantes a recorrer grandes distancias, violando nuestra libertad fundamental a la libre circulación. Otros factores que nos afectan, son la inseguridad en las vías, falta de alumbrado público y mal estado de las mismas.

En cuanto a nuestras asociaciones o la conformación de nuestros cabildos, el problema más recurrente se presenta por la falta de certificaciones del Ministerio del Interior y aparte existe amedrentamiento por parte de actores armados en caso de que se quiera hacer alguna movilización o exigencia de derechos por medio de las vías legítimas de protesta.

Como podemos ver no solo se vulnera la movilización social sino que al mismo tiempo se vulnera en el caso anteriormente mencionado la libertad de expresión, ya que existe miedo frente a la represaría que puedan llegar a tener los grupos armados. En la mayoría de los cabildos no existe emisora comunitaria y tampoco se tiene en cuenta la opinión de la comunidad en la toma de decisiones en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, así como se hacen obras donde no se hacen veedurías ciudadanas.

Nuestra realidad también está viciada por la discriminación hacia nosotros los indígenas incluso por parte de educadores, empresarios, servidores públicos y fuerzas armadas. Hay falta capacitación y fortalecimiento de la identidad indígena, no hay educación propia ni programas de etnoeducación, razón por la cual en muchas ocasiones más que todo en la población estudiantil existe vergüenza para identificarse como indígenas. En Tres Marias hay discriminación por parte de algunos docentes y en el corregimiento, la JAC no reconoce al cabildo y lo agrede. En La Coroza Argentina el mayor del distrito militar ofende a los indígenas y no les da la libreta.

Finalmente identificamos que hay una gran explotación laboral en nuestro territorio se presentan porque hay rastros de feudalismo pues algunos propietarios de tierras dan tres

partes a alguien que las trabaje, tomando el propietario una parte sin tener que arriesgar al invertir recursos; se dan bajos salarios por el jornal y las ganancias de la producción agropecuaria se las lleva el transportador y quien las comercializa; los productos autóctonos como el sombrero vueltiao no son una empresa de la comunidad sino de personas externas, la producción manual no compite con la mecánica, hay falta de organización y espacios para la comercialización, los servicios públicos de energía y agua son de baja calidad y alto costo.

2.2.2. Municipio de Chimá

Nosotros el pueblo indígena Zenú en el municipio de Chimá, Córdoba identificamos diferentes derechos que nos están siendo vulnerados, encontramos que existe desplazamiento, despojo de tierras, presencia de grupos armados y reclutamiento de jóvenes, aparte también existen problemas como la falta de transferencias, falta de información acerca de cómo obtener los beneficios, falta de oportunidades laborales, corrupción política y clientelismo.

Con respecto a la falta de transferencias, esto hace que los procesos de autogobierno sean inexistentes y consideramos que es preciso luchar por esos recursos para poder ejercer autonomía como lo hacen en San Andrés y Tuchín. En este sentido también pensamos que debe existir educación política y electoral, para que haya mayor facilidad de nuestros cabildos al momento de ejercer efectivamente nuestro gobierno propio y al mismo tiempo para que este no se vicié de prácticas clientelistas y prevenir la corrupción. Porque hasta el momento encontramos diferentes casos en los que los recursos y el poder de los cabildos no han sido bien encaminados, por ejemplo, hay profesionales que han terminado la universidad por medio de las becas para los indígenas, sin embargo, estas personas no han podido vincularse a empleos otorgados por el Cabildo Regional por que no pertenecen a los grupos políticos de interés de los mismos; se utiliza la posibilidad de trabajar en Manexka como un instrumento de manipulación a la comunidad, por la falta de empleos en la región, estos puestos son muy cotizados, se definen cuotas por cabildo y

los capitanes asignan a las personas cercanas a él.

En relación a los problemas de la falta de información acerca de cómo obtener los beneficios, falta de oportunidades laborales, corrupción política y clientelismo, encontramos situaciones como en el cabildo de Santero, dicen que los políticos han empezado a hacer campaña por medio de la organización indígena. Denuncian que en las pasadas elecciones se utilizaron estrategias como la compra de votos por medio de mercados, láminas de zinc, alambres para la luz, arreglos para cumpleaños y hasta teléfonos celulares. Se ofrecieron también los baños que tiene que proporcionar la alcaldía a cambio de votos.

La presencia de grupos armados, aunque ya no es tan intensa como antes sigue afectando nuestra población, en primera instancia vemos que la principal afectación es el reclutamiento de nuestros jóvenes, “las gravísimas repercusiones que ello conlleva tanto para su vida e integridad personal, como para la seguridad de sus familias y comunidades de origen. En general, la situación de los menores de edad indígenas es de especial exposición y vulnerabilidad, según se documentó en el Auto 251 de 2008 de la Corte Constitucional.”¹⁵ Esta situación viola directamente los derechos de a la integridad personal y a verse libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes (art.12, C.P.), a la dignidad personal (art. 1, C.P.) y a la seguridad personal.

La presencia de los grupos al margen de la ley aparte del reclutamiento también ha generado desplazamiento, nuestro territorio se caracteriza principalmente por la recepción de desplazados, hay nueve personas que han llegado desplazadas a nuestro territorio de otras regiones de Córdoba como Montería y Planeta Rica. Otro ejemplo es la colonización del territorio de Malemba fue producto de un proceso de desplazamiento forzado en la zona de la costa de Córdoba durante los años ochenta, específicamente del municipio de San Bernardo del Viento, por esta razón, algunas personas del cabildo tienen

¹⁵ Auto 004, Corte Constitucional. 2009

características de la población afrodescendiente. Las personas que sufrieron estas situaciones dicen que nunca han recibido las ayudas destinadas a la población desplazada.

Existen también otras formas de desplazamiento, como las comunidades que consideran que el despojo de sus tierras por parte de los terratenientes fue un acto de violencia que les merece el tratamiento de desplazados y por ende de reparación con justicia, verdad y garantías de no repetición.

Nuestra libertad de asociación, aunque no es del todo vulnerado si sufre ciertos yerros. En el cabildo regional se tiene la impresión de que ha habido una cooptación del movimiento indígena a nivel regional por grupos políticos tradicionales. Hacemos un llamado a reevaluar las alianzas con dichos grupos políticos para lograr definiciones claras sobre su alcance y participación en las dinámicas propias de la movilización indígena.

La educación propia es un aspecto de crucial importancia para nosotros ya que es una de las principales herramientas para conservar nuestra identidad y el desarrollo de la misma, por esta razón aunque vemos que hay avances con respecto a la misma encontramos que en la escuela no se ha adelantado proyectos en conjunto para definir programas de trabajo por la preservación del medio ambiente y la recuperación de la cultura. La comunidad identifica que una de sus necesidades es trabajar estos proyectos con la escuela para que los niños no pierdan las tradiciones de la pesca, la caza y la agricultura tradicional así como la preocupación por la conservación de la ciénaga y sus recursos. La tierra que se quiere constituir cooperativamente como granja agroecológica, sería un espacio para propiciar este intercambio de saberes entre la educación formal y los conocimientos propios. Denunciamos que hay discriminación en la escuela hacia los cabildos y lo que se reivindica como indígena, es necesario trabajar para transformar esa mentalidad negativa.

2.2.3. Municipio de Chinú

Los cabildos del municipio de Chinú, Córdoba tenemos como principal problema que no disponemos de las condiciones para ejercer poder y autonomía dentro de nuestro lugar de asentamiento. Esto se explica en primer lugar debido a que para que exista una autonomía territorial debe existir el espacio adecuado para ser constituido como territorio y desplegar un dominio efectivo sobre este.

Además, no debemos pasar por alto que la jurisdicción indígena propia no la estamos implementando a cabalidad, en el sentido de que los cabildos en su mayoría afrontan un proceso de re vitalización cultural en el cual la mayoría de las personas se encuentran interiorizando parte de sus tradiciones culturales y reapropiándose de ellas. Lo que resulta muy significativo para la consolidación de la autonomía en la colectividad, que al estar en un territorio plural, es decir, en el que no sólo habitan indígenas sino otros actores sociales, es difícil desplegar una vida social y cultural.

Los casos de desplazamiento forzado son pocos, pero existen, tal es el caso de Luis Enrique Polo, desplazado hace 20 años del Alto San Jorge, por el grupo Casa Castaño; Luis José Agamez Arroyo, desplazado por conflicto armado hace 18 años de la región de Ayapel, en el bajo San Jorge; Jorge Sarmiento Montiel, asesinado hace un año en Ceja Grande posiblemente por grupos armados. Ninguna de las personas anteriormente nombradas reportan vinculación a procesos integrales de reparación.

Un caso diferente se presentó en la comunidad de Flecha Sevilla donde no ha habido grupos armados radicados directamente allí, sus habitantes dicen que han pasado en varias ocasiones pero que la opresión durante la época de recuperación fue ejercida directamente por parte del Estado, más no por grupos armados ilegales.

2.2.4. Municipio de Ciénaga de oro

Los problemas que identificamos los cabildos que estamos ubicados en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, son que existe abandono por parte de las autoridades mayores del municipio que son las que manejan la información y los medios para lograr los procesos de educación, salud y gobierno propios, procesos desconocidos por las bases de los cabildos menores, razón por la cual todos estos procesos se encuentran sin iniciar o detenidos.

En este sentido pensamos que debe existir educación política y electoral, para que haya mayor facilidad de nuestros cabildos al momento de ejercer efectivamente el gobierno propio y al mismo tiempo para que este no se vicie de prácticas clientelistas y prevenir la corrupción, más importante aún, poder emprender los proyectos de etnoeducación, el fortalecimiento y divulgación de nuestros saberes y tradiciones en los medios de comunicación comunitarios, exigir nuestra participación en el Plan de Desarrollo Municipal y lograr una coordinación efectiva entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales con nuestro gobierno indígena Zenú.

Con respecto al desplazamiento a causa del conflicto armado en el cabildo menor Playa Blanca se evidencio un caso, José Ángel Nisperuza y su familia fueron desplazadas por amenazas y el conflicto armado que se vivía en Puerto Libertador hace más de 10 años. En la actualidad están a la espera de la respuesta de la ayuda humanitaria. En el cabildo de San Antonio de Táchira se evidencio dos víctimas por conflicto armado pertenecientes a su censo, pero también se evidencia que no tienen información clara sobre los hechos porque no ocurrieron dentro del territorio. Estas personas al parecer se desplazaron a otros municipios a buscar mejor oportunidades de vida y fueron asesinados por grupos armados desconocidos.

Las personas que se encuentran desplazadas tienen problemas como falta de vivienda, falta de programas integrales de estabilización no solo del individuo, sino de la familia y el cabildo, en la mayoría de las ocasiones no existe atención psicosocial, no existe un programa de atención con enfoque diferencial y la ayuda humanitaria no se ha prestado en los tiempos y condiciones adecuadas para el resarcimiento colectivo e individual del daño ocasionado con la violencia sociopolítica del país.

2.2.5. Municipio de La Apartada

En el municipio de La Apartada, en el departamento de Córdoba, nosotros la comunidad Zenú consideramos que en estos momentos la jurisdicción indígena se encuentra en proceso de construcción e interiorización, sin embargo, las condiciones en el espacio habitado no son las ideales para desplegar nuestra autonomía, en primer lugar, porque este espacio es compartido por otro grupo social perteneciente a la junta de acción comunal (JAC) y esto interfiere en ocasiones con la autonomía como población indígena, en segundo lugar, porque al igual que todas las prácticas culturales no se ha podido establecer a conformidad pues las personas en su búsqueda de garantizar sus necesidades socioeconómicas han relegado las cuestiones de autonomía a un segundo o tercer plano.

Han habido casos de desplazamiento forzado por actores armados en la zona, estos desplazamientos se han realizado hacia otros municipios, ciudades y dentro del mismo territorio, la mayoría de estos no se han denunciado y no hay un registro de víctimas. Incluso nuestras historias de vida se han visto atravesadas por este flagelo que nos ha llevado a hacer una comunidad en el casco urbano donde aún no logramos establecer una vida digna individual y colectivamente. En la mayoría de las ocasiones se carece de atención psicosocial para la población, no existe un programa de atención con enfoque diferencial y la ayuda humanitaria no se ha prestado en los tiempos y condiciones adecuadas para el resarcimiento colectivo e individual del daño ocasionado con la violencia sociopolítica del país.

Igualmente donde ha habido una afectación a los derechos como pueblo no existe un programa de estabilización integral, así en algunas ocasiones contamos con la ayuda humanitaria, no existe una política de esclarecimiento y aún no se implementa la atención y reparación integral, individual y colectiva, a la comunidad.

2.2.6. Municipio de Lorica

En Lorica municipio del departamento de Córdoba, la comunidad Zenú que acá reside, tenemos diferentes tipos de vulneración a nuestros derechos. Vemos como principal característica la fuerte pérdida de cultura autóctona de nuestra población, debido a nuestra cercanía al río Sinú fuimos la primera población en contacto con los inmigrantes en la época de la colonia.

Con respecto al gobierno propio, se ha ido implementando cada vez con mayor éxito, pero consideramos que para que exista reconocimiento de la autonomía y del gobierno propio se requiere que las instituciones locales de Lorica accedan a capacitaciones y que los funcionarios públicos asistan a estas actividades en las cuales se evidencie el carácter especial del cabildo, sus normas y la jurisdicción indígena que la rige.

Por otra parte la cercanía al río también favorece un corredor de narcotráfico, razón por la cual la comunidad de cabildantes ha sufrido el embate de la violencia en varias etapas, el principal grupo que se reconoce como causante de desplazamientos y asesinatos son las bandas criminales, BACRIM y se acredita su presencia y accionar al control territorial.

Debido a esta situación, se han presentado asesinatos y desplazamientos. En 2010 se perpetró el asesinato de Duvan Andrés Prieto Torres, joven de 21 años de edad. Su padre es cabildante; en 2011 es asesinado en su vivienda Yeris Díaz Páez; la familia de Héctor Allazo Pacheco fue víctima de desplazamiento forzado en 2011; finalmente en el transcurso del mes de diciembre de 2014 la familia de Arsenia Polo García se desplazó del territorio por considerar que no existen garantías de seguridad para sus vidas.

“El impacto del conflicto como tal se manifiesta en hostigamientos, asesinatos, reclutamiento forzado, combates en sus territorios, desaparición de líderes y autoridades tradicionales, bloqueos, órdenes de desalojo, fumigaciones, etc., todo lo cual constituye un complejo marco causal para el desplazamiento.”¹⁶ En nuestra comunidad se han dado todas y cada una de las vulneraciones anteriormente nombradas, sin que aun existan medidas, estrategias y/o mecanismos efectivos que permitan la reparación integral de los individuos y la comunidad.

2.2.7. Municipio de Momil

En el municipio cordobes de Momil, la comunidad Zenú consideramos que hemos vivido la violencia de una manera no tan intensa como en otras regiones, debido a que en nuestro territorio ha sido baja la repercusión de este flagelo.

En la comunidad los grupos armados han hecho presencia pocas veces de manera violenta, aunque las tierras que se encuentran alrededor de su poblado están en manos de terratenientes, muchos de los cuales son colonos de origen antioqueño. Para la colectividad, la mayoría de estos terratenientes son personas que tuvieron o tienen relaciones con los paramilitares.

En otros aspectos como en la libertad de pensamiento y conciencia, también se ven vulnerados nuestros derechos, la escuela a donde asisten los niños y jóvenes de la comunidad -la Institución Educativa Francisco José de Caldas- no cuenta con un programa de etnoeducación. Y la comunidad no tienen participación en las decisiones internas de esta escuela, ni en la selección de los profesores que trabajaran en ella. Aparte nuestra comunidad considera que la presencia paramilitar ha cambiado la cultura. Algunos de los aspectos de la cultura o la ideología paramilitar se introdujeron en el pensamiento de muchas personas. Un miembro del cabildo afirma que “los niños ya solo hablan de matar”.

¹⁶ Auto 004, Corte Constitucional. 2009

No hay libertad de expresión y de igualdad ante la ley, no participamos en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal y tampoco tenemos acceso a medios de comunicación comunitarios donde fortalecer y transmitir nuestra cultura.

2.2.8. Municipio de Planeta Rica

Nosotros el pueblo indígena Zenú en el municipio de Planeta Rica, Córdoba identificamos diferentes derechos que nos están siendo vulnerados, encontramos que existe desplazamiento, presencia de grupos armados y reclutamiento de jóvenes, aparte también existen problemas como la falta de transferencias, falta de información acerca de cómo obtener los beneficios y falta de oportunidades laborales.

La presencia de grupos armados, sigue afectando nuestra población, en primera instancia vemos que la principal es el reclutamiento de nuestros jóvenes, “las gravísimas repercusiones que ello conlleva tanto para su vida e integridad personal, como para la seguridad de sus familias y comunidades de origen. En general, la situación de los menores de edad indígenas es de especial exposición y vulnerabilidad, según se documentó en el Auto 251 de 2008 de la Corte Constitucional.”¹⁷ Esta situación viola directamente los derechos de a la integridad personal y a verse libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes (art.12, C.P.), a la dignidad personal (art. 1, C.P.) y a la seguridad personal.

La presencia de los grupos al margen de la ley aparte del reclutamiento también han generado desplazamiento, nuestro territorio se caracteriza principalmente por la expulsión de personas, debido a la violencia que se vivió y aún sigue existiendo.

Vale aclarar que debido a la presencia de estos actores en nuestro territorio, el derecho a la libre movilización, libre expresión y libre locomoción, están siendo totalmente

¹⁷ Auto 004, Corte Constitucional. 2009

vulnerados; somos señalados de guerrilleros si hacemos alguna exigencia sobre el respeto de nuestros derechos, no contamos con ningún mecanismo o medio para la conservación y divulgación de nuestros saberes y tradiciones ancestrales y por ultimo más allá del desplazamiento forzado, también hay limitaciones de movilidad dentro del territorio, por ejemplo no poder transitar en la noche debido a la gran inseguridad que existe ya que estamos bajo amenazas constantemente.

2.2.9. Municipio de Pueblo Nuevo

En el municipio de Planeta Rica, Córdoba, nosotros la comunidad Zenú identificamos diferentes derechos que nos están siendo vulnerados, encontramos que existe desplazamiento, presencia de grupos armados y reclutamiento de jóvenes, aparte también existen problemas como la falta de información acerca de cómo obtener los beneficios y falta de oportunidades laborales.

La colonización, el intento de exterminio, la consiguiente invisibilización por parte del Estado, anexo a los problemas de conflicto armado que se han vivido en las últimas décadas han influido en la ruptura social de nuestra comunidad. En primer lugar, la colonización generó un proceso de aculturación que tuvo repercusiones posteriormente para que nuestro pueblo no fuera reconocido, después el conflicto rompió los canales de comunicación de la cotidianidad, pues al generarse los desplazamientos se desestructura la vida colectiva y la trasmisión de conocimiento, el cual se ha visto afectado por los anteriores aspectos si tenemos en cuenta que somos comunidades orales donde a través de las expresiones artísticas como la poesía, coplas, cantos, mitos y leyendas se construye la cultura y prácticas sociales comunes. Debido a la pertenencia de la persona afectada a determinada agrupación o comunidad, el desplazamiento produce desarraigo, desarticulación y además no solo afecta al individuo sino toda su colectividad.

“El impacto del conflicto como tal se manifiesta en hostigamientos, asesinatos,

reclutamiento forzado, combates en sus territorios, desaparición de líderes y autoridades tradicionales, bloqueos, órdenes de desalojo, fumigaciones, etc., todo lo cual constituye un complejo marco causal para el desplazamiento.”¹⁸ En nuestra comunidad se han dado todas y cada una de las vulneraciones anteriormente nombradas, sin que aun existan medidas, estrategias y/o mecanismos efectivos que permitan la reparación integral de los individuos y la comunidad.

2.2.10. Municipio de Purísima

Los cabildos de la comunidad Zenú que residen en el municipio de Purísima, Córdoba consideramos que hemos vivido la violencia de una manera no tan intensa como en otras regiones, debido a que en nuestro territorio ha sido baja la repercusión de este flagelo.

En la comunidad los grupos armados han hecho presencia pocas veces y realizarían una única incursión en el año 2009. En este año presuntamente una banda emergente de las AUC amenazaría a varios de los miembros de la comunidad y asesinarían al capitán menor Bernabé de Agustín Roqueme. Esta incursión ha tenido un impacto grande en nosotros como comunidad al perder a uno de nuestros líderes y al generar una sensación de inseguridad.

Al respecto de este delito aún no existe esclarecimiento, se carece de atención psicosocial para la población, no existe un programa de atención con enfoque diferencial y la ayuda humanitaria no se ha prestado en los tiempos y condiciones adecuadas para el resarcimiento colectivo e individual del daño ocasionado con la violencia sociopolítica del país.

En otros aspectos como en la libertad de pensamiento y conciencia se han dado buenos avances debido a que en el municipio lo relacionado con etnoeducación, en la escuela

¹⁸ Auto 004- 2009

primaria los planes de aprendizaje incluyen la enseñanza de la cultura Zenú y la comunidad tiene participación en la escogencia de los profesores de su escuela primaria y en las decisiones que se toman en esta escuela, pero no tiene injerencia en las escuelas de bachillerato de la cabecera municipal de Purísima, aspecto que esperamos mejorar con el apoyo de las instituciones locales y nacionales.

2.2.11. Municipio de Sahagún

El municipio cordobés de Sahagún, es el lugar de asentamiento de nuestra comunidad Zenú, identificamos como problema principal la falta del registro que brinda el ministerio del interior y al mismo tiempo la falta del territorio colectivo, pues de esta situación es que se desprenden otras vulneraciones a nuestros derechos.

Hay falta de autonomía, las entidades públicas y privadas no reconocen a la autoridad tradicional, la JAC tampoco la reconoce y no se consulta con ella, no hay interacción entre las autoridades de la fuerza pública y la autoridad tradicional. Esto genera que no seamos tenidos en cuenta para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, no existen mecanismos de participación y decisión en las políticas, planes, programas y proyectos públicos que tienen que ver con la vida colectiva del cabildo, creando una discriminación directa hacia nuestro pueblo, que no solo se evidencia en esta instancia, sino que también repercute en las instituciones estudiantiles, donde nuestros niños no son registrados como indígenas y en las fuerzas militares, donde a pesar de lo que dicta la ley, muchas veces son negadas las libretas militares a nuestros cabildantes.

No hay libertad de expresión, no contamos con un representante en el consejo municipal y tampoco tenemos acceso a medios de comunicación comunitarios donde fortalecer y transmitir nuestra cultura.

Nuestra seguridad es cada vez más vulnerada y tememos movilizarnos pues hay casos de

asesinatos, amenazas y desapariciones a nuestros líderes y sufrimos señalamientos en caso de utilizar alguna vía legítima de protesta.

Por último nuestro derecho a la libre locomoción se ha visto afectado debido a los dueños de las fincas los cuales no nos permiten pasar hacia nuestros lugares sagrados y tampoco se puede transitar por los lugares de pesca porque los dueños no permiten el cruce, igualmente pasa para el tránsito hacia otros lugares frecuentados por la comunidad. Aparte exigimos alumbrado 24 horas en las vías que si podemos transitar, ya que se ha visto afectada la seguridad de quienes transitan en horas de la noche, generando otra restricción a nuestra libre circulación.

2.2.12. Municipio de San Andrés de Sotavento

El municipio cordobés de San Andrés de Sotavento, es donde están ubicados una gran cantidad de cabildos de la comunidad Zenú. El problema que mas preponderancia tiene entre los cabildantes es el ejercicio del gobierno propio, específicamente la corrupción que en el existe, vulnerando nuestro derecho al orden social, seguridad y paz. Este es un tema frecuente entre los comuneros. Las personas de los cabildos indígenas no saben cómo solicitar a la Alcaldía que se envíe las ayudas que realmente necesita la comunidad. Las autoridades indígenas no se encuentran competitivamente en igualdad de condiciones con las autoridades políticas sobre todo en formación y conocimiento comenta don Antonio capitán del cabildo. Los comuneros consideramos que por esta razón se forman alianzas entre capitanes y servidores públicos, donde se llegan a acuerdos que benefician los intereses individuales y no los colectivos, “por eso nunca se logra ejercer una autoridad autónoma, se sigue reproduciendo el sistema de interés de unos pocos”. Este es un problema grave que se ha intentado minimizar por parte del cabildo mayor pues en la visita de la contraloría en el año de 2009, los funcionarios fueron conducidos a sectores del resguardo que no representan realmente la situación de pobreza de la mayoría de los cabildos de San Andrés de Sotavento. Actualmente se no siente orden social en el municipio, hay personas ajenas a la comunidad, robos constantes y los cobratriarios,

generan inseguridad en los habitantes.

Con respecto al reconocimiento por parte de las autoridades estatales a nuestro cabildo, podemos decir que existe y que hay coordinación eficaz con la policía, respetando estos últimos la autoridad interna en los casos de, robo de animales entre compañeros, gritos e insultos, robo de productos de las cosechas, los chismes, agresiones físicas entre familias, las uniones de menores de edad sin el consentimiento de sus padres. Delitos que frecuentemente se presentan y son castigados en el cepo como medida pedagógica. Los delitos de mayor gravedad son dirigidos a la justicia ordinaria.

El conflicto armado a pesar de que ya casi no existe presencia de actores armados, si se evidencia una considerable cantidad de personas en situación de desplazamiento tanto de recepción como de expulsión, alrededor de 60 familias, un ejemplo, es en el cabildo El Peine se evidenciaron 4 casos de desplazados en el territorio, por problemas de seguridad y amenazas, Narciso Padilla y familia desplazados de Monte- Líbano en 2009, Omaira Ovalle desplazada de Monte-Líbano en 2009, Nerlys Ramírez desplazada de Monte-Líbano en 2009, Víctor Alfonso desplazado de Monte-Líbano en 2001. Cabe aclarar que no solo existe desplazamiento por el conflicto sino que hay familias que por falta de oportunidades fueron a otras regiones de Córdoba y Sucre y que allí sufrieron desplazamiento forzado.

En la mayoría de las ocasiones se carece de atención psicosocial para la población, no existe un programa de atención con enfoque diferencial y la ayuda humanitaria no se ha prestado en los tiempos y condiciones adecuadas para el resarcimiento colectivo e individual del daño ocasionado con la violencia sociopolítica del país. Igualmente donde ha habido una afectación a los derechos como pueblo no existe un programa de estabilización integral, así en algunas ocasiones contemos con la ayuda humanitaria, no existe una política de esclarecimiento y aún no se implementa la atención y reparación integral, individual y colectiva, a la comunidad.

El derecho a la libertad de expresión también se ve vulnerado, no tanto por la falta de acceso a los medios de comunicación comunitarios, sino debido a disputas de poder en el cabildo mayor, donde no se tienen en cuenta la opinión de los cabildos menores y se evidencia cierta restricción de parte de los líderes de los cabildos menores al expresar sus diferencias con el cabildo mayor, razón por la cual las necesidades reales de los cabildantes quedan invisibilizadas y no se toman en cuenta al momento de formular el Plan de Desarrollo Municipal.

Donde se encuentra un mayor fortalecimiento es en la libertad de pensamiento debido a que actualmente el Cabildo Mayor y la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba capacita los miembros de la comunidad educativa de los 21 establecimientos educativos de San Andrés de Sotavento y Tuchín sobre los fundamentos, fines de la educación propia y el sistema educativo indígena, mediante la realización de talleres con el acompañamiento de la Fundación para el Desarrollo Integral Social, educativo y Cultural de la Región Caribe – FUNRECARIBE.

La educación propia se aplica a través de las entidades educativas, los niños reciben una hora semanal, los temas que se revisan están relacionados con el gobierno propio, las celebraciones de semana santa, comidas típicas, derechos autónomos y representación de los caciques. El bienestar familiar apoya la educación propia con capacitaciones y charlas de médicos tradicionales. Actualmente funciona el Centro de Desarrollo Integral Celedonio Padilla, que atiende 127 niños y niñas de 0 a 5 años, y que está diseñando un programa de educación diferencial dirigido a la recuperación de su cultura.

2.2.13. Municipio de San Antero

Los miembros de la comunidad Zenú presentes en el municipio de San Antero, ubicado en el departamento de Córdoba, vemos vulnerados principalmente nuestro derecho a la seguridad, orden social y paz, pues debido a la ausencia de autoridades militares y

policivas muchos de nuestros cabildantes han sido víctimas de conflicto armado y han tenido que salir desplazados de sus cabildos. Como consecuencia de lo anterior, dichos cabildantes han sido objeto de tratos degradantes y crueles por parte de los grupos al margen de la ley que hacen presencia en algunas ocasiones en la zona. Las vías de acceso a las comunidades son deficientes, lo que no permite que nos moviliemos fácilmente por nuestro territorio. De igual forma, no existe enfoque diferencial en los planes, programas y proyectos estatales que permita el goce efectivo de los derechos políticos y libertades fundamentales.

2.2.14. Municipio de San Carlos

El municipio de San Carlos, localizado en el departamento de Córdoba los miembros Zenú somos objeto constatación de vulneraciones a los derechos políticos y libertades fundamentales, en la medida que se evidencia en diferentes puntos del municipio la falta continua de seguridad, pues muchas veces hemos sido atacados por la delincuencia común. Así mismo, muchos de nuestros cabildantes sienten miedo a la hora de expresar sus opiniones sobre la situación que atraviesa el municipio, dicho temor se centra principalmente en las represalias que los grupos armados puedan tener con ellos. Actualmente existen muy pocas asociaciones que benefician a nuestra comunidad, lo anterior obedece a la falta de capacitación e iniciativa para crearlas. Por último, algunos de nuestros cabildantes manifiestan que han sido víctimas de discriminación en los centros de salud, las alcaldías y demás entidades estatales, comprobando con ellos que no existe en el municipio un enfoque diferencial para los miembros de la comunidad indígena Zenú.

2.2.15. Municipio de Tuchín

El municipio de Tuchín ha servido como corredor de desplazamiento de distintos actores armados, al ser una zona de movilidad para la realización de diferentes actividades ilícitas.

Lo anterior ha provocado múltiples vulneraciones a los Derechos Humanos y similar número de infracciones al Derecho Internacional Humanitario en las personas de los cabildantes, sin que el Estado brinde a nuestras comunidades unas garantías reales que permitan el goce efectivo de estos derechos.

Este contexto de violencia ha afectado nuestra condición como indígenas y como sujetos de derecho, en la medida que la vulneración de derechos asociada a la presencia de actores armados limita el acceso a otros derechos; por tanto aún persisten las restricciones a los derechos de protesta y ejercicio de las libertades de asociación por medio de ataques y hostigamiento en contra de liderazgos y organizaciones que incluyen amenazas, homicidios judicializaciones y detenciones arbitrarias. Así mismo restricciones en el acceso, uso y goce de nuestros territorios, que si bien nadie denuncia o se atreve a admitir abiertamente, por el temor a los actores, que persisten, es un secreto a voces en cada una de nuestras comunidades, ya no se transita con tranquilidad por determinadas zonas en ciertos horarios y es de conocimiento de todos a que lugares no se puede acceder.

Para la población indígena en riesgo de desplazamiento forzado no existen unas medidas eficientes que permitan su protección, pues los organismos del Estado reconocen la existencia y la aplicación de unos instrumentos en pro de comunidades víctimas del flagelo del desplazamiento, pero posterior al hecho, no existen medidas de prevención conocidas y reconocidas por las comunidades.

Frente a los mecanismos de participación consagrados constitucionalmente, los cabildos indígenas del municipio reconocemos un lugar a nivel local para manifestarnos respecto a las decisiones que nos atañen, pero reclamamos y deseamos una posibilidad de participación más activa frente decisiones que nos involucran provenientes de instancias territoriales y nacionales. También reclamamos aplicación de unos verdaderos enfoques diferenciales y subdiferenciales, en tantos sujetos de especial protección en condiciones

de especial vulneración de derechos que amenaza tanto nuestra pervivencia física como cultural.

2.3. DEPARTAMENTO DE SUCRE

2.3.1. Municipio de Chalan

Nosotros la población Zenú que reside en el municipio de Chalan, en el departamento de Sucre, somos una población a la cual se le han vulnerado sus derechos políticos y libertades fundamentales de manera profunda y sistemática debido a la fuerte violencia que se ha vivido en esta región del país a través de los años.

Al igual que el resto de los municipios de los Montes de María, Chalán es un municipio expulsor de población debido al conflicto armado que se vivió en toda la región en los últimos 25 años. Actualmente nuestro municipio tiene una población desplazada de 2.242 personas. La población desplazada se encuentra distribuida así: 144 personas de la primera Infancia equivalente al 6.42%, 242 personas de la infancia equivalente 10.79%, 227 adolescente que representa 10.12%, 1008 adultos equivalente al 52.80%, 175 de la tercera edad equivalente al 19.82%. El total de la población sisbenizada es de 3.871 de los cuales 2.242 son desplazados lo que representa un 57.9%% en estado de desplazamiento, agregándole esto al factor que se encuentran dentro índices las personas de la primera infancia, infancia, adolescencia y adultos mayores reflejando el doble estado de vulnerabilidad en la que se encuentran.

A nivel de la población indígena casi el 80% de estos fueron desplazados sufriendo asesinatos, violación de su derecho a la libre movilidad, a la libre expresión, el derecho a la vida y a la familia. En la reunión de trabajo para recolectar la información del Plan de salvaguarda, de 13 participantes, 6 personas tenían familiares asesinados durante el conflicto y la mayoría estuvo en situación de desplazamiento en Sincelejo. Careciendo, por

ejemplo, en la mayoría de las ocasiones de atención psicosocial para la población víctima, no existe un programa de atención con enfoque diferencial y la ayuda humanitaria no se ha prestado en los tiempos y condiciones adecuadas para el resarcimiento colectivo e individual del daño ocasionado con la violencia sociopolítica del país.

Igualmente donde ha habido una afectación a los derechos como pueblo no existe un programa de estabilización integral, así en algunas ocasiones contemos con la ayuda humanitaria, no existe una política de esclarecimiento y aún no se implementa la atención y reparación integral, individual y colectiva, a la comunidad.

No existe emisora comunitaria y tampoco se tiene en cuenta la opinión de la comunidad en la toma de decisiones en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, así como se hacen obras donde no se hacen veedurías ciudadanas.

2.3.2. Municipio de Colosó

En el municipio de Colosó, departamento de Sucre, la afectación más fuerte que hemos sufrido el pueblo Zenú, ha sido en la comunidad de La Esmeralda la cual atravesó por una situación muy difícil como resultado de la violencia ocurrida entre los años 1998 al 2004, una temporada en la cual los diferentes grupos al margen de la ley violaron todos nuestros derechos políticos y libertades fundamentales como pueblo indígena, prohibiendo la libre movilización, estableciendo horarios de dormida, prohibiendo las reuniones y asociaciones, asesinando a toda persona que no hiciera caso de sus órdenes, con lo cual de casi 150 personas habitantes del Corregimiento, más de 100 tuvieron que salir desplazadas a la cabecera municipal de Colosó o para Sincelejo que es la cabecera departamental. El hecho de ser de Colosó fue un estigma ya que éramos señalados como guerrilleros. Dicha situación influyó en el desarrollo organizativo del cabildo, en nuestra soberanía alimentaria y calidad de vida.

Hasta hace cuatro años iniciamos un proceso de retorno voluntario a las parcelas con acompañamiento del Estado y presencia del ejército y policía nacional, se inicia una relativa tranquilidad, con posibilidad de trabajar y de asociarnos como etnia indígena, además, con el tiempo se ha dado un mayor reconocimiento por parte de las autoridades del Estado a las autoridades de nuestros cabildos, razón por la cual ha habido una mayor facilidad para la coordinación entre los mismos permitiéndonos mayor autonomía dentro de nuestro cabildo y nuestro territorio; de esta manera hemos alcanzado herramientas que nos permiten exigir una mayor participación en el Plan de Desarrollo municipal, para de esta manera fortalecer los avances que hasta ahora se han logrado en nuestra comunidad.

2.3.3. Municipio de Corozal

En el municipio de Corozal, perteneciente al departamento de Sucre, nuestra comunidad Zenú ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con el gobierno propio. El proceso de divulgación de la Ley de Gobierno propio se realizó por medio de la entrega de un manual, en el que se explica la Ley Propia, se realizó una asamblea dentro de Las Peñas con acompañamiento de los representantes del Cabildo Mayor de San Andrés de Sotavento. Donde se estipula el castigo de acuerdo a las faltas que se cometan. En esta jornada de capacitación se hizo referencia a que la comunidad a través de sus representantes ejerce una autoridad sobre sus miembros y también cuenta con el apoyo de las instituciones nacionales para ejercer un control, que busca que el acatamiento de la norma ocurra, y que las decisiones de la asamblea se respeten.

La justicia propia tiene un campo de acción que se restringe hasta determinados hechos, dado el caso que se involucren menores de edad estos hechos deben ser conocidos por la justicia ordinaria. Los conflictos de menor relevancia son abordados por las autoridades locales, sin que hasta el momento se hayan presentado contravenciones que ameriten la aplicación de la justicia propia.

A pesar de esto, no tenemos estatutos propios y estamos acogidos a los estatutos dados en Tuchín, porque para nosotros tener nuestros propios estatutos tendríamos que estar avalados por el Ministerio del Interior y no todos los cabildos lo están.

Uno de los inconvenientes que surgen con respecto a la autonomía es la dependencia que los cabildos mantenemos con el cabildo mayor de San Andrés de Sotavento, la realización de los trámites requiere el desplazamiento y la consecución de recursos para realizar las solicitudes o resolver inquietudes, los trámites exigen varios desplazamientos que desgastan a una comunidad carente de recursos y que esperamos que a través del estudio etnológico se adquiriera una mayor autonomía en la gestión pública.

Con respecto al conflicto armado a final del siglo XX y comienzo de la nueva centena ocurrieron varios desplazamientos internos de personas que llegan a El Mamón provenientes de lugares como el Campo de las Mireyas, Buena Vista, Plaza Bonita algunas de estas eran persona líderes que fueron amenazadas, familias extensas conformadas por 10 miembros o más, que eran oriundas de El Mamón y que habían emigrado a Carmen de Bolívar, regresaron en 2007 al corregimiento debido a la situación del conflicto interno y el cambio de territorio les ha generado una inestabilidad económica que ha impedido consolidar la economía del hogar. Consideramos además que dado que este territorio era un corredor de movilidad de actores armados, entre ellos el frente 35 de las FARC, la población fue víctima de violencia psicológica por los recorridos nocturnos que estos actores efectuaban. Con respecto a esta situación, en la mayoría de las ocasiones se carece de atención psicosocial para la población, no existe un programa de atención con enfoque diferencial y la ayuda humanitaria no se ha prestado en los tiempos y condiciones adecuadas para el resarcimiento colectivo e individual del daño ocasionado con la violencia sociopolítica del país.

Igualmente donde ha habido una afectación a los derechos como pueblo no existe un programa de estabilización integral, así en algunas ocasiones contemos con la ayuda

humanitaria, no existe una política de esclarecimiento y aún no se implementa la atención y reparación integral, individual y colectiva, a la comunidad.

2.3.4. Municipio de Coveñas

La comunidad Zenú residente en el municipio de Coveñas, Sucre; es una comunidad que a diferencia de otras no se ha visto gravemente afectada por el conflicto armado, razón por la cual presentamos pocos casos de desplazamiento o masacres.

Algunos miembros de la comunidad de cabildantes de Bellavista que hicieron parte de la recuperación de tierras en Torrente, han sufrido masacres; del resguardo Reparo Torrente en 1999 se desplazaron 12 familias, atemorizados por la masacre de cuatro personas de la comunidad indígena, dos de ellos eran sobrinos de una cabildante actual de Bellavista.

En ningún caso el pueblo ha logrado justicia por los muertos y desplazados, más aún cuando no solo persiste la impunidad en casi el 100% de los casos, sino que los hechos victimizantes pusieron en riesgo la estabilidad social, cultural, organizativa, política y la permanencia física y cultural de la comunidad.

La violencia producida por los actores armados también propició que fuésemos un municipio receptor de desplazados, personas que emigraron de otras regiones cercanas como Tolú después de haber sido víctimas de paramilitares.

Hay buena relación con las autoridades locales, departamentales y nacionales. Los problemas internos son solucionados entre las partes y no se han dado problemas que exijan la aplicación de penas, no hay cepo para aplicar castigos. No obstante se sabe cuál sería la ruta a seguir en caso de un posible caso de desacato, en tal caso se acudiría a las autoridades del Resguardo Torrente. Se tiene la idea general que el concejo de ancianos es una instancia que debe conformarse a nivel del Resguardo y que se espera concretar

pronto. Este concejo seria la máxima autoridad, incluso por encima de los capitanes y caciques. Existe la percepción que se conoce poco la ley indígena de gobierno propio lo cual incide negativamente en el acato cuando se va a ejercer dentro de la comunidad.

Respecto a la libertad de pensamiento vemos que es un derecho que no está siendo del todo respetado, debido a que los cabildantes consideramos que la falta de un territorio para constituirnos como resguardo nos ha impedido diseñar una educación propia que tenga incidencia en el fortalecimiento de la cultura Zenú, sólo accedemos a la educación general. Se consideró que en un momento la población educativa del Mamey estaba compuesta en su mayoría por indígenas y que como tal se tenía el derecho a la formulación de un proyecto educativo propio, pero este proyecto aún sigue en proceso de iniciación.

Otro problema que acarrea la falta de territorio es que no podemos exigir su buen uso o el aprovechamiento productivo del mismo por parte de la comunidad, hay un caso específico donde es una institución del Estado la que está afectando a nuestro pueblo, bajo un tipo de apropiación del territorio de manera inadecuada, con la presencia de la base militar en inmediaciones de la represa Villeros, la comunidad considera que esta fue construida por los antiguos pobladores y que la Marina se apropió de ella, desalojando a quienes adelantaban proyectos de piscicultura. Esta represa surte de agua al Porvenir en Córdoba, San José en Sucre, las parcelas de Algarrobos, Bella Vista, parte de Guayabal, Escobar, el Reparo, El Mamey, el Sol, entre otras comunidades.

Los cabildantes comentan que la represa fue hecha a mano con cajón, hombre excavador y burro, después llegó la base militar y se apropió, hasta que vino el concejal y líder comunal Joaquín Arroyo y la recuperó. En la actualidad volvió caer en manos de la base militar donde los compañeros indígenas tenían un proyecto de piscicultura el cual no prosperó debido a que la marina los ha ido sacando poco a poco.

2.3.5. El Roble

Los miembros de la comunidad Zenú presentes en el municipio de El Roble, ubicado en el departamento de Sucre, somos una población a la cual se le han vulnerado sus derechos políticos y libertades fundamentales de manera profunda y sistemática debido a la fuerte violencia que se ha vivido en esta región del país a través de los años.

La presencia de grupos armados, aunque ya no es tan intensa como antes sigue afectando nuestra población, según los testimonios de los cabildantes, la violencia ejercida sobre la comunidad se realizó a partir del año 1997 con la incursión de los paramilitares, los cuales secuestraron torturaron, asesinaron a miembros de la comunidad. Que causo temor a nivel de toda la comunidad. Posteriormente incursionaron grupos guerrilleros pertenecientes al frente treinta y cinco del ELN, las FARC y el Ejército Revolucionario del Pueblo ERP. Este grupo fue el que más asesinatos cometió dentro de la población y propiciaron un mayor desplazamiento. La comunidad referencia que doce personas fueron asesinadas además de varios desaparecidos, estos homicidios no se puede atribuir de forma particular a alguno de estos grupos guerrilleros con total certeza. Esto asesinatos causaron gran temor, lo cual genero desplazamiento de un número grande de familias. Esta situación viola directamente los derechos de a la integridad personal y a verse libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes (art.12, C.P.), a la dignidad personal (art. 1, C.P.) y a la seguridad personal.

Nuestro territorio se caracteriza principalmente por la confrontación armada entre frentes guerrilleros y ejercito en medio de población civil que afecto a la población estudiantil. La población denuncia que en el territorio ocurrieron hechos de falsos positivos cuando traían personas y las asesinaban dentro del territorio, y el ejército decía que eran guerrilleros, esto ocurrió varias veces.

También se denuncia que se presentaron varios casos en los cuales hombres armados

que se identificaban como ejército y en otros casos hombres vestidos de azul Turquí que se identificaban como miembros de la fiscalía, invadían las viviendas de los miembros de la comunidad, tanto en el día como en horas de la noche. Conjuntamente la población manifiesta que miembros de Ejército Nacional y la Policía cometieron excesos, abusos de poder como patear personas y encarcelarlos sin causa justa.

En el tema de libertad de pensamiento, la formación que se imparte en los colegios no incorporan un componente ni estructura su Proyecto Educativo Institucional alrededor de las particularidades de la población Zenú. La población considera que a partir de la promulgación de la ley de autonomía propia los colegios deben cumplir con la formulación de programas para que los estudiantes de la comunidad Zenú aprendan de sus orígenes y tradiciones.

“El impacto del conflicto como tal se manifiesta en hostigamientos, asesinatos, reclutamiento forzado, combates en sus territorios, desaparición de líderes y autoridades tradicionales, bloqueos, órdenes de desalojo, fumigaciones, etc., todo lo cual constituye un complejo marco causal para el desplazamiento.”¹⁹ En nuestra comunidad se han dado todas y cada una de las vulneraciones anteriormente nombradas, sin que aun existan medidas, estrategias y/o mecanismos efectivos que permitan la reparación integral de los individuos y la comunidad.

2.3.6. Municipio de Ovejas

La comunidad Zenú en el municipio de Ovejas, en el departamento de Sucre, tenemos diferentes casos en los que nuestros derechos han sido y siguen siendo vulnerados debido al conflicto armado y la violencia que este ha generado en nuestro territorio.

Han habido caso de desplazamiento forzado por actores armados en la zona, estos

¹⁹ Auto 004, Corte Constitucional. 2009

desplazamientos se han realizado hacia otros municipios, ciudades y dentro del mismo territorio, la mayoría de estos no se han denunciado y no hay un registro de víctimas.

La comunidad sufrió los rigores de la violencia en muchos aspectos como la afectación en la parte productiva, disminuyeron las actividades en las fincas; en la parte psicológica mucha gente quedó con traumas; culturalmente se dio mucho desarraigo ya que mucha gente salió y no volvió por miedo; pérdida de movilidad, bien sea por retenes en las vías o toques de queda; además se debe tener en cuenta que estuvimos cerca de las masacres de Chengue, Pijivai, por lo que muchos de los habitantes de la comunidad debieron desplazarse a Sincelejo o a la cabecera municipal de Ovejas, aproximadamente 20 personas fueron asesinadas dentro del territorio de la parcelación de San José de Almagra.

En ningún caso el pueblo ha logrado justicia por los muertos y desplazados, más aún cuando no solo persiste la impunidad en casi el 100% de los casos, sino que los hechos victimizantes pusieron en riesgo la estabilidad social, cultural, organizativa, política y la permanencia física y cultural de la comunidad.

2.3.7. Municipio de Sampués

En el municipio de Sampués, Sucre. La comunidad Zenú que mora en el, tiene en la mayoría de sus cabildos una buena relación y coordinación con las autoridades locales, lo cual ha favorecido a nuestra población debido a que nuestras autoridades tienen participación en instancias como la formulación del Plan de Desarrollo Municipal.

Trabajamos en coordinación con las instituciones públicas del municipio sin ningún inconveniente, la policía nacional puede entrar al área sin restricción; la guardia indígena junto con la policía nacional adelanta retenes en la zona para mantener el control y vigilancia. A pesar de que no tenemos defensoría del pueblo, la Personería actúa

conforme nuestra condición de indígenas, también la comisaria de familia, la alcaldía y la policía.

La libertad de pensamiento se ha ido fomentando desde el colegio, en este momento nos encontramos trabajando junto al Resguardo en el diseño del curriculum de educación propia para ser implementado al interior de la comunidad con el objetivo de recuperar saberes, no permitir la extinción de usos y costumbres, como por ejemplo la usanza del sombrero, las abarcas y las camisas grandes para los hombres, también desarrollamos temas como saberes ancestrales, salir al campo a hacer reconocimiento de plantas y árboles, o llamar a los líderes de la siembra para que se presenten en el colegio.

Respecto al tema de la violencia, nuestro municipio no ha sido gravemente afectado, a pesar de que somos principalmente receptores de población desplazada provenientes de Bolívar, Córdoba y Antioquia. Existe el caso de cuatro familias que en el año 2000 tuvieron que abandonar sus hogares, familias de las que hoy en día no se sabe su paradero. Y con la población que llega al territorio no se ha tenido la atención integral que estas personas requieren.

Finalmente se documenta también desplazamiento interno, esta vez generado por el problema de la ampliación de la doble calzada de la troncal del caribe. No hubo una consulta previa apropiada para este proyecto, todo lo contrario hubo amenazas de ser expropiados de las viviendas, al no querer aceptar las condiciones de la empresa, por lo que se accedió a firmar los acuerdos con los contratistas sin una asesoría o algún tipo de soporte de las instituciones.

Dentro de las consecuencias que este tipo de proyectos pueda acarrear en la vida de los individuos y de la comunidad, se piensa hacia donde será trasladada la comunidad, el peligro de la vía en el sector, el traslado del colegio, la lejanía de los lugares comunes, la lejanía de las vías principales y el cambio en las vidas de las familias, en particular los

adultos mayores, quienes temen que las nuevas condiciones de vivienda empeoren aún más sus vidas.

2.3.8. Municipio de San Antonio De Palmito

En el municipio de San Antonio de Palmito, ubicado en el departamento de Sucre, los Zenú hemos sido víctimas constantes de los grupos al margen de la ley que desde la década de los años ochenta hacen presencia continua en el municipio. Así las cosas, nuestras comunidades han sido objeto de tratos crueles y degradantes, amenazas, torturas, reclutamientos, desplazamientos y asesinatos, de los cuales las familias que han sufrido de estos vejámenes han sido innumerables y no han contado con la protección de las autoridades estatales. En este orden de ideas, en el área urbana del municipio, durante los años 2000 y 2006 se evidenció una ausencia total de seguridad para la población, debido a que la policía que custodiaba la zona, abandonó el municipio por las continuas amenazas de muerte de las que eran objeto. Actualmente, nuestra comunidad es objeto de los toques de queda que imparten los grupos armados que tienen asentamiento en el municipio. De igual forma, al Cabildo Algodoncillo le fue vulnerado su derecho a la igualdad, toda vez que, nuestros miembros fueron centro de discriminaciones por pertenecer a un grupo indígena.

Por otra parte, se evidencia que la opinión de nuestros cabildantes no es tenida en cuenta, pues se han implementado diferentes servicios como el gas y las antenas para celulares y no nos ha sido consultada dicha decisión. Las vías de acceso a cada uno de nuestros cabildos están en pésimas condiciones lo que no nos ha permitido movilizarnos adecuadamente por nuestros territorios.

2.3.9. San Marcos

Los miembros del pueblo Zenú que hacemos presencia en el municipio de San Marcos en

el departamento de Sucre vemos vulnerados nuestro derecho al orden social, la seguridad y la paz. En primera instancia requerimos apoyo para la construcción de los estatutos que nos permitan ejercer un gobierno propio. Surgen muchas discordias y por no tener normas y mecanismos para solucionarlos no se podemos ejercer justicia propia. Se considera urgente un apoyo para el diseño de los estatutos que regulen a la comunidad. Además se requiere actualizar el manual de funciones de la Junta Directiva del Cabildo. Aparte existe una situación que perjudica la gestión del cabildo con las instituciones públicas locales y departamentales que consiste en que paralelo con el cabildo funciona la Junta de Acción Comunal, los cabildantes consideran que se debe superar esta duplicidad y exigir que la alcaldía suprima las Juntas veredales. También tenemos problemas con la seguridad y la paz, en otras veredas como Montegrande han ocurrido asesinatos y se considera que las veredas que se encuentran más hacia el occidente como Las Flores y Cuenca es un corredor de tránsito de bandas criminales, donde hace presencia el grupo que se denomina Los Águila. Entre los años de 2013-2014 han ocurrido siete homicidios. No se aportaron nombres, se consideran que son hechos aislados. Pero se considera que si existen muertes violentas se sabe que hay grupos violentos, sin que se pueda atribuir a alguno en concreto.

Nuestro derecho a la libre locomoción también es violado, un ejemplo de esto son las veredas que se encuentran más alejadas, al occidente del municipio, en cercanía de la Ciénaga de las Flores se presenta un caso de restricción de la movilidad y aprovechamiento de los recursos, realizado por parte de grupos armados que la comunidad identifica como paramilitares que impiden que allí se realice la pesca. Con respecto a este derecho también hay que anotar que tenemos situaciones de desplazamiento debido al conflicto armado, hace aproximadamente nueve años la familia Silgado Vega proveniente de Tierra Alta, Córdoba llegó al Oasis, hacen parte del cabildo pero no participan. No se sabe exactamente cuántas personas llegaron, fue una familia completa. Su caso es conocido por los cabildantes y uno de ellos afirma: “Porque la violencia los atacó por allá y dejaron hasta una finca”.

Al respecto de estas situaciones aún no existe esclarecimiento, se carece de atención psicosocial para la población, no existe un programa de atención con enfoque diferencial y la ayuda humanitaria no se ha prestado en los tiempos y condiciones adecuadas para el resarcimiento colectivo e individual del daño ocasionado con la violencia sociopolítica del país.

2.3.10. Municipio de San Onofre

El municipio de San Onofre, situado en el departamento de Sucre, ha sido uno de los municipios que más ha sido blanco de los grupos armados al margen de la ley desde la década de los noventas. Así pues, nuestra comunidad Zenú se ha visto afectada, en la medida que desde esa época, se han presentado múltiples asesinatos a nuestros líderes, desplazamientos de familias enteras y toques de queda violando con ello la libertad de locomoción y movilización. De igual manera, la seguridad que brindan las autoridades estatales es completamente nula, pues es más fuerte la presencia de los grupos ilegales en comparación con las de dichas instituciones. Así mismo, las amenazas a diferentes miembros de nuestra comunidad persisten en la actualidad, lo que se refleja en el temor constante de nuestros cabildantes, razón por la cual, en ningún momento se refleja tranquilidad y paz. Las vías de acceso al municipio están en pésimas condiciones, lo que dificulta la movilidad de la comunidad.

2.3.11. Municipio de San Pelayo

Nuestra comunidad presente en el municipio de San Pelayo, Córdoba presenta problemas principalmente de igualdad, pues por pertenecer a un grupo indígenas son discriminados en entidades como la alcaldía cuando se acercan en busca del reconocimiento de sus derechos. Así mismo, los niños en los colegios no exponen su condición de indígenas porque en ocasiones anteriores han sido objeto de burlas y discriminación constante. Por su parte, el Batallón que hace presencia en el municipio en repetidas ocasiones también

ha discriminado a nuestros cabildantes, desconociendo nuestros derechos y reclutando a nuestros jóvenes para que presten el servicio militar. En lo referente a libertad de expresión no se evidencia a la participación por parte de nuestra comunidad, pues no son tenidos en cuenta para la realización de actividades que los incumben, como tampoco nos es permitido realizar cualquier tipo de movilizaciones ni unirnos con la población campesina para exigir nuestros derechos. La seguridad para los cabildos de la zona es completamente inexistente.

2.3.12. Municipio de Sincelejo

El municipio de Sincelejo como uno de los principales receptores de población desplazada de la región posee unas amplias problemáticas en materia de vulneraciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que derivan en el menoscabo de derechos y libertades fundamentales que nos asisten como pueblo Zenú. En tanto libertades individuales y colectivas hemos visto como a raíz de los desplazamientos masivos de comuneros de otros municipios a nuestros cabildos se han restringido en mayor medida estos derechos, en especial la libertad de locomoción por los territorios abandonados, e incluso por lo territorios de asentamientos, donde se presentan algunas restricciones de movilidad impuestas por grupos armados, especialmente Bacrim.

La libertad de locomoción dentro del territorio también se ha visto afectada por la falta de infraestructura adecuada y vías de acceso seguras, que perturban directamente derechos como la salud, la educación entre muchos otros que dependen, en el caso de varios cabildos del municipio, de desplazamientos para poder acceder a ellos. Frente a la libertad de asociación y movilización, se han presentado ciertas restricciones traducidas en amenazas y señalamientos, especialmente a organizaciones de víctimas que han intentado conformarse y a reclamantes de tierras, a estos últimos los grupos armados los han perseguido de manera particular presentándose varios homicidios en el municipio.

Frente a fenómenos como la discriminación por parte tanto de las instituciones, como de los particulares, es una vulneración muy común en el municipio, desde el intento de algunas comunidades por aislar ciertos cabildos conformados en su totalidad por población víctima del desplazamiento forzado oriunda de los Montes de María y el Urabá Antioqueño especialmente, más que con el ánimo de discriminar, un poco por el temor de convivir con sujetos con “problemas” que consideran causales de su desplazamiento. La discriminación de las instituciones del Estado se presenta principalmente en lo concerniente a la salud y la educación; respecto a la salud los cabildantes que no están afiliados a Manexa han referido muchos episodios de discriminación por parte de las empresas públicas prestadoras de salud. En el tema de la educación el principal foco de discriminación es el acceso a la educación superior, pues los cupos para las comunidades indígenas son muy limitados.

La atención a la población desplazada asentada en los diferentes cabildos del municipio constituye un trato estándar y deficiente en los términos que la implementa la ley. No se conocen de instrumentos de prevención de fenómenos como el desplazamiento y la prevención de violaciones a Derechos Humanos en el marco del conflicto. Los episodios de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes que se han presentado en el municipio tanto con cabildantes propios como desplazados en ninguno de los casos que afecta al pueblo Zenú, se han esclarecido, por tanto, se hace pertinente mejorar la políticas de investigación, persecución, condena y reparación integral por desapariciones, torturas, homicidios y ejecuciones extrajudiciales para combatir su impunidad.

Las reparaciones por estos hechos, así como por otros de los que han sido víctimas los cabildantes del municipio se han realizado de manera muy lenta, las investigaciones no arrojan resultados y las pocas personas que han sido indemnizadas en el marco de estos procesos, consideran el trato y el resultado como una burla de la justicia y nunca como una indemnización que implique reparación.

2.3.13. Municipio de Tolú

Los cabildantes Zenú que habitamos en el municipio de Tolú, departamento de Sucre, en la época de 2004 al 2006 fuimos víctimas de desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia que azotaba la zona. Es así como se presentaron restricciones en la movilidad, pues los grupos armados al margen de la ley prohibían a nuestra comunidad que salieran de sus casas a partir de las 7 pm, razón por la cual el temor pervivió durante este periodo de tiempo. Las torturas, tratos crueles e inhumanos de los que fuimos víctimas trajeron consigo despojos de tierras que perjudicaron notablemente a cada uno de los miembros Zenúes presentes en el municipio. Las vías de acceso a las comunidades son deficientes, puesto que actualmente se presentan muchos problemas con la alcaldía lo que se ve reflejado en la poca participación en la articulación de los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional.

2.3.14. Municipio de Tolú viejo

Los miembros del pueblo Zenú que hacemos presencia en el municipio de Tolú Viejo, situado en el departamento de Sucre, ha presentado graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, principalmente en los años 2000 a 2006, pues los grupos ilegales que hacían presencia en la zona, sometían a nuestra comunidad a tratos crueles e inhumanos, obligándolos a vender sus tierras a precios irrisorios e irse para salvaguardar sus vidas y la de sus familias. Así pues, eran objeto de amenazas e intimidaciones, restringiéndoles la movilidad en ciertas horas del día, lo que conllevó a que nuestros cabildantes vivieran temerosos de las acciones que dichos grupos podrían tomar en su contra. De igual forma, se presentaron asesinatos colectivos y desplazamientos que desintegraron familias completas, dando lugar a que otros cabildos del municipio se convirtieran en receptores de dichas comunidades.

Por otro parte, se evidencia que hay una vulneración a la libertad de expresión,

específicamente en el Cabildo Gualón, pues a la hora de la instalación de la planta de procesamiento de piedra, a nuestra comunidad no se le dio la facultad de expresar su opinión frente a los beneficios o perjuicios que ésta podría traer para nuestro pueblo. Así pues, se evidencia una ausencia total de Estado frente a la atención de los derechos de las comunidades indígenas, especialmente en nuestro pueblo Zenú.

3. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES

De acuerdo con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los Estados que lo han ratificado poseen determinadas obligaciones de carácter genérico y específico. De manera genérica, los Estados están obligados a respetar, proteger y realizar los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), así, deben abstenerse de generar acciones que impidan la realización de los derechos, incluidas políticas regresivas de los estándares alcanzados por los derechos sociales en determinados momentos; del mismo modo, deben generar medidas para evitar que terceros impidan el acceso o gozo de los DESC, y están obligados a hacer efectivos los derechos garantizando su satisfacción por medio de las medidas necesarias.(CECOIN, 2007).

Respecto a las obligaciones específicas, se encuentran la adopción de medidas en los tres poderes públicos del Estado con el propósito de avanzar de forma concreta y precisa en la satisfacción de los DESC. De igual forma, se obliga a lograr a través todos los medios apropiados la efectividad de los derechos por medio de la implementación de planes nacionales estructurados de manera correcta para la atención y cumplimiento de cada DESC sin limitarse únicamente a la expedición de normas o leyes, y donde sea garantizado un nivel básico de ejercicio de los derechos sin ningún tipo de discriminación. Además se debe tener una progresividad, por lo que se deben presentar medidas idóneas y concretas para la realización de cada uno de los derechos del PIDESC, haciendo uso del máximo de los recursos que disponga el Estado, sean financieros o de otra índole (CECOIN, 2007).

A pesar de que el marco jurídico delimita los DESC, en la práctica, éstos no se manifiestan como entidades estáticas y universales *a priori*, por el contrario, condensan el proceso de construcción contextualizada, y la larga tradición de luchas socio-políticas, económicas, culturales, sociales y ambientales de los pueblos indígenas en el país. Si bien la inclusión en la agenda pública de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ha generado transformaciones en la concepción y análisis de la situación de los derechos de nuestros pueblos, son manifiestos algunos puntos nodales de la situación, que evidencian los problemas y retos que se tienen en el avance y goce efectivo de los mismos, a saber:

- 1) La incipiente comprensión que se ha hecho desde el Estado de los DESC, no entendidos como la expresión de valores culturales, leyes, propias y acuerdos (Berche, García & Mantilla, 2006, p.19) de los pueblos que, en suma, denotan formas de vida, pensamiento y creencias localizadas y distintas entre sí.
- 2) Las dificultades en el proceso de apropiación permanente por parte nuestros pueblos de los Derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, producto de los problemas para comprender el marco normativo que los regula, y el desconocimiento de las instancias de exigencia de los mismos.
- 3) La existencia en nuestro país de una baja efectividad en los mecanismos de garantía que, aunado a los problemas para apropiar nuestros derechos, dificulta el goce efectivo de los mismos.
- 4) La pasividad, omisión y acción descontextualizada por parte del Estado, frente a las problemáticas que han afectado, y afectan hoy a nuestro pueblo han socavado el disfrute de nuestros derechos, confundido nuestras necesidades como pueblo e incurrido en acciones dañinas que han ido en detrimento de la cultura, la tradición, la salud, el bienestar, la educación, la familia, el disfrute del ambiente sano y la soberanía alimentaria del pueblo indígena Zenú.
- 5)

Como consecuencia, dentro de las mayores afectaciones a nuestro pueblo se cuentan, la falta de títulos para la propiedad colectiva, el conflicto armado, el narcotráfico, el

desempleo, la inestabilidad climática, el amparo jurídico a las empresas extractivistas, la ausencia y corrupción institucional, la falta de infraestructura entre otras, afectaciones que han impedido el goce efectivo de los derechos de seguridad y soberanía alimentaria, a la no dominación y explotación, al desarrollo, a la libre disposición de riquezas, al medio ambiente sano, a la salud, a la educación, a los bienes culturales, a la recreación y la familia.

Presentamos a continuación un análisis del estado de los DESCA en cada uno de los municipios donde nuestro pueblo habita, haciendo énfasis en aquellos que se encuentran en un estado más crítico.

3.1 Departamento de Bolívar

3.1.1 Municipio de San Jacinto

La principal problemática que ha impedido el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientes de las comunidades Zenú que se localizan en el municipio de San Jacinto, es la falta de territorio. A causa de esto, las familias indígenas no cuentan con los derechos a la soberanía y seguridad alimentaria ya que son pocas las que poseen un terreno para la producción agrícola que brinde un autoconsumo suficiente y dependen en gran medida la elaboración de artesanías para el acceso económico a los alimentos. La remuneración de esta última actividad no es suficiente para abastecer el alimento de las familias por lo que otros miembros deben desempeñarse en empleos no formales para obtener recursos adicionales, los cuales también resultan insuficientes para garantizar una adecuada alimentación. En este sentido, son varias las familias que tan solo pueden acceder a una comida diaria.

A pesar de que las mujeres Zenú del municipio fabrican artesanías como hamacas, mochilas y guardicionos, su venta se realiza a intermediarios, razón por la cual el valor que

reciben por estos productos es inferior al que correspondería según el trabajo realizado y al comercializado por los intermediarios, quienes puede llegar a triplicar el valor pagado.

En lo que respecta al ambiente, situaciones como la desecación de los humedales naturales, la erosión de la cuenca del río Sinú generada por la Hidroeléctrica de Urra, la expansión de la frontera agrícola y la construcción de diques, terraplenes y compuertas, la contaminación con agroquímicos y el vertimiento de aguas residuales a los cuerpos de agua han impedido a nuestras comunidades el goce a un ambiente sano y limpio

Adicionalmente y a pesar de que el municipio de San Pelayo se encuentra dentro de una zona de inundación de categoría alta, el municipio no cuenta con un mecanismo de reporte y respuesta ante estos eventos, lo que ha generado la inundación de viviendas indígenas y la pérdida de varios cultivos.

Con respecto a la salud, los Zenú en San Jacinto sólo tienen acceso al Hospital Municipal de San Jacinto, que se encuentra aproximadamente a 11 kilómetros de su cabildo. La infraestructura física y el equipamiento del hospital se encuentran en malas condiciones, no hay materiales con los cuales atender a los enfermos, y se denuncia que ellos mismos tienen que llevar materiales, tales como agujas para inyecciones, o aguja e hilo para sutura, entre otros.

Por otra parte, los centros educativos que ofrecen el servicio en los cabildos, solo cuentan con niveles de atención en preescolar y educación básica primaria. Para acceder a los niveles de educación básica secundaria deben desplazarse a otros corregimientos a través de vías en mal estado, situación que limita el pleno goce del derecho a la educación.

3.2. Departamento de Córdoba

3.2.1. Municipio de Cereté

En el Municipio de Cereté la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de nuestro pueblo se caracteriza por varios aspectos que expondremos a continuación.

En primer lugar, a pesar de que la agricultura representa para nuestro pueblo la principal fuente económica y de acceso a los alimentos, la falta de tierras ha generado que el acceso a los alimentos se dé principalmente de manera económica. En este sentido, y dada la falta de oportunidades laborales, la situación de explotación frente a la indebida remuneración de las labores realizadas y la inestabilidad en el acceso al empleo, se ha imposibilitado el goce de los derechos a la seguridad y soberanía alimentaria para nuestras comunidades.

Por otra parte, frente a la limitada actividad agrícola que se realiza, la dificultad de acceso a créditos, la inestabilidad climática y la falta de programas de prevención y atención, la falta de presencia y apoyo institucional, entre otros factores, imposibilitan el acceso permanente y constante en el tiempo de los alimentos de manera física y desincentivan la práctica de esta actividad en nuestras comunidades, poniendo en riesgo la perduración de los usos y costumbres asociados a la agricultura.

En segundo lugar, se observa que, dadas las riquezas hídricas del municipio, la pesca también ha sido una de las fuentes principales de alimento para las familias Zenú, pero los impactos en los sistemas hídricos asociados con la construcción de la Hidroeléctrica de Urrá, el vertimiento de las aguas residuales en los principales ríos y la contaminación de éstos con productos derivados de la agroindustria han generado la disminución de la

abundancia de las poblaciones de peces y su contaminación, lo que ha resultado en la disminución considerable de la ingesta de éstos.

Con respecto al agua y a pesar de que en algunos cabildos se encuentran sistemas de acueductos locales, su cobertura no es total para los cabildos ni para familias Zenú del municipio. En este sentido, varias de las familias deben tomar agua de las represas artificiales, los ríos o recolectar el agua lluvia, pero la falta de tratamiento para su potabilización las pone en riesgo frente a posibles infecciones o intoxicaciones.

En tercer lugar, el goce del derecho a un ambiente sano se ha visto limitado en nuestras comunidades por la constante amenaza a los ecosistemas circundantes, principalmente a la Ciénaga de Corralito. De esta manera actividades como la deforestación, la quema de cultivos para la limpieza de los terrenos, la expansión de la frontera agrícola, la contaminación con agroquímicos, el vertimiento de las aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento a los cuerpos de agua y la canalización de los mismos han causado la disminución y posible desaparición de especies que eran utilizadas de forma tradicional.

En materia de educativa, nuestro pueblo no cuenta con acceso a programas que involucren formas de aprendizaje propias, no hay un ajuste y entendimiento de los programas de educación actuales que llevan a nuestros hijos a desertar rápidamente de la escuela. Así mismo, las condiciones infraestructurales no son óptimas para el aprendizaje, y, en los cabildos en las que hay escuelas, generalmente se ofrecen los niveles educativos preescolar y primario, teniendo nuestros jóvenes que desplazarse largas distancias en vías en mal estado.

3.2.2. Municipio de Chimá

Los indígenas del pueblo Zenú habitantes del municipio de Chima tenemos acceso a nuestros alimentos de manera física a través de la agricultura, la pesca y la caza, y de

manera económica, a través de la venta de artesanías y la realización de diferentes labores no tradicionales. A pesar de esto, la falta de tierras, de sistemas de prevención y atención frente a inestabilidades climáticas, de sistemas de comercialización de artesanías, de trabajo y de condiciones dignas de éste, no han permitido que se goce de los derechos de seguridad y soberanía alimentaria. En este sentido, los recursos son insuficientes para la alimentación adecuada de las familias y no se garantiza un acceso periódico de los mismos a lo largo del tiempo, por lo que muchos indígenas se han desplazado a otros municipios en busca de mejores condiciones económicas.

Por otra parte, la pérdida de semillas nativas ha generado cambios en la dieta y en los usos y costumbres asociados a los sistemas de cultivo tradicional, situación que ha sido intensificada por las Cooperativas que brindan insumos para el campo, las cuales carecen de un enfoque diferencial para nuestras comunidades e imponen el uso de semillas certificadas a nuestros agricultores.

Respecto a la producción de artesanías, a pesar de ser parte de nuestros usos y costumbres, no existe el fomento suficiente que garantice la comercialización de los productos elaborados ni se ha estimulado el desarrollo de esta práctica a través del apoyo a nuestros artesanos por parte de las instituciones estatales, lo que ha limitado el desarrollo de este tipo de producción con altas potencialidades de comercio.

Con relación al acceso al agua, este se restringe a las represas artificiales que se encuentran en los territorios de las comunidades, pero la frecuente incidencia de animales, así como la posible contaminación con agroquímicos no garantizan la condiciones de potabilidad de del recurso y ponen en riesgo de contaminación de enfermedades parasitarias e intoxicación a nuestras comunidades por su consumo.

Por otro lado, vemos como, a pesar de la importancia de los sistemas hídricos para nuestras comunidades, sobre todo las que se localizan en las proximidades de ciénagas de

la magnitud de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, la contaminación del agua por el vertimiento de las aguas residuales y otro tipo de desechos principalmente asociados con la agroindustria representan uno de los principales factores que impiden el goce de un ambiente limpio y sano. A esto se suman los cambios en la dinámica de los sistemas causados por el represamiento de la Hidroeléctrica de Urrá, la construcción de terraplenes, la desecación de zonas inundables para la expansión de la frontera agrícola y la explotación de arena y material de arrastre en los ríos.

En cuanto a la salud, nuestros pobladores afirman que el sistema brindado por Manexka les otorga mayor cobertura y mejor atención, sin embargo, aún hay falencias en la atención de los centros de salud rurales que, además de ser escasos, se encuentran en estado de deterioro, la infraestructura médica y el equipamiento de los mismos no permite que la atención a los pacientes sea digna y obliga a realizar desplazamientos a las cabeceras municipales de Ciénaga de Oro, o Chimá para ser atendidos. Así mismo, las condiciones viales para el transporte de enfermos son malas y no se cuenta con ambulancias que realicen la labor de traslado. Por otro lado, se presentan demoras para la asignación de citas y los medicamentos que se formulan son los mismos para diferentes dolencias.

Lo correspondiente al derecho a la educación se encuentra trazado por la situación generalizada de la no inclusión de un sistema de educación propio dentro de las instituciones y centros educativos, lo que se enseña no corresponde a los aprendizajes cotidianos del nuestro pueblo, y los docentes, que muchas veces vienen de otros municipios, no tienen los conocimientos apropiados para transmitir nuestro sistema de creencias y cultura propios. Las condiciones de las escuelas no son buenas, están deterioradas y no cuentan con materiales suficientes para la educación de los niños. Los escasos recursos familiares, impiden el goce pleno de su derecho, ya que, por un lado tienen dificultades para abastecer a los niños de uniformes, transporte y útiles escolares, y

por el otro, cuando logran sacar el bachillerato, pocas tienen la capacidad económica de brindarles a sus hijos el mantenimiento en los estudios superiores.

3.2.3. Municipio de Chinú

De acuerdo al diagnóstico realizado en el municipio de Chinú, entre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales cabe analizar los derechos relacionados con la seguridad y soberanía alimentaria, la dominación y explotación, el ambiente, el desarrollo, la salud, la educación y la familia dadas las situaciones generalizadas.

La falta de territorio constituye una de las principales amenazas a la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades Zenú del municipio. A causa de esto, se ha tenido que arrendar terrenos a terceros para continuar con las prácticas agrícolas, de manera que se ha abandonado el uso de semillas nativas para buscar en las variedades comerciales una producción más rápida con el propósito de disminuir los costos. Adicionalmente, dado el control químico de arvenses, plagas y enfermedades que los dueños han dado a los terrenos, los suelos no resultan apropiados para la siembra de semillas nativas, lo que pone en riesgo la producción del cultivo y de igual manera infunde en nuestro pueblo la implementación de tecnologías no indígenas para el manejo de los cultivos. Dado lo anterior, se ha puesto en riesgo nuestras tradiciones de siembra y las prácticas culturales asociadas a ellas dificultando el traspaso generacional de los conocimientos ancestrales.

Adicionalmente, la presencia de rutas de narcotráfico en los años 80's, la cuales utilizaban los extensos cultivos de ñame de la zona para esconder la droga, fueron causantes de la fumigación aérea por parte del Estado, situación que afectó el suelo hasta el presente y que ha imposibilitado la siembra de uno de los productos principales de la dieta Zenú.

Por otra parte, la inestabilidad climática que ha tenido lugar las últimas décadas también constituye una de las principales amenazas para la soberanía y seguridad alimentaria de

nuestras comunidades en el municipio. La prolongación de las épocas secas y las fuertes inundaciones presentadas durante las lluvias han causado la pérdida de muchas cosechas, generando desabastecimiento de alimentos en nuestras comunidades y dada la falta de programas de atención y prevención frente a estos fenómenos, épocas de hambruna.

Teniendo en cuenta lo anterior, donde se ha limitado la posibilidad de cultivar y se ha imposibilitado la adquisición de alimentos de manera física en gran medida, muchas de las familias Zenú se han visto obligadas a buscar el acceso a los alimentos principalmente de manera económica. En este sentido y dada la falta de empleos formales, nuestros indígenas han tenido que emplearse como vendedores de tinto, mototaxistas y empleadas domésticas, entre otros oficios que muchas veces no cuentan con condiciones dignas ni remuneran de manera justa las labores realizadas exponiéndolos a diferentes escenarios de explotación laboral.

En lo que respecta al ambiente, la expansión agrícola y la explotación maderera han generado una alta presión sobre la vegetación natural de la zona. En este sentido muchas poblaciones de especies de fauna y flora que eran de uso tradicional de nuestros indígenas se han perdido de manera que se ha afectado nuestra dieta tradicional y nuestras prácticas medicinales en el mismo sentido que se ha imposibilitado el goce del derecho a un ambiente sano.

Por otra parte, el inadecuado manejo de las excretas humanas representa una fuente de contaminación para los ecosistemas presentes y las fuentes de agua. Debido a la falta de establecimiento de un sistema adecuado de manejo, las excretas se deben realizar al aire libre o en pozos sépticos contruidos por las familias, muchos de los cuales no contaron con algún tipo de asesoramiento técnico que garantice la no contaminación de las aguas subterráneas.

Respecto al desarrollo, la falta apoyo para la producción agrícola y la transmisión de saberes relacionados con la manufactura de la caña flecha además de la falta de condiciones dignas para las familias y espacios de desarrollo lúdico y cultural para la población infantil representan una amenaza, ya que entorpecen la transmisión de saberes entre generaciones y limita el desarrollo individual de nuestros indígenas.

En lo que concierne a la salud, las comunidades no cuentan con centros de salud en condiciones de infraestructura y equipamiento adecuados. Para ser atendidos deben dirigirse al Hospital de primer nivel en Chinú o al Hospital de segundo nivel en Sahagún. No hay celeridad en la asignación de citas médicas y se presentan dificultades para la remisión de pacientes en estado de emergencia a centros de salud especializados. Se suministran medicamentos genéricos, en su mayoría analgésicos y desinflamantes, para tratar enfermedades graves, que requieren un tratamiento más especializado.

En el mismo sentido, el acceso a la educación se ve obstruido por la lejanía de los centros educativos que prestan el servicio del nivel medio secundario, en la mayoría de cabildos, los niños deben desplazarse grandes distancias para dirigirse a una institución educativa que les permita completar el bachillerato.

Las vías por las que se desplazan están en mal estado y en épocas de invierno es imposible asistir a clases, muchos de los niños optan por no continuar sus estudios. No hay un transporte para el total de estudiantes, y han muerto algunos de ellos por el exceso de velocidad con la que transitan las motos en los caminos.

Así mismo, la infraestructura escolar se encuentra en regular estado, y la planta docente es insuficiente. Adicionalmente, no hay ningún avance en la educación propia y la calidad de la enseñanza es baja; aspectos que a largo plazo provocan acceso desigual a la educación pública superior.

Las iniciativas de educación propia que han surgido dentro del Municipio han sido negadas por las autoridades municipales, y por las directivas escolares argumentando que la educación propia aún es muy reciente en Chinú. Por otra parte, se presenta deserción escolar producida por la falta de recursos económicos en las familias que obliga a enviar a sus hijos a trabajar informalmente.

Respecto a las familias, de manera general viven en situación de hacinamiento, lo que provoca daños a la intimidad de los miembros y problemas de violencia intrafamiliar.

3.2.4. Municipio de Ciénaga de Oro

Los derechos económicos sociales, culturales y ambientales los hemos analizado a la luz de nuestra experiencia con relación a la soberanía alimentaria, el ambiente sano, la salud, la educación, la recreación y la familia. Hemos contado con situaciones que han tocado de cerca la experiencia vital frente a éstos derechos y consideramos fundamental hablar del estado de los mismos dentro del municipio.

Así, la principal actividad productiva de los cabildos de Ciénaga de Oro es la agricultura a partir de la cual obtenemos los alimentos para el autoconsumo. Adicionalmente, la venta de productos agrícolas y materiales procesados de éstos, brinda recursos económicos con lo que accedemos a los alimentos que no son producidos. A pesar de lo anterior, la falta de un territorio colectivo ha puesto en riesgo la conservación de los usos y costumbres relacionados con esta práctica, siendo adoptados sistemas de producción occidentales y aunque en poca medida, semillas que no son nativas.

Por otra parte, la inestabilidad climática que se ha presentado los últimos años ha generado la pérdida de varias cosechas, y ha despojado a las familias de su principal fuente de obtención de alimentos. La ausencia de un sistema de atención y prevención a nuestros agricultores tras dichos fenómenos, ha incrementado los efectos y producido épocas de hambruna que han desencadenado en problemáticas recurrentes en nuestro

pueblo, tales como la mala nutrición. Adicionalmente, la búsqueda de recursos económicos en dichos acontecimientos ha generado la migración temporal de miembros de las familias a otros municipios, que, en los casos de jóvenes, resulta convirtiéndose en un desplazamiento permanente socavando más en las problemáticas de conservación de nuestras tradiciones.

En cuanto al derecho al ambiente sano, podemos decir que las diferentes actividades derivadas de la industria agrícola y el inadecuado manejo de las basuras y las excretas humanas, han generado las principales problemáticas de contaminación que impiden a nuestras comunidades el goce de un ambiente limpio y sano. Dichas afectaciones han repercutido principalmente en los cuerpos de agua, de manera que el vertimiento de las aguas residuales y de agroquímicos han favorecido la acumulación de compuestos orgánicos y consecuentemente la eutrofización de los sistemas. Lo anterior ha conllevado a la disminución de oxígeno en el agua, afectando las poblaciones de fauna acuática, entre las cuales se encuentran especies de uso tradicional por nuestras comunidades.

A lo anterior se suman los cambios en la dinámica de los sistemas hídricos producidos por el embalse de la Hidroeléctrica de Urrá, que ha causado la pérdida del caudal y la desecación de los humedales, y en consecuencia, la pérdida de su capacidad de amortiguación, generando que las zonas de llanura aluvial, donde se ubican los asentamientos de nuestras comunidades, se tornen más susceptibles a inundaciones.

Si se piensa en la situación de salud, los centros de atención con los que contamos están en mal estado, o en situación de abandono, no se cuenta con cuerpo profesional que preste servicios a pacientes en condiciones graves, y los traslados de las IPS a otros centros de salud son difíciles a causa de problemas con los convenios, falta de recursos para el desplazamiento, e infraestructura vial inadecuada. Así mismo, los medicamentos que se recetan son genéricos, y no corresponden a las necesidades de los enfermos. Por otro lado, se observa poca celeridad en la atención y se denuncian demoras en la asignación de citas. Adicional a esto, el mal manejo de las aguas, la contaminación de la

ciénaga y el escaso manejo de las basuras, están generando problemáticas en salud que afectan el sistema gastrointestinal, los pulmones y la piel de los habitantes.

La oferta de espacios educativos no es acorde a la demanda de estudiantes, y son pocas las instituciones que ofrecen todos los niveles educativos y le permiten a los estudiantes tener continuidad espacial en el aprendizaje, ésta situación los obliga a desplazarse con dificultades a otros cabildos o a la cabecera municipal para culminar el bachillerato. Las instituciones educativas están deterioradas y no cuentan planta física y materiales pedagógicos suficientes, agregado a que la infraestructura vial es mala, y en época de invierno los cabildos aledaños a la ciénaga tienen problemas para el desplazamiento, causante primera de la deserción escolar. No se cuenta con inclusión de educación propia, y los docentes atienden a una población muy grande y no saben de qué se trata la educación propia, algunas veces han negado la existencia de saberes indígenas. Así mismo al ser profesores naturales de otros municipios, en épocas de lluvia, dejan de asistir a clases por las dificultades en la movilidad.

Nuestros niños están teniendo problemas para acceder al derecho que les corresponde de crecer en un ambiente sano que les permita hacer uso de su tiempo libre, y de realizar actividades culturales y deportivas de acuerdo a sus necesidades y gustos, esto, porque no cuentan con espacios recreativos diferentes a los proporcionados en las escuelas, y los que allí se ofrecen se encuentran en mal estado. Adicionalmente, se presentan casos de hacinamiento en las viviendas en donde habitan en un espacio reducido, de 8 a 16 personas, situación que, dentro de la convivencia genera violaciones a la intimidad de las familias, y daños a la armonía y la unidad.

3.2.5. Municipio de La Apartada

A pesar de la falta de tierra y la ubicación de varias de las familias Zenú en la zona urbana del municipio de La Apartada dadas las dinámicas de desplazamiento forzado que hemos

sufrido, la agricultura es la principal fuente de acceso a los alimentos a través del apoyo de organismos internacionales y el arrendamiento de predios. A pesar de esto, la no posesión de tierras impide el acceso a cultivos para pagar por el tiempo de uso de los terrenos arrendados, de manera que no se suple completamente la necesidad de alimentos. En este sentido, miembros de las familias deben buscar empleos en actividades informales que carecen de condiciones dignas y una debida remuneración con el fin de acceder a la alimentación económicamente. A lo anterior se suma la dificultad de acceso al agua potable ya que el agua que el acueducto surte las viviendas no es apta para el consumo humano, por lo que se debe pagar a dueños de pozos privados para el acceso al recurso.

Las principales problemáticas que afectan a las comunidades Zenú, con respecto al ambiente sano, afectan directamente el recurso hídrico. Las aguas residuales de la zona no poseen un manejo adecuado lo que causa desbordamientos en el sistema de alcantarillado a lo que se suma la falta de un sistema de tratamiento antes de ser vertidas a la quebrada San Mateo, tributante del Río San Jorge. Adicionalmente, existe una posible contaminación por la explotación de oro y ferroníquel en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, actividades que, sumadas a la contaminación con agroquímicos y aguas residuales les son atribuidas por parte de las comunidades enfermedades dérmicas en las personas y deformaciones en la ictiofauna de la cual se abastecen.

El ámbito de la salud se caracteriza por la falta de centros de salud en los cabildos indígenas, debemos desplazarnos a la cabecera municipal por vías en mal estado y en algunos casos, hacer uso de transporte fluvial. La atención en el Hospital es pésima y presenta demoras, fallas en el equipamiento y dificultades en la entrega oportuna, y adecuada a las necesidades de medicamentos.

Los cabildos del municipio no cuentan con centros de educativos adecuados y los que existen presentan dificultades en la prestación del servicio, por ejemplo, en uno de los cabildos, no se cuenta con escuelas debido a su situación de alto riesgo de inundación,

para ir a la escuela en la cabecera municipal, nuestros estudiantes deben cruzar el río navegando, en invierno, o caminando a sus orillas, en verano. No se ha incluido un enfoque diferencial dentro de las instituciones educativas, hay deficiencia en la cobertura, y una mala infraestructura física para la atención de la educación de los niños y niñas.

En lo que concierne a las familias, se observa comúnmente que éstas se encuentran en situación de hacinamiento y sus pobladores habitan en viviendas improvisadas con materiales como plástico y zinc en condiciones no propicias para el mantenimiento de la seguridad, unidad y armonía de la familia.

Así mismo, la falta de tierras y el control social que ejercen los grupos armados en la región del Alto San Jorge han dificultado la siembra de materias primas para producir artesanía propia, así como la comunicación entre cabildos indígenas para la transmisión de acervos culturales.

3.2.6. Municipio de Lorica

Las principales actividades productivas de las comunidades Zenú del municipio de Lorica son la agricultura y la pesca, pero al igual que muchas comunidades, la ausencia de tierras representa la principal amenaza a la seguridad y soberanía alimentaria. A causa de lo anterior, nuestros indígenas han tenido que arrendar terrenos, situación que los ha sometido a la explotación de su trabajo agrícola, ya que, hasta dos terceras partes de sus cosechas son reclamadas por el dueño del predio, de manera que lo producido es insuficiente y genera desmotivación en la población para la práctica de la agricultura. En este sentido, parte de la población indígena ha buscado en diferentes empleos, generalmente informales, los recursos económicos para el acceso a los alimentos, pero, de la misma manera resultan en situaciones de explotación donde no son debidamente remunerados y no cuentan con una estabilidad que les garantice el acceso a la

alimentación, a lo que se suma el abandono de las prácticas tradicionales y el desarraigo cultural.

En relación al ambiente sano, observamos que, a pesar de que nuestras comunidades cuentan con la Ciénaga Grande, que sirve como fuente de recursos, principalmente pesqueros, la intervención de la Hidroeléctrica de Urrá, así como la construcción de terraplenes y canales llevada a cabo por los terratenientes han afectado este ecosistema. Por tal motivo se ha puesto en riesgo la biodiversidad asociada y ha afectado considerablemente uno de los recursos de abastecimiento de mayor significancia para la dieta de las familias, y por lo tanto la seguridad y soberanía alimentaria.

Además, la explotación de minerales para la producción de balastro ha sido la causa de deforestación y modificaciones del paisaje, lo que ha causado la afectación de las poblaciones de fauna y flora asociadas al lugar, muchas de las cuales son usados tradicionalmente por nuestro pueblo.

En salud, se observa que hay puestos de atención cercanos a los cabildos que utilizan solo una parte de la infraestructura con la que cuentan, el equipamiento es no adecuado, y los recursos humanos no son constantes ni suficientes. Así mismo, las vías de acceso se encuentran en mal estado, imposibilitando una acción oportuna para salvaguardar a los enfermos, y dificultando el desplazamiento hacia el Hospital Municipal. El hospital de Lorica tampoco tiene la capacidad para prestar un servicio bueno, y no cuenta con atención de urgencias, esto obliga a sus pobladores a desplazarse hasta el Municipio de Cotorra para ser atendidos en caso de emergencias. Del mismo modo, los pacientes que deben hacerse exámenes y estudios son remitidos frecuentemente a Montería, sin otorgárseles medios para el desplazamiento.

Con relación al derecho a la educación, se evidencia que las instituciones educativas ubicadas en las veredas prestan el servicio de preescolar y básica primaria, sin embargo,

para asistir al nivel de educación básica secundaria y media deben desplazarse entre treinta minutos y dos horas hacia la cabecera municipal de Lorica negándose el derecho a acceder en igualdad de condiciones al sistema de educación. Adicionalmente, la infraestructura escolar se encuentra en mal estado, y los docentes no están preparados para impartir clases, a esto se le agrega la creciente deserción escolar y los bajos niveles educativos por la falta de oferta en las zonas rurales del municipio. Es de resaltar que aún no contamos con de educación propia dentro de las instituciones.

Se reportan pocos casos de ingreso de los jóvenes a la educación superior, esto porque la comunidad indígena recibe muy pocas ayudas para que sus jóvenes alcancen este nivel educativo.

Sabemos que desde el punto de vista de los derechos culturales, en nuestras comunidades no se está educando desde temprana edad, a niños y niñas, en la música y bailes característicos de la región, impidiendo el aprendizaje y reproducción de su riqueza cultural. Paralelo a esto, el derecho a la familia se ve vulnerado por las situaciones de hacinamiento en las viviendas que violan el derecho de los niños y niñas, así como de las mujeres, a la intimidad.

3.2.7. Municipio de Momil

En el municipio de Momil las actividades tradicionales nuestras como la agricultura, la elaboración de artesanías y la pesca han sido desplazadas a causa de la falta de tierras y las afectaciones ambientales que han sufridos los sistemas cenagosos. Aunque aún se cultivan especies como el maíz y la patilla, gran parte de la población Zenú del municipio se ha dedicado a actividades como el mototaxismo y otras labores que no garantizan condiciones dignas de trabajo y los desligan de nuestras prácticas culturales. El establecimiento de grandes latifundios ganaderos imposibilita el acceso a trabajos

relacionados con la agricultura y la falta de ingresos constantes por las labores disponibles no permiten gozar de una seguridad, y mucho menos, de una soberanía alimentaria.

Las pocas labores agrícolas que se desarrollan tienen que establecerse en predios arrendados o tras la incursión en los terrenos que libera la ciénaga en épocas de verano, lo que conlleva a la pérdida de soberanía alimentaria y a problemáticas ambientales respectivamente. A raíz de lo anterior, nuestras comunidades de Momil no cuentan con el derecho a un ambiente sano. La invasión de los terrenos de la ciénaga, la construcción de terraplenes y canales por parte de los latifundistas, el vertimiento de aguas residuales a los sistemas hídricos, la contaminación con agroquímicos, la deforestación y la explotación descontrolada de peces y animales silvestres han deteriorado la calidad ambiental poniendo en riesgo la salud de nuestros indígenas.

Proyectos como la Hidroeléctrica de Urrá han causado grandes modificaciones que perjudicaron gravemente la economía, la seguridad y la soberanía alimentaria de los cabildos y a pesar de esto, nunca realizaron una consulta previa. En el mismo sentido, proyectos y obras que intervinieron y van a intervenir el territorio como la instalación de redes para el suministro de gas, la adecuación de oleoductos y el establecimiento de antenas celulares nunca respetaron este derecho fundamental.

Contamos con un centro de salud dentro del cabildo que no funciona por falta de equipamiento y personal médico, para acceder al derecho a la salud debemos desplazarnos a la cabecera municipal en difíciles condiciones y con una distancia de aproximadamente 30 minutos. La dotación es deficiente y la atención que se ofrece no es rápida, eficiente ni de calidad, adicional a esto, no se han incorporado procesos de atención diferencial en salud que involucren nuestras prácticas y saberes.

En materia educativa no contamos con acceso a educación propia, la enseñanza que se oferta es para población general y no coincide con nuestras formas particulares de conocimiento. Así mismo, la poca capacidad económica con la que contamos nos impide

apoyar a nuestros hijos en el desplazamiento a las instituciones educativas que ofertan diferentes niveles de educación, el acceso a la educación superior es reducido y por la misma razón económica no es sostenible en el tiempo.

3.2.8. Municipio de Planeta Rica

La principal actividad productiva de las comunidades de Planeta Rica es la agricultura, a través de ella tenemos el acceso físico a la mayoría de los productos que constituyen nuestra dieta. Adicionalmente, la venta de los excedentes de las cosechas genera recursos económicos que complementan la alimentación de las familias. Desafortunadamente, la falta de tierras para producir, no garantiza producción suficiente y genera una alta susceptibilidad a variaciones climáticas, de manera que fuertes veranos han afectado las cosechas y directamente el acceso a los alimentos de nuestros indígenas que no cuentan con centros de acopio o de almacenamiento de alimentos, ni con la ayuda de programas preventivos y de atención frente a dichos sucesos.

Por otro lado, la expansión de la actividad ganadera y la extracción de madera han generado la pérdida de varias zonas naturales donde se encontraban especies de fauna y flora útiles para la comunidad. A lo anterior se suma la falta de sistemas para el manejo de las excretas humanas y de los residuos sólidos ordinarios producidos en las viviendas de manera que se han afectado los ecosistemas circundantes y los cuerpos de agua inmersos en ellos, poniendo en riesgo la salud de las comunidades.

Así mismo, por la falta de titulación de los territorios ha sido difícil la oposición de nuestro pueblo frente a las posibles explotaciones de minerales, que, Cerro Matoso S.A. pretende desarrollar, siendo ya numerosas las intervenciones para la exploración del territorio, poniendo en riesgo el ambiente del cual hacen uso los cabildos, dadas las implicaciones ambientales que dicha actividad puede generar.

Es de resaltar que, la presencia de actores armados pertenecientes a bandas criminales han infundido violencia y miedo en las comunidades del municipio, generando desplazamiento forzado, limitación en la movilidad, restricción de visitas institucionales, toques de queda, entre otras situaciones que han limitado fuertemente el desarrollo de las comunidades, y la práctica de sus usos y costumbres tradicionales. Es así como, la no tenencia de tierras y las problemáticas del conflicto armado asociadas al uso y aprovechamiento del territorio han afectado, además las prácticas culturales de los indígenas Zenú, que al no poder sembrar palma han perdido paulatinamente la tradición de tejer en caña flecha.

Al mismo tiempo, la situación de los centros de salud es mala, algunas no tienen equipamiento adecuado, están en situación de abandono, o carecen de personal médico para la atención. Y no siendo suficiente, el suministro de medicamentos no es adecuado, eficiente, ni oportuno. Carecemos de libertad de movilidad por la presión que ejercen los grupos armados en el territorio, esto, genera dificultades para el traslado de pacientes en estado grave a la cabecera municipal o a otros municipios.

Las instituciones educativas presentan fallas en su infraestructura, así como en la dotación de materiales lúdicos para el aprendizaje. No hay cobertura suficiente, y los docentes no pueden atender la demanda de alumnos. No hay programa de educación propia, ni un proyecto de creación de éste que vincule a la comunidad. No hay garantías para dar una educación diferencial construida a partir de la lógica cultural del pueblo Zenú. Los niños y niñas indígenas son inscritos, por razones políticas, como afrodescendientes y no como indígenas dentro de las instituciones educativas. Otro factor de afectación a nuestros derechos es el estado de hacinamiento de las familias en las viviendas, que impiden el goce efectivo del derecho a vivir en armonía y hacer uso de la intimidad familiar en el espacio vital.

3.2.9. Municipio de Pueblo Nuevo

Según la información recolectada en los cabildos visitados en el municipio de Pueblo Nuevo, es importante analizar la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, principalmente los relacionados con la soberanía alimentaria, el ambiente, la salud, la educación y la familia.

El goce de los derechos a la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades Zenú de Pueblo Nuevo se ha visto afectado por la ausencia de tierras. De esta manera, la agricultura, que es la principal actividad económica de las familias, debe realizarse en predios arrendados donde normalmente se paga con un tercio de lo producido. Por esto, la cantidad de alimentos producidos para el autoconsumo se ve limitado y se carece de soberanía sobre lo que se va a cultivar ya que los dueños de los predios suelen decidir lo que se va a sembrar y sobre todo, la manera en que se va a sembrar, dado a que un tercio de lo producido les pertenece. Dicha situación ha impedido la aplicación de nuestros usos y costumbres asociados a la agricultura y ha limitado el acceso a los alimentos de manera física a través del autoconsumo.

Por otra parte, a causa de que la principal producción de las familias se basa en la agricultura, la obtención de proteína animal depende de los ingresos económicos recaudados a través de la venta de los excedentes de producción o del trabajo en labores de campo que es remunerado a diario. A causa de la mala remuneración de dichas labores, la intermitencia de las mismas y a la falta de excedentes en la producción, el consumo de alimentos suele darse en ausencia de productos cárnicos, lo que resulta en un déficit en la nutrición por la falta de ingesta de proteínas animales.

Con relación al acceso al agua, las comunidades de Pueblo Nuevo no cuentan con un abastecimiento permanente, y a pesar de la existencia de acueductos locales, existen cabildos donde el suministro se da tan solo dos veces al mes. A causa de esto, las familias

deben almacenar el agua por tiempos prolongados sin ningún tipo de manejo particular, lo que compromete la calidad del recurso frente a una posible contaminación con agentes patógenos y favorece el desarrollo de insectos vectores de enfermedades.

Respecto al goce del derecho a un ambiente sano y limpio, se ha visto truncado por el inadecuado manejo de las excretas y las basuras, principalmente en la zona rural. En este sentido, prácticas como la quema de basuras genera la liberación de gases que favorecen el calentamiento global y que resultan tóxicos para el humano además de que constituye una de las principales causas de incendios forestales. Respecto al mal manejo de las excretas, suele conllevar a la contaminación de los cuerpos de agua, lo que aparte de representar un riesgo para la salud de nuestros indígenas, genera la acumulación de materia orgánica en estos sistemas, de manera que se causa la eutrofización de los mismos y consecuentemente, la disminución de oxígeno del agua afectando principalmente a la fauna acuática asociada.

En lo que tiene que ver con la salud, las comunidades no tienen acceso a centros de salud en sus cabildos, sólo se reporta uno en mal estado y con un día de atención a la semana disponible para 20 pacientes. La atención es recibida en el centro de urgencias de la cabecera municipal de Pueblo Nuevo, y la calidad es mala. Asimismo, el suministro de medicamentos de orden genérico, no proporcionan un buen tratamiento de la enfermedad.

Por otra parte, respecto a la educación se tiene acceso únicamente a centros educativos que ofertan los niveles de educación preescolar y básica primaria en el área rural; para cursar secundaria los jóvenes se tienen que desplazar a la cabecera municipal en difíciles condiciones de movilidad por falta de recursos económicos, y por problemas de orden público. La infraestructura y equipamiento escolar están en estado crítico y se manifiesta ausencia de profesores para atender los niveles educativos. Además, no hay procesos de educación propia en las instituciones.

En cuanto a la familia, se presentan casos de hacinamiento que violan el derecho a la intimidad de las familias.

3.2.10. Municipio de Purísima

De acuerdo al diagnóstico realizado a las comunidades Zenú del municipio de Purísima, se hace importante analizar el estado de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, principalmente de los que se relacionan con la soberanía alimentaria, el ambiente, la salud, la educación y la familia.

Teniendo en cuenta que la agricultura es la principal actividad de nuestras comunidades de Purísima, la falta de tierras para el establecimiento de los cultivos de los cabildos Zenú del municipio es una de las principales problemáticas que no permiten que se garanticen los derechos a la seguridad y soberanía alimentaria. Esto se debe a que nuestras poblaciones no cuentan con un abastecimiento suficiente de alimentos y las maneras económicas de adquirirlos muchas veces carecen de formalidad y se desarrollan de manera poco digna y sin una remuneración adecuada, lo que genera una alimentación inadecuada que no cuenta con los alimentos tradicionales y deseados y que en muchos casos carece de proteína animal.

Además, la inestabilidad climática de los últimos años ha generado grandes pérdidas de las cosechas y el endeudamiento de nuestros indígenas que pudieron acceder a créditos, situación que no permite que se garantice el acceso a los alimentos por parte de las comunidades de forma permanente en el tiempo.

A pesar del establecimiento de programas que buscan brindar los alimentos o subsidios económicos para la adquisición de los mismos a parte de la población más vulnerable, su cobertura no se da de manera total y tampoco es constante en el tiempo, existiendo comedores comunitarios que permanecen cerrados 4 meses del año.

Lo referente al derecho a un ambiente sano, no existen sistemas adecuados para la eliminación de excretas, en las zonas donde se ubican las comunidades Zenú por lo que éstas en muchas de las ocasiones deben disponerse a cielo abierto, situación que puede generar problemáticas de contaminación y propagación de enfermedades en las zonas circundantes a las viviendas y en los cuerpos de agua. De igual manera carecen de sistemas de recolección de basuras, lo que genera que éstas sean dispuestas al aire libre o incineradas, situaciones que comprometen los ecosistemas circundantes y la salud de las personas.

Por otra parte, el establecimiento de la Hidroeléctrica de Urrá ha generado cambios en la dinámica de los cuerpos de agua, afectando principalmente a la Ciénaga Grande, lugar que anteriormente servía para el suministro de peces pero desde el establecimiento de dicho megaproyecto se ha visto afectado notoriamente. A lo anterior se suman las dinámicas que han cambiado el paisaje a causa de la minería de piedra caliza y la expansión de la actividad ganadera.

Respecto al derecho a la salud, existen dos puestos salud rurales cercanos a los cabildos que prestan servicios de atención primaria y observación de medicina general, con demoras en la atención y asignación de citas. La infraestructura no es adecuada y los instrumentos para la atención son insuficientes para atender enfermos en grave riesgo. La infraestructura vial es deficiente y dificulta el transporte de enfermos hacia la cabecera municipal. Para acceder a un nivel de atención más complejo son remitidos a Loricá, Sincelejo o Montería. Adicionalmente, la ausencia de servicio de agua potable provoca graves enfermedades gastrointestinales en niños.

Por otra parte, los centros e instituciones educativos con los que cuenta el municipio de Purísima, en general, cuentan con deficiencia infraestructural y poca dotación física y didáctica, limitando el derecho a la educación de nuestras comunidades. Solo las

instituciones de la cabecera municipal proveen a los estudiantes de espacios recreativos y de aprendizaje tales como bibliotecas e instalaciones deportivas.

No hay procesos de enseñanza propia ya que, el Ministerio de Educación aún no ha incluido dentro de los planes educativos un enfoque diferencial de etnia. El nivel educativo que se oferta es muy bajo. Además, la comunidad no tiene participación en las decisiones de las escuelas en donde estudian sus hijos, ni en la selección de los docentes que laboraran en ellas.

Los padres de familia tienen dificultades para comprar los útiles escolares y los uniformes de sus hijos. Y cuando sus hijos estudian en la cabecera municipal, utilizan el dinero para proporcionarles el transporte. A causa de las dificultades económicas, hay altos niveles de desertión en los cabildos. Por lo mismo el ingreso de los jóvenes a la educación superior es nulo. Existe un muy bajo nivel educativo en las personas mayores de edad.

En lo que respecta a los derechos relacionados a la familia, se presentan situaciones de hacinamiento en las viviendas, viven aproximadamente 5 núcleos familiares en una vivienda. Esto pone en situación de riesgo a los niños y niñas, y viola el derecho a la intimidad de las familias y sus integrantes.

3.2.11. Municipio de Sahagún

Las comunidades pertenecientes a nuestro pueblo y que se ubican en el municipio de Sahagún no gozan de los derechos a la seguridad y la soberanía alimentaria, principalmente por la falta de tierras para la producción agrícola. A pesar de que a través de la agricultura nuestras comunidades acceden de manera física a los alimentos, los espacios con los que cuenta no son suficientes para brindar la cantidad necesaria para el sostenimiento de las familias. En este sentido, se debe buscar recursos económicos en labores desligadas de nuestras tradiciones para acceder a la alimentación, las cuales

suelen desarrollarse en situaciones que carecen de condiciones dignas y que no aseguran un ingreso periódico.

Por otra parte, la inestabilidad climática ha afectado la producción agrícola, lo que debido a la falta de apoyo institucional ha aumentado desabastecimiento de alimentos y problemas de nutrición en las familias.

Respecto al acceso a agua potable, generalmente es tomada de pozos artesanales y es consumida sin ningún tipo de manejo, lo que representa un riesgo dado el establecimiento de pozos sépticos cercanos a dichas fuentes.

Adicionalmente, el inadecuado manejo de las aguas residuales así como de las basuras ha generado una de las principales afectaciones que impiden a nuestras comunidades de Sahagún gozar de un ambiente sano. El vertimiento de las aguas residuales a los cuerpos de agua, ha generado su contaminación, lo que imposibilita el aprovisionamiento de los recursos que pueden brindar y causa el aumento de la materia orgánica disuelta. En este sentido, a través de la eutrofización se disminuye la cantidad de oxígeno contenida en el recurso y se afecta las poblaciones de fauna acuática.

A lo anterior se suma la deforestación causada por la expansión de la frontera agrícola, la comercialización de madera y la explotación de piedra caliza de manera industrial, actividades que han generado fuertes modificaciones del paisaje y han fragmentado corredores biológicos de diferentes poblaciones animales causando la interrupción de muchos de los servicios que anteriormente prestaban los ecosistemas de la zona.

Por otra parte, el municipio cuenta con un hospital municipal que ofrece un servicio de salud aceptable, sin embargo, al no contar con centros de salud en buenas condiciones y con un servicio adecuado, nuestros pobladores deben desplazarse grandes distancias hacia la cabecera municipal para ser atendidos. No se está respetando la medicina

tradicional como elemento paralelo y alternativo de atención, los médicos han manifestado su descontento con las prácticas tradicionales frente a los enfermos, generando prácticas de discriminación a la población indígena. Por otro lado, no hay acceso a los medicamentos necesarios para combatir las enfermedades y hay falta de personal capacitado para orientar a los usuarios. Adicional a esto, no se ha brindado atención psicosocial a la población víctima y desplazada por el conflicto armado, ni atención diferencial para las personas con discapacidad.

El derecho a la educación está siendo vulnerado porque no tenemos la posibilidad de acceder a un aprendizaje que respete nuestros usos y costumbres, así como que nos eduque para las labores cotidianas. Las escuelas rurales ofrecen los niveles educativos de preescolar y básica primaria, y con menos frecuencia, el de educación secundaria, factor que obliga a nuestros jóvenes a desplazarse grandes distancias para acceder. Por otro lado, la calidad educativa es mala, y los docentes no son suficientes, ni se encuentran preparados para asumir la educación de los niños. Los niveles de deserción asociados a la falta de recursos económicos, y al inicio temprano de la vida sexual y la consolidación de una familia son aspectos relevantes. Por ejemplo, en el cabildo Los Galanes, fueron expulsados 4 niños pertenecientes a una familia con pocos recursos económicos, por no tener uniforme, zapatos y útiles, negándoseles el derecho a la educación por razones fuera de su poder de acción.

Adicionalmente, los espacios escolares son regulares y no se han destinado espacios para la recreación de los niños ni adentro, ni afuera de las escuelas. La participación de la educación superior es limitada, por falta de recursos de los padres para mantener a sus hijos, y por los altos niveles de desigualdad con los que acceden los pueblos indígenas al nivel superior.

3.2.12. Municipio de San Andrés de Sotavento

De acuerdo con la información recolectada a través de los cabildos visitados en el municipio de San Andrés de Sotavento, cabe resaltar la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, principalmente los relacionados con la soberanía alimentaria, la dominación y explotación, el ambiente, la salud, la educación, la recreación, los bienes culturales y la familia.

Respecto a la seguridad y soberanía alimentaria, la ausencia de territorios colectivos, así como la falta de ampliación de los mismos representa una limitación para la producción de alimentos en varias de las comunidades del municipio, de manera que el acceso a estos debe realizarse también de forma económica, situación que en determinados periodos ha generado el desabastecimiento. En este sentido, algunos miembros de las familias, principalmente los jóvenes, deben buscar recursos económicos por medio de empleos informales, alejados de nuestras tradiciones y que normalmente no aseguran un ingreso periódico.

Por otra parte, La inestabilidad climática ha llevado a la pérdida de gran número de cosechas y animales de cría, situación bajo la cual no se han recibido ningún tipo de ayuda y que además ha estimulado la siembra de semillas comerciales no nativas a causa de sus características de rápida cosecha y bajos requerimientos del terreno. Por lo anterior no se tiene garantizado el acceso permanente a los alimentos y dada la falta de apoyo institucional, nuestras comunidades han tenido que cultivar especies que aunque producen la cosecha en menor tiempo, no cuentan con las características palatables que desean. A lo anterior se suman otros factores limitantes de la producción como la corrupción en el manejo de los recursos económicos y la falta de fomento para el desarrollo del sector agrícola teniendo en cuenta el enfoque diferencial.

El requerimiento de una moderada a alta inversión para la producción agrícola en el municipio y la falta de acceso a créditos, también representa una problemática que además de limitar la producción de alimentos y por ende el acceso a los mismos, ha llevado a nuestros indígenas a recurrir a los préstamos “cobra diario” o agiotistas, los que incurrir en usura y sus formas de cobranza implican amenazas a la población.

Adicionalmente y a pesar de se presentan programas que brindan alimentos a parte de la población por parte del Cabildo Mayor, la Alcaldía Municipal y el ICBF, no existe una cobertura total de la misma y no se encuentra garantizado en consumo de al menos tres comidas diarias. Por otra parte, en la mayoría de las comunidades es común la falta de agua o la contaminación de la misma a causa de la ausencia de servicios sanitarios apropiados en las viviendas.

Respecto al agua, no existe un abastecimiento permanente en muchos de nuestros cabildos, especialmente en épocas de sequía. Dada la falta de acueductos, muchas de las comunidades se abastecen a partir de pozos profundos o represas artificiales, los cuales poseen un alto riesgo de contaminación debido a la filtración de los desechos contenidos en los pozos sépticos en el primer caso y al manejo de agroquímicos y frecuente visita de animales en el segundo.

En lo que respecta a la dominación y explotación, se presentan diferentes situaciones donde nuestros indígenas no son remunerados de la manera debida de acuerdo con las labores realizadas. A pesar de que el trenzado de caña flecha representa uno de los principales ingresos a las familias Zenú del municipio, el pago de esta actividad es muy inferior al que correspondería por el trabajo que conlleva de manera que no representa un ingreso suficiente para el sostenimiento familiar.

También, dada la necesidad de recursos económicos adicionales para el acceso a la alimentación, es común que miembros de las familias, principalmente jóvenes, deban

dirigirse a los cascos urbanos a buscar empleos como el mototaxismo, la venta de tintos, o jornales. Muchos de estos empleos se desarrollan en condiciones poco dignas e incurrir en la explotación laboral al no garantizan el pago adecuado por las labores que se desarrollan y generar una distribución inequitativa de distribución de la ganancias.

En lo que corresponde al derecho a un ambiente sano, la principal fuente de contaminación en las comunidades del municipio es el inadecuado manejo de las basuras. Adicionalmente, la expansión de la frontera agrícola, la explotación maderera y la cacería de fauna silvestre han conllevado a la fragmentación de bosques, la disminución y la posible desaparición de especies silvestres, lo que ha impedido el goce de un ambiente sano y ha limitado los servicios que éste presta.

Por otra parte, el derecho a la salud se ve seriamente limitado. No todos los cabildos del municipio cuentan con centro de salud en sus corregimientos o veredas, y tienen que desplazarse hasta la cabecera municipal de San Andrés de Sotavento para ser atendidos en el nivel primario. Este desplazamiento se realiza a través de vías que se encuentran en mal estado, y en medios de transporte no adecuados para transportar pacientes de alto riesgo. Hay pocos médicos y especialistas en el municipio que los obliga a desplazarse a las capitales departamentales de Córdoba y Sucre para ser atendidos con un nivel de complejidad más amplio, pero en muchos casos, insuficiente. Muchas veces los traslados expedidos por Manexka no se pueden realizar debido a problemas con los convenios. Adicional a esto se evidencias las siguientes problemáticas:

Manexka EPS-I no está informando de manera adecuada los derechos y deberes que tienen los pacientes en el proceso de atención.

Los medicamentos que se están formulando en urgencias de Manexka EPS-I, no están siendo entregados por causas administrativas y negligencia en el personal de atención, negando la posibilidad a los pacientes de acceder a tratamiento oportuno de las

enfermedades. Así mismo, se formulan los mismos medicamentos para diferentes dolencias.

No se le está dando un lugar prioritario a la medicina tradicional, ni a los saberes sobre curación con plantas, la EPS-I no ha logrado incluir de manera respetuosa y armónica la medicina tradicional con la medicina occidental.

No se están atendiendo pacientes discapacitados de manera diferencial, negándoseles el derecho a acceder a una atención acorde a sus necesidades especiales, y a un acompañamiento psicológico y psicosocial para cada caso.

Hay muchas familias que no poseen la tierra ni los recursos para cultivar o dotarse de alimentos adecuados a una dieta balanceada, situación que ha llevado a muchos niños a la desnutrición. Los niños son atendidos por Bienestar Familiar y Semillas de vida, que aún con sus esfuerzos no logran garantizar el bienestar de los infantes.

Referente a la educación, las instituciones educativas no cuentan con infraestructura adecuada para la atención. Hay carencia de aulas, de maestros para todas las materias, y de materiales didácticos, y algunos de los que existen, se encuentran en abandono por desconocimiento frente al uso. El acceso a las instituciones educativas rurales es difícil, no existen instituciones en todos los cabildos y los niños deben hacer desplazamientos largos y en condiciones geográficas y climáticas variables. Así mismo, no se cuentan con muchas instituciones que puedan ofrecer el servicio de educación básica, primaria y media, obligando a los estudiantes a desplazarse a la cabecera municipal o a corregimientos aledaños.

Se presentan niveles de deserción estudiantil en épocas de invierno por las dificultades para acceder a los centros e instituciones educativas. Así mismo, no se cuentan con los recursos económicos para mantenerse, y para pagar gastos de desplazamiento.

Los niños y niñas siguen recibiendo una educación que no es acorde a las formas de aprender tradicionales, y a los usos y costumbres de su pueblo, los maestros siguen sin comprender de qué se trata la educación propia, y en muchos casos no tienen noción alguna de ésta.

Hay pocos hogares de madres comunitarias, así como centros de atención del ICBF en relación a la cantidad de niños que se deben atender, los cupos no alcanzan y los niños se quedan sin la posibilidad de acceder a educación preescolar.

A lo anterior se suma que dentro de las instituciones educativas los niños y niñas no cuentan con espacios para la realización de actividades conexas a la educación escolar, como el juego, la lectura, el desarrollo artístico, entre otras.

En lo que se relaciona con los bienes culturales, la caña flecha representa el sustento económico de las familias del municipio y uno de los bienes culturales más preciados en la cultura Zenú pero la producción de artesanías con caña flecha es cada vez más difícil por la dificultad para conseguir la materia prima. Asimismo, el pago cada vez más reducido por los tejidos ha afectado el sustento de las familias, y por ende, la permanencia de la artesanía como principal labor de las mujeres.

Con respecto a la familia, dada su extensión aunada a la pobreza, ha generado hacinamiento en los hogares, violando el derecho a la intimidad, y al crecimiento y desarrollo en un ambiente adecuado. Esto ha producido situaciones de violencia intrafamiliar, violación de niños al interior de la familia, y a futuro problemas de depresión, drogadicción y alcoholismo.

3.2.13. Municipio de San Antero

La seguridad y la soberanía alimentaria de los cabildos del municipio de San Antero se han visto afectadas principalmente por la falta de tierras. Debido a esto, las familias Zenú del municipio no cuentan con un terreno suficiente para el abastecimiento de la mayoría de sus alimentos, por lo que se ven obligados a abastecerse por medio de recursos económicos a través de empleos generalmente informales. Dicha situación ha generado cambios en la dieta tradicional de las familias y los ha expuesto a una explotación laboral donde no les es ofrecida una debida remuneración por las labores realizadas y pocas veces reciben tratos dignos.

Adicionalmente, la falta de programas de atención y prevención para los agricultores Zenú frente a las inestabilidades del clima también ha impedido que se goce de la seguridad y soberanía alimentaria. Los últimos años han ocurrido sequias que han perjudicado fuertemente las cosechas, generando desabastecimiento de alimentos y perdida de semillas.

Las dos situaciones descritas anteriormente han causado que los agricultores Zenú del municipio siembren a semillas certificadas las cuales representan tiempos de producción más cortos y requieren menos espacio, pero que genera cambios en los sistemas de producción y los usos y costumbres relacionados del mismo modo que agudiza la disminución de la diversidad de nuestros cultivos, genera cambios en la nutrición y disminuye la calidad palatable de los alimentos.

Por otra parte, dada la intervención en el sistema hídrico causada por la construcción de la Hidroeléctrica de Urrá, especies de peces que eran utilizados para la alimentación han desaparecido, lo que ha causado la disminución de esta importante fuente de proteína animal y por consiguiente, ha afectado la nutrición dada la falta de recursos económicos que dificultan el acceso a alimentos sustitutos.

Al respecto del acceso al agua potable, está dado a partir de represas artificiales o acueductos locales. En el primer caso, dado a que suelen ser frecuentadas por animales no es posible garantizar su potabilidad y dado a que el consumo de ésta se da sin ningún tipo de tratamiento, constituye un escenario para la propagación de enfermedades. En el caso de los acueductos locales, el abastecimiento de agua no se da de forma permanente de manera que el recurso debe ser almacenado hasta por 15 días, lo que pone en riesgo su calidad y favorece la propagación de insectos vectores de enfermedades.

Por otra parte, la inexistencia de sistemas de manejo de las excretas y basuras adecuados representa una de las principales amenazas al derecho a un ambiente sano de nuestras comunidades. En este sentido, la disposición de las excretas al aire libre, la construcción inadecuada de pozos sépticos y la quema y disposición al aire libre de las basuras generan la contaminación de la atmosfera y cuerpos de agua lo que a su vez representa una amenaza para la salud de nuestros indígenas.

En lo que respecta a la salud, no hay centros de salud en los cabildos, razón por la cual se desplazan en difíciles condiciones a la cabecera municipal, las vías se encuentran en mal estado y las ambulancias no pueden entrar a atender situaciones de emergencia. Los pacientes graves son trasladados en hamacas.

El hospital municipal no cuenta con personal médico, atiende de manera intermitente y no posee la infraestructura y equipamiento necesarios para la atención. Los medicamentos que recetan son genéricos y no corresponden a las necesidades de los pacientes.

En cuanto a la educación, se cuenta con centros educativos cercanos a los cabildos que ofrecen educación preescolar y básica primaria, para avanzar en niveles educativos deben desplazarse a la cabecera municipal. La alcaldía ha asignado un transporte para los niños pero, las vías se encuentran en mal estado y, el servicio no es bueno ni constante debido a

la falta de pago de la gobernación. Los docentes atienden dos o más cursos y la calidad con la que lo hacen no es buena, así mismo, la infraestructura escolar es mala.

La educación superior es de difícil acceso, sin embargo se dice que cuentan con la presencia de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural –UAIIN. En relación con la familia, se presentan casos de hacinamiento que violan directamente el derecho a la intimidad en las familias.

3.2.14. Municipio de San Carlos

Para las familias pertenecientes a nuestro pueblo que se ubican en el municipio de San Carlos no se encuentran garantizados varios de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientes, entre ellos la seguridad y soberanía alimentaria. A causa de la falta de tierras, la mayoría de la alimentación debe ser obtenida a través de recursos económicos, lo que constituye una problemática dados los niveles de desempleo. De esta manera los integrantes de las familias deben buscar recursos en labores informales que no garantizan un ingreso periódico y no se desarrollan en condiciones dignas.

A pesar de que la cacería y la pesca tradicionalmente han sido la fuente de proteína en la dieta tradicional de las comunidades, en la actualidad la expansión de la frontera agrícola y los altos niveles de contaminación de los ríos han disminuido notablemente la posibilidad de dichas prácticas. En este sentido, el consumo de proteínas animales es muy limitado, lo que sumado a la difícil obtención de recursos económicos ha causado problemáticas de nutrición entre las familias Zenú al punto de existir familias que tan solo pueden acceder a los alimentos una vez al día.

Respecto al acceso al agua potable, no se cuenta con todas las comunidades con un sistema de abastecimiento del recurso por lo que esta debe ser tomada de pozos y ríos

cercanos, situación que no garantiza la potabilidad y pone en riesgo de contaminación con patógenos y productos químicos derivados de la agroindustria a nuestras comunidades.

Por otra parte, la falta de sistemas para el manejo adecuado de basuras y de disposición de excretas humanas ha impedido el goce a un ambiente limpio y sano de nuestras comunidades. A través de la quema de los residuos sólidos ordinarios, nuestros indígenas se exponen a la inhalación de gases tóxicos y generan la liberación de gases que contribuyen al calentamiento global, mientras que la disposición de excretas al aire libre y la mala adecuación de pozos sépticos causan la contaminación de cuerpos de agua, los cuales representan un riesgo de contaminación tras su consumo y afectan los sistemas acuáticos por la acumulación de materia orgánica, lo que conlleva a la eutrofización de estos.

Adicionalmente se ha llevado a cabo la construcción de terraplenes en el río Aguas Prietas, lo que ha causado cambios en el caudal y la dinámica ecológica del río. En este sentido, se han visto afectadas las poblaciones de fauna asociadas y por consiguiente nuestras comunidades que hacen uso de manera tradicional de estas.

La salud que se está prestando para el pueblo Zenú es deficiente, las instituciones prestadoras del servicio no cuentan con infraestructura para la atención, el equipamiento que tienen necesita ampliación y reparación, además de esto, el cuerpo médico consta de profesionales que recién están ingresando al campo de la medicina y no cuentan con supervisores que procuren la adecuada atención y la no ocurrencia de errores en los procedimientos. Así mismo, no hay celeridad en la atención, ni se presta un servicio complejo de medicina, razón por la cual nuestros pobladores deben dirigirse a centros médicos de otros municipios cuando la situación es grave, adicionalmente, los medicamentos que se recetan no están cumpliendo la función de curar a los pacientes. Contamos, además de esto, con una población importante de discapacitados que no están siendo atendidos diferencialmente.

En relación a la educación, nuestros niños no están accediendo a un sistema que involucre creencias y formas de aprendizaje propias; así mismo, la calidad de la educación es mala y las condiciones en las que se asiste a la escuela no son idóneas, por un lado, no se cuenta con centros educativos en todos los cabildos, y éstos, no ofrecen la totalidad de niveles de educación para otorgar el nivel secundario, esto obliga a que los niños y jóvenes se desplacen por vías en mal estado; por otro lado, la infraestructura escolar no es buena y el equipamiento y materiales para el aprendizaje reducidos.

3.2.15. Municipio de Tuchín

En el municipio de Tuchín hemos sufrido vulneraciones a nuestros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en distintos niveles y con diferentes grados de intensidad. En materia de soberanía alimentaria, la falta de tierras para la producción agrícola ha conllevado a que el trenzado de caña flecha sea la principal actividad productiva de los cabildos del municipio. De esta manera, el acceso a los alimentos se da principalmente de forma económica generando cambios en la dieta tradicional, ya que los alimentos consumidos son determinados según su disponibilidad y precio en los mercados locales.

Adicional a lo anterior, la inestabilidad climática ha representado serias amenazas frente a la soberanía y seguridad alimentaria, ya que, los fuertes veranos han causado la pérdida de las cosechas que son utilizadas para el autoconsumo. Por otro lado, la introducción de agroquímicos ha hecho que las variedades nativas susceptibles a ellos, sean remplazadas por las variedades certificadas que poseen características nutritivas y palatables diferentes, y que, a su vez dificultan la preparación de los alimentos procesados tradicionales derivados de ellos.

Con respecto a la situación laboral de nuestros cabildantes, observamos que, a pesar de ser el trenzado de caña flecha una de las principales actividades productivas de los

cabildos del municipio, los precios pagados por el metro que elaboran los artesanos son insuficientes para el sostenimiento familiar, problemática a la que se suma la elaboración de imitaciones que se fabrican en otras regiones a menor precio. Dicha situación ha generado que niños desde los 10 años deban trabajar en casas externas, a cambio de que se les garantice el estudio y la alimentación. En el caso de los jóvenes, se han presentado desplazamientos a las ciudades capitales donde desempeñan generalmente trabajos informales bajo condiciones poco dignas. Dada la falta de ingresos, muchas de las familias Zenú han recurrido a los préstamos agiotistas que cobran un interés muy por encima de los porcentajes legales, incurriendo en usura, además de poseer métodos de cobranza por medio de amenazas a las personas.

En varias de las comunidades las acciones externas han producido daños y dificultades para el disfrute de un ambiente sano, la deforestación causada por la explotación maderera, la expansión de la frontera agrícola, el crecimiento poblacional y el cambio en las dinámicas del recurso hídrico causado por la hidroeléctrica de Urra, han generado la desecación de cuerpos de agua y han afectado las poblaciones de fauna silvestre que eran usadas mediante la cacería tradicional. De igual forma, semillas nativas que se desarrollaban en las zonas forestales como el ñame criollo se han visto afectadas.

Además de lo anterior, la falta de sistemas adecuados para el manejo de las aguas residuales ha resultado en la contaminación de los cuerpos de aguas subterráneas y superficiales, situación preocupante ya que el agua consumida en nuestras comunidades no recibe ningún tipo de tratamiento para ser potabilizada.

Con relación a la salud, los cabildos indígenas en su mayoría no cuentan con centros de salud propios, razón por la cual los habitantes debemos desplazarnos por caminos -de difícil tránsito en épocas de invierno- hacia comunidades aledañas que cuentan con centros de salud o a la cabecera Municipal de Tuchín para ser atendidos. Así mismo, hay demoras en la asignación de citas médicas y poca eficiencia en los trámites

administrativos concernientes a la entrega de medicamentos. El municipio de Tuchín cuenta con instituciones prestadoras del servicio de salud que ofrecen los servicios de urgencias y atención primaria, pero en caso de presentarse situaciones graves de daños a la salud, así como emergencias que requieran atención compleja, los habitantes debemos acudir a centros médicos ubicados en otros municipios o en las capitales de los Departamentos de Córdoba y Sucre.

Los programas que ofrece Manexka EPS-I son los mismos que podría ofrecer otra EPS, no hay una especificidad que permita dilucidar un enfoque diferencial en el abordaje de las problemáticas, ni tampoco en la atención focalizada a zonas rurales. Por otra parte, la cobertura de los medicamentos que otorga el Plan obligatorio de salud POS, es muy básica, en la mayoría de casos se formula ibuprofeno, acetaminofén, diclofenaco, loratadina, metronidazol y tiamina para todo dolor e infección, sin tener en cuenta las particularidades de la enfermedad y las necesidades de las personas.

En cuanto al derecho a la educación, no todos los cabildos cuentan con instituciones o centros educativos dentro de su territorio, la mayoría de los pobladores deben desplazarse a otros corregimientos o cabildos para asistir a la escuela. Las distancias que recorren nuestros niños y niñas van desde los 15 minutos desde el lugar de vivienda al centro educativo, hasta media y una hora caminando. De los 30 cabildos cubiertos hasta ahora solo cinco de ellos: Flechas, Santander, Cerro Vidales, Cruz Chiquita y Barbacoas cuentan con sedes principales de centros o instituciones educativas.

Estos centros educativos tienen problemas de infraestructura, presentan fallas en su planta física, están dotados de aulas inapropiadas e insuficientes, y poseen pocos espacios de recreación, restaurantes y mobiliario para atender a la población. Adicional a esto, hay carencia de material didáctico y lúdico para realizar las actividades educativas. Dentro del Municipio de Tuchín, poder acceder a la matrícula es un problema menor, frente a temas como las dificultades para comprender los currículos estándar, la lejanía entre vida

cotidiana y aprendizaje, los impedimentos para llegar a las instituciones educativas por razones geográficas, y la ausencia de centros educativos e infraestructura adecuada para el aprendizaje.

No hay disponibilidad de maestros durante todo el año, a inicios de los periodos los niños se quedan sin profesores porque Tuchín es un municipio no certificado por el Ministerio de Educación, y por ende, depende de la gobernación de Córdoba para la contratación de maestros.

Por lo que se refiere a educación propia, no es claro el mecanismo mediante el cual se ha llevado a cabo el proceso etno-educativo ni los criterios de selección de los proyectos pilotos en las instituciones. Como indígenas, no sentimos inclusión dentro del proyecto, ya que los niños y jóvenes habitantes de cabildos aislados no tienen la posibilidad de acceder a una educación con enfoque diferencial que les permita entender la importancia de nuestra cultura y del lugar de localización como indígenas Zenú.

La situación concerniente a la familia pone de manifiesto la incomodidad y el dolor al interior de las familias a causa de las medidas tomadas por el ICBF frente a los casos de desnutrición infantil, ya que, cuando detecta casos se lleva a los niños a Centros de Recuperación infantil con el fin de recuperarlos nutricionalmente, separando violentamente a las madres de sus hijos y viceversa.

3.3. Departamento de Sucre

3.3.1. Municipio de Chalán

Dada la falta de un territorio propio, se ha limitado la actividad agrícola a las comunidades Zenú del municipio de Chalán, y en consecuencia, sus derechos a la soberanía y seguridad.

Por este motivo, se ha debilitado el ejercicio comunitario y la participación en procesos colectivos, causando a la pérdida progresiva de nuestros usos y costumbres.

Dada la falta de un territorio colectivo y medidas que busquen proteger nuestras técnicas agrícolas tradicionales, en las comunidades se ha hecho frecuente el uso de la fertilización y el control de plagas y enfermedades a través de productos químicos. Esto ha fomentado la pérdida de conocimientos sobre usos y costumbres, y ha favorecido la implementación de semillas no nativas, las cuales se adecuan mejor a este tipo de manejo del cultivo.

Por otro lado, el conflicto armado, la falta de voluntad política y los impactos de las inestabilidades climáticas y la falta de programas que atiendan dichos impactos también limitan el acceso a los alimentos a través de la producción propia. Esto ha causado que varios indígenas, principalmente jóvenes, recurran a empleos informales para tener un acceso económico a la alimentación, lo que ha puesto en riesgo la conservación y transmisión de los saberes tradicionales.

En el campo de la salud, no se cuenta con servicios de saneamiento básico, y la falta de un manejo adecuado de las aguas, los residuos y las basuras ha generado problemáticas en salud que son externas y evitables.

En materia educativa, los saberes que se imparten dentro del cabildo no tienen un componente de etno-educación, y no responde a las necesidades culturales y comunitarias de niños y jóvenes Zenú.

3.3.2. Municipio de Colosó

De manera general, el estado de los derechos económicos, sociales y culturales, según el diagnóstico realizado a las comunidades visitadas en el municipio de Colosó, presenta vulneraciones en los derechos relacionados con la soberanía y la seguridad alimentaria, a

la libre disposición de riquezas y recursos naturales, al ambiente, a la salud y a la educación.

Pese a que la principal actividad productiva de nuestro pueblo es la agricultura, la carencia de un territorio colectivo de la comunidad localizada en el municipio ha impedido garantizar los derechos a la seguridad y soberanía alimentaria, del mismo modo que ha comprometido la práctica y transmisión de los saberes tradicionales que se relacionan con el trabajo de la tierra. En este sentido, las familias Zenú de Colosó no cuentan con los terrenos suficientes para una producción de autoconsumo que garantice su soberanía sobre los alimentos, viéndose obligados a realizar prácticas diferentes a nuestras tradiciones para acceder a los alimentos de forma económica.

Adicionalmente, la falta de fortalecimiento de nuestras técnicas agrícolas tradicionales se ha visto reflejada en el uso de la fertilización y el control de plagas y enfermedades a través de productos químicos. En este sentido y por causa de diferentes dinámicas como la falta de voluntad política, los impactos de las inestabilidades climáticas y la falta de programas preventivos y de atención a dichos impactos, se ha desincentivado la práctica saberes ancestrales relacionados con la agricultura y ha favorecido la implementación de semillas no nativas, las cuales poseen características que las adecuan más a la agricultura occidental.

Por otra parte, los ecosistemas que rodean la comunidad son lugares de uso tradicional, principalmente para la obtención de plantas medicinales pero también prestan servicios recreativos y de regulación climática, entre otros. A pesar de esto, se ha establecido una empresa de turismo sin ningún tipo de consulta a la comunidad, vulnerando su derecho a la autonomía y a la libre disposición de riquezas y recursos naturales, lo que ha causado impactos a la fauna y flora local sin ningún tipo de manejo.

También, la extracción maderera desarrollada en el municipio, principalmente para la construcción, es una de las presiones más fuerte que se realizan al ambiente natural en el que se ubica el cabildo indígena. Además, el mal manejo de las basuras y la inadecuada disposición de las aguas residuales son la causa de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. A causa de esto se ha limitado el derecho de las familias Zenú a gozar de un ambiente sano y limpio dentro de su territorio.

Referente a la salud, la comunidad Zenú del municipio cuenta con un puesto de salud municipal que atiende el nivel de atención básico. Cuando los problemas de salud son graves deben desplazarse al Hospital Universitario de Sincelejo que posee un nivel de atención III. Por su parte, en lo que respecta a la educación no se ha implementado el sistema de enseñanza propia y los programas de educación no poseen atención diferencial.

3.3.3. Municipio de Corozal

La situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del pueblo Zenú habitante del Municipio de Corozal, se observa en las dificultades para gozar de los derechos de seguridad y soberanía alimentaria principalmente por la ausencia de tierras. Hemos tenido que acudir al arriendo de tierras, situación que priva a nuestros agricultores de su soberanía ya que los cultivos deben ser trabajados según las condiciones previas de manejo, y los deseos del dueño de las tierras.

A lo anterior se suma la inestabilidad climática, que ha causado la pérdida de varias cosechas, y, dada la falta de sistemas de prevención y atención frente a estos fenómenos, ha generado el desabastecimiento de las familias Zenú, que deben incurrir en labores informales para la obtención de recursos.

Las diferentes problemáticas generadas por la falta de control de las autoridades competentes, han impedido el goce de nuestras comunidades a un ambiente limpio y sano. La deforestación descontrolada, el inadecuado manejo de basuras y excretas humanas, así como la escorrentía de productos de la industria agrícola, han perjudicado los ecosistemas, principalmente a los cuerpos de agua, lo que en ocasiones ha imposibilitado el abastecimiento del recurso y el aprovechamiento de la diversidad biológica asociada a él.

En cuanto al derecho a la salud, es de señalar que nuestro municipio no posee centros de salud integral con condiciones de infraestructura, equipamiento y recurso humano suficiente para atender a los enfermos. La infraestructura vial en mal estado impide que los pacientes sean trasladados en condiciones adecuadas al centro de salud, y la falta de celeridad en la asignación de citas dificulta una acción oportuna. Así mismo, los medicamentos que se recetan no tienen efectos significativos en las enfermedades que se presentan. Debido a que no contamos con un adecuado sistema de saneamiento básico, y a que tenemos dificultades para autoabastecernos de alimentos que diversifiquen y complementen la dieta de nuestros hijos, es común que se presenten enfermedades gastrointestinales y problemas de desnutrición.

Por otro lado, las instituciones y centros educativos ofrecen educación preescolar y básica primaria en la mayoría de las zonas rurales, pero, para cursar estudios secundarios, nuestros hijos deben desplazarse a otros corregimientos, o a la cabecera municipal en condiciones difíciles. Así mismo, no hay programas de educación propia que favorezcan que los niños y jóvenes encuentren dentro de las instituciones escolares los referentes culturales del pueblo Zenú. Adicionalmente, los escasos recursos con los que cuentan las familias para el apoyo educativo de sus hijos, hacen que sean pocos los que ingresan a la educación superior.

3.3.4. Municipio de Coveñas

A continuación haremos un balance del estado del derecho a la soberanía alimentaria, el ambiente sano, la salud, y la educación, correspondientes al bloque de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, atendiendo la situación del pueblo indígena Zenú en el municipio de Coveñas.

Acorde a lo anterior, la carencia de tierra en las comunidades del municipio ha causado que la actividad agrícola sea remplazada por otras labores que brindan recursos económicos para lograr el acceso a los alimentos. De esta forma, los usos y costumbres de nuestras comunidades, que se relacionan con la agricultura tradicional se encuentran en riesgo, y dado a que el acceso a los alimentos se da de manera económica, la alimentación va a depender de los productos ofrecidos en los mercados y los precios de estos, generando un cambio en la dieta tradicional basada en productos nativos. A lo anterior, se suma el remplazo de las variedades nativas por certificadas de productos como el maíz, ya que las primeras suelen poseer una alta susceptibilidad a las plagas, y no se cuentan con centros de acopio o bancos de semillas que garanticen el acceso a las semillas tradicionales, de manera que el acceso a éstas es muy limitado.

Por otro lado, la pesca representa la principal fuente de proteína animal y hace parte de la dieta tradicional de las comunidades de la zona, pero los frecuentes accidentes relacionados con la terminal marítima petrolera de Coveñas han generado la interrupción de la actividad pesquera por periodos prolongados, lo que ha afectado directamente el consumo de este tipo de alimento.

Las principales afectaciones ambientales que han sufrido nuestras comunidades se relacionan con los constantes derrames de petróleo derivados de la terminal marítima de Coveñas. De esta forma se han afectado unas de nuestras principales actividades económicas, así como, una de las principales fuentes de obtención de alimentos.

Es común la falta de adecuación de sistemas para la recolección de basuras y manejo de excretas apropiados, de manera que los ecosistemas circundantes se han visto afectados, y han favorecido la propagación de enfermedades parasitarias.

En cuanto a la salud, La prestación del servicio es deficiente, no se cuenta con infraestructura para la atención, ni con implementos básicos para la realización de procedimientos, los comuneros deben llevar jeringas, guantes, algodón y medicamentos para ser atendidos. Así mismo, la consecución de citas médicas es demorada y los médicos y enfermeras que atienden no están lo suficientemente preparados para hacerlo. Los medicamentos no están cubiertos dentro del POS, y se suelen formular medicinas que no contribuyen a la sanación de la enfermedad.

En el ámbito educativo, la falta de territorio propio dentro de un municipio con mayoría de habitantes afrocolombianos genera dificultades para la inclusión de un sistema de educación propia o con enfoque diferencial de etnia. Las instituciones educativas no prestan un servicio continuo de educación preescolar, básica primaria y media, razón por la cual los estudiantes deben desplazarse a la cabecera municipal de Coveñas o de Purísima. Adicional a esto, vemos cómo el acceso a la educación superior de nuestros jóvenes es difícil, debido a la falta de recursos económicos, y a la escasez de subsidios y convenios con las universidades para el ingreso diferencial y prioritario de indígenas.

3.3.5. Municipio El Roble

La producción agropecuaria representa la principal forma de acceso a los alimentos para nuestras familias ubicadas en el municipio de El Roble, de manera que permite su acceso a través del autoconsumo y los intercambios comerciales. Desafortunadamente la ausencia de un territorio colectivo titulado ha causado que no se permita el goce de los derechos de seguridad y soberanía alimentaria ya que se hace necesario el arrendamiento de terrenos y se afecta la cohesión social.

Al hacerse necesario el arrendamiento, el tipo de manejo y producción del cultivo debe realizarse bajo las condiciones establecidas por los dueños de los predios lo que ha generado el abandono de prácticas y semillas tradicionales. Por otra parte, tampoco se permite la transmisión de nuestros saberes entre los comuneros ya que no se cuenta con espacios y momentos suficientes para difusión y practica de los saberes.

En lo que respecta al abastecimiento del agua, se cuentan con microacueductos que surten cada dos días a las familias, pero al no existir medidas adecuadas de potabilización se favorece la propagación de enfermedades parasitarias y no se permite el goce del derecho a un agua potable.

El derecho a un ambiente sano no se encuentra en una situación diferente. La expansión de la frontera agrícola a causa de grandes latifundistas ha generado deforestación y en este sentido, perdida de servicios ecosistémicos. Adicionalmente, la falta de sistemas para el manejo de basuras y excretas ha deteriorado más la calidad ambiental de manera que los principales ecosistemas circundantes a nuestras comunidades y sus cuerpos de agua se han visto afectados por la esorrentía de los desechos y ha causado la eutrofización de los mismos. Cabe llamar la atención del vertimiento de las aguas negras municipales sin ningún tipo de manejo al sistema fluvial Arroyo Grande, el de mayor dimensión de la zona.

El derecho a la salud dentro de nuestro cabildo se ve afectado directamente por el abandono del centro de salud con el que contamos, la infraestructura está en decaimiento y el personal médico no atiende razón por la cual debemos dirigirnos a la cabecera municipal de El Roble o al Hospital de Corozal, esto tiene implicaciones en la atención oportuna de las emergencias que se presentan pues las distancias son largas y la infraestructura es no adecuada.

Adicionalmente, la educación que estamos recibiendo no tiene enfoque diferencial y los docentes que están enseñando no pertenecen a nuestra comunidad. La oferta educativa

es escasa y para acceder a niveles superiores de educación es necesario desplazarnos a otros municipios, esto implica inversiones económicas en educación que pocas veces resultan posibles.

3.3.6. Municipio de Ovejas

Pese a que la principal actividad de nuestros indígenas del municipio de Ovejas es la agricultura, la falta de tierras ha limitado el ejercicio de esta actividad y por lo tanto ha dificultado el acceso a los derechos de seguridad y soberanía alimentaria. A causa de esto se ha debilitado el ejercicio comunitario la participación en procesos locales, regionales y nacionales, lo que ha causado a la pérdida progresiva de sus usos y costumbres.

Dada la pérdida y la falta de fortalecimiento de nuestras técnicas agrícolas tradicionales, en las comunidades se ha hecho frecuente el uso de la fertilización y el control de plagas y enfermedades a través de productos químicos. Esto ha socavado más en la pérdida de conocimientos sobre usos y costumbres y ha favorecido la implementación de semillas no nativas, las cuales se adecuan mejor a este tipo de manejo del cultivo.

Adicionalmente, el conflicto armado, la falta de voluntad política y los impactos de las inestabilidades climáticas y la falta de programas que atiendan dichos impactos han dificultado el acceso a los alimentos a través del auto consumo. En este sentido, muchos de nuestros indígenas han tenido que acudir a empleos informales para tener un acceso económico a la alimentación, lo que ha incurrido en el abandono de nuestros usos y costumbres y pone en riesgo su transmisión a las nuevas generaciones.

Respecto al acceso al agua potable, las comunidades cuentan con fuentes naturales y represas artificiales para obtener su abastecimiento pero no se ha establecido ningún sistema que garantice la potabilización de éstas. En este sentido es posible que a través

del consumo, principalmente del agua de las represas que son frecuentadas por animales, se favorezca la propagación de enfermedades, situación que impide el goce pleno del derecho al agua potable.

En lo que respecta al ambiente, no se cuenta con un sistema de alcantarillado ni de manejo de basuras y tampoco se ha contado con la presencia de las autoridades ambientales municipales y regionales, lo que ha causado la acumulación e inadecuada disposición de este tipo de residuos que afecta el derecho a un ambiente sano de las comunidades Zenú del municipio.

Adicionalmente, la falta de presencia de las autoridades ambientales ha permitido que se presente en la zona cacería descontrolada, lo que ha afectado las poblaciones especies de fauna que son utilizados por nuestros indígenas para la subsistencia.

Por otro lado, el municipio cuenta con tres instituciones prestadoras de salud de nivel I, que prestan un servicio deficiente limitando el derecho a la salud. La atención no es proporcionada en condiciones infraestructurales adecuadas y el cuerpo médico es casi nulo, siendo las enfermeras auxiliares quienes se encargan de la atención. Para ser atendidos con niveles de complejidad más altos deben desplazarse a otros municipios.

Correspondiente a la educación, los niños cuentan con centros educativos en regular estado, que no ofrecen el servicio educativo continuo de 0 a 11. Las condiciones de infraestructura tampoco son idóneas. No tienen enfoque diferencial en las instituciones educativas, ni docentes indígenas contratados.

3.3.7. Municipio de Sampués

La agricultura y la fabricación de artesanías son las principales fuentes de acceso a los alimentos de manera física y económica de las comunidades Zenú del municipio, pero la

falta de tierras, la inestabilidad climática y la baja remuneración de los productos manufacturados no han permitido que exista un abastecimiento permanente. No se encuentran garantizados nuestros derechos de seguridad y soberanía alimentaria, al no existir garantía alguna del acceso a los alimentos en un futuro, no existen medidas de almacenamiento de semillas nativas y no es posible obtener los alimentos necesarios que componían la dieta ancestral dada la escasez de los recursos, siendo limitado el consumo de proteína animal y restringiéndose la adquisición de productos a los de menor valor y generalmente de poco aporte alimenticio.

Como es común en todos los municipios donde hace presencia nuestro pueblo, a pesar de la existencia de programas sociales que busquen brindar a diferentes poblaciones subsidios para la alimentación o los alimentos en sí, no se encuentra garantizada su cobertura total, y éstos se encuentran constituidos por alimentos que generalmente no hacen parte de la dieta tradicional. Respecto al agua para consumo, proviene de represas artificiales y de cuerpos subterráneos sin ningún tipo de tratamiento para su potabilización, situación que representa un riesgo de contaminación dado el constante contacto de los animales con el recurso y la posible contaminación con los desechos alojados en los pozos sépticos.

En lo concerniente a la dominación y explotación dentro de nuestro pueblo vemos que, dada la falta de oportunidades para el desarrollo de la agricultura, muchas de las familias se ven obligadas a buscar recursos económicos a través de trabajos informales que no brindan condiciones dignas, y no garantizan la adecuada remuneración por las labores realizadas. Adicionalmente, han acudido a préstamos agiotistas, los cuales cobran intereses más altos de los permitidos legalmente, aprovechándose de la necesidad de recursos de los indígenas. Adicionalmente, desde el año 2000 se han visto casos de extorsión, hostigamiento y asesinato, por parte de diferentes actores armados, que se han apoderado de los recursos de transferencias y de los proyectos de los cuales las comunidades han sido beneficiadas.

La explotación maderera y la introducción de especies foráneas han generado la pérdida de hábitats para un gran número de especies de fauna, a semejanza, ha puesto en riesgo el sostenimiento de cuerpos de agua, afectando así la obtención del recurso hídrico y de proteína animal a través de la cacería tradicional. A su vez, en varias de nuestras comunidades se adelanta un proceso de exploración sísmica de hidrocarburos, lo que puede representar una amenaza frente a un escenario de explotación dados los impactos ambientales, culturales, sociales y económicos que este tipo de actividad conlleva.

La salud se encuentra amenazada, ya que contamos con pocos centros de salud, y los que existen, están abandonados, o carecen de personal médico que los atienda, obligando a los pobladores a desplazarse a la cabecera municipal. Los medicamentos que se recetan son generalmente analgésicos y desinflamantes, que intentan paliar enfermedades que requieren otros tratamientos. Así mismo, los niños y niñas no están teniendo una alimentación adecuada que les permita estar sanos, y las aguas no potables nos están enfermando. En consecuencia, la atención que se presta es regular y no oportuna, adicionado a que los servicios de urgencias no son ágiles en el proceso de revisión de los pacientes, y la atención de la población en situación de discapacidad no tiene enfoque diferencial.

La educación que se imparte no es de buena calidad e impide que los estudiantes accedan en igualdad de condiciones a competir por cupos y acceso a la educación superior. Pocas, ofrecen los niveles educativos de 0 a 11, razón por la cual los estudiantes se deben desplazar a otras veredas o a la cabecera municipal para culminar sus estudios. Los docentes son contratados por la Gobernación de Sucre y no poseen ningún vínculo con el pueblo indígena, esto dificulta la inclusión del enfoque de educación propia que se ha venido implementando incipientemente en algunas de las instituciones educativas. Adicional a esto, los docentes no están dictando las clases y cuando lo hacen, no las dictan completas.

Dentro de los cabildos y las zonas rurales que los acogen, hay escuelas que no cuentan con infraestructura adecuada, algunas de ellas no tienen paredes y propician el ausentismo entre clases de estudiantes, el ingreso de personas ajenas a la institución, así como la irrupción de animales a los salones. Además, no tienen espacios para la recreación de los estudiantes, tales como campos deportivos, bibliotecas o ludotecas, esto alimenta la creciente tendencia de expendio de sustancias psicoactivas, matoneo y violencia al interior de los colegios.

Nuestros niños y jóvenes tienen pocos espacios para la recreación, y la mayoría de instituciones educativas reportan que no existe al interior de las escuelas espacios recreativos, o lúdicos. Así mismo, las familias carecen de intimidad y espacio adecuado para su desarrollo, bienestar y unidad debido al hacinamiento al interior de las viviendas.

3.3.8. Municipio de San Antonio De Palmito

De acuerdo con la información recolectada a en las comunidades del municipio de San Antonio de Palmito cabe resaltar la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, principalmente los relacionados con la seguridad y soberanía alimentaria, la dominación y explotación, el ambiente, la salud, la educación y la familia.

Dada la falta de tierras de las comunidades, los cultivos que poseen las familias solo abastecen parcialmente la alimentación y se requiere de la práctica de otras labores que generalmente son mal remuneradas y que se presentan de manera esporádica, lo que no permite el goce de una seguridad o soberanía alimentaria. De esta forma no se cuenta con los recursos que garanticen el acceso a los alimentos y, dada la dependencia de los productos ofrecidos en los mercados locales, el tipo de alimentos consumidos se ve sujeto a la oferta y el precio de los mismos. Adicionalmente, el consumo de proteína animal es muy limitado dado su costo y la inestabilidad climática ha causado la pérdida de cosechas lo que ha causado desabastecimiento y problemas de nutrición.

Por otra parte, a pesar de que el trenzado de caña flecha representa una de las principales actividades económicas para las comunidades Zenú del municipio, el pago por el producto elaborado no corresponde al tiempo invertido por las personas y los beneficios obtenidos por los artículos elaborados se concentran en los intermediarios. En este sentido existe una explotación de los artesanos indígenas al concentrarse las ganancias de forma inequitativa en los comerciantes, quienes no ofrecen un pago justo por el trenzado elaborado.

En lo que respecta al ambiente, la falta de sistemas adecuados para el manejo de las excretas así como de los residuos sólidos ordinarios producidos en las viviendas y el excesivo uso de agroquímicos han generado la contaminación de los cuerpos de agua, situación por la que se han presentado enfermedades parasitarias en la población.

En cuanto a la salud, la planta física y la dotación médica de los centros de salud son deficientes. El hospital de Palmito presenta fallas estructurales, hay demoras en la atención de los pacientes, las citas médicas se dan mucho tiempo después de haberlas solicitado, no se encuentran frecuentemente los medicamentos en la farmacia y se recetan los mismos medicamentos para todas las enfermedades. El recurso humano y la preparación de los médicos son reducidos. Los pacientes deben conseguir por sí mismos, mecanismos de atención, como ocurre en los casos en los que al hacer una intervención quirúrgica el enfermo debe buscar un donante para acceder a la transfusión de sangre. La estructura vial es mala y los pacientes se exponen a los riesgos de ser trasladados en vehículos no adecuados por carreteras difícilmente transitables. La pobreza, los malos hábitos de alimentación, y la falta de potabilización del agua han generado problemas graves de desnutrición, y enfermedades gastrointestinales en los niños.

Con respecto a la educación, hay instituciones y centros educativos que prestan el servicio de educación en algunos cabildos, sin embargo, en la mayoría de casos solo se ofrecen niveles de preescolar y básica primaria en las zonas rurales y bachillerato en la cabecera

municipal. La infraestructura es regular, y las vías de acceso son riesgosas para los niños. Cuentan con pocos docentes de planta, y poca variedad en los saberes ofertados, así mismo, los profesores son, en su mayoría no indígenas, factor que dificulta la incorporación de un sistema de educación propia. Las familias no cuentan con los recursos necesarios para brindar a los hijos acompañamiento económico para transporte y útiles escolares.

Existen pocas oportunidades de continuar la educación a nivel superior, la oferta educativa se orienta a estudios técnicos, los padres cuentan con pocos recursos para brindar un acompañamiento continuo, y la conformación de nuevos hogares por parte de los jóvenes dificultan la continuidad de los estudios superiores. A pesar de que se han incorporado cátedras de etno-educación y cultura Zenú, no se ha implementado un enfoque diferencial integral en los centros educativos.

Por otra parte en relación con la familia, cuando los niños nacen con bajo peso son separados de las madres para ser custodiados y alimentados en los centros de salud, esto desde la concepción indígena de la familia debilita aún más a los niños y viola su derecho a no ser separados de las madres, así mismo implica un rompimiento entre los lazos primarios de la lactancia que se establecen en la relación madre-hijo.

3.3.9. Municipio de San Marcos

Nuestras comunidades del municipio de San Marcos poseen como sistemas productivos principales la agricultura, la elaboración de artesanías y la pesca. A través de estos sistemas han tenido acceso a los alimentos a través del autoconsumo y la adquisición de recursos económicos por su comercialización, pero la falta de un territorio colectivo ha imposibilitado el goce de la seguridad y la soberanía alimentaria. En este sentido, nuestros cabildos del municipio no cuentan con un territorio propio que les garantice un autosostenimiento y se ha favorecido la pérdida de la cohesión comunitaria, poniendo en

riesgo los conocimientos culturales relacionados con las técnicas propias de pesca y elaboración de artesanías.

Por tal motivo la necesidad de arrendamiento de parcelas y el condicionamiento del modo de producción por parte de los propietarios ha causado el abandono de nuestros sistemas de manejo tradicionales y ha fomentado la implementación de agroquímicos aumentando los costos de producción y afectando la soberanía alimentaria de los cabildos.

Respecto al acceso al agua potable, se cuenta en general con sistemas de acueductos locales pero el agua suministrada no recibe ningún tipo de tratamiento y su abastecimiento no es permanente, de manera que no se tiene garantizado el derecho al agua potable.

Relacionado con la libre disposición de riquezas y recursos naturales, en el municipio se ha adelantado la exploración sísmica para la explotación de gas natural y a pesar de la realización de la consulta previa con algunas de las comunidades, no todas han sido tenidas en cuenta y no se ha cumplido con los acuerdos establecidos en las mismas. Dicha situación además de vulnerar su derecho fundamental de la consulta previa, ha relacionado por nuestros indígenas con la desecación de pozos de agua viva los cuales han sido inutilizados para el abastecimiento.

Con relación a actividades como la pesca, la presencia de actores armados ha impedido su realización en la Ciénaga de las Flores, limitando la movilidad y afectando una de las principales fuentes de obtención de proteína animal y recursos económicos de las comunidades.

Por otra parte, la no existencia de sistemas adecuados para el manejo de las basuras así como de las excretas humanas ha afectado el derecho a un ambiente sano, situación que es una de las principales causas de contaminación de los cuerpos de agua y la eutrofización de los mismos. Adicionalmente la explotación agrícola y pecuaria han

causado la pérdida de biodiversidad de la zona y los servicios ecosistémicos relacionados dada la deforestación, los cambios en la dinámica de los cuerpos de agua y la contaminación con agroquímicos que generan estas actividades.

En San Marcos se tiene una atención en salud de mala calidad debido a varios aspectos, por un lado no se cuenta con infraestructura adecuada, ni con equipamiento de los centros de salud, así mismo, se carece de constancia en la atención y en muchas ocasiones los médicos no se presentan. No hay especialistas y cuando asisten por situaciones de emergencia o en brigadas de salud lo hacen con mala disposición. En algunos cabildos el acceso a los centros de salud es muy difícil pues tienen que desplazarse en lancha durante aproximadamente dos horas para ser atendidos y cuando la situación es grave generalmente el tiempo y las condiciones del desplazamiento no alcanzan para salvar la vida de los enfermos. No hay celeridad en la atención y para formular medicamentos se necesita hacer trámites administrativos desgastantes que terminan en la formulación de analgésicos y medicamentos genéricos. Lo anterior ha llevado a que se estimen mucho más las soluciones otorgadas por la medicina tradicional. Hay presencia de la IPS Guacarí que presta un servicio con el que algunos cabildantes se sienten satisfechos, sobretodo porque posee servicios como la ambulancia.

La educación no respeta nuestra identidad y cultura propias, al no incluir dentro de los centros educativos las formas de aprender y transmitir los conocimientos Zenú se ha vulnerado el derecho a la educación desde una perspectiva diferencial y contextuada. La población indígena no está siendo reconocida como tal en los centros educativos, al inscribir como indígenas a nuestros hijos para el registro del SIMAT, las instituciones educativas reiteran su accionar de inscribirlos como población general. Los docentes no pertenecen a las comunidades ni tienen conocimientos sobre cultura e identidad propias, así mismo, se ha denunciado la compra de puestos profesoriales dentro del municipio dejando por fuera personas de la comunidad capacitadas para enseñar desde un enfoque étnico.

3.3.10. Municipio de San Onofre

En el municipio de San Onofre, el pueblo Zenú ha hecho de la agricultura la principal actividad económica. Ésta es ejercida a través de la producción propia o por medio de trabajos diarios relacionados, por lo que el acceso a los alimentos depende de manera física y económica de esta actividad. A pesar de esto, la seguridad y la soberanía alimentaria de las familias no se han garantizado en el sentido de que la tierra es insuficiente para una producción que garantice un abastecimiento completo y ha puesto en riesgo las prácticas, usos y costumbres relacionados. En este sentido no se cuenta con el espacio para practicar la agricultura según las tradiciones de nuestro pueblo, viéndose obligados nuestros agricultores a arrendar predios, situación que disminuye la cantidad de alimentos que se puede producir. Con respecto a los trabajos diarios, usualmente incurren en la explotación otorgando pagos insuficientes, los cuales no alcanzan a abastecer de forma económica los alimentos necesarios.

Por su parte, la principal problemática que no permite el goce de un ambiente sano y limpio son los constantes derrames de petróleo sucedidos en la estación marítima de Coveñas, y que, a través de las corrientes marinas son distribuidos por todo el Golfo de Morrosquillo. A causa de esto, se han afectado poblaciones de fauna marina, muchas de las cuales son una forma de obtención de alimento de nuestras familias, y fuente de recursos económicos por medio del comercio.

Al mismo tiempo, la falta de sistemas adecuados de recolección de basuras y eliminación de excretas ha generado la contaminación de los ecosistemas circundantes a las comunidades, principalmente de los cuerpos de agua, lo que ha favorecido situaciones de propagación de enfermedades entre la población indígena.

En lo correspondiente a la salud, los cabildos del municipio no tienen centros de salud que funcionen adecuadamente, están en mal estado de infraestructura y equipamiento, sólo

uno de ellos cuenta con personal médico en proceso de prestación del servicio rural universitario. Las vías de salida y acceso son críticas y ponen en riesgo la vida de pacientes que tienen que desplazarse a la cabecera municipal para ser atendidos. Así mismo, el hospital municipal presta mal servicio, hay poca celeridad en la atención y los medicamentos que se recetan no están acordes a las necesidades de nuestros enfermos. Es común que éstas problemáticas en salud se intensifiquen con el hecho de que la afiliación a Manexka como poblaciones indígenas ha sido difícil, y los cabildantes se encuentran afiliados como población general, negándoseles la posibilidad de acceder gratuita y diferencialmente al sistema nacional de salud.

En el aspecto educativo, a pesar de que los niños tienen acceso a la educación básica, primaria y secundaria, no cuentan con un enfoque diferencial real que atienda sus necesidades como pueblo indígena. La infraestructura escolar es regular y se afirma que la calidad es deficiente, generando desigualdades en el acceso a becas, así como a cupos en universidades.

3.3.11. Municipio de San Pelayo

Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales han sido analizados dentro del municipio de San Pelayo a la luz de la situación en materia de Soberanía alimentaria, dominación y explotación, la libre disposición de riquezas y recursos naturales, el derecho al ambiente sano, a la salud, la educación, la recreación, la familia y los bienes culturales.

Así, la inestabilidad climática que ha causado fuertes sequías e inundaciones son una de las principales problemáticas para la producción agrícola en la zona. Adicionalmente, la intervención de la Hidroeléctrica de Urrá en la dinámica natural de los afluentes ha afectado las poblaciones de peces de la Ciénaga Grande de Lorica, la cual representaba una de las principales fuentes de alimento de las familias Zenú. De esta forma el acceso

físico a los alimentos se ha visto limitado, obligándonos a buscar en empleos informales, los recursos económicos para el abastecimiento de estos.

A pesar de que la Ciénaga Grande de Lorica es un lugar de uso tradicional del pueblo Zenú, la fuerte intervención por parte de los terratenientes de la zona, y proyectos como la Hidroeléctrica de Urra, han afectado la dinámica de ésta y la fauna y flora asociada. En este sentido, no se ha respetado la autonomía de nuestro pueblo y nuestro derecho a ser consultados previamente.

Adicionalmente, el estado de los ecosistemas que rodean a la comunidad se encuentra deteriorado a causa de la contaminación con agroquímicos y aguas residuales a lo que se suma la extracción maderera. Paralelo a esto, los terratenientes de la zona han cambiado la dinámica natural de la ciénaga por la construcción de terraplenes, lo que además ha generado inundaciones en las viviendas indígenas. Dichas afectaciones han repercutido en las poblaciones de fauna local disminuyendo su abundancia considerablemente, y perjudicando a las familias indígenas que se abastecían de ésta a través de la pesca y la caza tradicional.

En salud y educación, los indígenas Zenú no hemos gozado de una formación educativa, ni de una atención en salud que respete y desarrolle la identidad cultural, tanto la alcaldía, como los centros educativos y de salud niegan la existencia dentro del municipio de pueblos indígenas. La atención, tanto de los centros de salud rurales, como de la Empresa de salud del Estado no ha sido oportuna e integral, contamos con una infraestructura física en mal estado, instrumentos médicos dañados, y pocos profesionales de la salud. Así mismo, las citas médicas tardan mucho tiempo y ponen en riesgo la vida de pacientes con enfermedades graves. En nuestro municipio, la EPS-I Manexka no ha sido autorizada por la Alcaldía, reduciendo las posibilidades de los habitantes de hacer uso de otras prestadoras del servicio. Frente a la necesidad de atención psicosocial por parte de los cabildantes no se presta ningún servicio.

En lo que concierne al derecho a la educación, el acceso a instituciones y centros educativos que ofrecen los niveles de educación preescolar, básica y media, con una calidad regular, es difícil. Se evidencia preocupación por la no inclusión de un enfoque que priorice la educación propia y el fomento de las tradiciones culturales Zenú. Los niños indígenas son discriminados por miembros de toda la comunidad escolar, negándoseles el derecho a tener una formación que respete y desarrolle su identidad cultural, una expresión de esto es que no se están matriculando los niños y jóvenes como indígenas, ni se están registrando dentro del Sistema de Matrícula SIMAT, impidiendo el goce del derecho que, como indígenas tienen, de acceder a la educación gratuitamente.

Así mismo, no se ha fomentado la creación de espacios idóneos para la recreación como parques o canchas, reduciendo las posibilidades de los niños de disfrutar del tiempo libre. La falta de espacios para la recreación, así como la violencia intrafamiliar, se expresa, entre otras cosas, en situaciones de drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes.

La falta de certificación que el Ministerio del Interior otorga a los cabildos, ha frenado el desarrollo de proyectos musicales de pitos y tambores, puesto que, el Ministerio de Cultura no acepta su participación sin la certificación como indígenas. El estado debe proteger la diversidad étnica y cultural de la nación Colombiana, sin embargo, al no reconocer la existencia del cabildo indígena, dificulta el desarrollo de proyectos culturales propios, y contribuye a la pérdida de las tradiciones culturales.

Los niños y niñas indígenas están creciendo en un ambiente de violencia ejercida desde los padres hacia los hijos. También, se reportan casos de violencia intrafamiliar, que afectan el derecho de los niños y niñas a crecer en un ambiente de armonía y unidad; y casos de violencia contra las mujeres que, violan derecho de éstas a tener igualdad de condiciones en el acceso a derechos y deberes de la pareja, así como en el respeto recíproco de los integrantes de la familia.

3.3.12. Municipio de Sincelejo

A pesar de que para los cabildos Zenú del municipio la agricultura es una de las principales fuentes de obtención de alimentos a través del autoconsumo y la comercialización, la falta de tierra ha limitado su producción y por lo tanto ha imposibilitado el goce de la soberanía y seguridad alimentaria. Dado lo anterior, esta actividad debe realizarse en terrenos arrendados lo que no es accesible para todas las familias y deteriora la situación financiera de las que lo logran vulnerando aún más su seguridad alimentaria. Por tal motivo varias de los Zenú del municipio se han visto obligados a emplearse en actividades informales donde se exponen a diferentes tipos de explotación, principalmente por la falta de condiciones dignas y una estabilidad que permita su sostenimiento.

El trenzado y la elaboración de sombreros vueltiaos constituyen la otra actividad tradicional practicada por los cabildos, pero tampoco esta actividad está exenta de la explotación. El pago por cada metro de caña fleca trenzado a \$500 pesos no remunera de manera adecuada el trabajo realizado teniendo en cuenta que una familia en un día produce entre 15 y 20 metros. Dicha situación no es suficiente para el acceso adecuado a los alimentos de las familias, lo que ha aumentado el desplazamiento socioeconómico principalmente de la población joven y amenaza la conservación de nuestra cultura.

Por otro lado, varias de las comunidades ubicadas en el municipio no cuentan con un sistema adecuado para el manejo de las excretas humanas y basuras lo que ha vulnerado el derecho a un ambiente sano. La disposición de los excrementos suele darse en pozos sépticos contruidos por los indígenas sin ningún tipo de asesoramiento o a cielo abierto, situación que favorece la propagación de enfermedades parasitarias; la disposición de basuras en las zonas rurales suele enterrarse o disponerse en zanjas descubiertas lo que genera contaminación de los cuerpos de agua y de los ecosistemas circundantes de manera que se favorece la propagación de fauna asociada a los residuos los cuales pueden propagar diversas enfermedades.

En el ámbito de la salud contamos con un acceso limitado a la atención médica en la zona rural, sin embargo, hay varios que están dentro o cerca de la cabecera municipal que poseen un mejor acceso a la atención que se proporciona en la ciudad y que ofrece servicios relativamente buenos. No hay constancia en la atención de los centros de salud rurales, pues los médicos y enfermeras atienden aproximadamente dos veces a la semana. Adicional a esto, los servicios de salud especializados con los que cuenta Sincelejo nos permiten acceder a una oferta más amplia, sin embargo, la demanda es amplia y la atención demorada.

En el aspecto educativo, poseemos dificultades para que los niños y niñas tengan continuidad en sus estudios, hay altos niveles de deserción escolar que tienen que ver con los escasos recursos con los que contamos para mantener a nuestros hijos en la escuela y proporcionarles dinero para transporte de nuestros cabildos a los centros educativos que ofrecen en nivel que requieren en educación. Lo anterior dado que los centros educativos no ofrecen la posibilidad de estudiar en una misma sede de preescolar hasta bachillerato. Solo unos pocos centros han comenzado a implementar a través de cartillas proporcionadas por el Cabildo Mayor Regional de San Andrés de Sotavento una educación propia, no obstante, es imposible decir que contamos con educación propia integral.

3.3.13. Municipio de Tolú

En el municipio de Tolú, de acuerdo a la situación evidenciada en las comunidades visitadas cabe resaltar la situación de los derechos relacionados con la soberanía alimentaria, el ambiente, la salud, la educación y los bienes culturales.

Con respecto a la seguridad y soberanía alimentaria, la falta de tierra colectiva ha causado que el aporte de la producción agrícola para el acceso a los alimentos de las familias Zenú del municipio sea muy limitado, razón por la cual los que miembros de las familias deben buscar empleos para el acceso a los alimentos de forma económica en actividades

desvinculadas de la cultura Zenú, principalmente en la empresa camaronera y de zoocría de babillas que se ubica en la zona. Adicionalmente y pese a que es común la práctica de la pesca para la obtención de proteína animal, los recurrentes derrames de petróleo han afectado las poblaciones de peces y la disponibilidad de los mismos para el consumo. Respecto a las pocas familias que logran tener un pequeño terreno para la producción agrícola, la inestabilidad climática también representa una amenaza frente a su seguridad alimentaria, ya que ha causado la pérdida de las cosechas sembradas.

De acuerdo a lo anterior, la comunidad Zenú no cuenta con seguridad y soberanía alimentaria ya que el acceso a los alimentos es limitado y dependiente de recursos económicos externos que no ofrecen remuneraciones periódicas a lo largo del tiempo, del mismo modo que la falta de programas de atención y prevención frente a las inestabilidades climáticas no garantizan el acceso permanente a los alimentos que son producidos para el autoconsumo en el futuro. Por otra parte, al no poseer un territorio donde cultivar, la soberanía sobre lo producido y consumido no tiene lugar, de manera que la dieta actual es dependiente en gran parte de los alimentos ofrecidos en los mercados locales y sus precios correspondientes.

En cuanto a lo relacionado con el medio ambiente, la inadecuada disposición de basuras y el mal manejo de las excretas representan una causa de contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos y los ecosistemas circundantes a la comunidad. Adicionalmente el paso de oleoductos cercanos a cuerpos acuíferos representa una seria amenaza de contaminación por posibles filtraciones, ubicándose el Oleoducto Caño Limón-Coveñas a aproximadamente 10 metros del pozo que surte el acueducto que surte a las familias indígenas.

Respecto al derecho a la salud, se ve limitado ya que no se cuenta con acceso a centros de salud en la zona rural, ni con infraestructura adecuada para la atención. No se cuenta con medios de transporte que permitan darle un manejo adecuado a los enfermos y las vías de

comunicación entre la zona rural y la cabecera municipal se encuentran en un estado deficiente, lo que impide una rápida acción frente a enfermedades graves.

A pesar de la instalación de un centro de salud, este se encuentra en situación de abandono y con deficiencias en la infraestructura. No hay médicos ni enfermeras que atiendan. No se cuenta con ambulancia para transportar enfermos con alto nivel de riesgo y a los pacientes no se les está atendiendo oportunamente; las citas que se otorgan son demoradas frente al desarrollo de las enfermedades.

Por su parte, el derecho a la educación no se encuentra en un estado diferente. No e instituciones educativas que ofrezcan el servicio de educación media. Los estudiantes deben desplazarse al Municipio de Coveñas para acceder a este nivel. No se cuenta con una estrategia de educación propia dentro de las instituciones educativas oficiales, que incluya las necesidades e intereses educativos del pueblo indígena Zenú. Hay un grupo importante de egresados de la educación media que no cuentan con opciones de cursar estudios de educación superior.

Al respecto de los bienes culturales, no se está apoyando de manera adecuada el emprendimiento de la asociación de artesanos que busca impulsar proyectos productivos a base del aprendizaje de la artesanía en caña flecha.

3.3.14. Municipio de Tolú Viejo

De acuerdo con la información recolectada a través de los cabildos visitados en el municipio de Tolú Viejo y dadas las problemáticas en común se hace necesario analizar la situación de los derechos que se relacionan con la seguridad y soberanía alimentaria, la libre disposición de riquezas, el ambiente, la salud, la educación y la familia.

La seguridad y la soberanía alimentaria de las comunidades del municipio de Tolú viejo no pueden gozarse plenamente debido principalmente a la falta de tierras. A pesar de que la agricultura es nuestra principal labor tradicional de subsistencia, las comunidades ubicadas en el municipio no cuentan con un espacio apropiado para una producción que garantice el acceso a sus alimentos a través del autoconsumo, lo que es agravado por la poca oferta de tierras para el arriendo, situación que a pesar de permitir la producción para el acceso físico a los alimentos, normalmente genera abusos de los dueños de los predios hacia nuestros indígenas. En este sentido, se ha recurrido al abandono de nuestras prácticas tradicionales para lograr acceder a los alimentos de forma económica, lo que pone en riesgo la preservación de nuestros usos y costumbres y además expone a nuestros indígenas a posibles explotaciones, incurriendo en empleos que no remuneran de manera justa las labores ejecutadas y que carecen de condiciones dignas para el trabajador.

Por otra parte, en el municipio, uno de los sectores económicos más expandidos corresponde a la explotación de piedra caliza. Este tipo de actividad y el otorgamiento de títulos mineros han constituido la vulneración reiterada al derecho a la libre disposición de riquezas y recursos naturales. En este sentido, el Estado a través de la Agencia Nacional de Minas ha otorgado a terceros el derecho a la explotación de las riquezas que contienen nuestros territorios sin ningún tipo de consulta, lo que vulnera lo establecido en convenios internacionales sobre la consulta previa e ignora el pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto (Sentencia T-1045A de 2010). Al representar los títulos una medida administrativa que afecta al territorio y al constituir una clara amenaza a él, se hace necesaria la realización de la consulta previa para que los derechos fundamentales de nuestro pueblo sean protegidos.

Lo anterior resulta agravado tras el otorgamiento de los amparos administrativos, mediante los cuales los dueños de los títulos mineros han usado a la fuerza pública para

desalojar a nuestros indígenas de las zonas de extracción, privándolos de una actividad tradicional desarrollada en un territorio que en principio nos pertenece.

Por otra parte, la minería industrial de piedra caliza ha afectado el derecho de nuestras comunidades de gozar de un ambiente sano, dada la contaminación de la atmosfera, de los cuerpos de agua y de los cultivos producida por el material suspendido tras la explotación. De igual forma, la alta modificación del paisaje y la deforestación han fragmentado los corredores biológicos y disminuido la abundancia de varias especies de fauna.

Respecto al saneamiento básico, la falta de sistemas de recolección de basura y de eliminación de las excretas también ha generado la contaminación atmosférica, los ecosistemas que rodean a las comunidades y sobre todo a los cuerpos de agua, exponiendo a nuestras comunidades a la proliferación de enfermedades parasitarias.

Con respecto a la salud, la situación del municipio es crítica, los centros de salud ubicados en las zonas rurales se encuentran deteriorados, presentan fallas infraestructurales y poco equipamiento para la atención, cuando se presentan problemas complejos, nuestros enfermos deben ser llevados a la cabecera municipal de Toluviejo, por carreteras en mal estado al Hospital municipal que tarda en asignar citas, no cuenta con personal médico idóneo y formula medicamentos genéricos que muchos de nuestros pobladores afirman, no son adecuados para la prevención y ataque de las enfermedades. Así mismo, se han presentado casos de malos procedimientos quirúrgicos que han desencadenado en la muerte de los enfermos. No contamos con un sistema adecuado de saneamiento básico, ni con sistemas para el tratamiento del agua, y hay en las zonas aledañas explotación de piedra caliza, como consecuencia, algunos indígenas Zenú han desarrollado problemas gastrointestinales, y pulmonares graves.

En cuanto a la educación, es importante señalar que no se está ofreciendo un sistema de educación propia, y los docentes que se contratan no cuentan con el acervo cultural y la disposición para educar a nuestros hijos. En épocas de lluvia, muchos docentes que vienen de otros municipios dejan de dictar sus clases y abandonan las escuelas, adicional a esto, las lluvias afectan el desplazamiento a los centros educativos pues no contamos con vías adecuadas que interconecten los cabildos entre sí y con el municipio. La infraestructura escolar está en mal estado, las aulas no son suficientes ni adecuadas para el aprendizaje, y los espacios recreativos son reducidos. Pese a los avances en la consecución de becas por parte del cabildo mayor, el acceso a las mismas es difícil y muchos de nuestros hijos siguen sin tener acceso a la educación superior.

Las familias están viviendo en condiciones de hacinamiento recurrentes, esto ha afectado la intimidad de niños y jóvenes, así como la armonía y unidad de los núcleos familiares que entran en conflictos por el uso y apropiación del espacio.

4. DERECHO AL TRATO DIFERENCIAL

Los derechos al cuidado y al trato diferencial están contenidos en diversos instrumentos de derecho internacional ratificados por Colombia e ingresados al ordenamiento a través de catálogos de normas como la Constitución Nacional. El fundamento legal para la creación de una categorización de sujetos demandantes de una protección especial radica en sus condiciones particulares de vulnerabilidad y debilidad manifiesta que implica una observación estricta en la garantía a sus derechos fundamentales y conexos por parte del Estado a fin de defender esa vulnerabilidad que los hace especiales.

Frente a la fragilidad de esta categoría de sujetos especiales, encontramos a los que pese a pertenecer a este grupo de vulnerables, también están inmersos dentro de otro grupo de especial protección, ostentando así una doble condición de vulnerabilidad, como es el caso de aquellos que son miembros de grupos étnicos y/o en condiciones de

desplazamiento forzado. Esta doble categorización demanda del Estado un cuidado y unas garantías aún más minuciosas, las cuales, se han desarrollado por la jurisprudencia Colombiana como enfoques diferenciados y subdiferenciados.

En este orden de ideas es claro que en el pueblo Zenú nos encontramos con esta categorización de sujetos, de acuerdo con las raíces étnicas y sus afectaciones sistemáticas por causa de conflicto armado interno; estos sujetos son: mujeres indígenas, niños y niñas indígenas, discapacitados indígenas , adultos mayores indígenas y población indígena en situación de desplazamiento.

En el siguiente apartado analizaremos el estado de los derechos de cada uno de estos sujetos de especial protección, observando las principales transgresiones que ha tenido que soportar nuestro pueblo y que han derivado en vulneraciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Así pues, estudiaremos no sólo el contexto general de todo el pueblo, sino también la actuación de las entidades estatales tendiente a la protección y reparación de los derechos que se encuentren vulnerados o en riesgo de vulneración.

4.1. Mujer Indígena

La prohibición expresa de discriminación por razón de sexo contenida en la cláusula de igualdad incluida en la Constitución Política de Colombia contempla igualmente una excepción. El trato normativo diferenciado por razón de sexo que la Constitución prohíbe es aquel que es desfavorable. Pues, al tenor de los incisos 2º y 3º del mismo artículo 13 y del artículo 43 superior, dicha prohibición convive en nuestro sistema jurídico junto con el deber de proteger (dictando las medidas necesarias para ello) reforzada y especialmente a las mujeres. Lo que hace viable que a partir de la Constitución no sólo se permita sino que se obligue a un trato diferenciado por parte de la ley y las autoridades a las mujeres, para favorecerlas.

Las mujeres Zenú a lo largo de la historia hemos sido víctimas de múltiples vulneraciones a nuestros derechos fundamentales; vulneraciones que en la mayoría de los casos han quedado impunes, pues ni nuestra normatividad interna, ni la ordinaria las han considerado como tal. Es el caso de la violencia sexual como instrumento de guerra en marco del conflicto armado que tanto ha golpeado nuestra región; práctica generalizada pero también silenciada, que ha disfrutado a lo largo de los años de los más altos niveles de impunidad.

La práctica de la violencia sexual como instrumento de guerra y de dominación de la población civil, mujeres, por parte de los diferentes actores del conflicto, al igual que en muchas zonas del país, se llevó a cabo con fuerza en nuestro territorio Zenú; los episodios y las víctimas de este tipo de delitos son anónimos, pues el miedo a la repetición de la conducta y el temor al señalamiento y el desprestigio social, hicieron que los hechos nunca fueran denunciados y en la actualidad sea oculto todo lo que tenga que ver con su ocurrencia.

El desconocimiento por parte de la mujer Zenú de los protocolos de denuncia de este tipo de hechos también se convertido un cómplice del silencio y en sí, un instrumento de vulneración, el desconocimiento incluso que este tipo de conductas corresponden a un delito penado por las normas colombianas y la justicia internacional, configuran también otro motivo de silencio, aunado a ello los pocos esfuerzos de la institucionalidad por darle un trato especial y efectivo al castigo de este tipo de hechos ha permitido también su ocurrencia generalizada en el marco del conflicto. Aspecto que se puede evidenciar en el proceso de Justicia y Paz, en el cual los paramilitares desmovilizados optaban a penas alternativas a cambio de la confesión de todos sus crímenes, de los 39.546 actos confesados sólo 96 se referirían a violencia sexual²⁰. Esto demuestra que los autores de

²⁰ Cifra referida en una serie de informes publicados de 2007-2010 donde se relaciona la totalidad de los hechos punibles confesados por integrantes de los grupos paramilitares en el desarrollo de procesos judiciales adelantados en marco de la ley de justicia y paz. La cifra del total de los actos confesados no

estas violaciones no reconocen o consideran que los actos de violencia sexual sean crímenes serios.

La ocurrencia de delitos que atentan contra la integridad sexual de nuestras mujeres en el marco del desarrollo del conflicto armado, presuponen también un amplio desconocimiento de los alcances de estas conductas, pues identifica la violencia sexual sólo como acceso carnal violento (violación sexual) y no contempla otro tipo de conductas tipificadas como delitos en el ordenamiento colombiano tales como la esclavitud sexual, la esterilización forzada, el embarazo forzado, la desnudez forzada y la trata de personas, entre otras. Hechos que fueron perpetrados contra la mujer Zenú con un propósito de dominación, usurpación de tierras, trabajos domésticos forzados, venganzas, extorciones y desplazamiento que se convirtieron en estrategias de terror tan poderosas como los mismos homicidios en la zona.

Frente a los delitos en contra de la integridad sexual de nuestras mujeres, es pertinente mencionar que no sólo se llevan a cabo en el marco de la confrontación armada y que ciertas prácticas que se desarrollan en algunas de nuestras comunidades, son aceptadas culturalmente aunque configuran trasgresiones a nuestro derecho propio y la normatividad ordinaria, tal el caso de la venta de virginades, las dotes, las violaciones sexuales y cutupio²¹ reparadas económicamente y el. Estas conductas tradicionalmente llevadas a cabo por el pueblo Zenú, en menor medida en este momento, pues en décadas anteriores se presentaba su mayor comisión también configuran una fuente de vulneración de derechos consentida por las mismas víctimas.

coincide en ninguno de los informes, se toma la de 2010. Mientras que la cifra de actos de violencia sexual es igual en todos.

²¹ Delito que consiste en sostener relaciones sexuales con una mujer virgen sin haberse casado con ella, sin importar su edad.

La vulneración de derechos a la que se ve expuesta la mujer Zenú se deriva del resultado de las múltiples transgresiones a las que se ve abocado el pueblo en general y como consecuencia del contexto de pobreza y precariedad que acompaña a muchas de nuestras comunidades quienes ven en la venta de la virginidad de sus niñas o en la reparación económica de un delito como la violación una fuente de ingresos necesaria para su sustento y convierten a nuestras mujeres en sujetos cada día más vulnerables.

En este orden de ideas también se encuentra la explotación laboral surgida de esa profunda necesidad económica de muchas de nuestras familias Zenú, a las que no les queda de otra que mandar a sus mujeres a trabajar en el campo, como servicios domésticos y en toda clase de trabajos informales que también incluyen la prostitución, todos estos con condiciones y remuneraciones que trasgreden cualquier ley de carácter laboral y que se convierten en detonantes de más vulneraciones en materia de derechos. La posibilidad de conformar una familia a muy temprana edad, la necesidad de trabajar para convertirse en el sustento del hogar, sin dejar de lado el cuidado de los hijos y de la casa hace a la mujer alejarse de escenarios como la educación y la participación en las decisiones políticas de su comunidad, la falta de oportunidades laborales y educativas que se adecuan a su entorno y a sus necesidades se convierten también en un instrumento de segregación y por ende vulneración de muchos otros derechos y da pie a vulneraciones como la discriminación de género.

La participación política de la mujer Zenú es escasa, aunque se han abierto escenarios en los últimos años, pero las tradiciones machistas arraigadas en la cultura, la falta de educación y el poco apoyo incluso de sus congéneres no han permitido que la mujer tenga una participación en las esferas más altas de los órganos de decisión del pueblo Zenú y sus escenarios de participación se reducen pequeños incursiones en lo comunitario y lo local.

Las vulneraciones constantes de derechos asociados a la libertad sexual y reproductiva de la mujer que no son consideradas como tal en las comunidades y por ello se convierten

también en un detonante de desigualdad y pobreza para el género femenino, la decisión de procrear no recae en cabeza de la mujer, así como su decisiones respecto a su salud sexual, lo que ha desencadenado una presencia basta de enfermedades de transmisión sexual en el pueblo Zenú, donde resulta ser la mujer la más afectada y por pudor, vergüenza y temor a sus compañeros sentimentales pocas veces se acude a los centros de salud en busca de tratamientos adecuados.

Frente a la violencia intrafamiliar, se conoce que en el pueblo Zenú es una conducta persistente aprendida de las generaciones precedentes, por tanto aceptada culturalmente, afectando principalmente a mujeres y niños que en la mayoría de los casos lo encuentran como un hecho normal generado como consecuencia de alguna mala acción; por tanto las denuncias de violencia intrafamiliar así como de muchos de los delitos que afectan directamente a la mujer es escasa y se manejan de manera oculta tanto en las familias como en las comunidades.

Finalmente, resulta claro que algunas de las conductas que vulneran los derechos de las mujeres en el pueblo Zenú, no son denunciadas o si quiera consideradas como transgresiones por las mismas ofendidas y las comunidades, en muchos casos por arraigos culturales que las encuentran como normales, pero en otros por falta de garantías de acceso a la jurisdicción, tanto la Especial Indígena como la justicia ordinaria, desconocimiento de los protocolos de acceso, de las instituciones encargadas de conocer de estos hechos y en muchos casos como en la violencia sexual, tanto asociada como no al conflicto, falta de sensibilización de funcionarios a nivel local que les permita las mujeres acudir con toda confianza a denunciar las conductas. La impunidad, la falta de celeridad en las investigaciones, los atentados al pudor sexual que implica las denuncias hacen que las mujeres no acudan ni den a conocer las trasgresiones. El desconocimiento de normatividades como la ley 1719 de 2014 que si bien no ha sido reglamentada, otorga a las mujeres un instrumento de defensa de sus derechos y al menos en el papel elimina la

carga de la prueba en materia de violencia sexual, que es uno de los principales obstáculos para llegar al final de un proceso por algunos de estos delitos.

4.2. Niños y Niñas Indígenas

Los niños y las niñas por mandato constitucional requieren un trato diferente en función de sus condiciones especiales. Este trato debe orientarse a la protección de sus derechos y sus intereses de acuerdo a condiciones particulares conforme a lo ratificado por Colombia en diferentes instrumentos internacionales de protección de derechos. En este orden de ideas, los niños y las niñas indígenas gozan de un trato preferencial en cuanto a la protección de sus derechos en ejercicio de los enfoques diferenciales y subdiferenciales desarrollados por la jurisprudencia nacional como instrumentos para su atención y garantía de protección.

Los sujetos de especial protección en el pueblo Zenú atraviesan por una serie de limitaciones que les impide un goce efectivo de los derechos que les asisten, es el caso de los niños y las niñas. La vulneración de sus derechos como los de muchos otros sujetos depende del contexto de transgresión que aqueja a todo el pueblo, pero son ellos los más vulnerables entre los vulnerables, en los que las falencias se hacen más visibles y por ende más urgente su atención y protección.

Debido a las condiciones de pobreza de muchas de las familias de nuestro pueblo, derechos como la educación y la recreación de los niños y niñas se dejan de lado en busca de un sustento económico que les permita garantizar medianamente una posibilidad de manutención a su núcleo familiar, conformado principalmente por hermanos más chicos que ellos. En estas circunstancias, muchos niños abandonan sus estudios en los primeros años de la básica y se dedican principalmente a las labores del campo, trenzado de la caña flecha y oficios informales como vendedores de frutas y en algunos casos motaxistas, fomentando otras vulneraciones en materia laboral, pues ante la necesidad se permiten

ser explotados. En el caso de las niñas como se expuso anteriormente en el acápite de mujer indígena muchas pueden llegar a ser vulneradas sexualmente y enviadas al mundo de la prostitución.

Frente a las restricciones de los derechos a la educación y la recreación, la condición económica de las familias y las comunidades resultan no ser la única causa, las situaciones de acceso e infraestructura implican un obstáculo importante para que todos los niños y niñas indígenas Zenú tengan garantizado el goce efectivo del derecho a la educación al menos en los mínimos niveles que consagra la norma, educación básica y media. La ausencia de centros educativos en muchos de los cabildos de nuestro pueblo genera unos largos desplazamientos y en algunos casos las condiciones de las vías que en temporadas invernales se tornan peligrosas e intransitables, fomentan la deserción escolar que en ciertos casos es promovida por los mismos padres ante el peligro que puede significar para el niño o la niña asistir a la institución educativa. Respecto al acceso al derecho a la educación superior resulta particularmente complejo el ingreso de los jóvenes al nivel universitario, puesto que los cupos que están destinados en las universidades públicas para tal fin terminan por ser insuficientes y el acceso a la educación privada se hace imposible por la situación económica de las familias y las comunidades.

La conformación de familias a muy temprana edad también provoca deserción escolar, pues muchos jóvenes entre los 13 y 15 años optan por conformar su propio núcleo familiar lo que los obliga a abandonar sus estudios y dedicarse a la crianza y manutención de sus nuevos hijos.

Las condiciones del derecho a la recreación están restringidas en muchos de nuestros cabildos, pues el goce efectivo de este derecho depende del acceso de los niños al sistema escolar, y ante la falta de centros educativos en los territorios se deja también de lado la recreación y no existen escenarios para su práctica. En términos generales los niños y niñas desescolarizados entran a ser parte de la cadena de producción familiar y los

derechos como la recreación se excusa por no contarse con un espacio y un determinado tiempo para el esparcimiento.

La situación de pobreza propia de muchos de los Cabildos indígenas Zenú también afecta de manera significativa la salud y el bienestar de los niños, el consumo de aguas no potables, el mal estado y hacinamiento en las viviendas hacen que sea común en los niños las enfermedades infecciosas y malestares estomacales, así como la desnutrición generada por una incompleta y desbalanceada alimentación, situación atendida a través del Estado y el Gobierno Mayor mediante campañas de promoción y prevención y programas institucionales de apoyos económicos y sociales que resultan ser insuficientes para mitigar la gravedad de la situación.

Frente a flagelos como el maltrato intrafamiliar, se resalta la falta de denuncia de los hechos, pues como se mencionaba en el acápite de mujer indígena esta conducta resulta ser socialmente aceptada y culturalmente arraigada, considerada por los afectados como una consecuencia de unos de sus malos actos.

4.3. Discapacitados indígenas

La Constitución Política de 1991 al consagrar a Colombia como Estado Social de Derecho, estableció unos principios inherentes a las personas, los cuales son inalienables, imprescriptibles e inembargables, dentro de los que se encuentra la obligación del Estado de velar por el bienestar de todas las personas que habitan el territorio nacional, especialmente aquellas que por su condición económica, física o mental se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta.

Nuestro pueblo Zenú no es ajeno a esta difícil situación, pues en cada uno de los Cabildos que conforman el Resguardo de San Andrés de Sotavento habita de 2 a 5 personas en situación de discapacidad, sumando un total de aproximadamente 1.500 personas en esta

condición. Así pues, podemos afirmar que hay un abandono total por parte del Estado y sus entidades territoriales, pues pese al conocimiento que se tiene sobre la presencia de estos sujetos de especial protección, en ningún caso se evidencia la existencia de un programa con enfoque diferencial que permita a cada uno de ellos recibir un tratamiento especial o acorde a su condición. Así pues, el servicio de salud prestado por Manexka IPS, no goza de un procedimiento coherente y diferenciado, simplemente brindan el servicio de salud sin tener en cuenta la situación especial de cada una de ellas.

En el mismo orden de ideas, los miembros de nuestro pueblo que están en situación de discapacidad son víctimas de discriminación, pues son señalados por algunas personas como locos o enfermos. Así pues, se hace necesaria la presencia efectiva del Estado, para que a través de planes, programas y proyectos brinde una atención especial y personalizada a estas personas que la misma Constitución Política considera como sujetos de especial protección y sus derechos son considerados como fundamentales.

Por otra parte, en nuestro pueblo Zenú poseemos gran riqueza cuando de conocimiento, tradiciones y costumbres se trata, pues pese a que con el transcurrir de los años se han ido extinguiendo, nuestros adultos mayores juegan el papel más importante, toda vez que, es en ellos en donde habita el mayor conocimiento de nuestras prácticas culturales. Sin embargo, las condiciones en las que la mayoría de ellos se encuentra, deja en evidencia la desigualdad y falta de atención de la que son víctimas, desconociendo los derechos que le son inherentes por el sólo hecho encontrarse cobijados bajo la condición de debilidad manifiesta. Así las cosas, se hace necesario hacer especial relevancia sobre la situación por la que atraviesan las personas de la tercera edad en nuestro territorio, pues la deficiente prestación de los servicios de salud, aunado a la falta de acceso a los servicios públicos, la precaria situación económica y el irrespeto del que son víctimas, han desmejorado a todas luces la calidad de vida de estas personas.

Actualmente, el único programa del que se ven beneficiados los adultos mayores de nuestro pueblo, es el otorgado por el Programa Colombia Mayor, el cual consiste en la entrega de un subsidio bimestral cuya suma oscila entre los \$35.000 y los \$75.000, convirtiéndose este, en la única fuente de ingreso que recibe este grupo de especial protección. Sin embargo, se hace necesario hacer la salvedad que del Programa Colombia Mayor no todos los adultos mayores son beneficiarios, lo que significa que algunos de ellos se encuentran totalmente desprotegidos económicamente, pues no gozan de ningún tipo de salario, toda vez que, por su avanzada edad no pueden laborar, como tampoco reciben pensión por el tiempo que laboraron durante toda su vida.

En este sentido, es de suma importancia y urgencia la intervención de todas las autoridades estatales en la protección de nuestros adultos mayores, ya que ellos son la principal fuente de conservación cultural y patrimonial que actualmente goza nuestro pueblo Zenú, siendo el Estado el obligado a garantizar las condiciones dignas justas a las que tienen derecho.

4.4. Desplazados Indígenas

Nuestro pueblo indígena Zenú desde los años sesenta ha sido víctima del conflicto armado interno que atraviesa el país en sus diferentes regiones. Así las cosas, la violencia que han acaecido los miembros de nuestras comunidades ha sido devastadora, pues se han perpetuado incursiones de los grupos al margen de la ley a nuestros pueblos, arrojando como saldo innumerables asesinatos, desplazamientos, reclutamientos forzados, amenazas y todo tipo de vejámenes que atentan no sólo contra la legislación interna, sino también contra los Derechos Humanos y contra el Derecho Internacional Humanitario.

Así pues, nuestro pueblo es sinónimo de lucha incansable, pues pese a que el Estado no ha brindado las garantías suficientes para combatir la violencia, los Zenúes hemos dado hasta nuestras vidas por la pervivencia de nuestra cultura. Es por ello, que podemos afirmar que

el común denominador de la guerra vivida por nuestras comunidades indígenas ha sido el desplazamiento. Dicha situación se ha presentado en diferentes modalidades dentro de las que se encuentra principalmente el que se realiza en grupos o de forma individual hacía las ciudades más cercanas, al igual que la migración a otros grupos o comunidades étnicas y el que se realiza a los territorios constituidos como resguardos.

Con lo anteriormente descrito, las familias que han tenido que abandonar sus territorios, han atravesado una situación de pobreza que hasta la fecha continúa vigente, encontrándose en abandono total por parte del Estado, pese a que éste, está en la obligación constitucional de brindarles una protección y trato preferencial por el sólo hecho de no sólo ser desplazados, sino también miembros de una comunidad étnica. En lo que respecta a la atención brindada a nuestro pueblo, se hace necesario recalcar que la poca atención o ayuda que reciben es deficiente o completamente nula, pues la mayoría si bien se encuentran inscritas en programas de atención para población desplazada, hasta el momento no han recibido ningún tipo de ayuda humanitaria, como tampoco se les ha otorgado la facultad de regresar a su lugar de origen con las garantías que dicha situación no se va a volver a repetir.

En este orden de ideas, las familias en situación de desplazamiento no gozan de un mínimo vital, que les permita vivir dignamente en el lugar donde se encuentren asentados, es decir, no cuentan con un sustento para poder satisfacer las necesidades básicas como alimentación, vestuario, salud, educación, vivienda y recreación. Lo anterior, se suma a la discriminación de la que son víctimas debido a su condición, toda vez que, algunos de los miembros de nuestra comunidad, consideran que ser desplazado es motivo de deshonra.

Así las cosas, se hace necesaria la intervención del Estado y sus entidades territoriales, para que a través de planes, programas y proyectos brinden una atención diferenciada para nuestra comunidad que ha sido víctima de desplazamiento como consecuencia del

conflicto armado interno que ha golpeado al país durante las últimas décadas. Dicha atención debe ofrecerse de manera efectiva y urgente, teniendo en cuenta la calidad de indígenas que ostentamos, pues, hasta el momento los programas existentes son lentos y no diferenciados. De igual forma, se debe tener en cuenta que dentro de las garantías que se ofrezcan debe contemplarse la de acompañamiento de retorno y seguridad de no repetición, pues se han presentado casos, en donde las familias han retornado a sus territorios, pero un tiempo después deben volver a abandonarlos, pues los grupos armados que continúan azotando la zona los despojan sin contemplación alguna.

Para concluir, en nuestra comunidad Zenú requerimos la presencia del Gobierno Nacional, para que de forma prioritaria, procedan a dar cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Política de Colombia y por las altas Cortes, en lo referente al trato preferencial que debe dárseles a las víctimas del desplazamiento, especialmente a los indígenas como sujetos de especial protección constitucional.

5. DERECHO A LA REPARACIÓN

Los derechos consagrados bajo la figura de reparación integral presuponen del Estado colombiano la obligación de resarcir sistémicamente a las víctimas de violencia asociada al conflicto armado, tanto por su condición de garante de los derechos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, como por disposiciones de la jurisdicción internacional. Esta reparación integral debe procurar el restablecimiento de los derechos vulnerados y garantizar la no repetición de los hechos vulneradores, ofreciendo garantías de estabilidad socioeconómica, psicosocial y reales opciones de desarrollo en condiciones de equidad y seguridad.

La Reparación Integral está compuesta por una serie de derechos que le asisten a las víctimas, en los cuales se propende por la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición de las conductas que configuran los hechos

victimizantes, así como las garantías de justicia y verdad en todos los casos procesados. La obligación que le asiste a las instituciones del Estado en lo concerniente a la reparación Integral y la garantías de no repetición, no debe confundirse con los programas y mecanismos de asistencia humanitaria y social del Estado, ya que éstas son obligaciones autónomas y especiales que el Estado debe garantizar a todos sus ciudadanos, sin importar su condición o no de víctima.

Un punto de partida para emprender el análisis de la garantía y satisfacción de los derechos que componen la reparación integral, es entender a la víctima más que una simple destinataria de programas asistencialistas, que no comprometen políticas públicas integrales, si no personas a las que les fueron vulnerados sus derechos, y que además son sujetos políticos que fundado en su condición se les debe otorgar un papel protagónico en la construcción de alternativas que conlleven a la superar la impunidad.

En el siguiente apartado analizaremos el comportamiento las medidas de reparación contempladas en el ordenamiento jurídico nacional, desde la promulgación de la llamada ley de justicia y paz, la ley de víctimas, los decretos complementarios y los tratados internacionales suscritos por el Estado y su aplicación y ejecución en materia de víctimas, lo que nos arrojará el estado de los derechos del pueblo Zenú en lo concerniente a la reparación integral.

Para tal efecto se presenta el panorama de los derechos a la atención humanitaria, restitución y retorno, verdad, justicia, reparación y atención psicosocial en 27 de los municipios habitados por el pueblo Zenú, a los cuales el conflicto armado nos ha golpeado de manera relevante en las últimas décadas y el papel de las instituciones encargadas de garantizar estos derechos, en especial las del orden regional y local.

5.1. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

5.1.1. Municipio de San Jacinto

El municipio de San Jacinto hace parte de la región de los Montes de María, una zona de importancia geoestratégica para los actores armados. Debido a la presencia de actores irregulares, el miedo en la zona y problemas de orden público las versiones y denuncias de los miembros de las comunidades son escasas. En todo casos los Zenú ubicados en el casco urbano del municipio son desplazados, en su mayoría proveniente de las palmas, 1996, y Arenas, 1999, cuando grupos paramilitares los obligaron a abandonar los territorios.

En esta situación es imperioso precisar lo siguiente: el artículo 16 del decreto 4800 de 2011 establece que la condición de víctima es una situación fáctica que no está supeditada al reconocimiento oficial a través de la inscripción en el registro, sin embargo para acceder a los beneficios es necesario que la víctima cumpla con el procedimiento de inscripción en el Registro Único de Víctimas. El mencionado decreto contempla medidas de asistencia y atención, estabilización socioeconómica y reparación integral, entre ellas la restitución de tierras. En una situación generalizada de temor a la denuncia, donde no han ejecutado trámites de reconocimiento como víctimas, por ausencia de conocimiento o por miedo a hacerlo es imperioso estrategias y protocolos de acompañamiento y protección integrales mediante el apoyo de las instituciones para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluido el derecho a medidas de asistencia y reparación contemplados en la ley.

5.2. DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

5.2.1. Municipio de Cereté

Los cabidos presentes en el municipio de Cereté departamento de Córdoba, hemos manifestado que algunas personas han sido víctimas del conflicto armado interno que aqueja a la zona, ya sean en la modalidad de desplazamiento, desaparición forzada u homicidio, razón por la cual la mayoría de ellas se encuentran inscritas en programas de atención psicosocial ofrecidos por el Estado. Dichos programas no gozan de un enfoque diferencial para indígenas que permita menguar los acaecimientos sufridos por estos sujetos de especial protección que ha soportado la constante violencia de los grupos armados.

Así pues, en algunas ocasiones se ha recibido ayuda humanitaria que muchas veces ha sido demorada e insuficiente en proporción al número de víctimas. Sin embargo, nuestros cabildantes exponen que algunos de sus compañeros no se encuentran inscritos en ningún tipo de programa por temor a ser nuevamente víctimas del conflicto. De esta manera, específicamente se presenta el caso del Cabildo La Coroza Argentina donde sus miembros exponen que en la oficina de atención a la población desplazada carecen de formularios para la inscripción, razón por la cual no han podido ser parte de ningún programa.

Con lo expuesto anteriormente y pese a la poca ayuda humanitaria recibida, no se evidencia ningún tipo de política encaminada a la búsqueda o esclarecimiento de la verdad y a la aplicación de una justicia. Frente al tema de la reparación integral no se ha presentado ningún caso de forma colectiva y respecto a la reparación individual podemos aseverar que se presentaron dos casos en el Cabildo Berenjena Severá, pero desconocemos los términos en las que fueron otorgadas, pues las familias abandonaron el cabildo. Por último en lo referente a los procesos de restitución y retorno se evidencia que

se han presentado muy pocos, pues no hay una política encaminada a brindar una garantía de no repetición para las personas víctimas de desplazamiento forzado.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se hace necesaria la implementación de una verdadera política pública con enfoque diferencial para las víctimas de nuestro Pueblo Zenú que se encuentra establecida en el municipio de Cereté. Dicha política Pública debe ir encaminada a la consecución de la verdad, la justicia, la reparación y la restitución y retorno establecida de forma específica en el Decreto Ley 4633 de 2011

5.2.2. Municipio de Chimá

Los miembros de los cabildos Zenú con presencia en el municipio de Chimá, ubicado en el departamento de Córdoba, nos sentimos temerosos a la hora de exponer los casos de víctimas que se han presentado en la zona, pues no deseamos ser nuevamente sujetos pasivos del conflicto armado.

En este orden de ideas, dentro de los dieciséis cabildos presentes en el municipio de Chimá, sólo dos son receptores de población desplazada. Así las cosas, podemos evidenciar que en el municipio no existen programas de atención psicosocial para la población indígena víctima del conflicto armado, como tampoco recibimos ningún tipo de ayuda humanitaria. De igual manera no hay presencia de una política pública encaminada a la consecución de la verdad y en ninguno de los dos cabildos se hizo efectiva la aplicación de la justicia. Respecto al tema de la restitución de tierras, no ha habido ningún proceso tendiente a que esta medida sea implementada y se garantice el retorno en las mejores condiciones para las personas víctimas del despojo. Por otra parte y de acuerdo con los últimos años, podemos asegurar que los demás cabildos que están presentes dentro del municipio no se reportan hechos de violencia ni desplazamiento forzado.

5.2.3. Municipio de Chinú

En el municipio de Chinú ubicado en el departamento de Córdoba, se presenta el caso de varios de nuestros líderes Zenú que fueron asesinados en la lucha por la recuperación de tierras causando con ello graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, que hasta el momento no han sido objeto de reparaciones colectivas ni individuales, ni atendidas a través de programas psicosociales.

Así pues, la situación del municipio referente a las víctimas del conflicto armado colombiano se evidencia en el desconocimiento total de los beneficios a los que tenemos derechos por nuestra condición, pues aunque en su gran mayoría nos encontramos inscritos como víctimas, no existe claridad respecto del tiempo en que debemos recibir las ayudas. En lo concerniente al tema de la verdad, si bien es cierto hay un registro de víctimas, no existe una política pública con enfoque diferencial para la comunidad Zenú que permita un esclarecimiento de los hechos y por tanto la aplicación de una justicia.

Respecto a la restitución de tierras, no se ha presentado hasta el momento ningún proceso. Excepcionalmente se presenta el caso del Cabildo Bgarpicar en donde en 1992 los miembros del cabildo fueron víctimas de desplazamiento forzado por parte de grupos al margen de la ley, sin embargo y una vez superada la situación cuatro meses después decidieron retornar a su territorio, ello sin la intervención de ninguna institución estatal.

5.2.4. Municipio de Ciénaga de Oro

En el municipio Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba, pese a que se han presentado diferentes acciones violentas contra nuestra población, los miembros de los cabildos Zenú presentes en el municipio no sentimos confianza a la hora de exponer la situación actual de las víctimas de dicho conflicto, pues todavía persiste el temor que los hechos de violencia se repitan nuevamente. En este orden de ideas no tenemos

conocimiento si las víctimas reciben algún tipo de atención psicosocial o ayuda humanitaria, como tampoco si han sido objeto de reparación integral. En lo referente a los procesos de verdad, justicia y restitución de tierras no se evidencian programas con enfoque diferencial que permita cualificar y cuantificar la población indígena que ha sido objeto de vulneraciones.

5.2.5. Municipio de La Apartada

En el municipio La Apartada ubicado en el departamento de Córdoba registramos las principales víctimas en el Cabildo Tierra Santa, en donde se han presentado no sólo desplazamientos sino también asesinatos de sus miembros. Dentro de la lista de víctimas aportada por nuestra comunidad, se observa que actualmente no hay un registro de víctimas, por cuanto no han querido denunciar los hechos por temor a que los grupos armados tomen represalias en su contra. Así pues, no hay se adelantan procesos de atención humanitaria ni se brinda una atención psicosocial para dichas personas. De igual forma y respecto a los procesos de verdad, justicia reparación integral y restitución de tierras no se tiene conocimiento si existen y están siendo aplicados tal como lo indica el Decreto – Ley 4633 de 2011.

5.2.6. Municipio de Lorica

En el municipio de Lorica, Córdoba, hemos registrado varios homicidios y desplazamientos en los últimos años debido a la fuerte influencia de los grupos al margen de la ley y que hacen presencia en la zona. De acuerdo con lo manifestado por nuestros miembros de la comunidad y pese a los actos de violencia ocurridos recientemente las víctimas no han recibido ayuda humanitaria y atención psicosocial mediante ninguna institución estatal. La verdad de los hechos acaecidos por algunas personas se desconoce totalmente, razón por la cual no se ha podido adelantar ningún proceso de justicia que permita que los responsables paguen por los daños causados. En concordancia con lo anterior hasta el momento no se han presentado en ningún caso la reparación integral de las víctimas y

mucho menos de restitución de tierras. Así las cosas, podemos reflejar un desconocimiento total frente a los beneficios y derechos que tienen las personas que han sido víctimas del conflicto armado interno, especialmente cuando se trata de grupos indígenas.

5.2.7. Municipio de Momil

En el municipio de Momil, ubicado en el departamento de Córdoba nuestra comunidad manifiesta que pese a que el municipio se evidenció la presencia de grupos armados al margen de la ley, las situaciones de desplazamiento, asesinatos, desapariciones y reclutamiento forzado fueron escasas. Sin embargo, los cabildantes que han sido víctimas del conflicto armado, hasta la fecha no han recibido ningún tipo de atención psicosocial ni humanitaria con enfoque diferencial, que confieran a estas víctimas unas condiciones igualitarias frente a la vivienda, alimentación y atención médica. En este mismo sentido, no se evidencian medidas por parte del Estado tendientes a la implementación de mecanismos para la recuperación de los territorios de los que han sido despojados algunos miembros de nuestra comunidad. En lo referente a la verdad, la justicia y la reparación nuestros cabildantes manifiestan que no hay programas que permitan el esclarecimiento de los hechos acaecidos durante el conflicto, razón por la cual, no se han judicializado a los responsables de dichos vejámenes. Por su parte, la reparación integral no se ha hecho efectiva en su totalidad, pues se ha ido implementado muy lentamente, lo que significa que las condiciones en las que todavía se encuentran algunas de las víctimas, permanecen vigentes hoy en día.

5.2.8. Municipio de Planeta Rica

El municipio de Planeta Rica ubicado en el departamento de Córdoba no ha sido ajeno a la violencia que ha azotado la zona. De acuerdo a lo manifestado por nuestra comunidad, podemos evidenciar que pese a que hay víctimas del conflicto armado interno, también

hay un temor a denunciar los hechos de desplazamiento y homicidios acaecidos por los cabildantes. Es por ello, que actualmente no se han presentado denuncias de los hechos victimizantes, pues pese al miedo no hay un acompañamiento por parte del Estado. Así las cosas, las víctimas del conflicto armado no han recibido ningún tipo de atención psicosocial ni ayuda humanitaria. Por otra parte los proceso de verdad, justicia, reparación integral y restitución de tierras son inexistentes en el municipio, desconociéndose con ello los beneficios y derechos de las víctimas del conflicto armado interno colombiano establecidos en el Decreto – Ley 4633 de 2011.

5.2.9. Municipio de Pueblo Nuevo

En el municipio de Pueblo Nuevo en el departamento de Córdoba se evidenció una fuerte violencia desde la década de los ochentas, razón por la cual las víctimas de nuestro Pueblo Zenú han sido innumerables. Así pues, los habitantes de nuestro municipio en la actualidad continúan con el temor de sufrir nuevamente la barbarie que los azotó en años anteriores, dejando en la impunidad todos los sucesos de los que fueron víctimas. Muy pocos casos son los que hoy en día se encuentran registrados ante las autoridades competentes.

Los principales hechos de violencia presentados en esta zona son el desplazamiento y múltiples homicidios perpetrados por los grupos armados presentes en el municipio. Específicamente se expone el caso del Señor Leovigildo Hoyos, quien es víctima del desplazamiento forzado y que una vez denunciado el hecho, sólo recibió por parte del gobierno una ayuda alimentaria y de vivienda por un periodo de tres meses. Pese a lo anterior, hasta el momento no tiene conocimiento del estado del proceso como víctima, pues las medidas tendientes a la verdad, la justicia, la reaparición y la restitución no se han hecho visibles. De igual manera se presenta el caso de Doña María y Eduardo Cáceres que pese a estar inscritos en el Registro Único de Población Desplazada no han recibido

atención psicosocial ni ayuda humanitaria, como tampoco han sido reparados integralmente por los daños sufridos a consecuencia del conflicto armado.

Así las cosas, se puede evidenciar que nuestros miembros víctimas presentes en municipio de Pueblo Nuevo pese a que están debidamente registradas, los procesos tendientes a la verdad, la justicia, la reparación integral y la restitución de tierras son inexistentes.

5.2.10. Municipio de Purísima de la Concepción

En el municipio de Purísima de la Concepción, ubicado en el departamento de Córdoba nuestra comunidad manifiesta que pese a que el municipio es corredor de grupos al margen de la ley por su cercanía al Golfo de Morrosquillo, razón por la cual, en el territorio hay presencia de desplazados, que hasta la fecha no han recibido ningún tipo de atención psicosocial ni humanitaria, que concedan a estas víctimas unas condiciones dignas en cuanto a alimentación, vivienda, aseo personal y atención médica. Por otra parte, no se evidencian medidas por parte del Estado tendientes al desalojo de los grupos armados que habitan en nuestro municipio, como tampoco se han implementado medidas para la recuperación de los territorios que están en manos de dichos actores. En lo referente a la verdad, la justicia y la reparación nuestros cabildantes manifiestan que no se presentan, por cuanto no hay un esclarecimiento de los hechos acaecidos durante el conflicto, razón por la cual, no se han judicializado a los responsables de dichos hechos permitiendo que aún continúen imputes todos los delitos. Por su parte, la reparación integral no se ha hecho efectiva, lo que significa que las condiciones en las que se encuentran los miembros de nuestra comunidad que han sido víctimas, permanezcan vigentes hoy en día.

De igual manera, se hace necesario referir, que otro de los principales hechos de violencia que hace presencia en el municipio es el reclutamiento de jóvenes para la conformación de bandas criminales, hechos en los que no es visible la presencia del Estado con

programas que permitan que los jóvenes accedan a instituciones educativas para que así tengan una opción de vida mejor y diferente a la que les ofrecen los grupos armados.

5.2.11. Municipio de Sahagún

En el municipio de Sahagún, departamento de Córdoba, la afectación más directa que ha sufrido nuestro pueblo es el homicidio en persona protegida, el desplazamiento individual y colectivo y la desaparición física de sus integrantes a manos de grupos paramilitares.

Si bien, el gobierno nacional adelanta algunos programas sociales que han llegado a algunas comunidades llegan al cabildo como familias en acción, ICBF, red unidos y adulto mayor, esto no cubre a toda la población y no goza de un enfoque diferencial para atender a los miembros de nuestro pueblo. Pese a la afectación sufrida por la muerte de nuestros integrantes, el desplazamiento de familias y otras afectaciones a nuestros derechos, poca atención hemos recibido por parte del Estado y desconocemos en gran medida las rutas de atención para víctimas del conflicto armado interno, lo que ha favorecido en gran medida la presencia de intermediarios que se lucran de las pocas ayudas de las que dispone la institucionalidad. Careciendo, por ejemplo, en la mayoría de las ocasiones de atención psicosocial para la población víctima, no existe un programa de atención con enfoque diferencial y la ayuda humanitaria no se ha prestado en los tiempos y condiciones adecuadas para el resarcimiento colectivo e individual del daño ocasionado por la violencia sociopolítica del país.

Igualmente donde ha habido una afectación a los derechos como pueblo no existe un programa de estabilización integral, así en algunas ocasiones contamos con la ayuda humanitaria; ligado a ello no existe una política de esclarecimiento de la verdad, en ningún caso conocido hubo justicia y aún no se implementa la reparación integral, individual y colectiva, a los cabildos indígenas del municipio. Es importante mencionar que dentro de los estándares de reparación, pretendemos una disculpa pública por parte del

Estado y sus fuerzas militares por la campaña de persecución, estigmatización y señalamiento constante contra nuestro pueblo, lo que valió la persecución de los grupos paramilitares y en numerosos casos nuestro confinamiento por el terror sufrido desde finales de los 90 y sobre todo durante la llamada política de Seguridad Democrática.

En el tema de tierras no ha habido una restitución adecuada de las tierras despojadas y no existe una política integral de retorno con garantías para aquellos que han sido desplazados o despojados de sus unidades de vida. Además existen casos individuales donde, por lo menos a uno de los miembros de los cabildos, lo obligaron bajo amenazas o constreñimiento a vender su tierra por debajo del precio comercial ante lo cual se requiere el apoyo jurídico de la Unidad de Víctimas y Tierras. No obstante en apartado cabildo de Pueblo Bello, si se viene presentando restitución de algunas parcelas de tierra, pero, más allá de gozar nuevamente de la posesión del predio, requerimos garantías para permanecer en el territorio bajo la premisa de la estabilización integral, que deberá traducirse en proyectos productivos, incentivos, subsidios económicos, vivienda, salud y educación con enfoque étnico y diferencial.

En resumidas cuentas y dada la afectación sufrida por los Zenú requerimos del Estado la verdad por las graves violaciones a los derechos humanos, la verdad de los hechos y del contexto en el que ocurrieron y quiénes participaron de ellos. En los casos de desaparición forzada el derecho a la verdad también tiene una dimensión especial, conocer el paradero de la víctima. En vista del daño individual con efectos étnicos colectivos requerimos justicia con nuestras víctimas, y ello implica juzgar y sancionar a los autores y demás partícipes de los crímenes cometidos contra nuestros cabildos. Debido a la grave afectación a nuestros derechos y nuestras facultades jurisdiccionales, otorgadas por la constitución política de 1991, pretendemos un diálogo constante con la justicia ordinaria para el esclarecimiento de los hechos victimizantes. Por último, a todas las víctimas del crimen de desplazamiento forzado y del despojo de tierras la restitución efectiva, material

y jurídica, de sus bienes y el retorno voluntario, en condiciones de seguridad y dignidad, a sus predios y en las condiciones previstas por las normas internacionales en la materia.

No menos importante será la rehabilitación pública del derecho a la honra y reputación de las víctimas y sus familiares, incluyendo la aclaración pública de los hechos.

5.2.12. Municipio de San Andrés de Sotavento

El municipio de San Andrés de Sotavento ha servido como corredor de desplazamiento de distintos actores armados al ser una zona de movilidad para la realización de diferentes actividades ilícitas. En el caso del pueblo Zenú de San Andrés de Sotavento es común la violación de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por la muerte violenta, en algunos casos bajo signos de tortura, de líderes y miembros de los cabildos indígenas. Uno de los casos más emblemáticos es el del líder Álvaro Ortiz: “lo cogieron más arriba de Cruz del Guayabo, y luego de matarlo lo descuartizaron le quitaron los dedos, la cabeza y el pene. El que tuvo la oportunidad de verlo quedaba asustado impresionado, de cómo lo dejaron, eso generó pánico y susto en los diferentes cabildos de la zona, e impidió que muchas personas quisieran hacer parte de la plancha de cabildantes, pues don Álvaro Ortiz y su esposa eran líderes activos indígenas, en la búsqueda de objetivos que reivindicaran derechos humanos”. En el caso de Álvaro y otros miembros del pueblo Zenú no existe verdad sobre lo ocurrido. En todo caso su muerte ocurrió en el contexto de la lucha de los pueblos indígenas por el territorio y la respuesta violenta por parte de gamonales y terratenientes contra los indígenas, como ocurrió en el cabildo Arroyo del Medio cuando fue asesinado el líder indígena Manuel Flórez, en el año 1984, durante el proceso de lucha de recuperación de la tierra, al parecer el propietario del predio fue el responsable material sin que exista hoy en día justicia sobre lo ocurrido.

Dentro de las distintas victimizaciones lo más común es el homicidio seguido del desplazamiento por motivos económicos y el desplazamiento intraurbano que vivimos los

Zenú en aquellos sitios que sirvieron de zonas receptoras de población, en todos los casos no hubo reparación por el desplazamiento intraurbano ni rutas de atención para las víctimas. Además por ser San Andrés de Sotavento un corredor donde persiste la presencia de actores armados, presuntamente desmovilizados de los grupos paramilitares, el temor permanece en la población, al punto que muchos comuneros tienen recelo al denunciar o relatar los hechos victimizantes producto del poder y la zozobra generada por los actores irregulares, principalmente BACRIM o grupos paramilitares.

Es en ese contexto que el Estado debe garantizar el derecho –individual y colectivo- de las víctimas y sus familias a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición. En tal sentido deben esclarecerse los hechos y la determinación de responsabilidades institucionales, sociales, políticas e iniciar las investigaciones penales para determinar la responsabilidad de los autores y partícipes. La reparación ha de ser adecuada y proporcional, aplicando el enfoque diferencial, en tal sentido el mismo pueblo Zenú de San Andrés de Sotavento proponemos la reparación por medio de la compra de tierras así como medidas para la reconstrucción de nuestro patrimonio cultural y ancestral.

El artículo 192 del decreto 4633 plantea la participación de un delegado de los pueblos y comunidades indígenas del área de influencia del Comité Territorial, quien “promoverá la armonización de los programas de víctimas indígenas y no indígenas y participará en los procesos relacionados con la formulación de los proyectos de su pueblo o comunidad”. En el marco de la ruta de acceso a derechos de las víctimas indígenas, establece responsabilidades de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, y en su conformación se contempla la participación explícita de víctimas indígenas sin que hasta el momento tales disposiciones se lleven a cabo para el pueblo Zenú.

5.2.13. Municipio de San Antero

Para el caso del municipio de San Antero no constatamos violaciones directas o daños materiales, morales o colectivos, pero probablemente si existe cierto temor para denunciar. Tal es el caso de los habitantes de Planada donde tenemos familias en situación de desplazamiento pero sin saber a ciencia cierta las condiciones o el grupo causante del hecho Víctimizante. En ese sentido es imperioso un programa de atención diferencial para los cabildantes y atención psicosocial para el pueblo Zenú como mecanismo para superar las cicatrices de la violencia, más aún por el carácter colectivo de los pueblos indígenas.

5.2.14. Municipio de San Carlos

El caso del municipio cordobés de San Carlos es el mismo caso del resto de los municipios donde hace presencia el pueblo Zenú. Nuevamente los hechos victimizantes son el homicidio en persona protegida, el desplazamiento, entre otros, téngase en cuenta que también ha sido zona de recepción de desplazados de otros municipios del departamento.

Lo más común para los cabildantes indígenas considerar que no existe una ruta de atención para las víctimas, o si esta existe no cumple con los cometidos de la ley de víctimas y la llamada ley de víctimas indígenas (Decreto- Ley 4633). La mayor parte de los hechos victimizantes no son recientes pero estos se han perpetuado en el tiempo, lo que da cuenta de patrones de sistematicidad contra los comuneros por diferentes móviles (temas de tierras, control territorial, disputa del territorio, control social).

Si bien el municipio ha sido receptor de numerosos desplazados de Valencia, Apartadó, Tierra Alta, y otras zonas alejadas, no ha habido restitución, retorno en condiciones de seguridad, voluntariedad, dignidad y estabilización socioeconómica para estas víctimas. La

verdad brilla por su ausencia y al parecer existen unos mínimos de justicia dentro de un contexto de zozobra generada por los ilegales.

Si bien existe una oficina para la participación efectiva de las víctimas esta no funciona o es cuota burocrática de los políticos del municipio. La atención humanitaria no goza de cobertura y su aplicación desconoce el enfoque diferencial, además la atención se realiza de manera individual y no pretende la reparación colectiva como pueblo como manda la ley y los decretos que la complementan.

5.2.15. Municipio de Tuchín

Sin lugar a dudas los comuneros del municipio de Tuchin hemos sido de los más afectados por la violencia política que agobia al país desde 1946. Desde la década del 90 existen algunos homicidios por miembros del desmovilizado EPL y a finales de los noventa y la década del 2000 los responsables fueron grupos paramilitares. El cabildo Belén presenció varios homicidios, sin que existan medidas de reparación y rehabilitación hasta el momento; el cabildo Bella Vista presenció el terror paramilitar, muchos de sus pobladores fueron desplazados, otros fueron desarraigados por los enfrentamientos en el Alto San Jorge entre el ejército y subversivos; algunos comuneros del Cabildo Centro Alegre evidenciaron víctimas pero sin un actor armado identificado como el causante del hecho victimizante; los comuneros de Guaimaral fueron víctimas al asesinar al líder indígena y capitán de la comunidad en el año 2000; en Majagual tres víctimas violentas del cabildo y todos ellos a manos de grupos paramilitares; además de asesinatos selectivos en el Cabildo de Molina presenciamos una masacre a manos de los grupos paramilitares, ese hecho se presentó el 26 de mayo del 2001 cuando cinco de los integrantes de una misma familia fueron asesinados por paramilitares comandados por alias “Cadena”, otros murieron durante la época de recuperación de tierras, todo en el contexto de la violencia terrateniente contra el movimiento indígena y campesino organizado; el Cabildo de San Benito presenció el desaparecimiento de uno de sus integrantes a manos de grupos

paramilitares; los comuneros del Cabildo de Sitio Nuevo también fueron víctimas con la muerte violenta de Efraín Donado a manos de grupos paramilitares; el Cabildo de Tolima también presenta una situación similar con hechos que datan desde 1985.

Las comunidades de este municipio hemos padeció el asesinato selectivo de líderes, autoridades tradicionales y miembros prominentes de las comunidades. Los homicidios selectivos se han presentado en diferentes lugares y obedecen a distintas causas: el ánimo de intimidación o de terror de la población; la voluntad de generar el desplazamiento individual, familiar o colectivo; en tanto retaliación por oponerse a la presencia de grupos armados o al involucramiento de sus comunidades en el conflicto; en represalia por denunciar delitos y tratar de hacer efectivos los derechos de las víctimas; en desarrollo de intereses territoriales no indígenas frente a procesos de reivindicación territorial.

El derecho a la verdad tiene un carácter inalienable e imprescriptible y por ello como pueblo pretendemos conocer por qué durante décadas fuimos víctimas de los distintos actores del conflicto, para esto necesitamos construir y preservar la memoria histórica, esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad, en todos los niveles, a través de comisiones de la verdad y de los mismos procesos judiciales, ello con el fin de establecer responsabilidades y evitar que los hechos dolorosos por los que atravesamos se repitan.

Como medidas de reparación pretendemos la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción puesto que nuestro pueblo atravesó toda una escala de victimizaciones que se constituyen hoy día en una afrenta para la humanidad y una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Exigimos que el Estado procese a los responsables de las graves violaciones contra nuestro pueblo, desmonte la estructura para estatal que aún actúa en algunas regiones donde hacemos presencia y desmilitarice nuestras poblaciones, más aún cuando la fuerza pública ha sido un victimario constante de nuestro municipio.

En los casos de desaparición forzada queremos saber dónde se encuentran nuestros desaparecidos, si hubo una muerte queremos conocer la suerte de nuestras víctimas y sus restos sean devueltos a nuestros pueblos en condiciones de dignidad y respeto por nuestras tradiciones ancestrales. En el mismo sentido es imperiosa la puesta en marcha de un programa de atención psicosocial para nuestras víctimas individuales y colectivamente para nuestro pueblo, principalmente para nuestros niños, niñas y mujeres, cuyos hombros reflejan las cicatrices de la violencia. La violencia ha ocasionado un daño étnico cultural colectivo por la afectación a nuestro territorio, nuestras características culturales y vínculos sociales, nuestras formas de organización así como a los elementos simbólicos y ancestrales sobre los que se funda nuestra identidad étnica y cultural, por lo que pretendemos una reparación en debida forma, atendiendo a las características y nuestros modos de vida ancestrales, puesto que nuestro pueblo jamás debió soportar los rigores de una guerra que nunca nos perteneció.

5.3. DEPARTAMENTO DE SUCRE

5.3.1. Municipio de Chalán

El municipio de Chalán, está ubicado en el departamento de Sucre, específicamente en la Región de Montes de María. Pese su calidad como municipio expulsor y receptor de víctimas de conflicto armado, no se evidencia ningún tipo de atención humanitaria que nos permita de alguna manera lograr una estabilización. De igual forma no hay presencia de programas de atención psicosocial a víctimas con enfoque diferencial para la comunidad indígena, ni se ha presentado proceso alguno de restitución pese a que se ha realizado la solicitud correspondiente para cada caso. Los desplazados que han retornado a las comunidades lo han hecho de manera individual y no en el marco de ningún programa institucional. En lo referente a la verdad, la justicia y la reparación integral no se evidencian procesos colectivos ni individuales, desconociéndose de esta manera los

derechos y preceptos establecidos en el Decreto – Ley 4633 de 2011 y la consecución de su eficaz aplicación.

5.3.2. Municipio de Colosó

Nuestro pueblo indígena Zenú con presencia en el municipio de Colosó, departamento de Sucre, por encontrarse situado en la región de Montes de María hemos sido uno de los pueblos más golpeados por la violencia presentada en la zona. Así pues y de acuerdo a lo descrito por nuestros cabildantes se evidencia que las víctimas han sido innumerables, razón por la cual guardamos temor y recelo sobre la información de los procesos que se desarrollan en busca de restablecer los derechos y al igual que de los programas de atención psicosocial que se brindan a las víctimas del conflicto armado.

Sin embargo y de acuerdo a las dinámicas del conflicto presentadas en la zona, nos es posible establecer que las primeras declaraciones de víctimas se dieron en el año 2009, razón por la cual, algunas personas han sido sujeto de reparaciones integrales por parte del Estado; pese a lo anterior, todavía hay un gran porcentaje de víctimas en espera a que sus derechos colectivos e individuales sean reparados de alguna manera. Frente al tema de restitución de tierras se puede evidenciar que han ido presentando de manera paulatina. En lo concerniente al retorno, podemos manifestar que se han presentado de manera individual y sin ningún tipo de acompañamiento por parte de las instituciones estatales. Respecto a la verdad no es evidenciar una política pública de esclarecimiento de la verdad, por lo tanto no se refleja la aplicación de la justicia

5.3.3. Municipio de Corozal

En el municipio Corozal, en el departamento de Sucre, pese a que se han presentado acciones violentas en contra de nuestra población indígena, los miembros de los cabildos Zenú presentes en el municipio no referencian procesos de atención psicosocial ni ayuda humanitaria que busquen apaciguar los acontecimientos vehementes de los que han sido

víctimas algunos de nuestros miembros de la comunidad. De igual forma y en lo referente a los procesos de verdad, justicia y restitución de tierras no se evidencian programas con enfoque diferencial que permita cualificar y cuantificar la población indígena que ha sido objeto de dichas vulneraciones, para que una vez consolidados los datos, se proceda a aplicar las medidas de reparación tendientes a la restauración de los derechos colectivos e individuales del pueblo Zenú.

5.3.4. Municipio de Coveñas

En el municipio de Coveñas, ubicado en el departamento de Sucre, nuestra comunidad refiere que no se han presentado casos de desplazamiento por conflicto armado. Excepcionalmente, el Cabildo Bellavista expone la masacre de cuatro personas en manos de grupos paramilitares presentes en la zona; como consecuencia de ello se originaron desplazamientos a otros municipios del departamento, especialmente a Sincelejo. Actualmente, los miembros del cabildo no refieren si las personas víctimas han recibido atención psicosocial o ayudas humanitarias. En este mismo sentido, tampoco hacen referencia a los procesos de reparación integral existentes, ni tienen conocimiento si dichas vulneraciones han sido calificadas bajo los parámetros establecidos en el Decreto - Ley 4633 de 2011 en lo concerniente a la verdad, la justicia, la reparación y restitución de tierras.

5.3.5. Municipio de El Roble

Los miembros de la comunidad Zenú que hacemos presencia en el municipio de El Roble, ubicado en el departamento de Sucre, referenciamos la violencia alrededor del año 1997, cuando los grupos guerrilleros y paramilitares irrumpieron en la zona, lo que significó para los miembros de nuestra comunidad un saldo de aproximadamente 12 asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas, desplazamiento, causando un temor, que hoy por hoy persiste en nuestra cultura.

De lo anterior, actualmente no se evidencia que las víctimas presentes en el municipio reciban ayuda humanitaria, ni que sean beneficiarias de programas con enfoque diferencial que brinden atención psicosocial. Por otra parte, se desconoce si las víctimas del conflicto que atravesó nuestro municipio se encuentren inscritas como tales y si por lo tanto están siendo favorecidas por los parámetros que establece el Decreto – Ley 4633 de 2011, es decir, si su situación está siendo objeto de estudio para lograr el conocimiento pleno de la verdad, para que con ello se pueda aplicar una justicia. En este mismo sentido, desconocemos totalmente si alguno de nuestros cabildantes ha sido reparado por los daños acaecidos durante la guerra y si a consecuencia de ello, para el caso de desplazados, lograron retornar a su municipio.

5.3.6. Municipio de Ovejas

El municipio de Ovejas, ubicado en el departamento de Sucre ha sido uno de los más golpeados por la violencia que hemos tenido que soportar en la zona. Así pues, nuestros pueblos indígenas que están establecidos en este municipio han sido los más afectados, pues han sido víctimas de desplazamiento y homicidio en grande escala.

En primer lugar se encuentra el Cabildo Bilú, en donde la dinámica principal ha sido el desplazamiento como consecuencia de la ola de violencia causada por los grupos guerrilleros y paramilitares. De acuerdo a lo manifestado por nuestra comunidad, la mayoría de las personas víctimas, se encuentran inscritas en el Registro Único de Población Desplazada. En segundo lugar se encuentra el Cabildo San José de Almagra, quien también se vio gravemente afectado por los acontecimientos ocurridos en el municipio y su principal característica se da en el desplazamiento por es un cabildo receptor y expulsor de desplazados.

En este orden de ideas, se hace necesario dejar constancia que no todas las personas suministraron información por el temor que todavía persiste en la zona. Sin embargo

algunas de las víctimas manifestaron que el sistema de atención psicosocial es completamente nulo. En cuanto a la ayuda humanitaria hicieron mención que inicialmente les otorgaban la suma de \$550.000 pero actualmente la cifra ha disminuido a \$110.000; también exponen que no existe un enfoque diferencial y que son discriminados por su condición de indígenas, lo que hace demorada la atención.

En lo que respecta al tema de la verdad y la justicia nuestra comunidad no tiene conocimiento sobre estos procesos. Referente a la restitución de tierras, exponen que si se han presentado algunos casos, pero que todavía hace falta mucha población por acceder a este beneficio pues el proceso es muy demorado. Los procesos de retorno se han presentado de manera individual y sin ningún tipo de beneficio ni ayuda por parte de las instituciones estatales. Por último nuestros cabildantes manifiestan por medio de la personería se llevó a cabo la socialización del programa de reparación integral, sin embargo hasta la fecha no se ha ejecutado dicho programa ni de forma colectiva ni individual. Sampués

5.3.7. Municipio de Sampués

Los cabildos del municipio de Sampués a diferencia de otros miembros del pueblo Zenú no presentamos afectaciones graves a nuestros derechos o hechos victimizantes contra nuestros integrantes o el territorio ancestral en el cual vivimos. De los diferentes hechos victimizantes producto del conflicto armado interno no hemos sufrido daños materiales o morales producto de homicidios u otras afectaciones a nuestros derechos pero si hemos sido receptores de familias desplazadas provenientes de Bolívar, Córdoba y Antioquia e incluso de cabildos como Buena Vista, Puerto Libertador y Monte Líbano. No obstante, en el cabildo Escobar para el año 2000 si se presentaron cuatro desplazamientos por acción de grupos paramilitares sin conocer hasta la fecha si hubo retorno con garantías de reparación de las personas que fueron desplazadas. Es importante mencionar que muchos de los hechos victimizantes no se han puesto en conocimiento de las autoridades por

desconfianza, desconocimiento de las rutas de atención o por miedo a los actores de la violencia.

Los cabildos del municipio de Sampués como otros miembros del pueblo Zenú presentamos afectaciones graves a nuestros derechos o hechos victimizantes contra nuestros integrantes o el territorio ancestral en el cual vivimos. De los diferentes hechos victimizantes producto del conflicto armado interno hemos sufrido daños materiales o morales producto de homicidios, estigmatizaciones, falsos positivos, actos de pillaje, amenazas, microtráfico desplazamiento forzado como receptores de familias desplazadas provenientes de Bolívar, Córdoba y Antioquia e incluso de cabildos como Buena Vista, Puerto Libertador y Monte Líbano como expulsos en el cabildo Escobar para el año 2000 se presentaron cuatro desplazamientos por acción de grupos paramilitares sin conocer hasta la fecha si hubo retorno con garantías de reparación de las personas que fueron desplazadas. Es importante mencionar que muchos de los hechos victimizantes no se han puesto en conocimiento de las autoridades por desconfianza, desconocimiento de las rutas de atención o por miedo a los actores de la violencia.

Municipio de San Antonio de Palmitos

San Antonio de Palmitos es uno de los pueblos más golpeados por la violencia. Para empezar los actores irregulares adelantaron diferentes acciones que violentaron los derechos étnicos de los indígenas. En este caso los que llevaron a cabo numerosas violaciones a los derechos humanos a partir de la década del 2000 fueron los paramilitares, y en menor medida la guerrilla. Ambas agrupaciones, principalmente las agrupaciones paramilitares, adelantaron campañas de exterminio físico contra el pueblo Zenú, al punto que comunidades como la de Chupundún dio cuenta de la muerte de algunos habitantes y el desplazamiento de numerosas personas; pese al subregistro existente el cabildo de Chunpundún da cuenta de 35 victimizaciones por acción de los grupos ilegales. En los casos encontrados evidenciamos el temor para denunciar, lo que no

solo da cuenta y aumenta significativamente el llamado subregistro sino que perviven las huellas de la violencia en una zona fuertemente estigmatizada. Por otra parte el hecho de no existir un registro oficial de víctimas en los cabildos del municipio no permite abrir rutas de acceso para obtener una reparación integral con enfoque diferencial y atención psicosocial para estas comunidades.

Los datos dan cuenta de 35 victimizaciones en Chunpundún, 17 en cercanías del Algodoncillo, 29 personas en El Olivo, Guamí 10 personas sin precisar cuáles hechos victimizantes, los móviles y las condiciones temporo-espaciales en que se llevaron a cabo. El desplazamiento de personas, un delito de lesa humanidad, ocurrió en el marco de la disputa territorial y militar entre los grupos paramilitares, ejército y guerrilla. La mayor parte de los desplazados aún no han regresado y no han encontrado rutas de atención para víctimas con el fin de recibir ayudas humanitarias para superar el estado de vulnerabilidad en que se encuentran, más aun tratándose de personas provenientes de la etnia Zenú, la cual no solo se encuentra en peligro sino que padece violencia económica y abandono por parte del Estado. Al mismo tiempo las victimizaciones sobre los cabildantes traen consigo una doble afectación, pues no solo se trata de miembros que fueron desarraigados del territorio y de sus prácticas culturales sino que muchas mujeres y niños han padecido las consecuencias del desplazamiento afectando el núcleo familiar, lo que sin duda requiere medidas de priorización y atención con enfoque diferencial para mujeres y niños indígenas.

Un hecho notorio sucedido a los Zenú de San Antonio de Palmitos es la incorporación presunta de cabildantes locales y de la región en grupos armados, paramilitares y guerrillas, lo que atomizó más la dinámica del conflicto y los hizo blanco de represalias de los actores armados, al punto que muchos comuneros prefirieron salir del territorio antes que soportar el temor por la presencia de grupos irregulares, los mismos que nunca distinguieron entre población civil y enemigo militar, violando con ello los principios que regulan los conflictos armados en el mundo, “los que aguantamos aquí sufrimos de mucho

temor, fuimos amenazados, más que todo por el Paramilitarismo; fuimos reunidos y sacados a reuniones abiertas, afuera; [...] los más activistas, los líderes fuimos amenazados en ese tiempo por parte del paramilitarismo... lo mismo que cuando la guerrilla o no sé si serian parte de la delincuencia común, pero también sufrimos esa zozobra, que nos llamaron la atención, que mataron gente, que trajeron gente asesinada.... Que los enterraron en el territorio.”

Como casos emblemática se encuentra el del cabildante Santiago Antonio Pérez Burgos, padre de una víctima desaparecida por los paramilitares, quien después de sufrir los rigores burocráticos de la fiscalía, la personería e incluso de la Unidad de Víctimas de Bogotá, nunca obtuvo una dosis de verdad por lo ocurrido, hasta el momento la persona continua estando desaparecida, tampoco hubo justicia, ni siquiera dentro del marco de las versiones libres rendidas por jefes paramilitares en la llamada Ley de Justicia y Paz y mucho menos reparación por los daños materiales y morales ocasionados.

En síntesis los cabildantes del municipio exigimos saber lo sucedido, quiénes, cuándo, porqué, bajo qué móviles, cómo murieron o desaparecieron nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestro pueblo. Además la sociedad tiene derecho a saber la verdad acerca de las graves violaciones a los derechos humanos, las circunstancias, los responsables y sus motivos. En ningún caso el pueblo ha logrado justicia por los hechos victimizantes, más aún cuando no solo persiste la impunidad en casi el 100% de los casos, sino que los hechos jurídicamente relevantes pusieron en riesgo la estabilidad social, cultural, organizativa, política y la permanencia física y cultural de nuestro pueblo.

Toda víctima en Colombia, más aún los miembros de pueblos indígenas, tenemos derecho a recibir ayuda humanitaria, a recibir información sobre las medidas y procedimientos de acceso a las mismas, en este caso la ayuda humanitaria con enfoque diferencial, para ello el Estado debe diseñar protocolos de atención que garanticen la accesibilidad, adaptabilidad, calidad, atendiendo a las características culturales del pueblo Zenú.

La Corte Constitucional considera que los derechos al territorio, a la autonomía, a la identidad cultural y a la consulta previa, son derechos fundamentales (en una dimensión colectiva) de los pueblos indígenas y de alguna manera todos esos derechos han sido menoscabados por acción y omisión del Estado y los grupos irregulares, por ello solicitamos la reparación integral por la afectación causada al territorio, a nuestra identidad cultural y en algunos casos a la consulta previa que continúa siendo vulnerada, incluso en la formulación de políticas de atención para las comunidades indígenas del país, incluidos por supuesto los Zenú.

5.3.8. Municipio de San Marcos

En el municipio de San Marcos Departamento de sucre, el conflicto armado nos ha golpeado de manera significativa. La presencia de grupos armados al margen de la ley en el territorio ha implicado múltiples trasgresiones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario derivadas de acciones como homicidios en personas protegida, extorciones, actos de pillaje y la ocurrencia de una masacre perpetrada contra pobladores del municipio en territorios indígenas. La incidencia de prácticas asociadas al conflicto, como el desplazamiento forzado se ha presentado más a modo de recepción que de expulsión; las dinámicas exógenas de desplazamiento han implicado principalmente las migraciones indígenas a ciudades como Sincelejo, Cartagena y Medellín donde la atención a las víctimas se torna más eficiente que la aplicación de las normas en materia de reparación integral a nivel local.

Los procesos adelantados en pro de una reparación integral nuestros derechos vulnerados, si bien, no han superado las expectativas de las víctimas, si han permitido en primera instancia técnicas de estabilización y en algunos casos procesos de reparación que no son considerados como tal por los reparados, por no brindar ningún tipo de garantía

que permita el restablecimiento de los derechos vulnerados y la seguridad de una no revictimización.

Frente a la atención a las víctimas a nivel local, la situación se torna un poco más compleja, pues la ausencia de la institucionalidad y de medios que permitan el ingreso a los procesos de atención y reparación es escasa. La condición de víctima fáctica que establece la ley es desconocida tanto por las instituciones, como por la comunidad en general, lo que implica profundas situaciones de revictimización. La atención psicosocial ofrecida en nuestras comunidades no es otra que la usualmente el Estado está obligado a brindar a cualquier individuo sin importar su calidad especial, que es por demás escasa, y no contiene ningún enfoque ni destinatario determinado. Los procesos de restitución y retorno no se han tornado efectivos en el municipio y los pocos cabildantes, tanto expulsados como recibidos, que han regresado a sus territorios lo han hecho de manera voluntaria sin mediar procesos adelantados por la institucionalidad y con las implicaciones de seguridad que esto representa a las víctimas.

5.3.9. Municipio de San Onofre

El municipio de San Onofre ha sido un corredor importante para los actores armados. La llegada de los grupos paramilitares estuvo enmarcada dentro de una campaña de terror y control contra la población más que a una estrategia contrainsurgente, lo que se tradujo en toques de queda, prohibición de reuniones de cualquier índole, así como ataques a civiles bajo el pretexto de ser auxiliares de la guerrilla “fueron años de constante temor, no sabíamos si regresábamos a casa, lo único que podíamos esperar era la muerte”. Durante los años de presencia de los paramilitares, eran comunes los asesinatos y desapariciones de civiles existiendo un subregistro al respecto, pues los cabildantes no aportan, por temor o desconocimiento, datos concluyentes que permitan individualizar e identificar a los responsables de los hechos victimizantes.

A pesar del subregistro y las dimensiones colectivas del conflicto armado interno es posible concluir que los daños sufridos por una víctima de manera individual perteneciente a una comunidad, pone en riesgo la estabilidad social, cultural, política y organizativa o la permanencia física y cultural de esta colectividad, por ello no deja de ser preocupante que persista el subregistro de hechos, poco se haya hecho para el esclarecimiento de las distintas victimizaciones, la fiscalía no cuenta con un plan metodológico que dé cuenta de los delitos de lesa humanidad cometidos en el tiempo contra el pueblo Zenú, existen escasos escenarios de diálogo institucional, y existe poca información para el registro de las víctimas, más aún cuando se requiere una reparación integral y colectiva por las características culturales y los modos de vida ancestrales de los pueblos indígenas.

5.3.10. Municipio de San Pelayo

El cabildo Chamarras del municipio de San Pelayo solo cuenta con 10 familias aproximadamente, pese al reducido número hemos sido víctimas de desplazamiento y no hemos sido atendidos bajo el esquema de la ley de víctimas y el Decreto- ley de víctimas indígenas. En ese entendido es claro que el derecho a la asistencia, atención, ayuda humanitaria y orientación ha fallado pues el hecho común es que la ayuda humanitaria no llegue o los comuneros no declaren por falta de información. Si bien la ayuda humanitaria diferencial implica accesibilidad, calidad y prontitud atendiendo a las características culturales del pueblo esto no ha sido la regla general en el caso de San Pelayo.

Lo más común es que las ayudas humanitarias no se hayan otorgado como derecho a todos aquellos registrados como víctimas. En cuanto a retorno y restitución no han existido protocolos de restablecimiento de derechos pues el retorno implica volver en condiciones dignas, voluntarias y con garantías de estabilización socioeconómica lo que no ha resultado en el caso de los cabildantes victimizados.

5.3.11. Municipio de Sincelejo

El municipio de Sincelejo hace parte de la llamada zona centro, una región con una rica tradición de lucha y recuperación de la tierra pero también con una historia de violencia sociopolítica por la presencia de actores armados y el sistemático abandono económico e institucional del Estado colombiano. A diferencia de otros municipios con presencia del pueblo Zenú los cabildos no han sufrido fuertemente el fenómeno del desplazamiento forzado pero si han sido víctimas, eventualmente de forma fragmentada, de otros hechos victimizantes como el homicidio. En vista que no hemos sido desplazados, pero si una zona receptora de desplazados, no hemos recibido ayudas humanitarias, al interior del territorio no ha habido restitución, pese a la apropiación de tierras por las élites tradicionales, el uso de la ganadería intensiva, y cultivos industriales a grande escala, y como cabildos requerimos justicia por el contexto violento que nos ha afectado de manera desproporcionada.

El desplazamiento intraurbano se convierte en la actualidad en uno de los principales hechos victimizantes padecidos por los comuneros de nuestros cabildos, pues la presencia de bandas criminales en la zona, microtráfico, reclutamiento forzado, vulneraciones contra libertad sexual de la mujer y homicidios selectivos, ha generado grandes desplazamientos de comuneros provenientes de otros municipios de la región y asentados en la zona, sin que hasta el momento se tenga una política pública a nivel local para atender las migraciones urbanas.

Desde la constitución política del 91 el constituye nos otorgó a los pueblos indígenas, en el marco de un Estado multicultural de derechos, facultades jurisdiccionales para adelantar justicia siempre y cuando los delitos y los sujetos del ilícito hagan parte de nuestras comunidades. No obstante no existe una política integral, incluso dentro de la misma concepción de la ley de víctimas, que nos haga partícipes de la construcción de escenarios de verdad, justicia y reparación desde nuestra cosmogonía como pueblo. Como

integrantes del pueblo Zenú creemos que es posible el diálogo con la ley ordinaria para efectos de construir a partir de las voces directas, nuestras vivencias, y nuestras características culturales un adecuado escenario de verdad, justicia y reparación y requerimos rutas metodológicas y enfoques diferenciales, participativos e incluyentes dentro de los actuales planes de salvaguarda étnica para adelantar tal proceso.

Si bien existieron diversos actores armados al interior del territorio, los que trajeron mayor grado de desolación y ruptura de tejidos sociales fueron los grupos paramilitares, los que adelantaron labores de guerra sucia, extorsiones, restringieron la movilidad, adelantaron labores de control social e incluso perpetraron actos de pillaje contra los animales y los bienes de los que habitamos el territorio. No obstante la existencia de numerosas pruebas que permiten comprobar los escenarios de violencia que vivimos, aún no hemos recibido atención priorizada y focalizada en el marco de la ley de víctimas e incluso dentro del esquema reparador de la llamada ley de justicia y paz.

Por último dentro de los cabildos menores han ocurrido desapariciones y al parecer presuntas muertes a manos del ejército de miembros de la comunidad, sin que hasta el momento se cuente con noticias sobre su paradero. Para resumir no existe verdad, no existe justicia y no existe reparación, es decir, los cometidos de la ley de víctimas hasta el momento no han tomado forma al interior del pueblo Zenú.

5.3.12. Municipio de Tolú Viejo

El municipio de Tolú Viejo ha sido afectado por distintos hechos victimizantes, todos ellos en el marco del conflicto armado interno. Especialmente los cabildos de Palmira, La Piche, Gualom, la Unión y los Altos el conflicto ha repercutido con especial intensidad, al punto que los comuneros todavía recordamos el periodo de terror paramilitar durante el cual “todavía sentimos temor al escuchar los grillos, porque sabemos que pronto viene la noche, y con ella la muerte”.

Uno de los hechos Víctimizante de mayor trascendencia fue el desplazamiento forzado de personas, los datos propios dan cuenta de 97 familias en el corregimiento de Caracol, 120 familias en el Cabildo de Palmira, 30 familias en Gualom, 15 familias del Cabildo de la Unión, todos los pobladores de la comunidad de los Altos, quienes se desplazaron durante los mayores picos de la violencia, 77 personas en el Cabildo de Queveva. Además La Piche ha sido un lugar de recepción de desplazados. La mayor parte del desplazamiento ocurre con la entrada de grupos paramilitares y aún persisten en los cabildos y comunidades campesinas cierta zozobra creada por los llamados “escuadrones de la muerte”.

Nuestras comunidades dan cuenta de numerosos homicidios durante el llamado periodo de terror, muchos de ellos con la aquiescencia o participación de la fuerza pública. Del mismo modo hemos sido víctimas del asesinato selectivo de nuestros líderes, como el del Cacique Ubaldo Márquez en el mes de febrero del 2003, quien después de ser retenido y torturado fue asesinado, repitiéndose así el mismo patrón de homicidios selectivos por parte de ejércitos privados al servicio de terratenientes, ganaderos, empresarios y políticos. Debido al subregistro las comunidades dan cuenta de un buen número de víctimas sin identificar hasta ahora los responsables, entre otras razones por el miedo impreso en la vida del pueblo Zenú.

Colombia bajo el derecho interno y los tratados internacionales tiene la obligación de reprimir las graves violaciones a los Derechos Humanos. Como pueblos indígenas el ordenamiento constitucional nos protege por las características culturales, políticas y sociales que tenemos, aun así nuestros derechos han sido violentados de múltiples maneras y la mayor parte de los hechos victimizantes guardan relación con el conflicto armado interno.

Las raíces del conflicto colombiano debemos buscarlas en la situación socioeconómica y política generada por las élites que controlan el Estado, lo que hace que sea el Estado el mayor responsable de la estela de violaciones a los derechos de los pueblos. Por ello, en el

marco de un sistema político de carácter democrático el Estado debe garantizar el derecho –individual y colectivo- de las víctimas y sus familias a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición, estas últimas implican que nunca más los indígenas podrán ser vistos como blanco de los actores del conflicto, más aún cuando el problema de la tenencia de la tierra y el territorio no se encuentra resuelta y gran parte de las causas del conflicto radiquen allí, lo que requiere entonces una profunda reforma agraria que contribuya a reparar colectivamente al pueblo y generar las condiciones para una no repetición de los hechos generadores de violencia contra el pueblo Zenú y otras minorías nacionales del país.

5.3.13. Municipio de Tolú

A raíz del conflicto armado interno el municipio de Tolú presentó 149 muertes violentas entre 1990 y 2002, todos ellos en el marco del conflicto armado interno, entre estas podemos mencionar a dos familias indígenas que perdieron a sus hijos por asesinatos atribuidos a grupos paramilitares. De la misma manera el municipio ha sido receptor, en algunos casos individuales, de desplazados, pero la situación de violencia local no ha afectado tan fuertemente al municipio de Tolú. Los procesos de reparación para las víctimas no han sido efectivos, a pesar de conocer, como en pocos municipios, los instrumentos y protocolos de reclamación de los derechos que les asisten como víctimas, la atención sicosocial así como las garantías y acompañamientos del estado en los procesos que se han venido adelantando son ineficientes, y se atribuye parte de esto a la falta de celeridad y claridad del estado para investigar los hechos y una ausencia total de acompañamiento por parte del resguardo de San Andrés de Sotavento. En todo caso es importante resaltar que la verdad, justicia y reparación para el caso de los pueblos indígenas tiene una dimensión colectiva, en particular la restitución de sus territorios ancestrales y medidas para la reconstrucción de su patrimonio cultural y ancestral.

5.4. Comentarios Finales Acápites Derechos a la Reparación Integral

En términos generales los Cabildos pertenecientes al pueblo Zenú no vemos concretados nuestros derechos a la reparación integral a la justicia y a la verdad porque consideramos que se presentan ciertas situaciones que de entrada restringen o delimitan el acceso, uso y goce de estos derechos. Desde el miedo o falta de oportunidad de acceder a la jurisdicción ordinaria, pasando por las dilaciones en los procesos adelantados y concluyendo con la amenaza de represalias y revictimización hacia reclamantes generan que una reparación integral individual o colectiva en los términos descritos en la ley y sus decretos reglamentarios se torne imposible; los siguientes son algunos de los obstáculos con los que debe lidiar nuestro pueblo a la hora de solicitar un adecuado tratamiento como víctima:

1. Debilidad institucional a nivel local frente a una atención integral a las víctimas del conflicto, pues los funcionarios no tienen suficientes conocimientos ni sensibilidad para el manejo de víctimas, no existe el personal apto ni tampoco los apoyos logísticos como formularios o recepción de expedientes.
2. Desconocimiento de las normas que regulan los DDHH y el DIH, por consiguiente dificultades para su aplicación, en menor proporción se desconocen también las normas que regulan la atención a las víctimas del conflicto y los protocolos de acceso a la reparación de los derechos vulnerados.
3. Ineficacia de la justicia frente a las investigaciones de los hechos victimizantes que en un sinnúmero de casos terminan archivadas, así como la falta de sensibilidad de la sociedad frente a la ocurrencia de ciertos hechos repudiables contra las comunidades, y frente a la resolución de los casos.

4. Falta de garantías y de seguridad que generan que el temor actúe como desestímulo de la denuncia y el acceso a la justicia ordinaria.
5. Corrupción en algunos funcionarios de las instituciones del Estado, funcionarios judiciales que permiten la filtración de denuncias y reclamaciones, convirtiendo así en víctimas nuevamente a los denunciantes.
6. Complicidad o participación directa de algunos integrantes de organismos de seguridad del Estado en los casos denunciados, quienes aún se encuentran en el territorio obstaculizando el efectivo avance de las investigaciones, generando más impunidad y poniendo en riesgo la vida de las víctimas.
7. Profunda desconfianza frente a los organismos del Estado, funcionarios judiciales y fuerza pública, por parte de amplios sectores de la población.
8. Las políticas de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado no son efectivas, en especial las que tiene que ver con el desplazamiento (Ley 1448 y Decreto-ley 4633).
9. La violencia sexual como arma de guerra utilizada por los diferentes actores armados del conflicto constituye una revictimización como tendencia en el abordaje de casos de este tipo, en lo que corresponde a la recepción de denuncias y atención a las víctimas.
10. Ineficacia de los programas de desarme, desmovilización y reinserción (reintegración) como lo demuestran la reincidencia de personas desmovilizadas y los ataques a víctimas, así como la constante zozobra y el temor a la denuncia.
11. Falta voluntad política del Estado para destinar recursos direccionados a la atención integral de las víctimas y sus procesos de reparación y además sancionar de manera ejemplarizante a los perpetradores de estos delitos que los nos víctimas.

CAPÍTULO IV

POBLACIÓN INDÍGENA ZENÚ EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO

El desplazamiento forzado en Colombia ha sido una de las consecuencias más cruentas que el conflicto armado interno ha traído para nuestras comunidades, convirtiéndose así en el principal disipador de nuestras concepciones organizativas de vida y cultura, ya que sus efectos demoledores van en contra vía del cauce natural de nuestras tradiciones, las cuales tienen como fuente de vida y subsistencia la relación Tierra-Hombre, generando de esta manera un estado de fractura cultural.

La Corte Constitucional ha determinado una serie de categorías generadoras de desplazamiento forzado, que determinan las posibles causas del flagelo en cada una de las comunidades indígenas;

(1) las confrontaciones que se desenvuelven en territorios indígenas entre los actores armados, sin involucrar activamente a las comunidades indígenas y sus miembros, pero afectándolos en forma directa y manifiesta; (2) los procesos bélicos que involucran activamente a los pueblos y comunidades indígenas, y a sus miembros individuales, en el conflicto armado; y (3) los procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado interno que afectan sus territorios tradicionales y sus culturas. A su vez, estos factores operan sobre la base de una serie de procesos territoriales y socioeconómicos que, sin tener relación directa con el conflicto armado, resultan exacerbados o intensificados por causa de la guerra (Auto 004 de 2009).

Los pueblos indígenas se convirtieron en las principales víctimas del conflicto armado, esto a causa del impacto desproporcionado que ha generado el conflicto armado en Colombia sobre los Territorios Indígenas, el cual se ha cernido como una de las principales amenazas para la pervivencia y el desarrollo de las prácticas propias.

Teniendo en cuenta lo anterior, los pueblos indígenas hemos visto fracturados los tejidos sociales y culturales, a causa del desarraigamiento generado por este flagelo, teniendo en cuenta que los nuevos escenarios donde se han asentado, no se les ha brindado ningún tipo de garantía que les permita adaptarse, para que de esta manera podamos continuar con sus legados culturales. Debido a que la relación con el territorio es determinante para el desarrollo de los usos y costumbres, el ejercicio de las estructuras de poder y el desarrollo de la ley propia.

A lo anterior, cabe resaltar que los procesos de aculturación se hacen notorios en las generaciones más jóvenes, las cuales no tienen una perspectiva de identidad con los procesos de lucha por la tierra, recuperación cultural y fortalecimiento organizativo, por lo tanto esta situación demarca, el choque generado entre quienes no aspiraran a retornar al territorio, debido a que ya han conformando sus propios proyectos de vida y quienes han buscado la reproducción de sus costumbres en concordancia con los panoramas presentados en los nuevos escenarios.

A su vez se definen una serie de modalidades propias y con características específicas según su situación, las cuales están afectando la pervivencia física y cultural de los grupos étnicos en el territorio nacional, debido a las afectaciones que produce el conflicto armado y que se ve reflejado en los diferentes tipos de desplazamiento;

La ONIC afirma que las principales modalidades de desplazamiento indígena son: (a) desplazamiento masivo hacia las cabeceras municipales cercanas o hacia las ciudades; (b) desplazamiento progresivo – gota a gota- hacia las ciudades; (c) desplazamiento itinerante a otros sitios del territorio, otras comunidades u otros grupos étnicos; y (d) desplazamiento desde territorios no constituidos en resguardos, hacia los resguardos (Auto 004 de 2009).

Las particularidades del desplazamiento forzado sobre los pueblos indígenas, radica en la combinación de los escenarios colectivos e individuales, ya que su impacto desproporcionado afecta de manera directa sus derechos fundamentales. Ambos factores

nutren los sucesivos hechos generadores de vulneración. Por tal razón se debe enfatizar que el flagelo del desplazamiento forzado en todos los casos se evidencia de manera particular, generando un estado de emergencia social, en el que hemos quedado excluidos de la protección de nuestros derechos, principios y valores como Pueblo Indígena.

Uno de los patrones de desplazamiento evidenciado por la Corte Constitucional de manera manifiesta como relevante, es la persecución a los líderes y lideresas indígenas, que se encuentran en situación de vulneración, por su condición de relevancia entre la comunidad y las autoridades municipales, departamentales y nacionales. En sucesivas ocasiones se convierten en blanco de los grupos armados legales e ilegales que perpetran los territorios indígenas con el ánimo de imponer sus condiciones.

A este flagelo del desplazamiento forzado en la población indígena, se le adhieren los malos tratos y la inexistencia en la cual se transforman para el Estado colombiano, a pesar de los intentos por generar mejores condiciones para esta población con la creación de marcos normativos, la interacción del Gobierno Nacional se enfrasca en las limitantes estructurales en cuanto el tratamiento humanitario que las situaciones ameritan.

Las garantías dadas a partir de la política pública para la población indígena víctima del desplazamiento forzado, a partir de la estabilización, reubicación, retorno, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, se presentan como categorías utópicas en el efecto de cumplimiento, debido a que en la mayoría de los casos los actores armados continúan ejerciendo dominio sobre los territorios abandonados.

La pobreza, la falta de oportunidades y de territorios para el usufructo en la región del Resguardo de San Andrés de Sotavento Córdoba-Sucre, se han convertido en un generador de desplazamiento forzado que de igual manera ha traído consecuencias nefastas para las comunidades Zenú, debido a que la migración por causas económicas ha

permeado todas las escalas familiares, evidenciando un abandono de los saberes ancestrales y las formas de vida propia.

1. CONDICIONES DE VULNERACIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

El fenómeno del desplazamiento forzado ha impactado al Pueblo Zenú a lo largo de los últimos años, éste se ha gestado en gran parte a causa del efecto desproporcionado que el conflicto armado ha generado dentro nuestras comunidades asentadas en los departamentos de Sucre y Córdoba. De la mano de procesos violentos de despojo y abandono sobre las propiedades y territorios de quienes hemos habitado de manera permanente las sabanas y los montes de la región donde nos encontramos ubicados, afectando de manera directa la pervivencia de nuestros usos y costumbres. Cabe mencionar que el estado actual de ruptura cultural que este tipo de fenómenos han causado sobre nuestra integridad, se debe también al sometimiento que hemos sufrido desde la época de la Colonia, las explotaciones petroleras, el despojo territorial por parte de los latifundistas, el conflicto armado y las dificultades socio-económicas que nos han afectado.

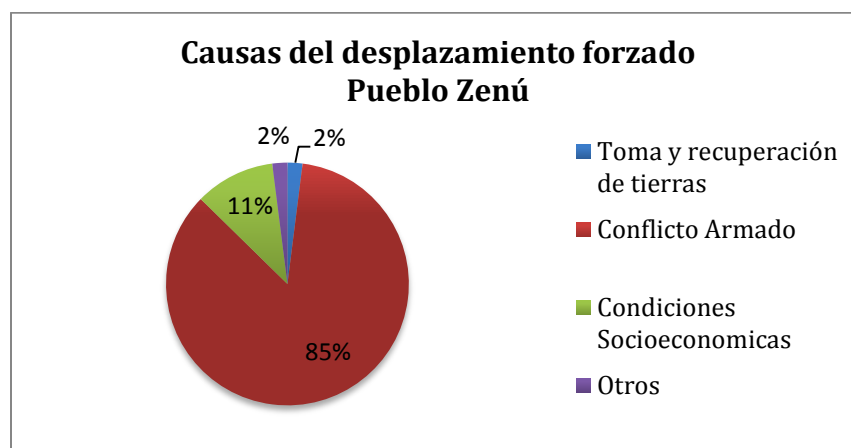


Figura 12. Causas del desplazamiento forzado Pueblo Indígena Zenú en situación de desplazamiento. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

La coyuntura de desplazamiento forzado que se ha vivido en los territorios del Resguardo de San Andrés de Sotavento Córdoba-Sucre y territorios aledaños, ha conllevado a que una gran cantidad de indígenas Zenú, tuviéramos que salir de nuestros territorios, para proteger la integridad de cada una de nuestras familias afectadas por los impactos que el conflicto armado interno, la omisión del Estado, las difíciles condiciones socio-económicas y el despojo de tierras han irrumpido la tranquilidad y el equilibrio de nuestro diario vivir.

Los territorios de Sucre y Córdoba, donde ha sido nuestro asentamiento tradicional, se gestaron como haciendas ganaderas desde el Siglo XVI, con la acometida de los terratenientes hacia nosotros, para que sirvieramos como fuerza de trabajo en las grandes extensiones de tierras que los latifundistas de la época dominaban.

El campesinado y los indígenas fueron vinculados a la tala y quema del bosque para la siembra de pastos a cambio de permitirle sembrar cultivos de subsistencia por cortos períodos, lo que obligaba a los campesinos y los indígenas a trasladar su vivienda periódicamente a la frontera boscosa, a medida que se expandían las haciendas ganaderas, cuyos dueños capitalizaban el esfuerzo de quienes trabajaban (Reyes 2009: 163).

La Hacienda y las intenciones de la economía de enclave se llevaron a cabo en la región, la explotación petrolífera, el Tabaco y la ganadería, se transformaron en el caballo de batalla de quienes ejercían dominio sobre la región y sus pobladores, generando que nos tuvieramos que desplazar hacia las zonas de los Montes de María y el Alto San Jorge (Centro de Memoria Histórica.2011:65). A lo anterior se le añade una Ley que fue creada para la expropiación de la tierras de quienes habitaban las Sabanas cordobesas, la cual expropio gran parte de las estas para finales de los 40's del Siglo XX, generando una pérdida incalculable sobre nuestros asentamientos, impidiendo de esta manera la reproducción de nuestros usos y costumbres.

“la ley de los tres pasos”, según la cual «el colono marginal tumba el monte y ejecuta todas las tareas económicas de habilitación de la tierra, permaneciendo en ella por un tiempo relativamente corto o hasta que ésta “se cansa”, para ir a tumbar en otra parte (primer paso); mal vende luego o cede sus

mejoras a un finquero, contratista o intermediario que semi-explota el fundo y aún intenta alguna consolidación o unificación de las explotaciones o lotes (segundo paso); este finquero o contratista cede a su vez ante las presiones de un latifundista empeñado en ampliar sus propiedades o en crear una nueva hacienda (tercer paso). Los trucos, presiones, exacciones, engaños y muertes que esta ley implica, han saturado la historia de la lucha por la tierra en toda la región. (Fals Borda. 1976: 76)

Todos los procesos de despojo se conflagraron en su momento de la mano de las autoridades políticas y militares con los terratenientes para el establecimiento del *statu quo* que mantenía las regiones de Sucre y Córdoba.

A lo anterior se añade que los terratenientes trajeron consigo, la ocupación de los territorios baldíos, las estrategias ilegales y legales para la adquisición de los predios que se encontraban bajo el poder de los indígenas, generaron que los pobladores Zenú se vieran obligados a cambiar sus actividades de manutención, a tal punto generar el primer hito de desplazamiento forzado que vivió el pueblo Zenú en el Siglo XX.

La violencia partidista hizo presencia en algunas zonas de Sucre y Córdoba, con la formación de guerrillas liberales que defendían los territorios de extranjeros que venían con el ánimo de irrumpir el orden impuesto por los terratenientes que estratégicamente ejercían poder sobre los territorios.

La situación de desigualdad social y económica que se vivía en los lugares donde se encontraba asentada la población indígena Zenú en los departamentos de Sucre y Córdoba durante los años 50's y 60's del Siglo XX, la sobre explotación laboral por parte de los terratenientes, desataron una reacción interna que se aunaron a las políticas sectarias del Gobierno de Lleras Restrepo, a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC-, la cual fue gestada en la búsqueda de la reivindicación de las tierras por parte de quienes habitaban las áreas rurales.

Es de suma importancia evidenciar los procesos de empoderamiento y resignificación que los indígenas Zenú iniciaron a partir de los años 70's por la recuperación de sus derechos territoriales, económicos y sociales por las vías de hecho, las cuales habían desaparecido a causa del posicionamiento colonialista, las encomiendas y las diferentes expansiones de los terratenientes que arribaron a la región por intereses socio-económicos, teniendo como factor común, *la propiedad por la tierra*.

Los procesos organizativos del Pueblo Zenú, surgen mucho antes de la aparición de la ANUC, en los años 50's el Capitán Eusebio Fera, llevaba a cabo la organización de Cabildos, como formas de control socio-político, manteniendo la constante de la resistencia como pueblo indígena con la mente en la defensa del título colonial que demostraba quienes eran los verdaderos dueños de la tierra (Fals Borda. 1976: 113). De la mano de las iniciativas generadas por la ANUC en los años 70's, surgen los procesos de recuperación y fortalecimiento de quienes en su momento habían pasado por campesinos y que para la época reivindicaron su identidad y engrosaron las recuperaciones Zenú en los departamentos de Córdoba y Sucre, hasta el momento del reconocimiento de parte del Resguardo de San Andrés de Sotavento.

A lo largo de los departamentos de Córdoba y Sucre la presencia de grupos armados al margen de la ley, se ha mantenido como una constante durante de los últimos 60 años. en primera instancia el surgimiento de Guerrillas partidistas, las cuales hicieron parte del escenario de violencia en los años 50's; en segunda instancia debido a los escenarios latifundistas que se generaron en la región, el asentamiento de grupos guerrilleros se dio como caldo de cultivo para la presencia de estos actores armados, en la región en principio hicieron presencia el EPL, FARC-EP, M-19, ELN, PRT entre otros; en tercera instancia, el posicionamiento geoestratégico que significa la región el tráfico de narcóticos, se convirtió en el eje fundamental del mantenimiento de algunos grupos guerrilleros que dedicaron su accionar a la protección de los cultivos ilícitos en las áreas cocaleras del Parque Natural del Paramillo, ubicado en el Departamento de Córdoba,

mientras que sobre el Departamento de Sucre no se presentó ningún tipo de cultivo, pero si un canal de transporte determinante en la historia del narcotráfico de Colombia, a través del Golfo de Morrosquillo, como corredor de salida de cocaína.

Teniendo en cuenta lo anterior, los sucesos que venían ocurriendo en la región, el accionar de algunos grupos armados en contra de los indígenas Zenú arrecio en su contra, debido a que la tierra seguía siendo un determinante de poder y de permisibilidad para el fortalecimiento del narcotráfico, por lo tanto quienes se opusieran a las dinámicas impuestas por estos actores, se veían en la obligación del fenómeno del desplazamiento forzado, además de que el atraso y los índices de pobreza en la región no aflojaban, debido a que los recursos de los ilícitos no generaban ningún tipo de desarrollo

Según el censo de población, en el 2005 el índice NBI del departamento de Sucre se situó en 54,86%, por debajo del alcanzado en 1993 (65%); y cerca del doble del promedio nacional (27.78%). En las cabeceras municipales el NBI era de 46.60% y en las áreas rurales del 69.48%, una brecha de 22.9 puntos. En Córdoba el índice registró un 59.08%, siendo en las zonas rurales del 76.42% y en la urbanas del 42.27%; una brecha rural-urbana de 34 puntos muy superior a la de Sucre y también superior a la brecha promedio nacional que era de 33.9 puntos.

Teniendo en cuenta los escenarios planteados anteriormente, las incidencias del conflicto armado en los entornos de la población Zenú, afectaron directamente las dinámicas económicas, a su vez permitiendo la llegada de empresarios foráneos con intenciones de implantar cultivos extensivos. Sumado a esto los terratenientes ganaderos, dieron cuenta de su inconformidad con los panoramas que vivía la región y conformaron grupos Paramilitares, en la búsqueda de la defensa de los territorios, los recursos y las extorsiones que los grupos guerrilleros realizaban. Con este contexto se liberó la más fuerte arremetida de violencia en territorio Zenú, las masacres entre uno y otro bando dejaron miles de personas desplazadas, que se vieron en la obligación de salvaguardar su vida en ciudades y pueblos diferentes a los suyos.

El recrudecimiento de la violencia por parte de los paramilitares en la zona, se dio de manera sigilosa, debido a que las intervenciones se desarrollaron con acercamientos a la población civil en los casos del Sur de Bolívar, donde existía presencia de las FARC EP, para posteriormente identificaban a las personas que pertenecían y colaboraban con el grupo guerrillero, para de esa manera llevar a cabo las masacres y despojos más cruentos de la historia de violencia en Colombia. Luego de estas situaciones los abandonos a causa del desplazamiento forzado se hicieron notorios y con ellos la posesión de las tierras dejadas, en su gran mayoría se trataba de foráneos aliados a los grupos paramilitares, quienes ayudarían a mantener control sobre los territorios “recuperados”.

La población Zenú víctima en situación de desplazamiento en la mayoría de los casos ha preferido mantenerse en el anonimato, evitar cualquier tipo de declaración o expresión que pueda generar su señalamiento, que le causase una posterior represalia. En los departamentos de Bolívar, Atlántico, Antioquia y Guajira, se encuentran asentados y organizados algunos de los que han decidido continuar con los procesos de resignificación de la identidad, de los usos y costumbres.

Actualmente la población Zenú en situación de desplazamiento forzado se encuentra asentada en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Guajira, es de suma importancia evidenciar que para el desarrollo del diagnóstico participativo comunitario, se tuvo en cuenta aquellas comunidades que se encontraban organizadas en Cabildos.

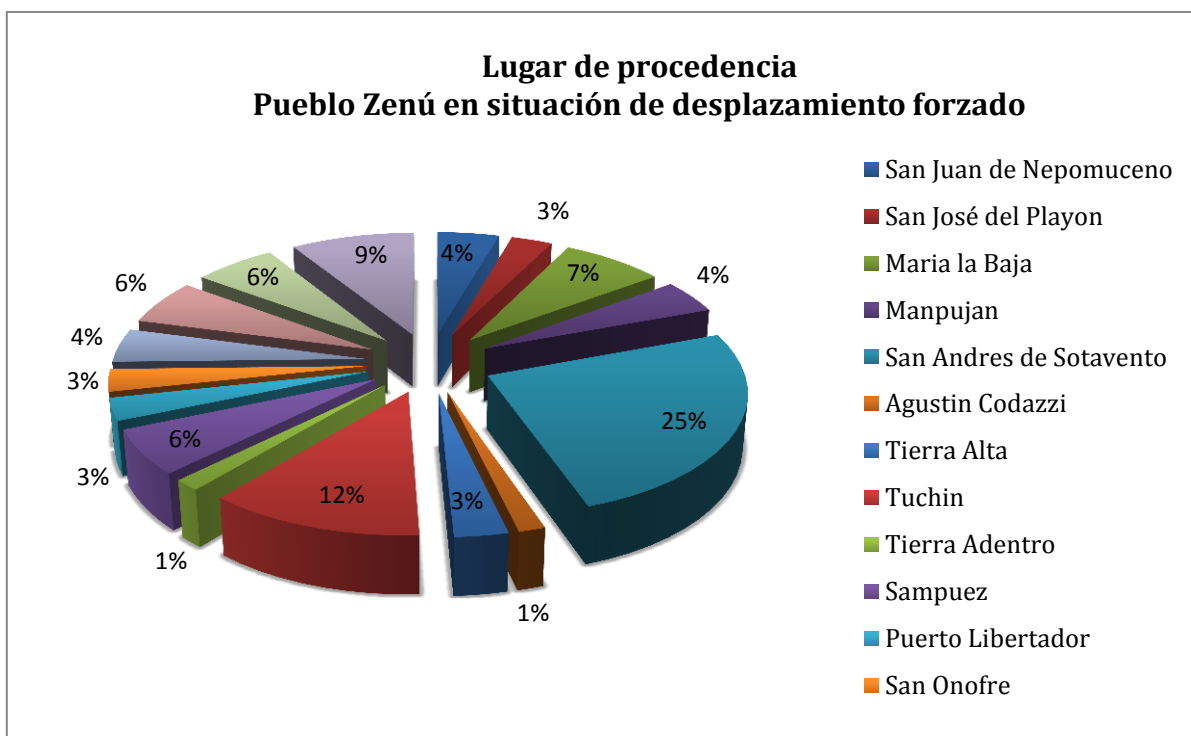


Figura 13. Lugar de procedencia Pueblo Zenú en situación de desplazamiento forzado. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú.

Es necesario hacer énfasis en los escenarios del departamento de Córdoba y Sucre como uno de los principales departamentos expulsores de la población indígena Zenú, debido a que el Resguardo Colonial de San Andrés de Sotavento, se encuentra en su gran mayoría ubicado en esta región. A lo anterior se le incluye que para el departamento de Córdoba, a pesar de ser una de las regiones que mas ha recibido recursos por megaproyectos e intervenciones de alta industria durante los últimos 40 años, en cuanto a las exploraciones mineras, hidroeléctricas y petroleras, no han generado ningún espacio de inversión para el mejoramiento de nuestra vida como pueblo indígena.

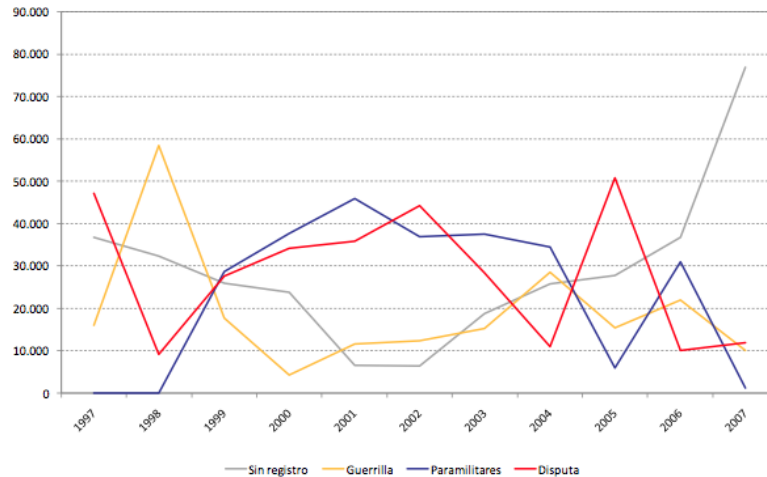


Figura 14. Población expuesta a algún tipo de presencia y la tasa porcentual de población expuesta al riesgo. Fuente: Observatorio de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) de la Vicepresidencia de la Republica de Colombia. Observatorio de Conflicto Corporación Nuevo Arco Iris. 2009.

Desde el Estado colombiano se han generado todo tipo de marcos normativos para la atención humanitaria a la población desplazada, los cuales intentaron en su momento dar respuesta a la situación de vulneración que vivían aquellos que estaban siendo sometidos a las inclemencias del desplazamiento forzado. La normatividad para quienes se encuentran viviendo el flagelo del desplazamiento forzado ha sido clara y enfática en cuanto al reconocimiento (en su momento como *desplazado* actualmente con la normatividad vigente lo conceptua como *víctima*). A lo anterior es necesario hacer una salvedad, debido a que una parte sustancial de nuestros comuneros, que han sido obligados a salir de sus territorios por asesinatos, masacres, pillaje, persecución y miedo a las represalias por parte de los grupos armados, no realizaron ningún tipo de registro ante ninguna entidad del Gobierno Nacional, a lo que los marcos jurídicos han sido claros en cuanto a su validez como víctima (o desplazado). A esto se debe que en el Pueblo Zenú, tan solo el 79%, se encuentre debidamente registrado como víctima (o desplazado) en cualquiera de los regímenes otorgados en su momento por la ley, mientras que el 21% restante por voluntad propia no ha hecho ningún tipo de acercamiento legal.



Figura 15. Registro Único de Población Desplazada-Registro Único de Víctimas Pueblo Zenú En Situación De Desplazamiento. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

2. CABILDOS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO

Las condiciones históricas de desigualdad, violencia, explotación y desconocimiento por nuestros saberes ancestrales que se han suscitado en Colombia, han puesto en riesgo nuestra pervivencia como pueblo indígena, a tal punto que las luchas que en algún momento dimos por la recuperación por nuestro territorio, costumbres y tradiciones se encuentren en una encrucijada, debido a los procesos de aculturización que han traído consigo los nuevos escenarios a los cuales nos hemos tenido que enfrentar.

Las seguidillas de violencia, el abandono estatal, la falta de oportunidades y el despojo de territorios, a lo largo de los años 80's 90' del siglo XX y la primera década del siglo XXI, llevaron a que una parte de nuestros comuneros se viera en la obligación de buscar nuevos horizontes, para de este modo poder garantizar la subsistencia de la familia Zenú. Bajo esta dinámica nuestros comuneros se asentaron en regiones donde las condiciones de vida fueran similares a las del Resguardo de San Andrés de Sotavento Córdoba-Sucre. De este modo enmarcamos nuestros procesos organizativos de acuerdo a las costumbres de los mayores que iniciaron el proceso de nuestra recuperación cultural, de esta forma las

figuras socio-políticas bajo las cuales hemos cimentado nuestros Cabildos, están directamente relacionados con los usos y costumbres del Pueblo indígena Zenú.

Los departamentos donde actualmente se encuentran procesos organizativos de nuestro pueblo son: Atlántico, Bolívar y Guajira, los cuales están conformados en 19 cabildos, de ellos 3 cuentan con el registro étnico ante la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, el resto, por encontrarse en contextos de ciudad o por no haber podido alcanzar satisfactoriamente los procesos para el registro a nivel nacional, no les han permitido hacer el uso efectivo del goce de los derechos fundamentales como población indígena.

Tabla 3. Cuadro de cabildos indígenas del pueblo Zenú en situación de desplazamiento- Demografía-.

Numero	CABILDO	AREA	No de Familias	No de Personas	Departamento	Municipio
1	Cabildo Menor Indígena de Barranquilla	Urbano	223	751	Atlántico	Barranquilla
2	Cabildo Menor Indígena Zenú Arjona	Urbano	120	292	Bolívar	Arjona
3	Cabildo Menor Indígena Zenú Gambote	Rural	73	292	Bolívar	Arjona
4	Cabildo Menor Indígena Zenú Rocha	Rural	39	175	Bolívar	Arjona
5	Cabildo Menor Indígena Zenú Membrillal	Rural	126	425	Bolívar	Cartagena
	Cabildo Menor					

6	Indígena Zenú Pasacaballo	Rural	64	464	Bolívar	Cartagena
7	Cabildo Menor Indígena Zenú Nueva Alianza	Rural	32	108	Bolívar	Mahates
8	Cabildo Menor Indígena Zenú La Pista	Rural	122	581	Bolívar	María la Baja
9	Cabildo Menor Indígena Zenú Nuevo Porvenir	Rural	90	397	Bolívar	María la Baja
10	Cabildo Menor Indígena de Zambrano				Bolivar	Zambrano
11	Cabildo Menor Indígena Los Suarez				Bolivar	San Juan de Nepomuceno
12	Cabildo Menor Indígena San Cayetano				Bolivar	San Juan de Nepomuceno
13	Cabildo Menor Indígena Zenú Turbaco	Rural	177	654	Bolívar	Turbaco
14	Cabildo Menor Indígena de Albania	Urbano	125	515	Guajira	Albania
15	Cabildo Menor Indígena de Dibulla	Urbano	126	377	Guajira	Dibulla
	Cabildo Menor					

16	Indígena de Fonseca	Urbano	106	452	Guajira	Fonseca
17	Cabildo Menor Indígena de Maicao	Urbano	664	2.692	Guajira	Maicao
18	Cabildo Menor Indígena de Manaure	Urbano	189	641	Guajira	Manaure
19	Cabildo Menor Indígena de Riohacha	Urbano	320	1353	Guajira	Riohacha
	TOTAL		2.596	10.169		

Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Zenú 2014.

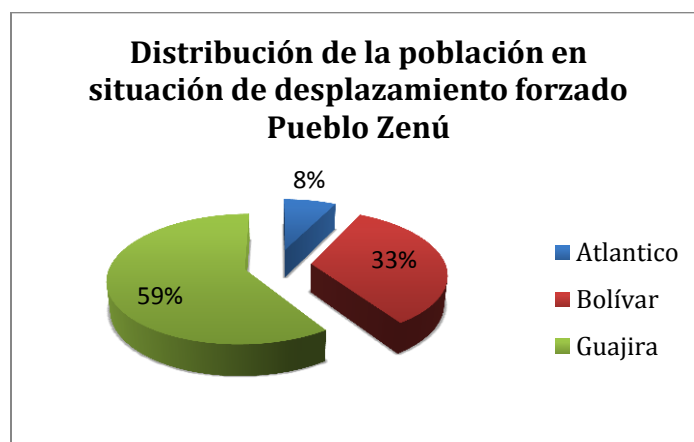


Figura 16. Distribución de la población en situación de desplazamiento forzado del Pueblo Zenú en situación de desplazamiento forzado. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

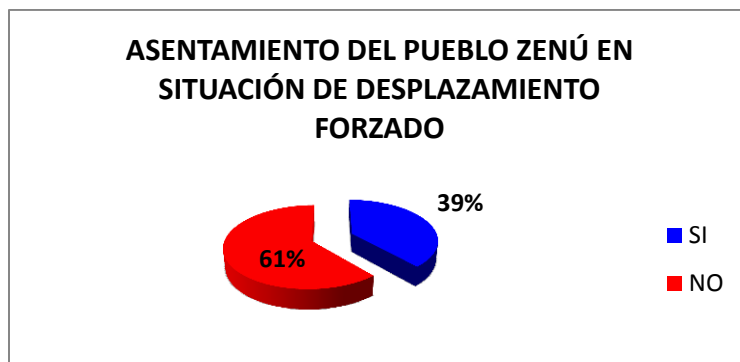


Figura 17. Asentamiento del Pueblo Zenú en situación de desplazamiento forzado. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

1.1. DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Tabla 4 Cuadro de cabildos indígenas del pueblo Zenú en situación de desplazamiento-
Demografía- Departamento del Atlántico.

#	CABILDO	AREA	NÚMERO DE FAMILIAS	NÚMERO DE PERSONAS
1	Cabildo Menor Indígena de Barranquilla	Urbano	223	751

Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

1.1.1. Cabildo Menor Indígena de Barranquilla



Fotografía 1. Bendición de dios- Sector contiguo a las plantas de procesamiento industrial de la ciudad de Barranquilla. Plan Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

El desplazamiento de nuestros comuneros hacía el departamento del Atlántico se ubica a finales de los años ochenta del siglo XX, donde algunas de nuestras familias provenientes de Cruz Chiquita, vereda del corregimiento San Juan de la Cruz del municipio de Tuchín, llegan a Barranquilla desplazados por el fuerte impacto sobre la zona, impulsados por el conflicto armado en la época, tomando como asentamiento las laderas del caño en el barrio Don Bosco. De esta manera las formas de trabajo se tuvieron que adaptar y tomar los roles como “*carretilleros*”²² de esta manera buscando la solvencia económica para el sustento diario.

A finales del Siglo XX, el Sacerdote Mauricio Hoyos, ingreso a la política aspirando a la alcaldía de Barranquilla, quien ofrecería un terrero para aquellos desplazados por la violencia, que se encontraban habitando la orilla del caño en el barrio Don Bosco, así mismo como parte de su campaña planteo subsidios de vivienda para subsanar la situación humanitaria. La omisión de los diferentes gobiernos locales, genero que de parte del Cabildo se presentará la problemática ante la Defensoría del Pueblo, haciendo de esta manera visible la situación ante la Cervecería Águila (hoy día Bavaria S.A), la cual ofreció ayudas monetarias y en especie para la construcción las viviendas sobre el terreno que anteriormente fue tomado por las vías de hecho. Poco tiempo después la fundación de la misma empresa nos facilitó los trámites para poseer escrituras públicas.

Para el año 2000, ya se habría comenzado a gestar nuestro proceso organizativo como Cabildo perteneciente al pueblo Zenú en el departamento del Atlántico, y ya se habría consolidado también un segundo proceso de ocupación en la ribera del río Magdalena (invasión), ahora conocido como Bendición de Dios. No es, sin embargo, hasta el año 2006 que nuestro cabildo es constituido y que las estructuras de gobierno interno son definidas.

²² Se toma como una forma de empleo informal, usual en la Costa Caribe, en el cual se dedican a la venta de verduras, frutas y pescado, por las calles de las zonas urbanas, teniendo como fuente de abastecimiento el mercado central de Barranquilla “Barranquillita”.

Los afanes que potenciaron la constitución del cabildo para ese entonces estaban ligados a los mecanismos de atención humanitaria y al reconocimiento de nuestros derechos como población vulnerable. Es así como, a finales del año 2009 y comienzos del año 2010 empiezan las primeras jornadas de declaración como Población desplazada bajo el Marco de la Ley 398 de 1997, a nivel de cabildo ante Acción Social (en su momento).

Nos encontramos ubicados en el municipio que lleva el nombre de nuestro cabildo, en el departamento de Atlántico. En el mes de julio del año 2014 obtuvimos reconocimiento por parte del cabildo Mayor de San Andrés de Sotavento, de igual manera este mismo año en el mes de noviembre la alcaldía de Barranquilla hicimos efecto a la Ley 89 de 1890, en el Artículo 3, en la cual reza que;

“En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme á sus costumbres. El período de duración de dicho Cabildo será de un año, de 1º. De Enero a 31 de Diciembre. Para tomar posesión de sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo e otra formalidad que la de ser reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo cesante y á presencia del Alcalde del Distrito”

Sin embargo aún no contamos con el registro de comunidades indígenas del Ministerio del Interior bajo la competencia de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS ROM Y MINORIAS. Esto debido a que somos un cabildo en contexto de ciudad. A lo largo de las administraciones distritales el espacio que se ha dado, ha sido mínimo. El Gobierno Nacional ha desconocido la falta de garantías para poder soportar los fuertes cambios a los que nos vemos sometidos, teniendo en claro que nuestros saberes se exponen a la extinción total por el sometimiento existente en los territorios actuales. Con el diseño de la “política pública para cabildos en contexto de ciudad”, quienes habitamos las ciudades nos encontramos a la espera de lo que se resuelva en la Mesa Permanente de Concertación Indígena, en la búsqueda de la generación de directrices de reconocimiento para con nuestras comunidades.



Fotografía 2. Comuneros Zenú MENEDEO. Plaza de mercado de Barranquillita. Plan Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Nuestro asentamiento en la ciudad de Barranquilla se encuentra distribuido a lo largo de la ciudad, en zonas marginales, de riesgo y en invasión (como es el caso de quienes habitan el Barrio Bendición de Dios) sobre los siguientes barrios: Don Bosco, Nueva Colombia, Villa Rebolo, Bendición de Dios, Las gardenias, Santa maría, Villa san pedro.

Por el hecho de estar viviendo dentro de la urbe, no sólo hemos visto debilitadas nuestras actividades culturales y demás elementos de cohesión social; sino también vulnerados nuestros derechos como minorías étnicas. Los procesos habituales de ampliación de infraestructura, penetración de megaproyectos y obras de desarrollo urbano, han sucedido en nuestros lugares de residencia de forma inconsulta, potenciando nuevas vulneraciones y a menudo, empeorando la situación de riesgo en la que nos encontramos por haber sido despojados de los territorios ancestrales. Ejemplo de lo anterior se evidencia con la presencia de empresas como: Curtiembre Búfalo, Triple Pizano, cervecería Bavaria las cuales han generado afectaciones graves a la comunidad, por los gases que estas emanan. De esta manera se evidencia la vulneración a nuestra integridad como sujetos de especial protección por el hecho de que seamos víctimas y estemos registrados en el RUV y/o RUPD, el Decreto Ley 4633 de 2011 manifiesta en el Artículo 89,

la asignación de viviendas urbanas en condiciones de dignidad y en las cuales puedan generar condiciones para un pronta estabilización.



Figura 18. Registro Único De Víctimas Y/O Registro Único De Población Desplazada. Cabildo Menor de Barranquilla. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

En el marco de la política para población en situación de desplazamiento forzado, se plantea una categoría que obliga al Estado colombiano a garantizar unos recursos temporales que le permitan a quien es considerado como víctima, alcanzar un nivel de estabilidad óptima, la cual para el caso de nuestra comunidad ha sido relativo por las inconsecuencias de las entidades encargadas. En algunos casos las ayudas son omitidas sin argumento alguno y en otras ocasiones se otorgan de manera impuntual, variando de manera constante el rubro asignado.

Los adultos mayores o las personas en condición de discapacidad que hacen parte del Cabildo, no tienen ningún tipo de beneficio específico y que en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011 en el Artículo 15 enmarcando su protección especial, por parte del Estado colombiano, teniendo en cuenta todas circunstancias legales que pueda acarrear y sobre las que este ampara.

Nuestros comuneros han tenido que buscar las formas de subsistir, debido a que de parte del Estado colombiano las categorías para la estabilización no han sido efectivas, “El rebusque”, se transformó en la primera actividad como medio de sustento económico informal. Desde la década de los noventa, los integrantes del cabildo nos hemos dedicado

a la venta ambulante y al *carretilleo* como medio de subsistencia, la venta de café alrededor de las calles céntricas de Barranquilla, aunque el sector primordial en el que nos hemos desarrollado y fortalecido de forma colectiva se encuentra en la plaza de mercado de barranquillita.



Fotografía 3. Plaza de mercado de Barranquillita. Plan Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Las problemáticas en cuanto al hacinamiento en el cual nos encontramos son dramáticas, puesto que hay ocasiones en que viven hasta 5 familias en una misma casa quedando expuestos a infecciones virales y bacterianas por este fenómeno. En el caso del barrio Bendición de dios, es evidente la crisis sanitaria por mal manejo de residuos, que quedan expuestos a lo largo de las vías produciendo olores fétidos en el ambiente. La constante operación de las empresas de producción de alimentos para pollo, también influye en la calidad del aire que respiramos. Situaciones que va en contra vía del Decreto Ley 4633 de 2011 el cual es claro en la asignación de una vivienda digna y confortable y las condiciones de salubridad que deben tener debido a que en estas habitan un gran número de menores de edad, personas en situación de discapacidad y adultos mayores.



Fotografía 4. Residuos y basura expuestos al aire libre en la vía del barrio Bendición de Dios. Plan salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Es importante resaltar que nuestros miembros del cabildo no cuentan con una atención y trato diferencial en la actualidad por ser parte del grupo étnico así mismo, dentro de la comunidad no existen programas de etno-educación, ni propuestas actuales para ejecutarlas. Razón por la cual, nuestros niños y jóvenes miembros del cabildo, asisten a los diferentes colegios de la ciudad, entre esos: Fe y Alegría, Técnico Distrital de Rebolo, Brisas del río, todos públicos. Para algunos no es necesario recorrer tanta distancia, a diferencia de otros que deben salir con mucho tiempo de anticipación para poder llegar a los planteles educativos. Lo anterior evidencia que los saberes tradicionales no se están replicando, por lo contrario la formación universal del Estado colombiano y las dinámicas de la ciudad vulneran lo que la normatividad defiende en el Convenio 169 de la OIT en el artículo 69.

1.2. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Tabla 5. Cuadro de cabildos indígenas del pueblo Zenú en situación de desplazamiento-
Demografía- Departamento del Bolívar.

Numero	CABILDO	AREA	No de Familias	No de Personas	Departamento	Municipio
2	Cabildo Menor Indígena Zenú Arjona	Urbano	120	292	Bolívar	Arjona
3	Cabildo Menor Indígena Zenú Gambote	Rural	73	292	Bolívar	Arjona
4	Cabildo Menor Indígena Zenú Rocha	Rural	39	175	Bolívar	Arjona
5	Cabildo Menor Indígena Zenú Membrillal	Rural	126	425	Bolívar	Cartagena
6	Cabildo Menor Indígena Zenú Pasacaballo	Rural	64	464	Bolívar	Cartagena
7	Cabildo Menor Indígena Zenú Nueva Alianza	Rural	32	108	Bolívar	Mahates
8	Cabildo Menor Indígena Zenú La Pista	Rural	122	581	Bolívar	María la Baja
9	Cabildo Menor	Rural	90	397	Bolívar	María la Baja

	Indígena Zenú Nuevo Porvenir					
10	Cabildo Menor Indígena Zenú Turbaco	Rural	177	654	Bolívar	Turbaco

Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

1.2.1. Cabildo Menor Indígena de Arjona

Nuestro cabildo se encuentra ubicado dentro del perímetro de los barrios rurales de la cabecera municipal. Algunos nos encontramos ubicados en la cabecera misma, y la gran mayoría, en el barrio Sueños de Libertad, que es considerado un área rural del municipio.

Arjona, siendo el primero municipio ganadero del departamento de Bolívar, tuvo varias bondades como municipio receptor relacionado al manejo pecuario, lo que facilitó que las familias de los primeros miembros de nuestro cabildo, quienes llegasen a finales del 90 del siglo XX, pudiéramos acceder a distintas fuentes de empleo y de esta manera asentarnos en los barrios rurales y conurbaciones de la cabecera municipal. El proceso organizativo del cabildo debe ser situado de forma paralela a la lucha de sus líderes Teodoro Peña (quien actualmente se encuentra desplazado en Bogotá) y Carmen Teodora. Para finales de los noventa, nuestros líderes habían sido perseguidos por varios grupos armados quienes los obligaron a refugiarse en Venezuela por varios años.

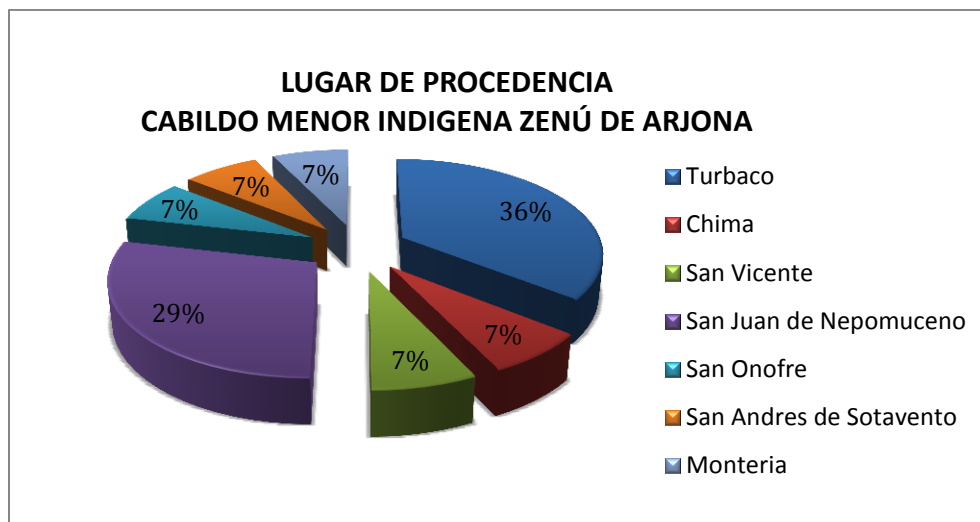


Figura 19. Lugar de procedencia. Cabildo Menor Indígena Zenú de Arjona. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Para el 2002, llega a conocimiento de algunos de los líderes, que existen varios lugares que tienen condiciones para vivir en Arjona, estando asentado en el municipio junto con otros comuneros Zenú, se vincula a un matadero de cerdos que permitió la llegada de un gran numero de comuneros, quienes se dedicaron a las labores porcícolas.

Evidenciando de esta manera que para la actualidad el Cabildo ha aumentado el número de quienes han nacido en otros lugares diferentes a los municipios donde se encuentra el epicentro de la población Zenú en Córdoba y Sucre, sin embargo los líderes tienen procedencia de municipios como Chimá y San Juan de Nepomuceno.

En los primeros años del siglo XXI, empezaron las gestiones de nuestros líderes para gestionar distintos proyectos agrícolas con diferentes entidades adscritas al municipio y en pro de nuestra comunidad. Para finales del 2003, el Cabildo se vinculó a un proyecto de arriendo de tierras con opción de compra a través de la ONG Agritec del Caribe. Estos últimos apoyaron el proceso de adquisición de los terrenos.

“Uno nunca sabe qué grupo es el que lo desplaza”, afirma uno de los comuneros al relatar lo que conllevaría la adquisición de esos predios. El 29 de mayo de 2003 se presentó un

grupo armado en el territorio, reuniendo cerca de 40 comuneros indígenas, obligándonos a soportar tratos crueles. “Recogieron a las mujeres y las metieron en varias piezas (...) el resto caminaba encima de los indígenas acostados como quien camina sobre un puente”. Antes de irse, hacen dos disparos al aire y, los presentes, que habían sobrellevado ya en la vida hasta 3 desplazamientos distintos, estaban convencidos de que habían caído muertos sus compañeros. Requisaron todo cuanto tenían en busca de armamento y se llevaron las gallinas, los cerdos, las vacas y todo lo de valor que portaban. “A partir de ese momento – recuerda entre lágrimas- quedaron otra vez ambulantes las 40 familias del proyecto (...) Agritec perdió 280 millones de pesos, más lo que habíamos todos invertido en las capacitaciones en el tema técnico y nosotros perdimos la oportunidad de ese proyecto que vea...ningún otro cabildo, y no por falta de voluntad sino por falta de tierra disponible pa arrendar; perdimos lo sueños de ser ese primer gran cabildo de bolívar del que hablábamos con Teodoro Peña. De ahí pa’ lante quedamos en na...No hemos podido avanzar más ni pa ninguna parte, ninguna ayuda; ni por parte del Estado, ni por parte del Resguardo. Nos movilizamos con Teodoro para la cruz roja, para la fiscalía, para el ejército” (Fragmento historia de vida de comunero)

El marco normativo no ha sido explícito con quienes sufrieron desplazamientos múltiples como es el caso de varios de nuestros comuneros, debido a que la incomunicación presente en las entidades encargadas de la recepción y atención a la población víctima en situación de desplazamiento forzado, no ha aunado por unificar criterios de manejo para con las bases de datos. En los casos de requerimientos inmediatos de comuneros que no tienen más opción, la funcionalidad del Decreto Ley 4633 de 2011 en el artículo 93, el cual dice que;

“Es la atención que se presta cuando las personas indígenas manifiestan haber sido desplazadas y se encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada. La entidad territorial receptora de la persona o de la familia indígena víctima de desplazamiento, debe garantizar los componentes de alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio adecuados a las características culturales propias de los pueblos indígenas. Se atenderá de manera inmediata desde

el momento en que se presenta la declaración, hasta el momento en el cual se realiza la inscripción en el Registro Único de Víctimas”.

En la Actualidad el Cabildo ejerce las prácticas culturales con bastantes inconvenientes, debido a que la construcción de estructuras tradicionales, las prácticas de ancestrales se ponen en tela de juicio ante el choque cultural que somos sometidos por las de personas del municipio. A pesar de lo anterior el cabildo posee un medico tradicional que posee conocimientos sobre medicina tradicional.

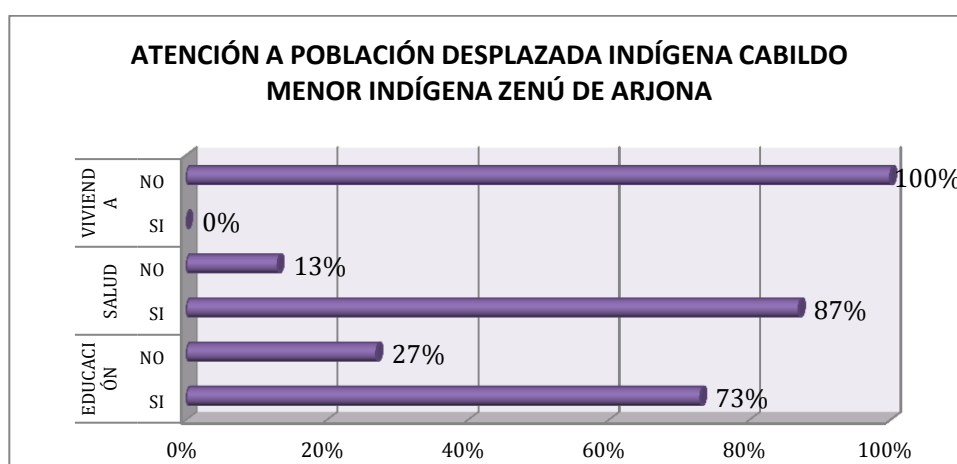


Figura 20. Atención a población desplazada indígena. Cabildo Menor Indígena Zenú de Arjona. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Las ayudas humanitarias que han recibido los comuneros víctimas del conflicto armado, por atención se han centrado en auxilios monetarios de vivienda, para la escogencia de un lugar donde pueda satisfacer las necesidades del comunero. En cuanto a Educación y Salud el municipio de Arjona se encuentra en procesos lentos de cubrimiento, a pesar del interés por parte de la Gobernación de Bolívar para con las víctimas y las múltiples campañas que hemos recibido para totalizar los procesos de declaración y registro en cumplimiento del Decreto Ley 4633 de 2011.



Fotografía 5. Artesanías producidas por los comuneros. Cabildo Menor indígena de Arjona . Plan salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Varias familias del Cabildo actualmente se dedican a la producción de artesanías como medio de vida, a partir de la Iraca y la Caña Flecha, venden el producto sin terminar a otros comerciantes que utilizan su carácter comercial para hacer terminados en sandalias, mochilas y otros accesorios. A lo anterior, algunos comuneros buscan su forma de subsistencia en la prestación de servicios agrícolas, además de trabajar en su mayoría informalmente para distintas empresas de la cabecera municipal y en el servicio doméstico en la ciudad de Cartagena. Lo que permite evidenciar el incumplimiento del Decreto Ley 4633 de 2011 el artículo 96 en el párrafo 3 *“Los programas de empleo y proyectos productivos dirigidos a las víctimas indígenas, se considerarán parte de la ayuda humanitaria de transición”*.

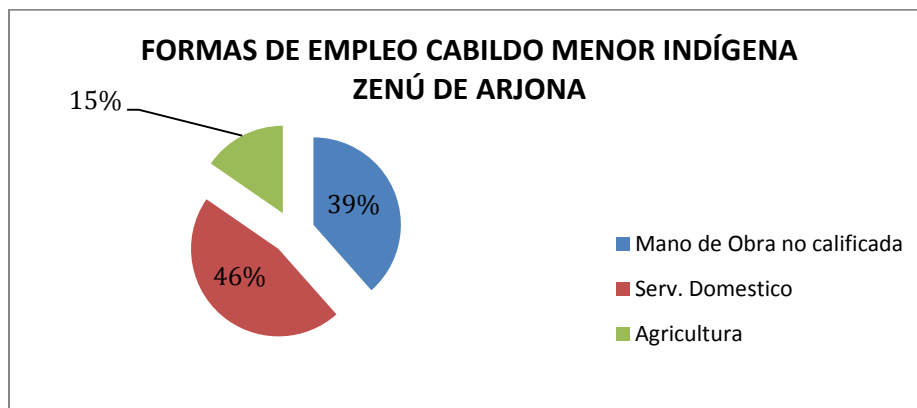


Figura 21. Formas de empleo. Cabildo Menor Indígena Zenú de Arjona. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

La restricción progresiva del acceso a la tierra ha redefinido las actividades económicas de la comunidad. Esto se ha traducido a que el alimento que antes cosechaban debe ser comprado a través de comerciantes locales y por tanto, varios de los líderes afirman que los niños han enfrentado distintos problemas de salud relacionados a la nutrición sin tener explicación alguna por parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales.

1.2.2. Cabild Menor Indígena Zenú de Gambote

Nuestro cabildo se encuentra ubicado en el barrio chino del corregimiento de Gambote aproximadamente a unos 9 km de distancia de la cabecera municipal Arjona, departamento de Bolívar rodeando el Canal del Dique y atravesado por la construcción del Puente de Gambote en la ruta Vía del Sol.

El Cabildo cuenta con el registro étnico expedido por parte del Ministerio del Interior en cabeza de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, ROM Y MINORIAS N° 0013 del 11 de febrero del 2013, por el cual es reconocida como comunidad étnica ante todas las entidades del Estado colombiano. Del mismo modo es importante aclarar que los territorios bajo los cuales hicieron un ejercicio de compra-venta no cuenta con titulación alguna, situación que apremia el accionar del Decreto Ley 2333 de 2014, el cual enmarca los territorios indígenas con problemas de saneamiento y obliga a las entidades responsables (en este caso el INCODER) a generar un documento que conste del proceso de saneamiento al territorio colectivo, debido a las condiciones de vulnerabilidad que nos vemos afectados por la intromisión de empresas contrucctoras e industriales.

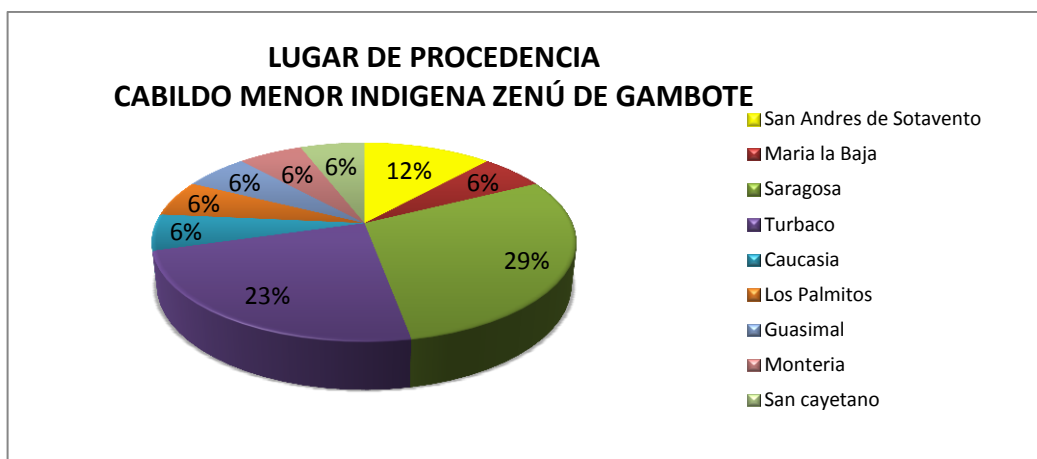


Figura 22. Lugar de procedencia. Cabildo Menor Indígena Zenú de Gambote. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

El proceso organizativo de estructuración y conformación del Cabildo arranca en el año 1985, con la llegada del comunero Marciano Montalvo, quien ocupó los primeros territorios conexos al Dique, todo en la búsqueda de condiciones de adaptabilidad. Con el paso del tiempo y la escalada del conflicto armado en las zonas del resguardo de San Andrés de Sotavento y regiones aledañas, más familias Zenú fueron asentándose en las laderas del río en la búsqueda de protección a nuestras familias. Reconocemos los departamentos de Córdoba y Antioquia como los mayores lugares de expulsión, a consecuencia de la toma de tierras directa por parte de los terratenientes presentes en los territorios expulsores y el conflicto Armado.

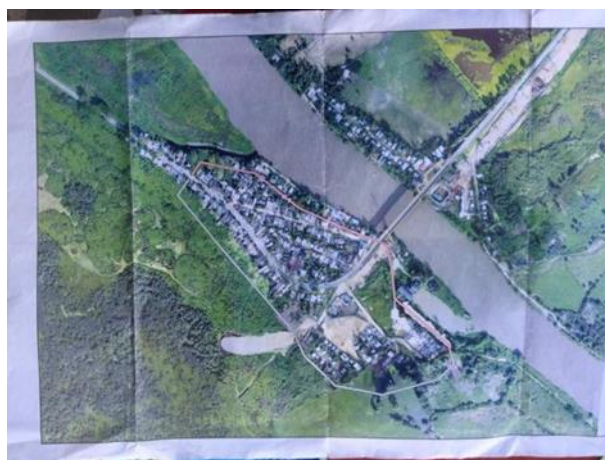


Figura 23. Causas del desplazamiento. Cabildo Menor Indígena Zenú de Gambote. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

El 94% de los comuneros que componen el cabildo están inscritos al RUPD y/o RUV, debido a que de parte de la personería de Arjona se llevaron a cabo campañas para que quienes no hubiesen podido declarar por algún motivo lo hicieron en sus nuevos lugares de asentamiento.

En la actualidad, la inminente re canalización del dique por parte de la empresa consorcio dique, nos amenaza como un proceso de reubicación inconsulto, tal como lo fue el puente recientemente construido sobre los predios. Por lo tanto han violado nuestra autonomía, puesto que se toman decisión sobre el territorio donde este cabildo se encuentra asentado y no se tiene en cuenta nuestra opinión, es esta una de las razones que nos lleva a solicitar que se realice lo antes posible la reubicación, pero dentro de la zona en la que nos encontramos, puesto que no queremos perder nuevamente un hilo conductor, referente al modelo de vida del cual somos parte. Lo anterior va en contra vía de la Ley 21 de 1991, la cual es enfática en cuanto a los procedimientos de consulta previa, para que este tipo de proyectos industriales no afecten el buen vivir de las comunidades y de esta manera se puedan marcar los intereses de las comunidades.

En la actualidad, estamos en el área de influencia del proyecto de recanalización y, a los que estamos ubicados a orillas del canal, que somos alrededor del 88%, se nos ha informado que necesitan los 30 metros colindantes para la construcción del muro de contención. La siguiente imagen da del área de intervención por parte del consorcio en mención:



Fotografía 6. Imagen de fotografía del área a intervenir por el consorcio dique, entregada a la comunidad en mayo de 2014. Plan Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Los procesos corporativos en la asignación de la tierra y las concertaciones sobre la canalización a principios de siglo, enfocaron Gambote el lugar como un atractivo migratorio para familias que también buscaban mayor cercanía a las urbes y salían de territorios cuya fertilidad estaba ya reducida por los monocultivos.

Los comuneros del Cabildo actualmente se dedican a la prestación de servicios agrícolas y a la siembra. En épocas de invierno los integrantes del cabildo se dedican a la pesca y cuentan con la capacidad de comercializar el pescado- principalmente mojarra y bocachico- sobre la carretera en la búsqueda constante del subsistir diario, debido a que la falta de territorios propios, les impide garantizar las necesidades para una vida digna.

A pesar de que la gran mayoría de viviendas del cabildo cuentan con el servicio de energía básico prestado por Energía Social (Electricaribe), este ha sido asignado por medio de contadores comunitarios. Los usuarios son los encargados de realizar las conexiones de forma clandestina y, posteriormente, tras ingresar al censo, se modifica la cantidad de viviendas censadas bajo un contador comunitario que divide el gasto colectivo del servicio. Este tipo de situaciones ha traído consigo un sinnúmero de inconvenientes relacionados al cobro excesivo.

En la zona donde estamos asentados o hay presencia de empresas prestadoras del servicio de agua potable y alcantarillado, por ende la costumbre es recolectar el agua de la bifurcación del Rio Magdalena, canal del Dique que pasa aledaño al corregimiento y conservarla en tanques para “purificarla” adicionándole alumbre, conocido en la sector como “cloro en piedra” se diluyen en agua y *“agregamos entre 1 y 2 tapitas, dependiendo de lo sucia que se vea el agua ”* de manera que se asiente las impurezas del agua y utilizarla para todas las actividades cotidianas.



Fotografía 7. Proceso de tratamiento del agua recolectada en el Cabildo Menor indígena de Gambote. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Teniendo en cuenta lo anterior, se lo evidenciar las falencias en lo que respecta a la cobertura y a las medidas de saneamiento básico que deben tener las familias Zenú. Por parte de ninguna entidad se ha intentado subsanar la necesidad apremiante de la implementación de un acueducto adecuado, conexiones eléctricas debidamente establecidas.

1.2.3. Cabildo Menor Indígena de Rocha

Los orígenes del proceso organizativo del municipio de Rocha se encuentran entre entre 1988 y 2002. La gran mayoría de ellos vienen de Córdoba en una primera migración generada por el hostigamiento de los grupos armados en las zonas aledañas al resguardo de San Andrés de Sotavento en los departamentos de Córdoba y Sucre. De esta manera los primeros corregimientos

ocupados son los de Rocha y Puerto Badel, ejerciendo la ganadería y los trabajos agropecuarios en la región.

A mediados del 2005 se dio inicio al proceso organizativo del cabildo de la mano de los líderes de del cabildo menor indígena Zenú de Gambote, quienes dan las raíces para el marco organizativo de la comunidad. Esto se da en el marco de que municipios como San Jorge y San Juan de Nepomuceno, continuaban engrosando los números de quienes conformarían el Cabildo, debido a la situación de orden público.

Los procesos de reivindicación que hemos llevado, han estado profundamente ligados al desarrollo de cabildo; y la necesidad de denunciar y declarar los hechos de violencia de los cuales fuimos sujetos, a esto se le suma el accionar por mantener los tradiciones usos y costumbres propias de pueblo Zenú.

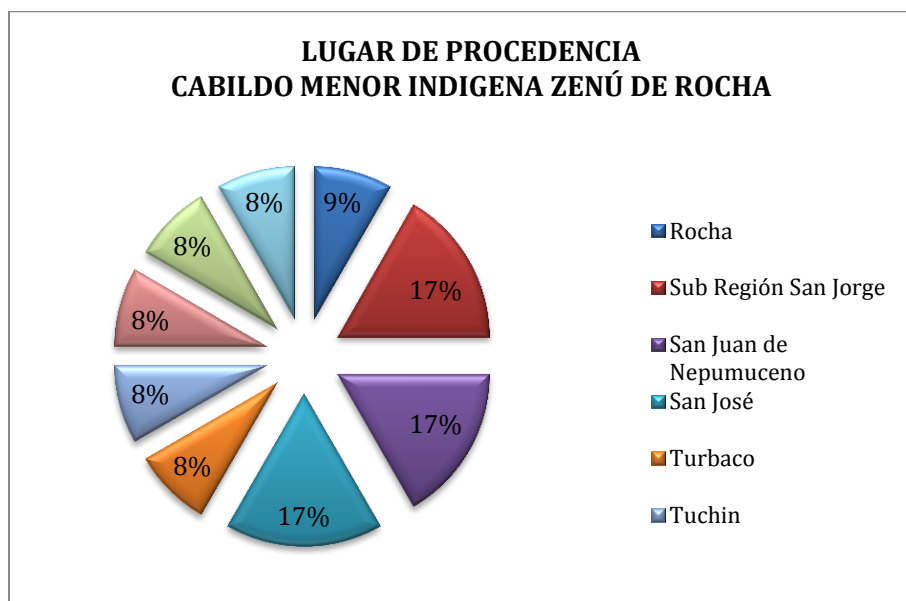


Figura 24. Lugar de procedencia. Cabildo Menor Indígena Zenú de Rocha. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

En la actualidad nuestras viviendas están situadas sobre las fincas ganaderas en las cuales prestamos servicios agropecuarios. El impedimento generado por la omisión de las entidades del Estado encargadas de estabilizar a la población en situación de desplazamiento forzado, no han llevado a

cabo intervenciones directas que puedan mejorar la calidad de vida de nuestros comuneros. El Decreto Ley 4633 de 2011 manifiesta en una de sus categorías primordiales, los procesos de reubicación como el fundamento de la continuidad de las comunidades indígenas afectadas por el flagelo del desplazamiento forzado.



Figura 25.Registro Único de Población Desplazada-Registro único de Víctimas. Cabildo Menor Indígena Zenú de Rocha. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Para el caso de los comuneros que han hecho los trámites declaratorios para ser reconocido legalmente como víctima, las ayudas no han sido las que la normatividad declara, la ausencia de ayudas humanitarias monetarias y de vivienda se transforman en la primera talanquera de obstáculos.

Un gran porcentaje de comuneros del cabildo, se presenta a sí mismo como población desempleada, pues, a pesar de que cuentan con ingresos ocasionales relacionados a los quehaceres pecuarios de las haciendas que ocasionalmente los requieren, no cuentan con garantías laborales. A lo anterior se le adhiere que gran parte de la población ha encontrado en el mototaxismo un nicho de subsistencia, evidenciando las falencias estructurales de las entidades encargadas de hacer cumplir el Decreto Ley 4633 de 2011 en los apartes que se refieren a la asignación de recursos para el desarrollo rural y la sostenibilidad de las comunidades.

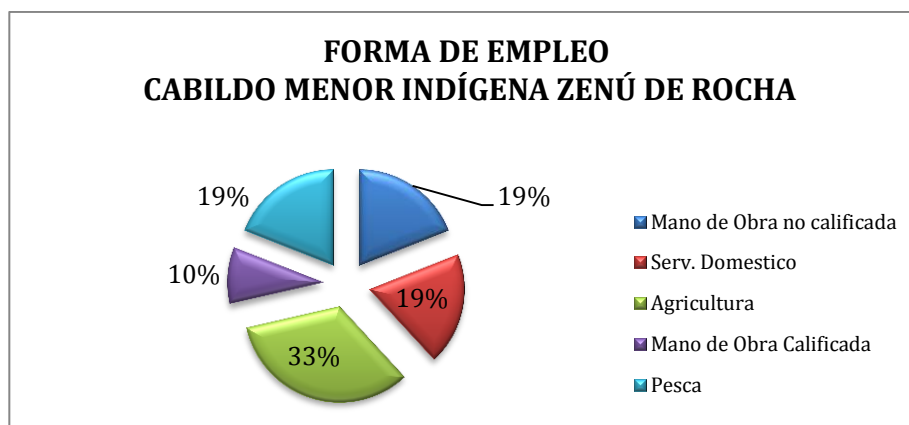


Figura 26. Forma de empleo. Cabildo Menor Indígena Zenú de Rocha. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

1.2.4. Cabildo Menor Indígena de Membrillal

El Cabildo tiene como epicentro de ubicación la zona rural del municipio de Cartagena, departamento de Bolívar, en la finca San Isidro vía Mamonal, en la zona industrial de la Bahía. El proceso de arribo a la región de Membrillal se da a partir de la migración de comuneros desplazados por el fuerte impacto del conflicto armado en el municipio de Tuchín –Córdoba, y de manera más específica de la comunidad indígena de Torrente en el departamento de Sucre a finales del año 2001.

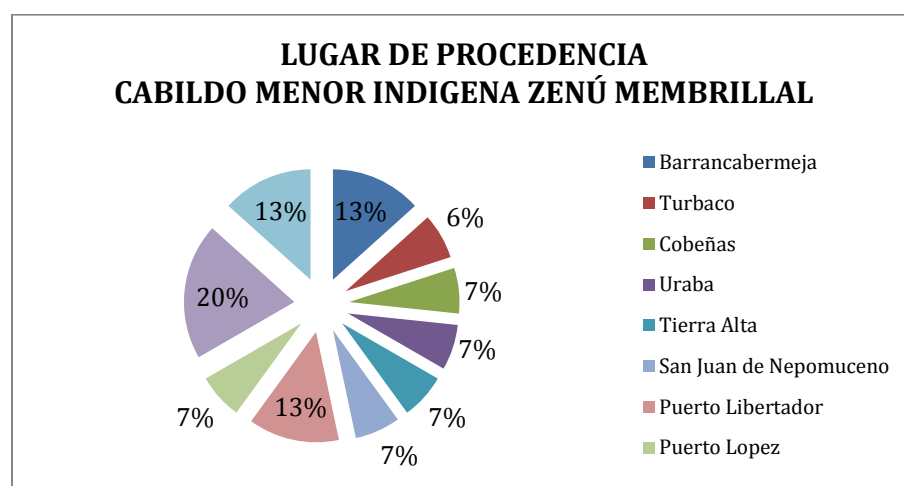


Figura 27. Lugar de Procedencia. Cabildo Menor Zenú de Membrillal. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Con el pasar del tiempo y las condiciones de satisfactorias de adaptabilidad y de subsistencia, se larga a un proceso de migración mucho más amplio con la llegada de aproximadamente 15 familias a ocupar terrenos aledaños a la zona de “arroz barato”. Tras el asesinato de uno de los comuneros, los procesos migratorios se aceleran, de tal manera que miembros de la familia del mismo, impulsan a otros miembros que a su vez estaban siendo intimidados por actores armados, para emprender la huida y asentarse en las cercanías de Cartagena.

Con los deseos de recuperar los derechos que son innatos y que por el hecho de haber tenido que dejar nuestros territorios no los hemos perdido. Decidimos emprender el proceso organizativo con el ánimo de garantizar las condiciones de estabilización (ayuda humanitaria), reubicación, no repetición y restitución. Al haber atravesado varios fracasos con la administración local, que retrasa el descargo de ayudas humanitarias, 29 familias deciden hacer un proceso de declaración conjunta ante la Acción Social (en su momento) en el año 2002.

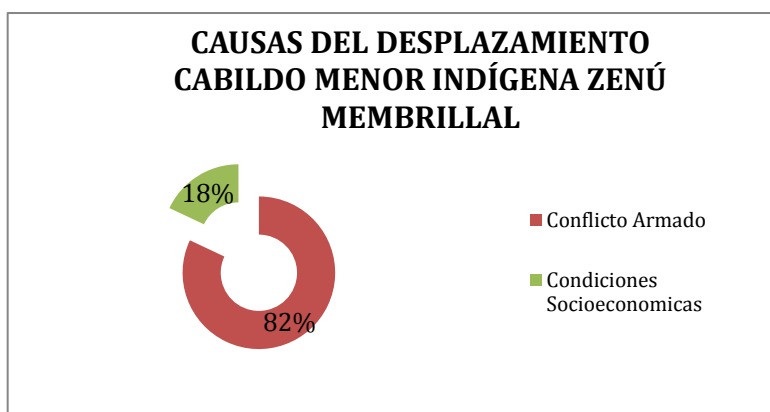


Figura 28. Lugar de Procedencia. Cabildo Menor Zenú de Membrillal. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Para el año 2004, alcanzamos la posesión del cabildo por parte de la alcaldía mediante, reconociendo el asentamiento Zenú en las inmediaciones de la zona rural del municipio de Cartagena departamento de Bolívar. A pesar de los pasos dados, el camino de discriminación por parte de las entidades departamentales y municipales fue mucho más férreo, debido a que el desconocimiento por las causas que generaron nuestros desplazamientos, los llevan a dirigir todo tipo de injurias sobre nuestra etnicidad, colocando en tela de juicio nuestro desplazamiento.

Para 2010, con esfuerzos propios logramos hacer parte de la ejecución de distintos proyectos de apoyo agropecuario para la adquisición de tierras. A finales del 2010, lograron concertar un acuerdo de arriendo con opción de compra, sobre una finca para poder desarrollar sus capacidades propias, usos y costumbres y saberes ancestrales pagando un canon anual de 1.500.000 por 8 hectáreas, sobre el cual habitan 25 familias en condiciones precarias sin ningún tipo de ayuda, teniendo en cuenta que en su mayoría se encuentran en el RUV y/o RUPD y de parte de la entidades encargadas no se ha avanzado en ningún tipo de proyecto de adjudicación de vivienda.

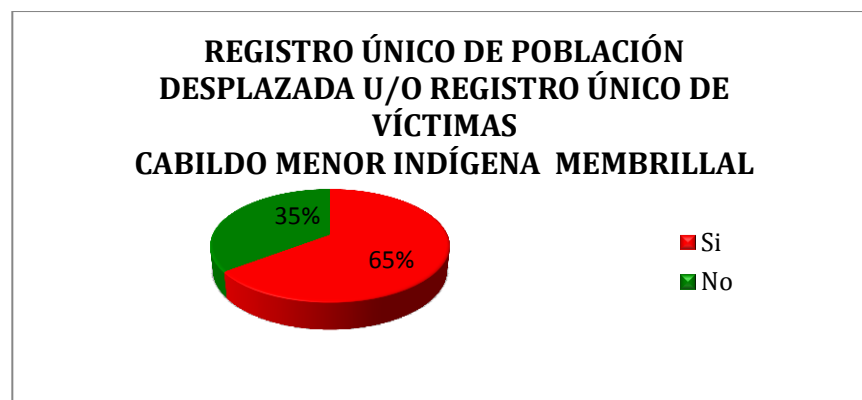


Figura 29. Registro Único de Víctimas – Registro único de Población Desplazada. Cabildo Menor Zenú de Membrillal. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Ejemplo de lo anterior se evidencia en entrevistas realizadas por el diario El Universal de Cartagena en la alcaldía el año 2012 sobre el tema: *“El Distrito tiene toda la voluntad de comprar el terreno. La administración pasada tuvo el interés de adquirirlo, pero ese terreno tenía un pleito pendiente, porque se lo estaban disputando dos personas que alegaban ser los dueños, por ende en ese momento no se pudo comprar”*, manifestó Francisco Fernández Salgado, asesor de la Alcaldía de Cartagena para Asuntos Étnicos. *“Ahora que entramos nosotros, el alcalde Campo Elías Teherán confirmó la intención de comprarlo, porque a través de un fallo se resolvió el conflicto jurídico y se determinó quién es la dueña, pero en estos momentos se acabaron los recursos”*²³.

²³ FLÓREZ, ANLLY Indígenas Zenús luchan por un hogar en Cartagena, El Universal 13 de Agosto de 2012, consultado en Línea : <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/indigenas-zenues-luchan-por-un-hogar-en-cartagena-87226>



Fotografía 8. Asentamiento del Cabildo Menor Indígena de Membrillal. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

La anterior entrevista, como es referenciado se realizó en el año 2012, y para la fecha de, esta situación sigue siendo tema de discusión en las reuniones o encuentros que se han realizado con las entidades municipales, las cuales se comprometen con el cabildo pero no entregan resultados concretos. Evidenciando las vulneraciones al Decreto Ley 4633 de 2011 en el Artículo 92, el cual reza;

Las personas y comunidades indígenas retornadas o reubicadas individual o colectivamente, recibirán atención humanitaria una vez verificadas las condiciones de vulnerabilidad con respecto al tiempo de arribo, al lugar de retorno y/o reubicación, determinando la etapa de atención correspondiente y la asistencia a brindar.



Fotografía 9. Vivienda del Cabildo Menor Indígena de Membrillal. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Los comuneros han buscado las formas para poder subsistir, a pesar de contar con un territorio colectivo, este es mínimo para las necesidades de la comunidad por lo tanto, gran parte de nosotros debemos acudir a empleos informales para la subsistencia de nuestras familias, la venta ambulante de tinto, el servicio doméstico en la ciudad de Cartagena y la agricultura son las principales actividades en las cuales la comunidad encuentra un soporte económico.

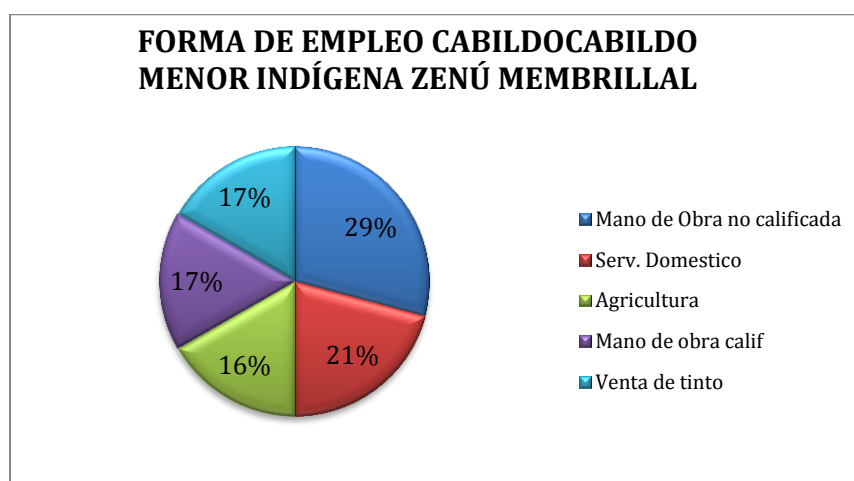


Figura 30. Formas de empleo. Cabildo Menor Zenú de Membrillal. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

1.2.5. Cabildo Menor Indígena de Pasacaballos

Nos encontramos asentados en el corregimiento de Pasacaballos y la vereda Bajo el Tigre, dentro de la localidad industrial y de la bahía de la ciudad de Cartagena, en la vía Mamonal, en diversos sectores del mismo, tales como: el sector Meza Valdez, el sector ciudadela, el sector de banco, el sector Buenos Aires, el sector El Puerto, el sector Cordobitas, el sector Madre Herlinda, el sector Alto de la Paz, el centro de pasacaballos y el barrio porvenir; barrios de invasión que fueron construidos desde los años 80 del siglo XX alrededor de rellenos sanitarios y zonas de residuos industriales.

Desde el año 1995 llegamos varias familias provenientes del departamento de Córdoba, los cuales nos desplazamos de nuestros territorios originarios ante las amenazas de grupos armados, a los municipios cercanos a la ciudad de Cartagena como Turbaco y Arjona optando por ocupar solares y participar de invasiones alrededor de la zona industrial.

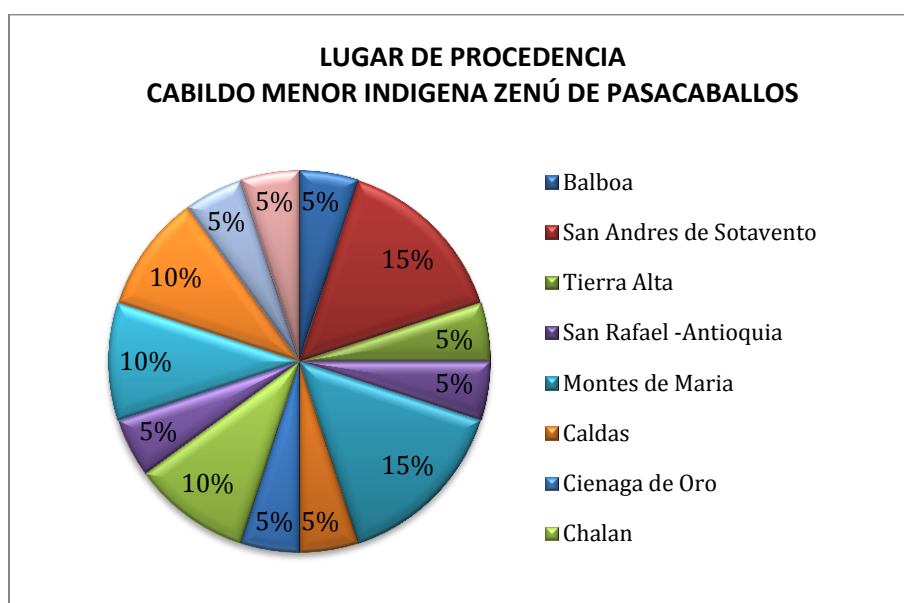


Figura 31. Lugar de procedencia. Cabildo Menor Zenú de Pasacaballos. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

En el corregimiento donde nos encontramos asentados se exhibe una alta presencia de empresas industriales de alto impacto, tales como: GMP (empresa afiliada a Ecopetrol), PUERTO BAHIA, PACIFIC RUBIALES, DOW CHEMICAL, ABOCOL, PERFUMERÍA LEMAITRE, LADRILLERA LA CLAY, BAVARIA, entre otras, viéndonos seriamente afectados y en mayor proporción por la empresa LADRILLERA CLAY *“ya que todas las noches desde las 4pm a las 10pm produce gran cantidad de esmog, motivo por el cual los niños deben quedarse encerrados ya que no se aguantan la contaminación y se aprietan”*. Manifiesta situación que evidencia la vulneración más clara a la Ley 21 de 1991, la cual es enfática en suscitar a los respectivos procesos de consulta previa, siempre y cuando las comunidades indígenas se vean afectadas, así el Cabildo no posea el Registro étnico de la Dirección de Asuntos indígenas, ROM y minorías del ministerio del Interior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado a favor de los grupos étnicos minoritarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

A pesar de los esfuerzos hechos por algunas entidades para los procesos declaratorios, para vincularse en el RUV y/o RUPD, el 32% de los comuneros no ha tenido el deseo de hacerlo, teniendo en cuenta que se manifiestan como víctimas, pero el temor a tener algún tipo de represalias, ha incrustado el silencio en ellos, de esta manera siguen abiertas las brechas de las víctimas que no han acercado sus casos a las entidades encargadas.

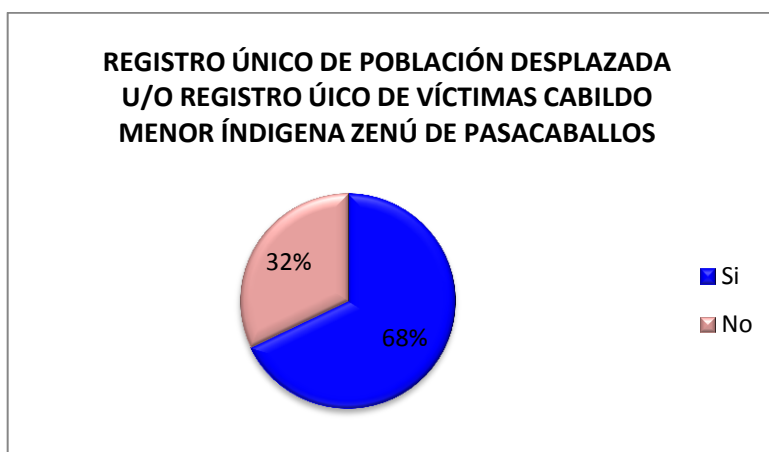


Figura 32. Registro único de Población desplazada – Registro único de víctimas. Cabildo Menor Zenú de Pasacaballos. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

La gran mayoría de la comunidad se dedica al comercio y a la prestación de servicios relacionados al turismo de la ciudad. Las familias ubicadas en el Bajo el Tigre, aún mantienen practicas económicas relacionadas a la agricultura en los terrenos contiguos o fincas aledañas donde prestan sus servicios por jornales.

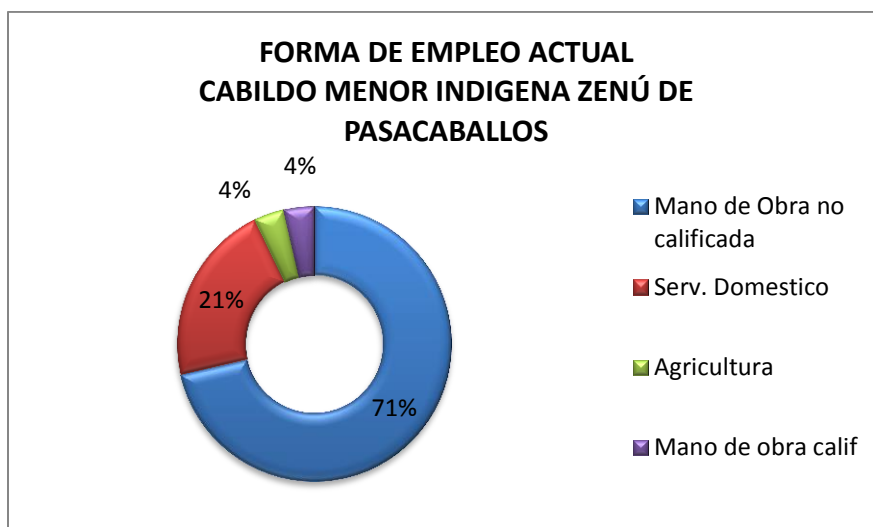


Figura 33. Forma de empleo. Cabildo Menor Zenú de Pasacaballos. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Recientemente, fue construido un proyecto de huertas y apoyo a la pequeña producción por parte del Ministerio de Agricultura, siendo inicialmente estructurado por la Fundación Mamonal, en la búsqueda de la seguridad alimentaria de una parte de la comunidad. Por las condiciones en que se han producido los desplazamientos, y por los cambios en la estructura familiar, una gran cantidad de nuestras mujeres se han dedicado a actividades relacionadas al comercio de forma paralela a otros servicios prestados a los complejos industriales.

Si bien debe afirmarse que por encontrarnos en una zona industrial y estar rodeados de actores que ejercen una dominancia activa sobre las decisiones que afectan el territorio en el que vivimos y no tener autonomía en las decisiones que afectan nuestro entorno. El barrio en el cual esta centrado el Cabildo fue construido alrededor de un basurero elite, por lo que el principal problema que sufrimos está relacionado a la falta de salubridad.

El problema por plagas de roedores ha llegado a tal punto que varios miembros han sido mordidos por ratas mientras duermen la situación ha llegado a tal punto que nos hemos acostumbrado a ver grupos de hasta 10 roedores al interior de las casas sin intentar erradicarlas por miedo a nuevos ataques. Situaciones apremiantes de vulneración debido a que la obligación del Estado colombiano, esta dirigido a generar unas condiciones de vida optimas a la población en situación de desplazamiento.

Por otra parte, las emisiones de gases tóxicos por las empresas que operan en el sector están relacionadas con infecciones respiratorias entre la población infantil y en varias ocasiones, se nos ha recomendado mudarnos por parte del personal médico que nos atiende. La situación es tan inestable que recientemente hubo varias brigadas del ICBF en la que nos iban a quitar la custodia a los padres por la dramática situación de 18 menores en condición de desnutrición.



Fotografía 10. Vivienda del Cabildo Menor indígena de Pasacaballos. Plan Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

1.2.6. Cabildo Menor Indígena Nueva Alianza

Nuestra comunidad se encuentra asentada en el corregimiento de San Basilio de Palenque en el municipio de Mahates, departamento de Bolívar. El Corregimiento se

encuentra a sesenta kilómetros de la ciudad de Cartagena, limita con Malagana, San Cayetano, San Pablo y Palenquito.

El Cabildo no cuenta con la resolución expedida por la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y minorías del Ministerio del Interior, pero si se cuenta con la posesión ante la alcaldía de Mahates, lo que ha incurrido en una invisibilización permanente por parte de las autoridades departamentales y nacionales, además de quienes habitan en el territorio donde se encuentran asentados.

El cabildo comenzó su proceso como tal a partir de los años 2000; no obstante, las familias que migraron desde Colosó, San Andrés de Sotavento, Tuchín y San Bernardo del Viento han estado ocupando los lotes que varios miembros del consejo comunitario han puesto a su disposición desde finales del siglo pasado. El proceso reivindicativo se generó por la recuperación de las tradiciones propias del Pueblo Zenú y desde las disparidades que se daban en la región con respecto a otras minorías, por tal razón.

En nuestra comunidad podría decirse no ha podido desenvolverse de la manera ideal, debido a que nos encontramos en territorios ajenos, convivir con la población afro, ha hecho que debamos limitarnos y aceptar costumbres de su comunidad, por ejemplo, a pesar de que el acceso a la educación está garantizado por cuanto residen en el corregimiento, han visto su derecho a la educación vulnerado por cuanto los niños son obligados a asistir a las clases de lengua palenquera en la institución tecnológica de Macancamaná.

Así mismo existe una problemática social en éste entorno, pues se han visto casos donde los animales pertenecientes a los diferentes miembros de nuestra comunidad, son constantemente hurtados y se han potenciado distintos conflictos interétnicos con los Kuagros (grupos palenqueros), que argumentan que los *chinos* no tienen ningún

derecho de residir en el territorio, es así como nuestro derecho a la identidad cultural se ve afectado en gran nivel.



Fotografía 11. Vivienda del Cabildo Menor indígena de Nueva Alianza. Plan Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Nos encontramos totalmente insatisfechos y desorientados, nuestros derechos como víctimas del desplazamiento forzado pertenecientes a un pueblo indígena están siendo simplemente desconocidos en el lugar receptor, a razón de esto esperan que por medio de la aplicación de políticas públicas su escenario mejore y sobre todas las cosas ser parte de una reubicación colectiva por parte del estado.

Las vulneraciones al Decreto Ley 4633 de 2011, se encuentran latentes en varios ámbitos; en primer lugar la falta ayudas enfocadas en atención humanitaria expuestas en el Artículo 92, de las cuales en muy pocas ocasiones ha tenido buen término; en segundo lugar, el desconocimiento por una minoría étnica en medio de un territorio perteneciente a otra minoría, lo que implica una invisibilización por parte de todas las autoridades encargadas, que no han brindado las garantías necesarias para la protección de la diversidad étnica, la cual hace énfasis en el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia de 1991.

1.2.7. Cabildo Menor Indígena La Pista

Nuestra llegada al corregimiento de San Pablo- Municipio María la Baja, se da como consecuencia al desplazamiento forzado desencadenado por diferentes circunstancias que hostigaron a nuestra comunidad, entre esas se puede atribuir a la situación alrededor de los años 70's y parte de los 80's, referente a la toma de tierras que se desató por parte de los terratenientes presentes en los diferentes municipios expulsores, de igual manera el conflicto armado entre grupos guerrilleros y el Ejército Nacional donde muchos de nuestros miembros fueron víctimas de hostigamientos, amenazas, intimidación, terror implementado por parte de grupos armados presentes en las zonas de deserción con la intención de generar un desplazamiento individual, familiar o colectivo. De igual manera la búsqueda de mejora en la calidad de vida a razón de los procesos socioeconómicos que se empezaron a agravar como consecuencia indirecta del conflicto armado.

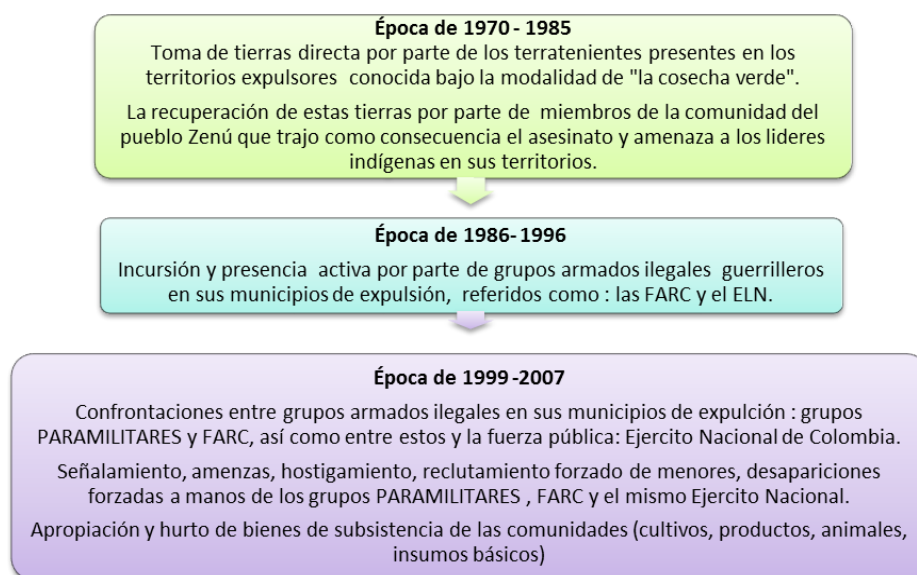


Figura 34. Línea de tiempo de los motivos, épocas y actores causantes del desplazamiento de los miembros del cabildo de sus municipios expulsores. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

El departamento de Córdoba es reconocido como el mayor lugar de expulsión de nuestros comuneros, exactamente desde las zonas del municipio de Tuchín, Sitio Nuevo, Las peñas pertenecientes al municipio de San Andrés de Sotavento, Sabaneta del municipio de

Momil, así como el municipio de Agustín Codazzi del departamento del Cesar y el municipio de San Juan Nepomuceno del mismo departamento de Bolívar.

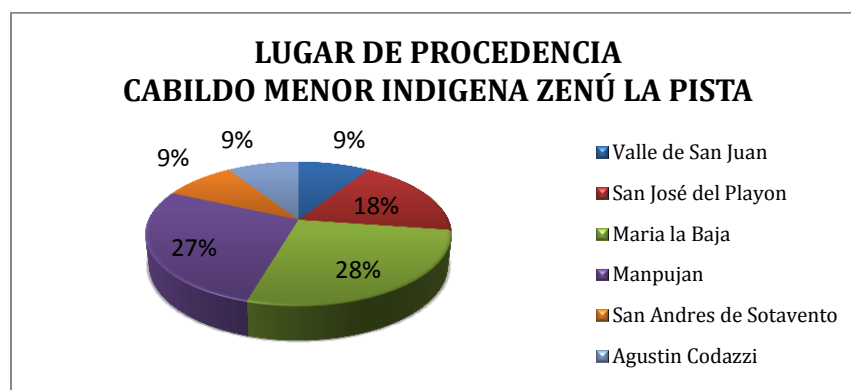


Figura 35. Lugar de procedencia. Cabildo Menor Zenú La Pista. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Motivados por la necesidad de encontrar un nuevo lugar que nos permitiera escapar e iniciar de nuevo, resultó atractivo las ocupaciones alrededor de la pista de aterrizaje del antiguo Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) en el corregimiento de San Pablo, pues para los años 80 se encontraba en pleno auge la bonanza arrocera ya que se estaban desarrollando importantes proyectos de cultivos del arroz de riego en el Municipio de María la Baja y sus alrededores, por lo tanto la oferta económica fue una de las respuesta a muchos en la situación de aquellos momentos.

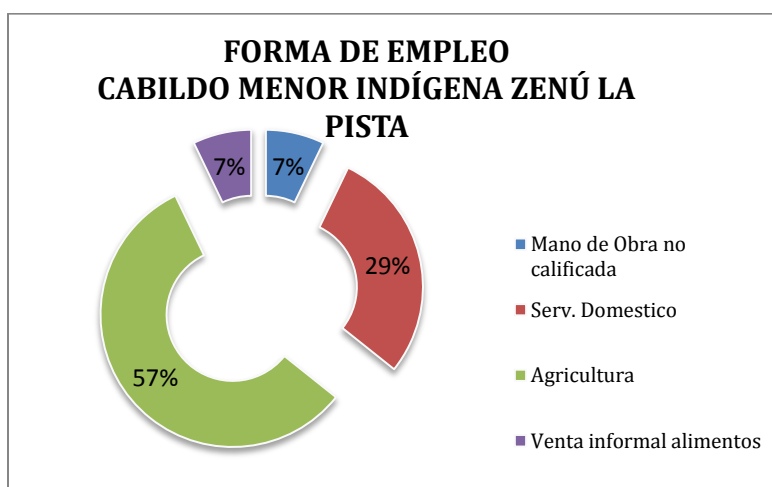


Figura 36. Forma de empleo. Cabildo Menor Zenú La Pista. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Desde el 2004 los cultivos de arroz fueron disminuyendo y así mismo la tierra a la que varios de nuestros miembros tuvieron acceso mediante préstamos institucionalizados – territorios asignados “a la media”, en que el campesino valoriza el predio limpiándolo y aplanándolo pudiendo alimentarse del mismo por un periodo de tiempo a cambio de las mejoras que realiza- de distintos propietarios, fue progresivamente acaparada por cultivos de palma que hoy impiden la siembra.

El 11 de febrero del 2013 el Ministerio del Interior bajo la competencia de la Dirección de Asuntos Indígenas ROM y Minorías expide resolución N° 0012 para el registro de nuestra comunidad. No contamos con un territorio colectivo, sin embargo nos encontramos en un proceso para la adjudicación de éste por parte del INCODER, pues existe un voluntario interesado en negociar la venta de ciertas hectáreas a nombre de nuestro cabildo que hizo llegar a manos de líder Celedonio Padilla, nuestro delegado, quien hace parte de la mesa permanente de concertación en el tema de tierras.

De manera organizada se ha venido realizando un trabajo en búsqueda de la asistencia por parte de los órganos judiciales y el debido acompañamiento con respecto a las víctimas miembros de nuestra comunidad que no han podido declarar o que no se han sentido con la confianza en estos organismos para realizar sus denuncias.

A raíz de eso la semana del 27 al 31 de octubre del 2014, este cabildo tuvo lugar a una Brigada “Jornada de atención a víctimas población Indígena” por parte de la fiscalía, en la cual se tomaran declaraciones y se hicieron las respectivas inscripciones al RUV por parte de este órgano, esta brigada fue solicitada de manera expresa por parte de la junta del cabildo.



Fotografía 12. Brigada de la fiscalía General de la Nación- Seccional Región Caribe, comisión de la unidad de víctimas, en el cabildo La Pista. Plan Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

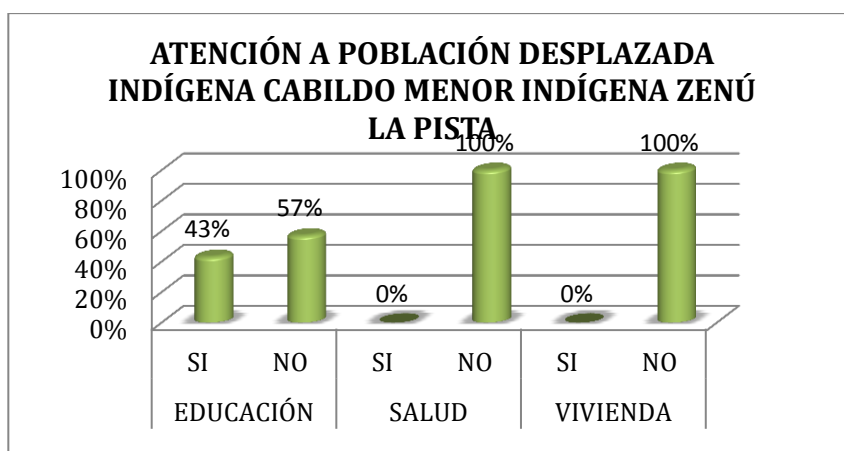


Figura 37. Atención a población desplazada. Cabildo Menor Zenú La Pista. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

No contamos la prestación de servicios públicos básicos, por lo que se obtiene al “colgarnos” de los postes de energía o de los transformadores cercanos, sin embargo a raíz de este suceso Electricaribe y/o Energía Social, decidieron realizar censos con la intención inicial de instalar un contador comunitario pero solo se empezó a facturar la energía “pirata” pero no se instalaron nuevas redes, a consecuencia somos beneficiarios y deudores de un pésimo servicio. Situación especial acontece al caserío de La Pista y Primero de Julio donde cuentan con acceso al servicio que de igual manera es pésimo y toca pagarlo. De igual manera no se cuenta con la presencia de empresas prestadoras del

servicio de gas por lo que diferentes familias optan por comprar pimpinas de gas o utilizar cocinas de leña. Para poder acceder y obtener agua para nuestro uso personal y doméstico se recurre a la implementación de pozos perforados, dotados de bombas manuales o eléctricas, cubiertos o pozos artesanales, para obtener alguno de estos tipos de suministro de agua es necesario que nuestros miembros cuenten con recursos propios para poder contratar el servicio de perforación por parte de un tercero, dichos pozos tienen una profundidad promedio de 10 mts. Otra modalidad consiste en la recolección y almacenamiento de agua del canal que pasa entre los caseríos de Primero de julio y La Pista, agua que es cruda poco salubre, que causa malestares estomacales y alergias en la piel. Para el manejo de desechos sólidos solos las familias que puedan contar con algo de recursos podrían comprar letrinas o pagar para la construcción de pozos sépticos con una dimensión generalmente de 3-4 metros.

Caso emblemático Climaldo Flórez.

Ex capitán del cabildo de La Pista, refiere haber sido víctima del desplazamiento forzado para el año 1985, época para la cual se encontraba asentado en el municipio de San Andrés de Sotavento, departamento de Córdoba, y él y su familia fueron obligados a dejar sus tierras y bienes por el proceso de toma de tierras directas que se estaba viviendo a razón de la presencia de los terratenientes, expresa que : *“tuve que salir de ahí por líder, líder del movimiento de recuperación de nuestras tierras, pero los terratenientes me amenazaron (...) me amenazaron esos hombres que ellos mandaban”* . Inicialmente se movilizaron a El Playón en el municipio de María La Baja, pero asegura haber salido desplazado de este por presencia de grupos guerrilleros en la zona, menciona que un día se presentaron estos hombres y les dijeron a las personas que se encontraban presentes que: *“se tenían que ir”* sin mayor explicación y llegar para finales de los años 90 e inicios del 2000 a la zona de La pista, a causa de las opciones de agricultura que se veían en estas tierras. Después de conformado el cabildo y conseguir el aval del resguardo mayor de San Andrés de Sotavento, el señor Climaldo es elegido y posesionado como

Capitán y para la fecha del 15 de octubre del 2011, es víctima de un intento de secuestro por quienes el refiere como “los colillos” de los grupos armados que estuvieron presentes en la zona, o “por lo menos así se presentaron”, quienes tenían por objetivo que el señor Climaldo al verse en esa situación les diera los recursos económicos que según ellos él tenía en su poder por ser capitán del cabildo.

1.2.8. Cabildo Menor Indígena Nuevo Porvenir

Las veredas adyacentes al corregimiento de Retiro Nuevo fueron mayormente pobladas entre finales de los años setenta y comienzo de la década de los ochenta, gracias a auges plataneros que convocan mano de obra y garantizaban empleo a los migrantes. Para mediados de los años 80, los parceleros, consolidados como institución rural en la región, podían facilitar hasta 10 hectáreas de tierra para Pancoger, lo que impulsó a muchos desplazados del resguardo de San Andrés a generar empleo y mantener un estilo de vida elevado en la región.

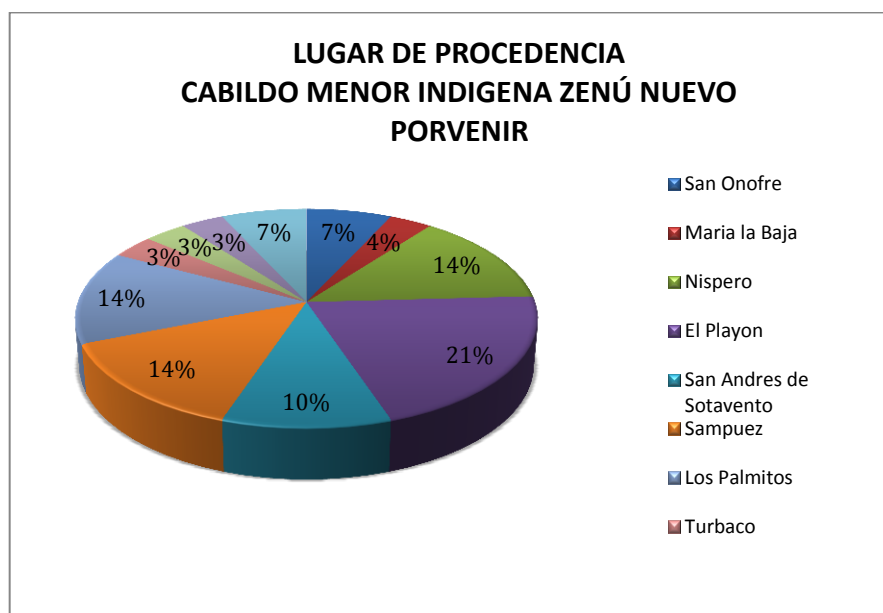


Figura 38. Lugar de procedencia. Cabildo Menor Zenú La Pista. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

A raíz de los diferentes procesos de violencia que los miembros de nuestra comunidad a debido afrontar desde décadas atrás, se han perdido ese conocimiento ancestral referido a el origen de nuestro pueblo, y diferentes rasgos y prácticas culturales como la artesanía que hoy día queremos recuperar. Es por eso, que algunos de los comuneros han optado por comprar la palma de caña flecha a precios en ocasiones irrisorios, para aun así mantener la tradición y poder dispersarla a los más jóvenes.



Figura 39. Registro único de población desplazada-Registro único de víctimas. Cabildo Menor Zenú La Pista. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

La mayoría de las viviendas son construidas en bareque estructurado con palo de lata y cubiertas por zinc, o palma amarga. Las viviendas se encuentran en condiciones bastante críticas, por cuanto el hecho de estar en una zona de alto riesgo se opta por no invertir en mejoras o materiales que corran el riesgo de perderse en una eventual reubicación. Los baños son por lo general estructurados en forma de cuadro cercados con palos de lata y plásticos negros impermeables. Dentro de los mismos se desechan los residuos corporales y se toman baños con baldes.

El acceso a la tierra fue limitándose tras la llegada de varias plagas que a mediados de los noventa azotaron los cultivos y redujeron la capacidad productiva de los agricultores de aquellas épocas. Primero, la sicutoca perjudicó en gran medida los cultivos de arroz (Oriza Sativa) Y Plátano (Muza Paradisiaca), pudiendo controlarse solo hasta dos trágicos años

después de pérdidas. Acercándose el fin de siglo, la llegada del “moco” (plaga gris) que mataba el higo (Ficus Carica) y todo alrededor.

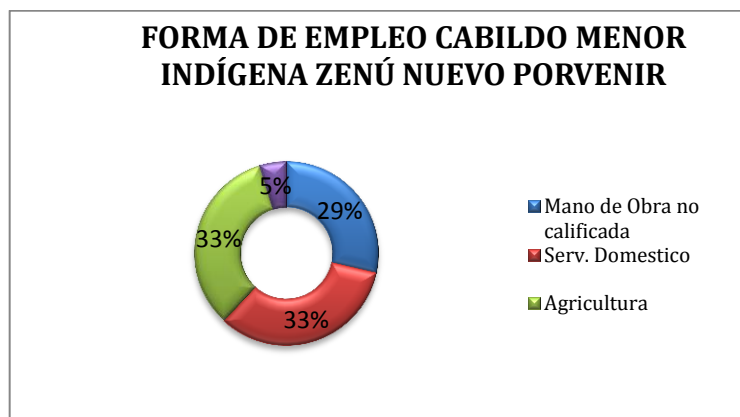


Figura 40. Forma de empleo. Cabildo Menor Zenú La Pista. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

A finales de los noventa las fincas plataneras vieron su fin removiendo las plantaciones para sembrar pastos mejorados y utilizarlo como ganado extensivo. Es en esta época donde se implantan las primeras fincas de palma (Arecaeae). A partir de este momento nuestra comunidad empieza a generar sus ingresos desde los jornales y se empieza a desarrollar la vida entorno a la prestación de servicios agrícolas- que a la final terminó por erradicar la costumbre de manejo de territorio.

1.2.9. Cabildo Indígena Menor de Turbaco

Desde el año 2012, nuestro cabildo es reconocido por parte de la administración municipal y de igual manera por el Cabildo Mayor Zenú de San Andrés de Sotavento, pero aun no contamos con resolución de reconocimiento como parcialidad indígena por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y minorías del Ministerio del Interior. Aunque ya se han adelantado dichos trámites por parte de las autoridades indígenas desde el año de 2011, el cual se manifestó como respuesta la falta de cumplimiento de los criterios exigidos, pues anteriormente nuestros comuneros en la mayoría de los casos se encontraban asentados en territorio urbano. Para el 2 de febrero del 2013 se envían los

requisitos faltantes y actualmente nos encontramos a la espera del estudio etnológico por parte de la entidad encargada.

De tal manera, no contamos con un territorio colectivo, aun así este no ha sido impedimento para fortalecer su organización interna, aunque se lograría mucho más de lo alcanzado hoy día, si se contara con un terrero que permitiera desarrollarnos culturalmente.

Los principios organizativos trazan alrededor de los años de 1986, con el comunero Hidalgo Lazaro, quien a la edad de 16 años tuvo que enfrentarse ante la realidad de escapar de la “Vereda los Vidales”- Córdoba o de lo contrario se vería obligado a ser reclutado por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC-, que llevaban reiterados intentos fallidos de incorporarlo a sus filas, es allí donde él decide conseguir recursos y poder comprar el pasaje que lo llevo hasta Turbaco, donde posteriormente logró conseguir trabajo en todo lo relacionado con la ganadería.

Es así como en los años de 1990, decide empezar a incentivar a aquellas familias que años atrás habían llegado igualmente a dicho municipio a causa del desplazamiento forzado, para que se organizarán y consolidara una estructura de gobierno propio que fuese encaminado a la preservación de usos y costumbres del pueblo Zenú. Dicha motivación estaba cimentada en los recuerdos de años atrás que junto a su padre y Celedonio Padilla ex Cacique del Resguardo Mayor, estuvo firme en los procesos de recuperación de tierras.

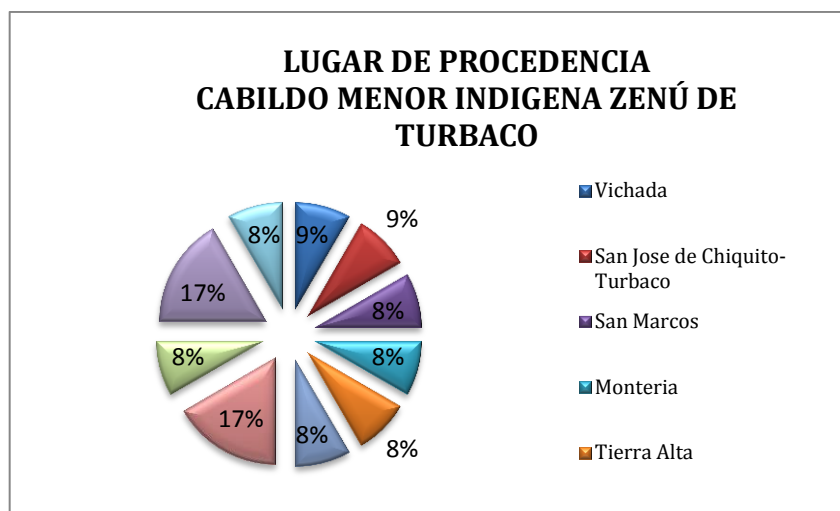


Figura 41. Lugar de procedencia. Cabildo Menor Zenú de Turbaco. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Para el año de 1995 ya se convocaban a reuniones que se llevaban a cabo en los barrios del Talón y San Pedro, allí se empezó a hablar de la necesidad de conseguir tierras, de poder acceder a la salud y educación con un enfoque especial, necesidades que solo se podrían alcanzar organizadamente. Ya para el año 2006 se creó el primer concejo que tuvo su periodo hasta el 2009, a través del cual pudieron acceder a ciertos talleres por parte del Sena orientado a desarrollar objetos artesanales como pulseras, collares, aretes y diferentes elementos de bisutería.

Ante la necesidad de una sede para poder llevar a cabo sus reuniones, en el 2011 se alquila una casa para tal fin, que pudieron sostener por medio de ventas de comidas, rifas y diversas actividades hasta el 2012, que por dificultades del mantenimiento económico.



Fotografía 13. Caney de la sede principal del Cabildo Menor Indígena Zenú de Turbaco. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú.

2014



Figura 42. Porcentaje de víctimas del desplazamiento Forzado. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú.2014

Como se logra evidenciar en la figura, un 58% de los miembros del cabildo, se reconocen como víctimas del desplazamiento forzado ya sea por afectación directa por amenazas, muerte o violaciones en alguno de sus integrantes familiares, por las consecuencias económicas que traía la aspersión de cultivos ilícitos que afectaba los cultivos propios lo que repercutía en afectaciones a la salud de los comuneros.

Se identifica como principales departamentos expulsores en un 46% a Córdoba en su gran mayoría de San Andrés de Sotavento, un 27 % del departamento de Sucre en su mayoría de san Antonio de Palmito y Tierra Alta, y un 27% restante entre municipios del departamento de Bolívar, todo esto a razón de que sus padres o abuelos si fueron desplazados de este departamento de Córdoba y por circunstancias diversas como la

oferta laboral principalmente la ganadería, el requerimiento de cuadrillas para desmontar la maleza de fincas, la presencia de familiares o conocidos anterior a su llegada , decidieron asentarse en los diferentes municipios del departamento de Bolívar del cual luego fueron expulsados nuevamente y por esta razón sus nietos o hijos se encuentran ubicados en otro municipio receptor.

Los integrantes de este cabildo refieren en su mayoría haber realizado el registro único de población desplazada RUPD o actualmente el registro único de víctimas RUV, gracias al esfuerzo y trabajo conjunto entre autoridades del cabildo y la unidad de Víctimas del departamento de Bolívar.



Figura 43. Registro único de Víctimas-Registro único de población desplazada. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú.2014

Son Pocos los cabildantes quienes aún no han declarado, en algunos aún persiste cierta indiferencia motivada por el miedo que dejaron los hechos del pasado, y otros pocos quienes se ven consumidos en las obligaciones del día a día para poder salir adelante por lo tanto el tiempo se ve limitado para este tipo de trámites.

La mitad de los comuneros que se encuentran en el RUPD o RUV, manifiestan haber recibido las ayudas humanitarias de emergencia que por las diferentes circunstancias fueron de gran utilidad en cierto momento, pero existe cierto desagravio ante estos

auxilios, pues muchos de los miembros alegan que solo una vez se vieron beneficiados y otros aún están a la espera de dichas ayudas.

Caso Emblemático Enoelia,

Miembro del cabildo y actualmente alguacil, cuenta su historia con dolor refiriendo ser originaria de Tierra Alta- Sucre, donde hace tres años tomó la decisión de salir de su pueblo. Y fueron varios los factores causantes de esta decisión directa e indirectamente relacionadas con el conflicto armado que atraviesa el País. La presencia de los grupos armados que ella reconoce como paramilitares y sus enfrentamientos con el Ejército Nacional sembraban cada día el terror y la incertidumbre en el mañana. Relata que en más de una ocasión pasó momentos amargos cuando se enteraba que sus hijas, dos en especial, eran molestadas por miembros paramilitares, intento de violación a una de ellas donde logró salir libre pero golpeada y maltrataba. En otras ocasiones debía salir a buscar a otra de ellas que en una ocasión encontró amarrada, golpeada y siendo molestada por los mismos. Tras repetidas ocasiones se levantaba asustada a media noche para encontrarse con la sorpresa de invasión en sus predios por miembros paramilitares, quedándose hasta 8 días seguidos, situación que llenaba cada vez la llenaba más de angustia. Anudado a lo anterior, la presencia de cultivos ilícitos en la zona ocasiono la aspersión deliberada de los mismos y dañado a su paso cultivos lícitos propios donde se solventaban para el consumir diario y uno que otro ingreso económico, trayendo pérdidas y anulando opciones de seguir adelante.

Actualmente vive en el barrio el Talón, en una pequeña casa arrenda por \$ 100.000 pesos, su estructura de tablas de madera y zinc, no la hace tan apta para cubrir las necesidades de 4 familias para un total de 16 personas entre adultos y niños que viven allí. No cuentan con servicio de agua, el cual deben comprar por galones a \$ 500 pesos, gastando alrededor de 15 galones por semana, dicha vivienda no cuenta con baño ni pozo séptico, cuenta con tres “habitaciones” donde usan dos camas, varias colchonetas y una

hamaca para poder dormir. Uno de sus nietos no ha podido estudiar por dos años seguidos, pues la coordinadora del colegio cercano aduce que no puede realizarse dicha inscripción por aparecer aun vinculado en el Colegio de Sucre.



Fotografía 13. Casa de la señora Enoelia, ubicada en el barrio el Talón. Plan de Salvaguarda Zenú 2014.

Existen ciertos elementos culturales del día a día que han sido adoptados por influencias occidentales que se asimiladas y adaptadas como propias. Actualmente para que una pareja pueda unirse deben realizar el pedimento de mano que conlleva ciertos compromisos entre los involucrados, y a su vez debe realizarse un pago pero no con dinero o animales a cambio, si no lo propio para poder conformar un nuevo núcleo, que celebran mediante una reunión íntima entre los miembros de las dos familias.

Entre los Santos que les presiden, se encuentra José Gregorio patrón de los médicos, a quienes disponen su fe ferviente para los rituales de sanación que se realizan en la sede principal y en las prácticas propias del médico tradicional.

De igual manera ofrecen su devoción a la Virgen del Pastoreo, que a raíz de no tener una figura física que la represente, han decidido adaptarla a la imagen de la Virgen María. La Virgen del Pastoreo representa la madre tierra y a ellas reflejan la visión ancestral y las bondades de la naturaleza.



Fotografía 14. Figura de José Gregorio, Patrón de los médicos ubicada en la zona de sanación del cabildo. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú. 2014

Las diferentes actividades económicas en su mayoría están basadas en lo que ellos denominan el “rebusque” un 12% entre el mototaxismo que es una de las actividades

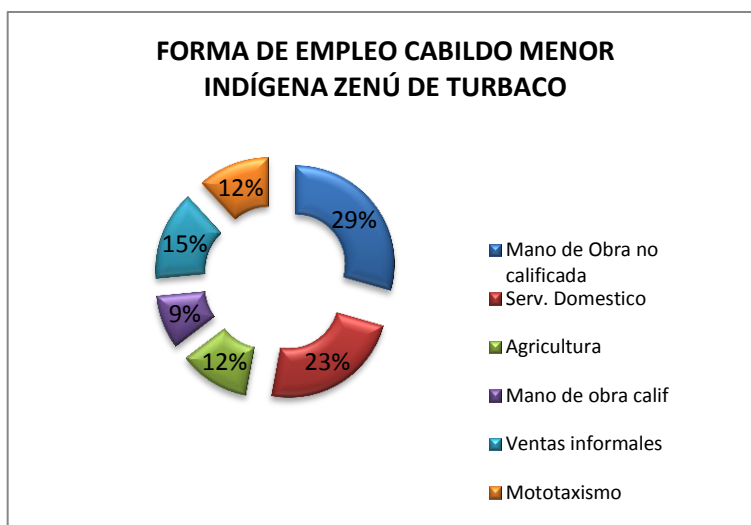


Figura 44. Forma de Empleo. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú.2014

Más populares entre los hombres jóvenes en el municipio, y otra parte de la comunidad en un 15% recurre a la venta informal de tinto, ventas de CD’S, confites, y alimentos.

Igualmente la mano de obra no calificada permite crear ingresos con actividades como el arreglo de cercas, albañilería, arreglos eléctricos.

Diferentes familias se encuentran empleadas como mayordomos en fincas donde tienen su espacio de vivienda propia y se encargan de actividades como el desmonte, cuidado de animales, aseo del lugar, entre otros, que a su vez se ayudan con la venta de las frutas que se producen en épocas de cosecha como el mamey, níspero, limones. También buscan entradas extras con la venta de carbón, el cual es elaborado con la madera seca y hierba verde que posteriormente cubren con tierra y se deja quemar durante una semana, para así al final de este proceso poder véndelo por bultos que equivalen a \$9.000.

1.3. DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Tabla 6. Ubicación municipal de los Cabildos Indígena Zenú en situación de desplazamiento departamento de la Guajira – Demografía y Contexto Geográfico.

#	MUNICIPIO	CABILDO	AREA	NÚMERO DE FAMILIAS	NÚMERO DE PERSONAS
1	Albania	Cabildo Menor Indígena de Albania	Urbano	125	515
2	Dibulla	Cabildo Menor Indígena de Dibulla	Urbano	126	377
3	Fonseca	Cabildo Menor Indígena de Fonseca	Urbano	106	452
4	Maicao	Cabildo Menor Indígena de Maicao	Urbano	664	2.692
5	Manaure	Cabildo Menor			

		Indígena de Manaure	Urbano	189	641
6	Riohacha	Cabildo Menor Indígena de Riohacha	Urbano	320	1353
		TOTAL	DEPARTAMENTAL	1530	6030

Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú, 2014.

El arribo de nuestra comunidad desde el Resguardo del Pueblo Zenú en San Andrés de Sotavento – Córdoba al departamento de la Guajira, se originó a consecuencia de un desplazamiento de forma progresiva -gota a gota- durante las últimas décadas del siglo pasado, inicialmente por parte de los compañeros indígenas que sufrieron el despojo de las tierras ocasionado a través de la ley 55 de 1905, seguido de los inicios y auges de la violencia, como resultado del conflicto armado por el que ha atravesado el país, así mismo, por motivos de fenómenos naturales, como el invierno y las sequías en nuestro territorio ancestral que desmejoraban cada vez más las posibilidades de aumentar nuestra estabilidad económica por la vía de la agricultura.

A partir de la década de los años 80' del siglo pasado la afluencia de los miembros de nuestra etnia Zenú fue mayor en el departamento, principalmente en el municipio de Maicao, que surgía como meca del comercio en la región caribe, por su promesa como puerto libre y el flujo de dinero constante en esta ciudad por ser territorio fronterizo con el vecino país de Venezuela, que contaba para la época con una prospera economía, anudado a lo anterior, el hecho de la distancia con el territorio expulsor en situación de conflicto hacía sus veces como incentivo.

Varias de nuestras familias fueron las que migraron en busca de nuevas oportunidades para la época de los años noventa y lograron establecerse como institución cultural y como grupo económico en la región, por la venta de tinto, reconocidos hasta el presente como “Tuchineros” en los mercados de las ciudades principales del departamento, como

lo son: Riohacha y Maicao, en el mismo sentido, la creación de fuentes de trabajo en el municipio de Manaure por la empresa IFI Concesión Salinas o la apertura del complejo minero El Cerrejón en el municipio de Albania y la oportunidad de trabajar en el campo en las grandes despensas agrícolas como son Fonseca y Albania constituyeron alicientes llamativos para nuestro pueblo en este departamento.

Dentro de este mismo decenio comenzamos a gestar el primer proceso organizativo del departamento, en el municipio de Maicao, con la iniciativa de líderes como Ana Ruiz, Luis Talaigua, Pedro Conde, Uriel Gallego y la familia Valbuena, los cuales fueron pioneros en evidenciar y relucir que por la cultura política de la Guajira, su idiosincrasia y el estigma social de no pertenecer al pueblo indígena Wayuu ni ser habitantes connaturales del territorio, afrontábamos otro reto como miembros de la comunidad indígena Zenú, al punto tal de sentir que nos hallábamos invisibles a los ojos del departamento y que nos era casi imposible seguir preservando nuestra cultura en la zona.

Ante a esta circunstancia y de la mano de dichos líderes se forman las solidaridades y las cooperaciones interétnicas con el pueblo Wayuu, en pro de promover un reconocimiento y participación de nuestra comunidad, implantando y afianzando un espacio propio para nosotros los Zenues en el municipio y progresivamente en el departamento.

Así las cosas, cabe destacar que para el año 1999, logramos fundar el Cabildo Indígena Zenú en el municipio de Maicao, La Guajira, primer paso en la institucionalidad de nuestra comunidad en el departamento.

De la experiencia positiva de organización en este municipio, hemos conseguido a lo largo de los últimos años consolidar 6 colectividades indígenas, urbanas organizadas bajo la figura de cabildos asentados en las subregiones alta, media y baja de la península de la Guajira, las cuales no cuentan hasta el momento con una situación legal estable puesto

que no se encuentran registradas ante la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Por consiguiente, es posible evidenciar que el mayor porcentaje de nuestras familias se encuentra asentadas en el municipio de Maicao con un 44%, seguido por el municipio de Riohacha que representa el 21% de número de las familias, el municipio de Manaure por su parte cuenta con el 12%, los municipios de Dibulla y Albania con un 8%, finalmente el municipio de Fonseca que representa el 7% de las familias asentadas en el departamento.

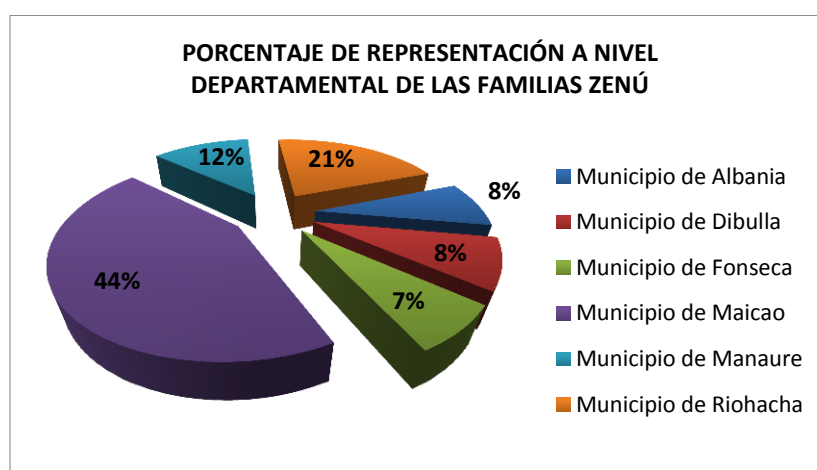


Figura 45. Porcentaje de representación municipal a nivel departamental de las familias Zenú asentadas en la Guajira. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú, 2014.

Teniendo en cuenta la gran presencia de miembros de nuestra comunidad en el departamento decidimos que en atención a realizar un trabajo de manera organizada por la preservación cultural, buscar la visibilización del pueblo Zenú en el departamento de la Guajira, reclamar nuestros derechos planificando las acciones de manera conjunta y ejercer una interlocución con el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, debíamos conformar la Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas Zenú con asentamiento en el departamento de La Guajira (ACIZGUA).



Figura 46. Estructura organizativa de la Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas Zenú en el departamento de La Guajira (ACIZGUA), Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú, 2014.

ACIZGUA se conformó en el año 2013 aunque ya veníamos realizando acciones desde el año 2012, efectuando asambleas macro departamentales, asesorando y otorgando información sobre la conveniencia de constituir una asociación, a la fecha no tiene ningún reconocimiento a nivel institucional, aunque ya hemos elegido una junta directiva en cabeza de un cacique menor departamental y se ha socializado con la secretaría de asuntos indígenas a nivel departamental, falta meramente la posesión formal.

1.3.1. Cabildo Indígena Zenú Del Municipio de Albania –Municipio de Albania-

La llegada de familias pertenecientes a nuestro pueblo al municipio de Albania, está enmarcada a principio de los años 80's, en su mayoría motivadas por la situación económica atravesaba en el departamento de Córdoba en dicha época, Albania era un municipio receptor muy atractivo por su gran despensa agrícola que para esos años se encontraba estrechamente relacionada con la bonanza marimbera, ligado a esto, se empezaba a dar inicio a la operación de minería en gran escala con la finalización de la infraestructura de El Cerrejón Zona Norte, aunque solo fue hasta el año 2008 que nuestra comunidad comenzó el proceso de organización, así que nuestra formación es relativamente reciente, razón por la cual no contamos con una titulación colectiva, ni aún

hemos obtenido el reconocimiento étnico por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, tampoco somos reconocidos por parte de la alcaldía municipal, ni contamos con el registros del acta de posesión de los miembros de la actual junta directiva en esta entidad, mucho menos nos vemos reconocidos y respetados por la institución policiva del municipio, ni por el ejército nacional presente en la zona quienes exponen excusas al momento de eximir a nuestros jóvenes de prestar el servicio militar obligatorio, es posible aseverar por los anteriores motivos, que se nos hace muy difícil ejercer nuestro derecho a una autonomía y un gobierno propio, y ni pensar en el goce efectivo del derecho de jurisdicción especial indígena, vulnerado de esta forma una serie de derechos colectivos reglamentados por la carta magna , ya que, principalmente somos tratados como comunidad general dentro del lugar de asentamiento, sin enfoque diferencial alguno.

De ahí que son varios los factores que han coadyuvado a que se hayan ido debilitando nuestros tejidos culturales, entre esos hallamos: el conflicto armado por el cual tuvimos que atravesar en los territorios expulsores, la situación de asinamiento y pobreza extrema que muchas de nuestras familias viven día a día en nuestro lugar receptor, la falta de garantías sobre los predios donde residimos, el distanciamiento entre integrantes de nuestra comunidad, la presencia constante de relacionamiento interétnico y la evidente incapacidad de expresar materialmente nuestra cultura a través del trenzado con caña flecha, por el abandono sistemático que significó el desplazamiento a la región comercial de la Guajira, situaciones estas, que nos han venido distanciando de nuestros atributos culturales significativos.

Las condiciones de vivienda de nuestra comunidad son heterogéneas, y de igual manera lo son las de acceso a servicios domiciliarios básicos, los comuneros estamos dispersos en la cabecera municipal y sectores rurales, las familias que han llegado en los últimos años desplazados poseen circunstancias precarias de vida, por cuanto deben asentarse en invasiones bastante deplorables que no permiten la existencia de un acceso a una

vivienda digna, en su mayoría, las casas son construidas con estructuras de Zinc y plástico, contando con espacios contiguos del mismo material, alternado con palma amarga para proteger zonas de cocina y cuidado de animales domésticos, cuenta con pozos sépticos, agua bombeada con turbinas y almacenada en albercas artesanales o tanques, que traen consigo la proliferación de plagas como zancudos, disponen de sus desechos a cielo abierto por medio de quemas controladas, que atentan sin lugar a duda al derecho a un ambiente sano.



Figura 47. Estructura de la vivienda de una familia perteneciente del cabildo. Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Zenú, 2014.

1.3.2. Cabildo Indígena Zenú del Municipio de Dibulla –Municipio de Dibulla-

Nuestra comunidad no cuenta actualmente con titulación colectiva, ni el reconocimiento étnico por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, aunque nuestra llegada a este municipio se sitúa hace más de 30 años nuestra situación jurídica no está definida, el enfoque diferencial como sujetos de protección especial de derechos se evidencia vulnerado de forma directa, por la falta de reconocimiento de nuestros derechos colectivos, a pesar que la alcaldía municipal tiene conocimiento de la existencia de nuestro cabildo indígena Zenú en su jurisdicción, no se

ha iniciado un proceso de apoyo a la comunidad bajo nuestras necesidades específicas, principalmente por la falta de equidad que representa a la administración municipal, ya que el desarrollo del clientelismo político resulta bastante obstructivo para participar de beneficios institucionales, acceso a proyectos, atención municipal en recursos, nos hemos visto marginados cuando cierta porción de población de nuestros miembros no votan por el alcalde elegido.

La motivación principal para movilizarnos hasta este municipio se deriva en la búsqueda de una oferta laboral que trajera como consecuencia una mejora en las condiciones de vida de las familias de nuestro pueblo, y aunque inicialmente Dibulla contaba con una gran oferta de trabajo en las minas de la baja Guajira anudado a un acceso a las fuentes de alimento provenientes de la pesca y la agricultura, actualmente no se presenta la misma situación, no poseemos una soberanía alimentaria lo cual trasgrede nuestro derecho a una alimentación mínima, que nos impide satisfacer de la forma correcta las necesidades biológicas, así mismo, nuestro desarrollo como comunidad se haya, hasta el momento, estancado, todo esto como consecuencia de la crisis de extrema pobreza por la cual nuestras familias están atravesando, los altos índices de desempleo y desescolarización por parte de nuestros jóvenes, nuestra actividad económica se ha visto reducida a roles informales, entre las cuales se encuentran:



Figura 48. Dinámicas económicas desarrollados por los miembros del cabildo. Plan de Salvaguarda Étnica Zenú, 2014.

Es de gran preocupación para nuestro pueblo la notoria pérdida del arraigo cultural, y la invisibilización de los derechos culturales en nuestra comunidad, toda vez que la pérdida de vínculos significativos con el territorio y las nuevas relaciones económicas nos ha llevado a la asimilación cultural en el contexto donde nos asentamos, situación que nos acerca más a una perspectiva de colonos que de grupo étnico de la región, aún para esta época nos sentimos como invasores de un territorio propio de otros grupos étnicos, ejemplo de esto es que los indígenas de los pueblos Wiwas y Koguis que viven en Quebrada Andrea y Pozo Azul, actualmente nos ven, en sus palabras, como blancos no invitados (colonos) que amenazan sus territorios. A pesar de esto hemos intentando a través de los ejercicios organizacionales de ejecución de gobierno propio, recuperar las prácticas tradicionales que se han perdido: los bailes típicos tales como el Fandango, la Cumbia y el Porro.

Con ocasión a la condición de desplazamiento muchos de nuestros miembros viven en invasiones sobre terrenos que bien son privados, o pertenecen al municipio y están próximos a ser desalojados mediante órdenes de lanzamiento. En el último año se han ejecutado (3) tres órdenes de lanzamiento acompañadas por el ESMAD y la maquinaria pesada que destruye los cambuches levantados con plástico, zinc, y tela verde de construcción, así mismo nos hemos enterado que existe el interés de desalojo en terrenos públicos dejando a un lado nuestro derecho de reubicación, colocando una vez más por debajo nuestros derechos al cuidado, trato preferencial y reparación integral como población indígena.

Finalmente no podemos ignorar otro factor amenazante para nuestra comunidad, como lo es el riesgo de una re victimización en los corregimientos de Mingueo y Palomino , por la eminente presencia de grupos armados como Los Urabeños es el interés de dichos territorios colindantes a la Sierra Nevada de Santa Marta para sus operaciones, perjudicando nuestros derechos políticos y libertades fundamentales.



Figura 49. Niños pertenecientes a la comunidad del cabildo en precarias condiciones de vivienda y sanidad. Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Zenú. 2014.

1.3.3. Cabildo Indígena Zenú Del Municipio de Fonseca -Municipio de Fonseca-

La comunidad asentada en el municipio de Fonseca, perteneciente a nuestro pueblo no cuenta actualmente con titulación colectiva, ni con el reconocimiento étnico por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, situación que ligada con la falta de reconocimiento por parte de la alcaldía municipal afecta el ejercicio de nuestros derechos colectivos por cuanto nuestra autonomía, gobierno propio y jurisdicción especial indígena se ven debilitados frente a la falta de respeto y reconocimiento por las instituciones policivas y del ejército nacional.

Es impostergable la necesidad de aclarar nuestra situación jurídica ya que nos encontramos en riesgo latente de una cadena sin fin de re victimización, puesto que en la actualidad en nuestro lugar de asentamiento opera el frente 59 de las FARC y los comandos urbanos de Los Urabeños, que disputan los corredores de la serranía del Perijá e impiden el acceso de funcionarios e investigadores a los corregimientos donde se encuentra asentada nuestra comunidad. El Secuestro reciente de nueve funcionarios de

CORPUGUAJIRA por parte del frente guerrillero y los actos terroristas a viviendas en la comunidad de Conejo, territorio de trabajo de nuestros miembros, son sucesos habituales que debemos presenciar cada día.

Las diferentes circunstancias desencadenadas por el conflicto armado, tanto económicas como de falta de seguridad, orden social, paz y en resumen trasgresión a los derechos políticos y libertades fundamentales traen consigo la pérdida de caracteres culturales, que hoy en día se han convertido en una misión costosa de reivindicar para nuestro pueblo, y es que como lo ratifica en providencia la Corte constitucional, en su auto de seguimiento 004 del 2009: “El conflicto armado genera la imposibilidad de movilizarse por el territorio, afectando el trabajo colectivo y las estructuras culturales que dependen de él.”



Figura 50. Hacienda ganadera ubicada en Conejo, víctima de actos terroristas por el frente 59 de las FARC. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

La totalidad de hombres de nuestra comunidad son jornaleros y prestan servicios agrícolas vinculados por medio de relaciones laborales informales, sus ganancias dependen del tamaño de la hacienda, lo cual genera una inestabilidad económica, que trae consigo repercusiones en distintas áreas, como lo son: el desarrollo como comunidad,

nuestra vida familiar, nuestra soberanía alimentaria y la generación de recursos para el acceso a la educación de nuestros jóvenes, que aunque asisten a centros educativos estatales, necesitan medios monetarios para el transporte, por la distancia de las haciendas donde trabajamos hasta las instituciones, entre otros.

1.3.4. Cabildo Indígena Zenú del Municipio De Maicao –Municipio de Maicao-

Nuestra comunidad se encuentra en proceso de reconocimiento por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas, minorías y ROM, del ministerio del interior desde el año 2006 el cual no ha tenido resolución a causa del asentamiento en territorio urbano donde se encontraba la mayoría de nuestras familias. Actualmente se está a la espera de la solicitud enviada nuevamente en el 2014.

Nuestra comunidad hoy día atraviesa una ruptura en el tejido social que se ha dado a lo largo de los años, por las múltiples consecuencias que trajo consigo el despojo de nuestras tierras causadas por actores armados desde la quinta década del siglo pasado, se ha imposibilitado el renacimiento cultural ancestral, llevando a las nuevas generaciones a adoptar nuevas tendencias y costumbres como resultado a la asimilación cultural de las diferentes vivencias suscitadas ante la necesidad de acudir a diferentes escenarios económicos, necesidades que no se logran suplir cabalmente impidiendo el desarrollo de una vida digna.

En la comunidad, la estructura de la mayoría de las viviendas son bastantes precarias, evidenciándose la vulneración a una vivienda digna pues no sólo consiste en deficiencia estructural que por lo general son a base de tablas, palo de lata y refuerzos en Zinc en cada una de ellas, si no la falta de cobertura óptima de los servicios públicos domiciliarios

A causa de que no somos indígenas de la zona de la guajira y porque no tenemos registro que nos reconozca como parcialidad indígena por parte de Ministerio del Interior el

ejercicio de nuestra autonomía y gobierno propio se ve debilitado y poco respetado ante las autoridades a instituciones estatales.

A falta de oportunidades laborales, las actividades relacionadas con el comercio regional es la principal fuente económica mediante el empleo informal en el transporte, servicios logísticos de distribución y organización e productos en espacio comerciales y el mototaxismo.

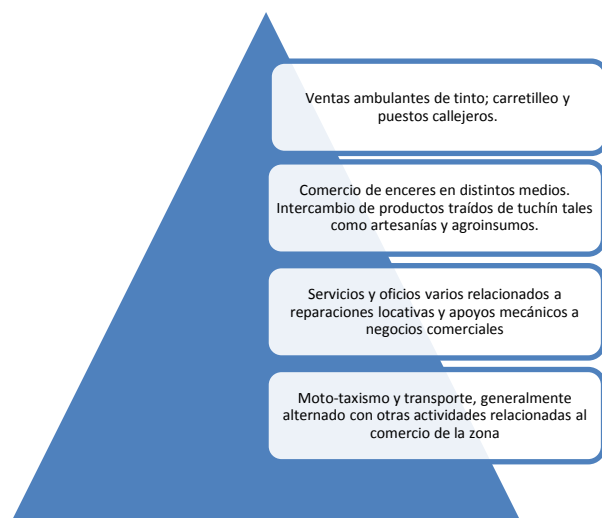


Figura 51. Referencia jerárquica en quehaceres económicos de los integrantes del cabildo de Maicao. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Es necesario hacer énfasis en la situación que atravesamos actualmente, pues la pobreza extrema, la ausencia de garantías de permanencia en terrenos donde residimos, falta de terreno para cultivos y el distanciamiento cultural nostálgico entre nosotros, es lo que hoy día amenazan con efectuar la extinción cultural que tanto se propende evitar.

Los diferentes motivos que nos limitan como colectividad en los que vemos sumergidos, se refleja en la falta de fortalecimiento en el gobierno propio, pues a pesar de que poseemos estatutos, se desconoce su estricto cumplimiento en cuanto al debido proceso en ejercicio de la justicia, castigos y penas dentro de la comunidad

Sin embargo existen esfuerzos reiterados para reivindicar nuestra identidad como pueblo Zenú, que nos motiva a aferrarnos a las posibilidades de consolidar, conocimientos, usos y costumbres en común que nos permita permanecer como una comunidad sólida y organizada.

1.3.5. Cabildo Menor Indígena de Riohacha -Municipio de Riohacha-

La llegada de las primeras familias de nuestro pueblo al municipio de Riohacha se puede referenciar alrededor de la década de los setenta, como consecuencia a la búsqueda de mejores condiciones de vida, por la evidente situación económica deplorable que ha dejado como consecuencia el conflicto interno en nuestro país, pues para ese época, ya se habría perdido una cantidad considerable de territorio ancestral desencadenando conflictos internos que a la postre se tradujeron en una desmejora de la calidad de vida.

Actualmente no contamos con un territorio colectivo ni con la resolución emanada por la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM del Ministerio del Interior.

Es preciso señalar la gran amenaza latente hacia nuestros miembros de la comunidad por encontrarnos, en especial las mujeres punto blanco para sumirse en la red de trata de blancas y por otro lado nuestros jóvenes han caído en el reclutamiento por grupos armados no identificados, permaneciendo aún latente cada día dicho riesgo. Toda esta situación ha traído consigo el desplazamiento individual por aquellos que se ven dentro de esta amenaza e incluso sembrado terror en las familias que permanecen ante distribución constante de panfletos que amenazan de muerte a personas que representan interés de la población víctima, firmado por Los Urabeños.

Es urgente para nosotros visibilizar la falta de garantías y protección para nuestros líderes, pues hoy día uno de ellos se encuentra declarado objetivo militar por trabajar en favor de los derechos de las víctimas. Sumado a lo anterior, la pobreza extrema es un factor que

nos asecha, obligándonos a vivir en condiciones en su mayoría indignas, puesto que muchas de las viviendas cuentan sólo con un espacio de 3x3 al interior y no cuentan con los espacios adecuados para deposición de residuos corporales, generando condiciones insalubres y sumado al hacinamiento se ha potenciado la aparición de plagas y propagación de enfermedades que no solo afecta notablemente nuestra calidad de vida y otros derechos de interés individual sino que atenta constantemente a nuestros interés colectivos, ocasionando desintegración social y la perdida de una misma visión y horizonte de reivindicación cultural.



Fotografía 15. Diferentes viviendas de los miembros del cabildo. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

La falta de cobertura en los servicios públicos domiciliarios, en especial en la Comuna diez es desmotivante, pues tanto para el agua y la luz se debe acudir a conexiones clandestinas, evidentemente se carece de agua potable y riesgo en la seguridad de las instalaciones eléctricas.

Es necesaria la real atención por parte de las entidades estatales, ya que solo hecho de encontrarnos en situación de desplazamiento y la marginalidad que esto conlleva la

efectiva materialización de los derechos la verdad, la justicia, la **reparación** y la garantía de no repetición, es algo lejano e intangible para nosotros.

1.3.6. Cabildo Menor Indígena de Manaure -Municipio de Manaure-

Nuestra comunidad ubicada en el municipio de Manaure no cuenta con titulación colectiva; vale aclarar que parte de los territorios en donde nos encontramos asentados, hace parte del territorio colectivo del Resguardo Alta y Media Guajira del pueblo Wayú. De igual manera tampoco contamos con reconocimiento por parte del Ministerio del Interior.

El desplazamiento en los años 70, fue fundamentado fuertemente por las condiciones socioeconómicas, y las situaciones de vulnerabilidad, peligro que afectaban la pervivencia física, llevándolos a encontrar en el barrio Manaure Abajo, el escenario en las charcas de Sal que para ese entonces eran manejadas por algunos miembros del pueblo Wayú, la posibilidad de explotarlas y vivir de las mismas.

Es alrededor del 2004 donde se gesta el proceso institucional de nuestro cabildo, con acompañamiento de varios líderes del pueblo Wayú que reiteraban que de manera organizada se podría obtener el reconocimiento que merecíamos. Así se dio paso a los diálogos con la Alcaldía y la Secretaria de Asuntos Indígenas, proceso liderado por Antonio Zabaleta y Mauricio Paez para que en el 2012 ya formáramos parte de la oficina de asuntos indígenas y así emprender la reivindicación cultural.

Nuestra comunidad lo conforman alrededor de 641 personas, donde el 48% provienen de diferentes departamentos como se indica en la figura.

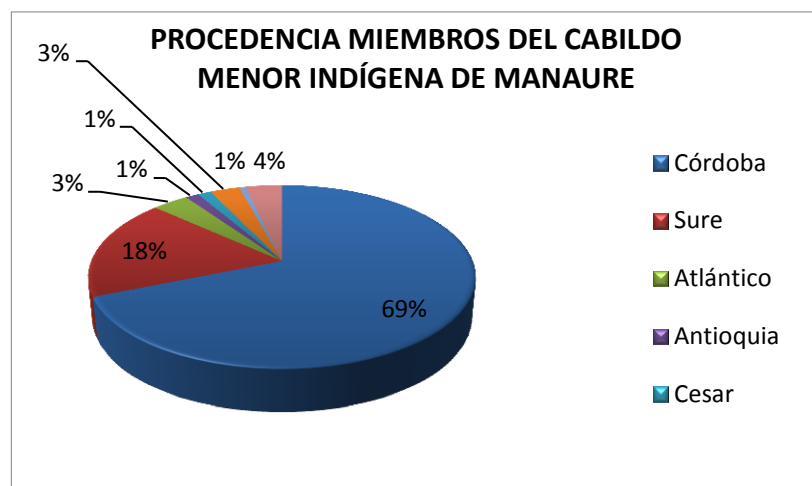


Figura 52 Procedencia de miembros del Cabildo Menor Indígena de Manaure. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú 2014.

Siendo Víctimas del desplazamiento forzado a causa del conflicto armado ya sea de manera directa o indirecta, por asesinatos de familiares o conocidos, terror infundado en las zonas de deserción, amenazas o intimidación.

Hoy día se evidencia en gran manera el desarraigo cultural en los miembros de nuestra comunidad, y no se podría esperar menos, tras un largo trayecto de victimización a causa del conflicto armado y sus consecuencias, que hoy por hoy solo nos ha rodeado de pobreza extrema, de la necesidad de asimilar otras culturas y dejar a un lado la propia, y el quebrantamiento del tejido social interno como comunidad.

Es así como hoy día, gran parte de nuestro jóvenes se identifican como nacidos en el municipio y no se identifican como indígenas Zenú, situación que aporta a una extinción cultural futura, pues la vergüenza en ocasiones es fundante para la aceptación de su identidad.

Actualmente los preceptos sobre el cual se enmarca la identidad del pueblo Zenú está determinado por los siguientes elementos.

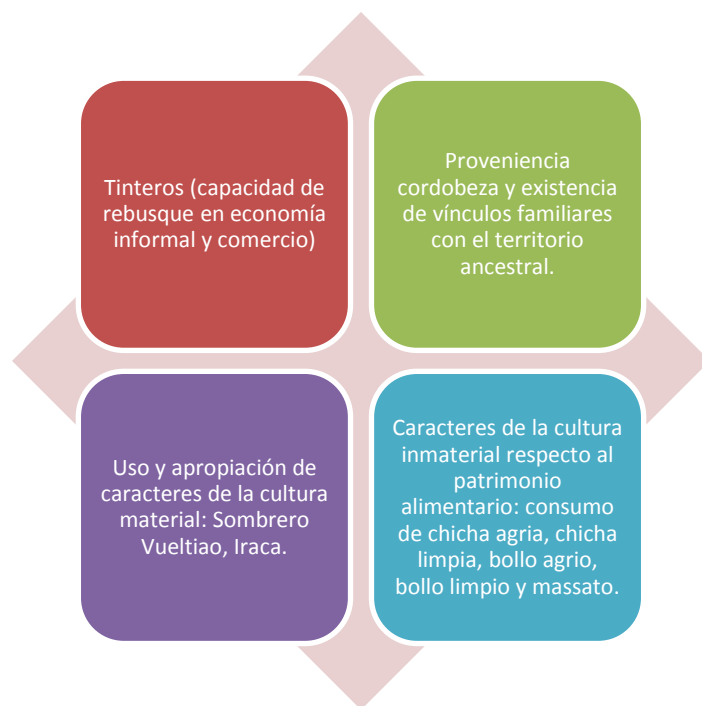


Figura 53. Relación dinámica entre elementos que consolidan la identidad cultural Zenú en la guajira. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú, 2014.

Referente a nuestras dinámicas económicas, estamos encaminados principalmente por la explotación de minas de sal ubicadas en el barrio Manaure-Abajo, sobre la Playa, ejerciendo actividades como el coteo, el transporte, bombeo, el apoyo logístico general y la venta de comestibles a trabajadores de las minas. A pesar de la oferta de empleo que se pueda generar a partir de la explotación de dichas charcas (minas), la incertidumbre respecto a la estabilidad laboral es lo que caracteriza dichos empleos informales, que por tal motivo no generan garantías prestacionales ni periodos consecutivos en su ejecución.



Figura 54. Charcas de producción de sal en Municipio de Manaure. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Zenú, 2014.

El derecho constitucional a una vivienda digna se vulnera de manera masiva, puesto que su mayoría están enmarcadas en la precariedad de su estructura y condiciones de habitad. Los elementos que por general le conforman son las tablas de madera, latas y Zinc. De Igual forma, el acceso a los servicios públicos domiciliarios es pobre e insuficiente, pues no se cuenta con la estructura pertinente para el acceso al agua potable, por lo tanto existe la necesidad de almacenamiento dentro de nuestras posibilidades en tanques artesanales que pueden ocasionar la ploriferación de plagas y zancudos que posteriormente nos afecta. Así mismo se perciben constantemente ambientes insalubres ocasionados de igual manera por la imposibilidad en el acceso a sistemas de alcantarillado. Otras familias en peores condiciones no cuentan ni con pozos sépticos dentro del hogar.

Entre las viviendas en arriendo, son construidas en material (cemento). En el caso de Manaure-Abajo, sector colindante a la tolda, es un barrio que se encuentra en zona de alto riesgo por inundación.



Figura 55. Predios en tabla contruidos de forma contigua a las Charcas de Sal de Manaure-Abajo. Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo étnica del Pueblo Zenú, 2014.

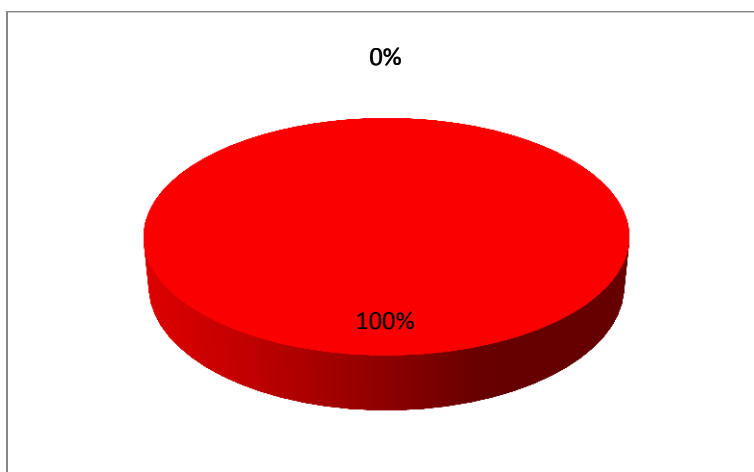
CAPÍTULO V

GRÁFICAS DE LA SITUACIÓN DE DERECHOS DEL PUEBLO ZENÚ EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, CÓRDOBA Y SUCRE

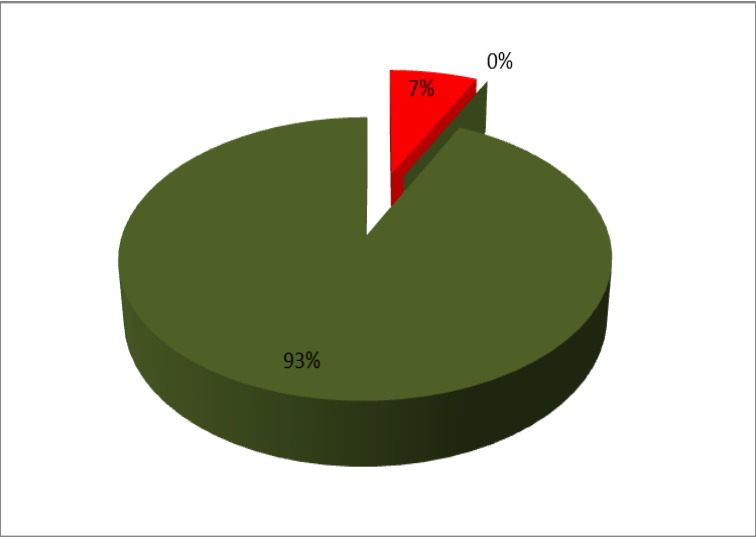
1. DERECHOS COLECTIVOS Y/O ÉTNICOS

1.1. TÍTULO DE LA PROPIEDAD COLECTIVA

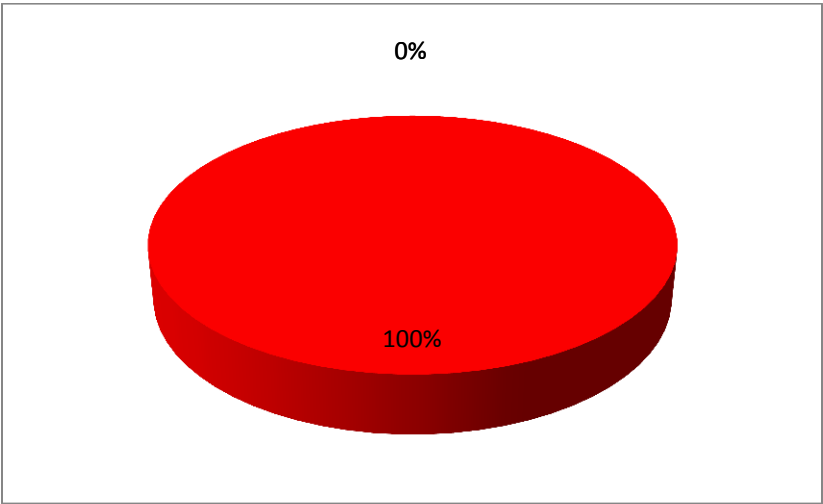
1.1.1. Concertar y desarrollar con las autoridades indígenas una estrategia efectiva para garantizar la formalización y titulación colectiva de todos los territorios indígenas del Pueblo Zenú.



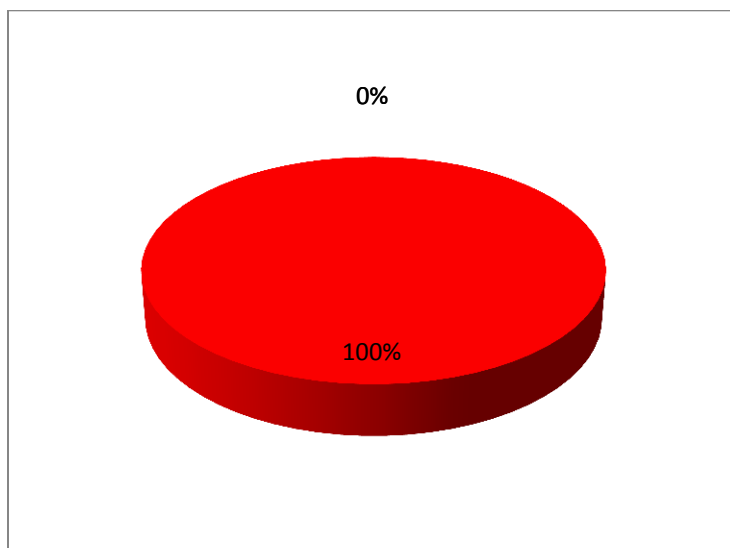
1.1.2. Concertar y desarrollar con las autoridades indígenas una estrategia efectiva para garantizar la constitución de Resguardos solicitados por el Pueblo Zenú.



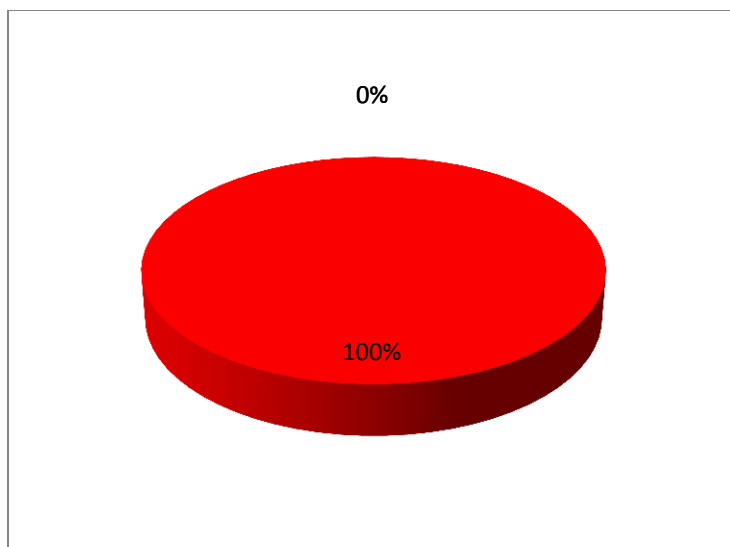
2.1.1. Concertar y desarrollar con las autoridades indígenas medidas estratégicas para que haya reestructuración, saneamiento y ampliación sobre todos los territorios indígenas del Pueblo Zenú.



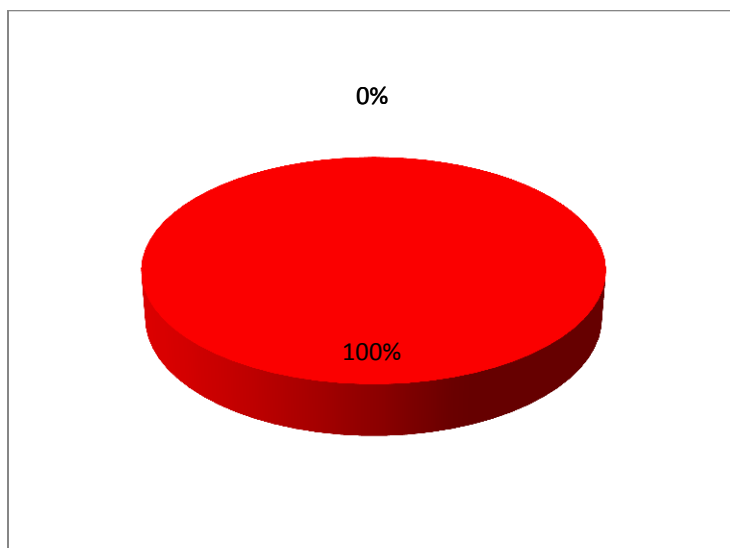
1.1.3. Concertar y desarrollar con las autoridades indígenas los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por el Pueblo Zenú.



1.1.4. Concertar y desarrollar con las autoridades y organizaciones indígenas medidas de identificación y protección de sitios sagrados, lugares rituales y de culto del Pueblo Zenú.

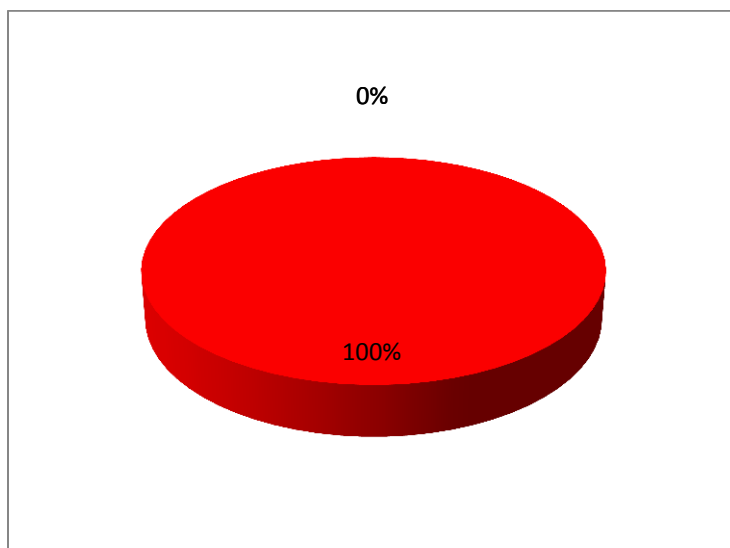


1.1.5. Concertar, establecer y desarrollar medidas especiales de protección de la personalidad jurídica e inviolabilidad de la propiedad colectiva del pueblo Zenú frente a terceros no indígenas.

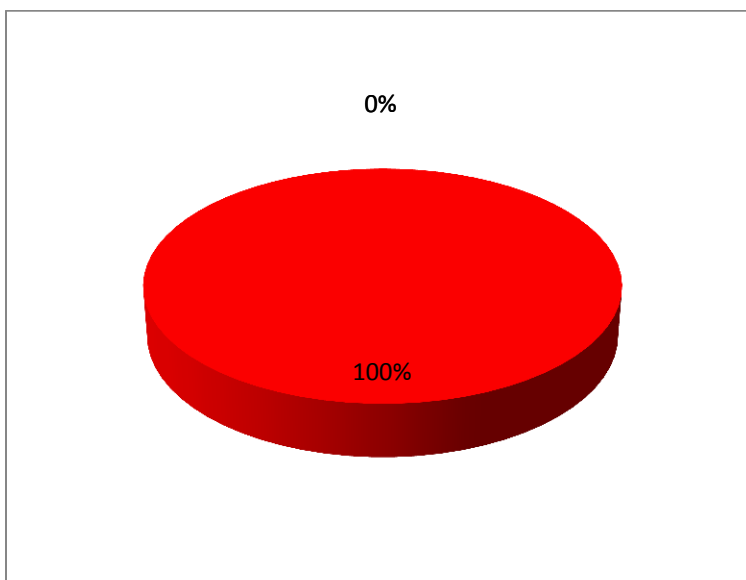


1.1.6. Establecer y desarrollar medidas especiales para la defensa del carácter imprescriptible, inembargable e inalienable de la propiedad colectiva del pueblo Zenú facultando de competencias a las autoridades públicas con el fin de proteger los territorios en procesos administrativos, legislativos y judiciales.

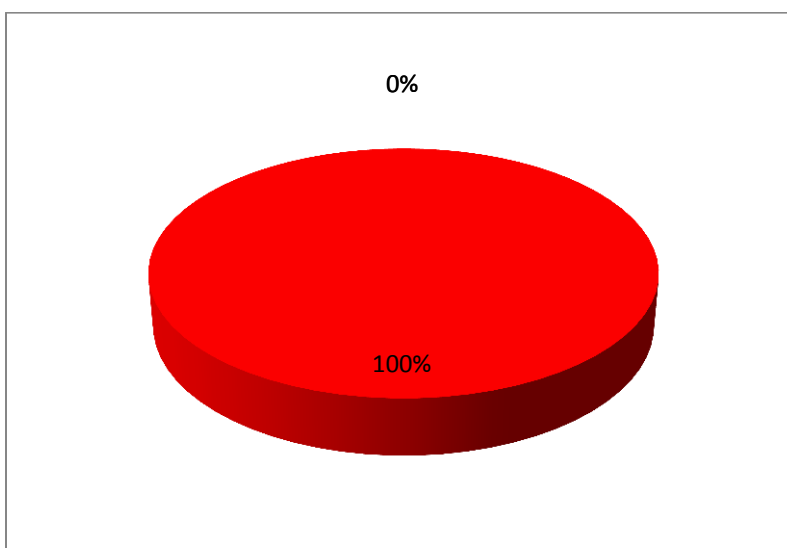
1.1.7.



1.1.8. Establecer y desarrollar con la participación de las autoridades indígenas, sistemas de información y registro veraz y efectivo sobre los procesos de constitución de la propiedad colectiva.

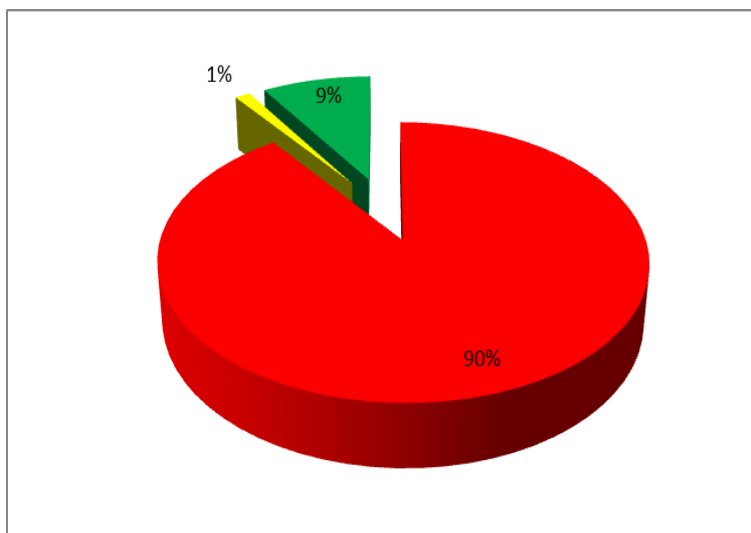


1.1.9. Establecer y desarrollar con la participación de las autoridades indígenas, un plan de emergencia para responder las demandas de constitución titulación, saneamiento y, ampliación de resguardos indígenas con demoras en sus trámites a la fecha.

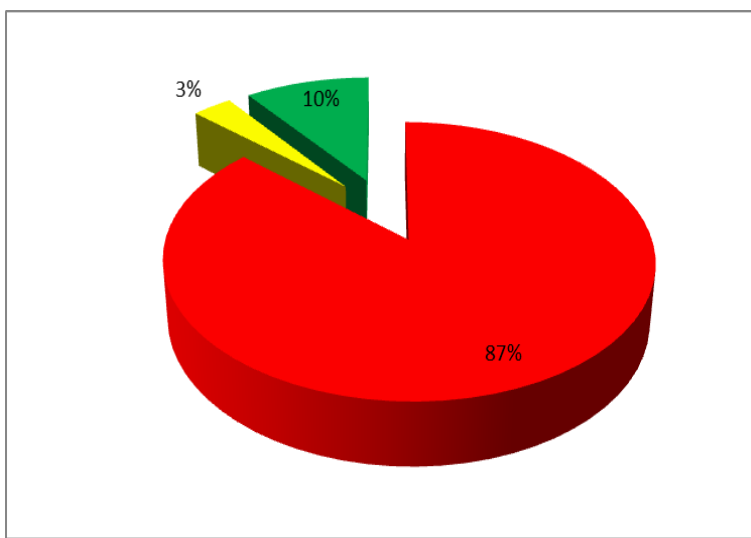


1.2. AUTONOMÍA

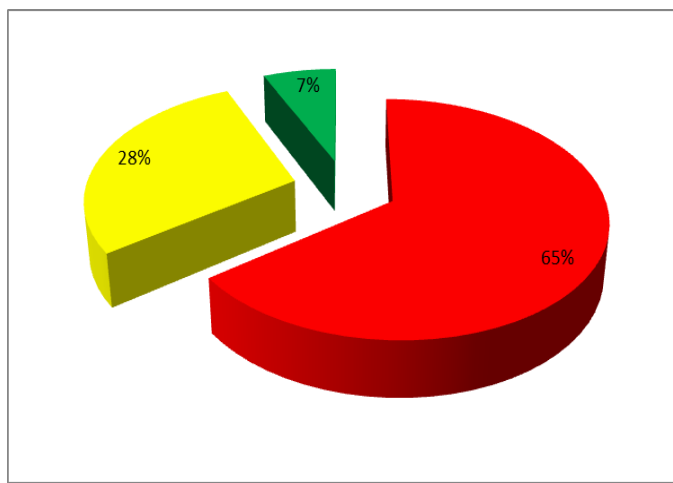
1.2.1. Apoyar con medidas especiales a las autoridades indígenas en sus iniciativas de establecer o fortalecer sistemas de autoprotección para los territorios indígenas.



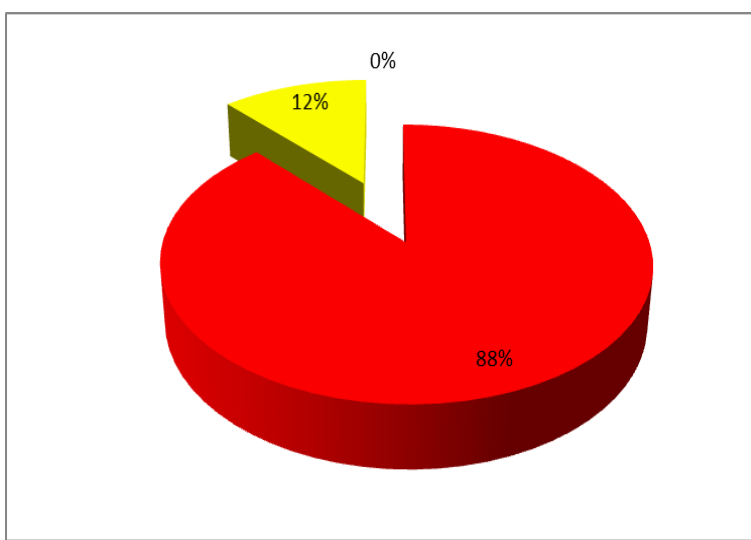
1.2.2. Concertar con las autoridades indígenas medidas preventivas para disuadir acciones de los grupos armados en los territorios y asentamientos indígenas observando las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario.



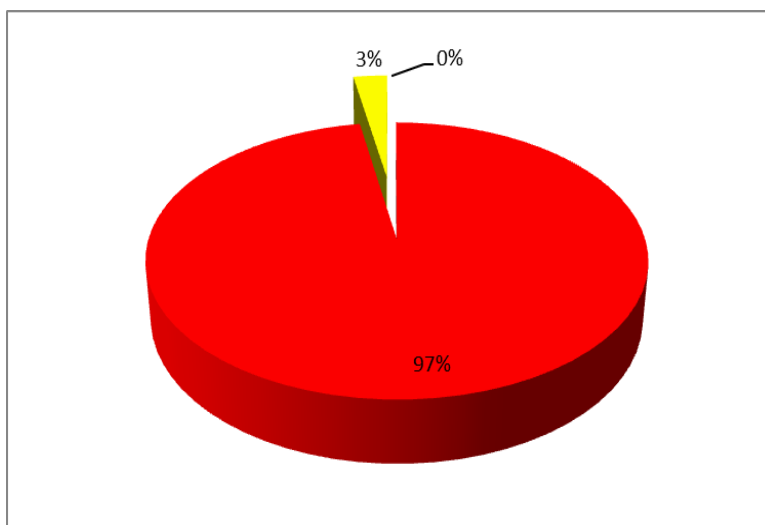
1.2.3. Concertar con las autoridades indígenas normas que invoquen el respeto y reconocimiento de las Fuerzas Militares (FFMM) y funcionarios públicos hacia las autoridades indígenas del Pueblo Zenú, como autoridades públicas reconocidas constitucionalmente atendiendo a sus disposiciones políticas, culturales y sociales propias.



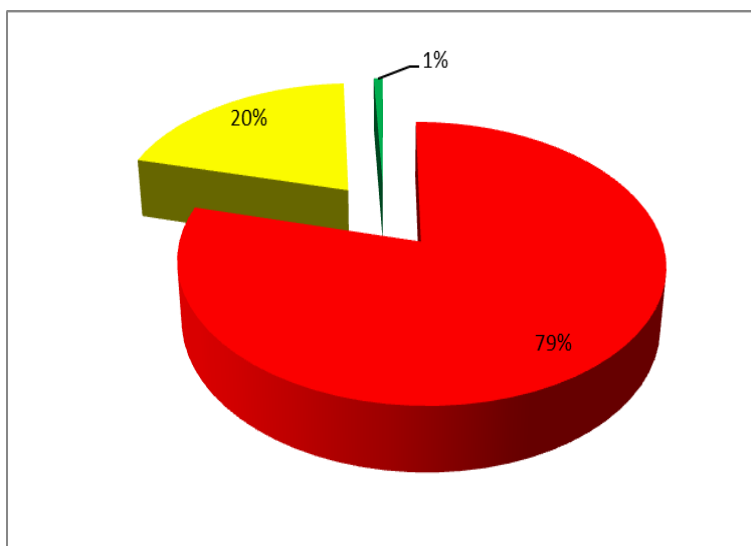
1.2.4. Establecer una estrategia nacional de capacitación a funcionarios públicos y contratistas del Estado colombiano para que conozcan, respeten y pongan en práctica el marco normativo del derecho a la Autonomía y Gobierno propio del Pueblo Indígena Zenú.



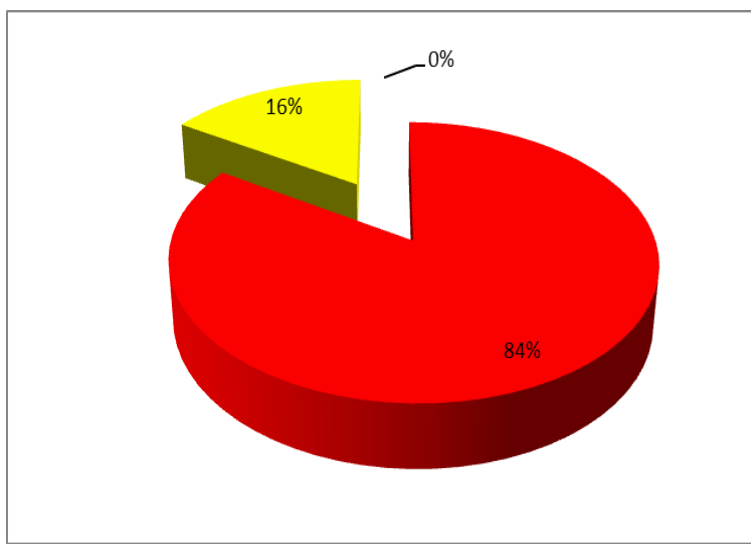
1.2.5. Establecer y desarrollar en concertación con las autoridades indígenas, un plan de ordenamiento ambiental-territorial en los territorios indígenas del pueblo Zenú, reconociendo el papel de autoridad ambiental que reviste a los Pueblos indígenas.



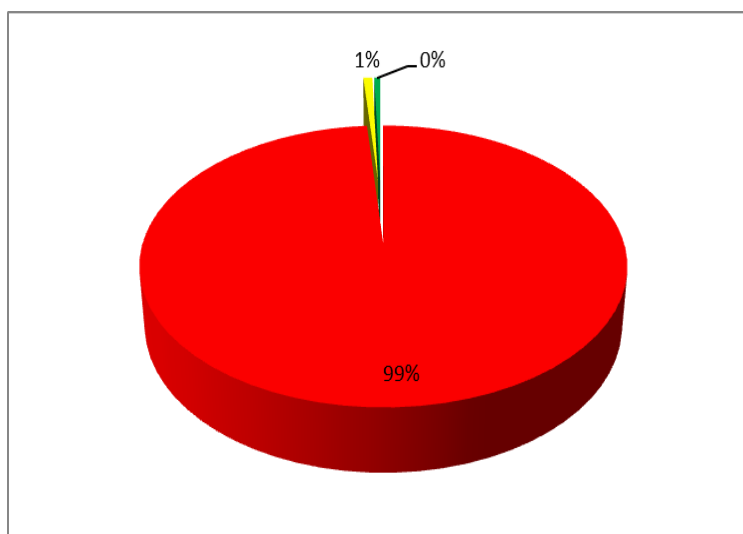
1.2.6. Generar apoyo y asesoría a las autoridades indígenas para el fortalecimiento de la gobernabilidad y administración propia de los territorios indígenas y los recursos asociados a éste.



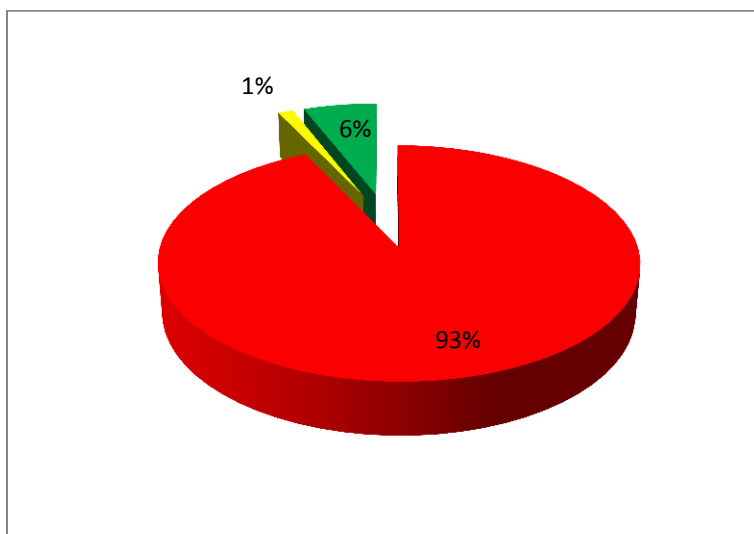
1.2.7. Fortalecer la interlocución y articulación de los planes de desarrollo nacionales, departamentales, municipales y otros instrumentos de política pública con las necesidades del pueblo Zenú y sus Planes de Vida.



1.2.8. Implementar mecanismos de coordinación e información entre las autoridades del pueblo Zenú y los poderes públicos del Estado, dirigidos a ejecutar las decisiones y actuaciones de las autoridades indígenas en materia legislativa, cultural, administrativa, política, económica, y de jurisdicción especial.

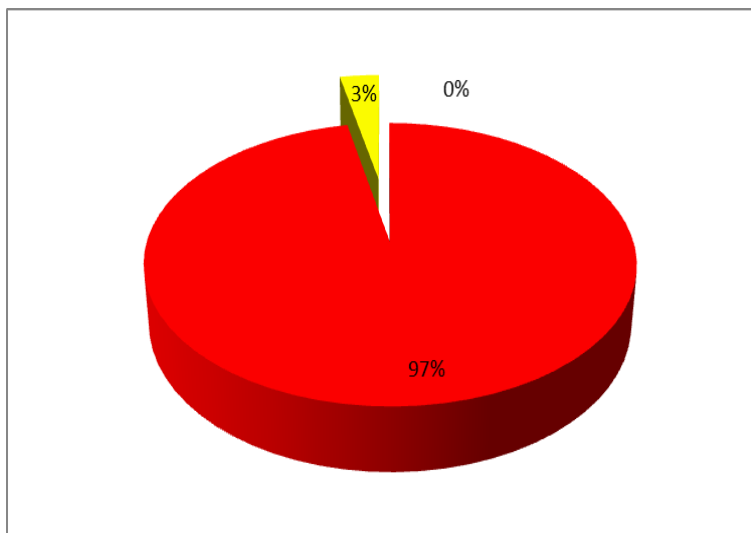


1.2.9. Generar medidas que brinden celeridad en el proceso administrativo de registro del reconocimiento étnico de las comunidades del pueblo Zenú.

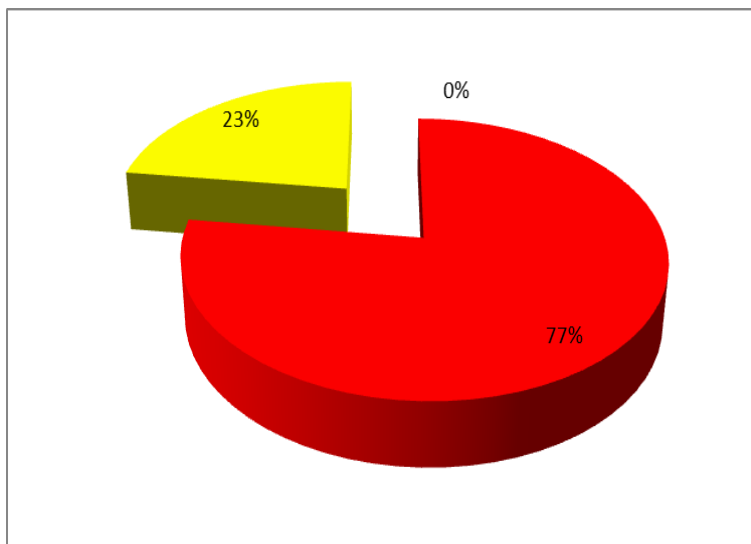


1.3. GOBIERNO PROPIO

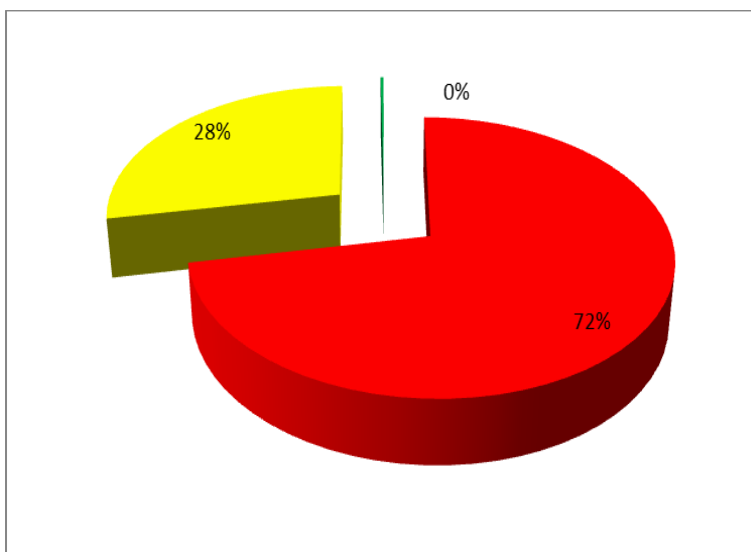
1.3.1. Concertar estrategias de promoción institucional, política cultural y social del derecho fundamental al gobierno propio que asiste al pueblo Zenú, en la búsqueda de fortalecer el ejercicio de la justicia y demás temas relacionados, para mantener la convivencia y sostenibilidad social.



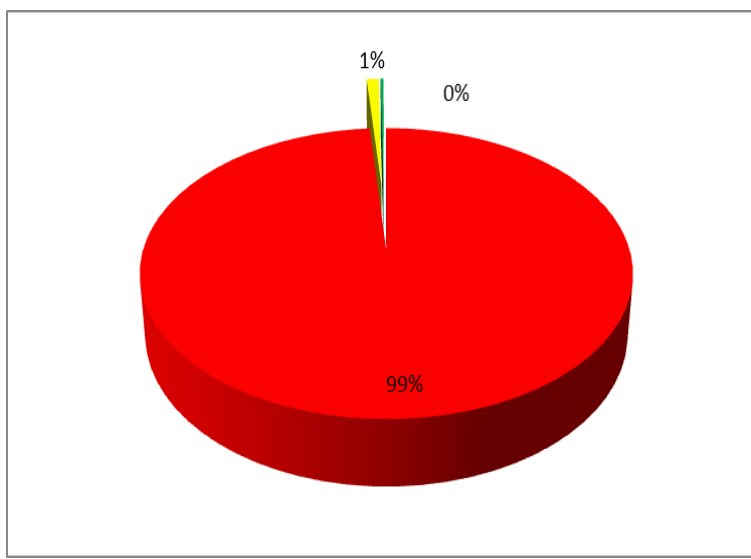
1.3.2. Fortalecer la Guardia Indígena, como autoridad territorial para la protección del territorio Zenú.



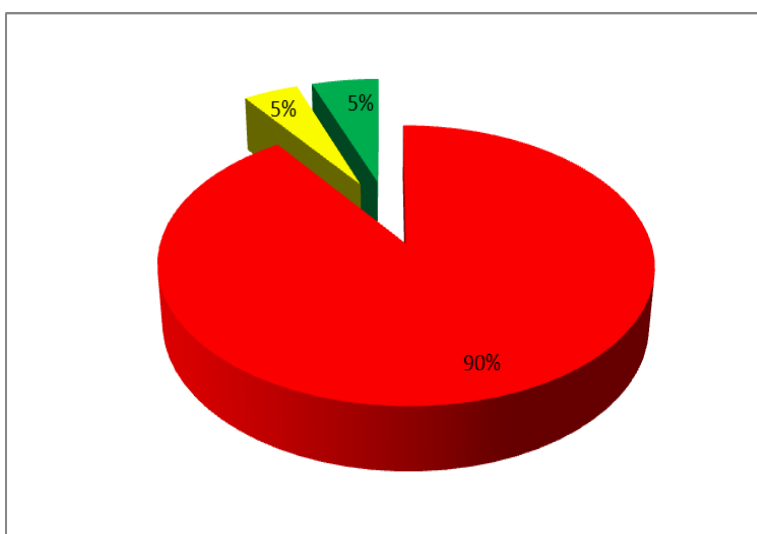
1.3.3. Generar un ejercicio de coordinación entre las autoridades indígenas y las Fuerzas Militares (FFMM), para fomentar el respeto hacia los territorios, evitando las intromisiones en las decisiones de Gobierno Propio del Pueblo Zenú.



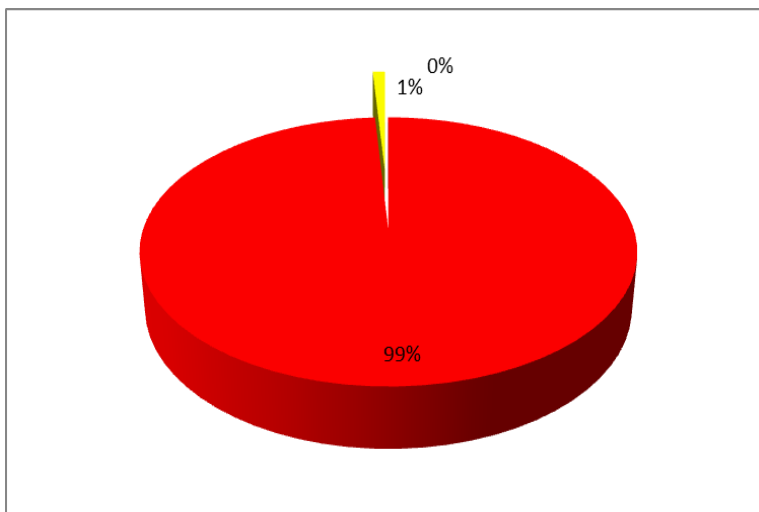
1.3.4. Fortalecer la Escuela de Derecho Propio "Eusebio Feria de la Cruz", para la formación política y cultural de las autoridades indígenas.



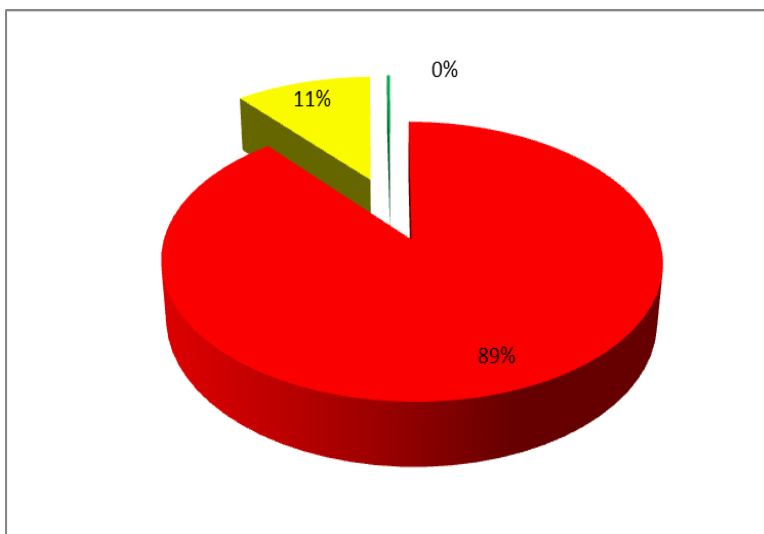
1.3.5. Exigir garantías al Estado colombiano para el cumplimiento efectivo de las penas judiciales impuestas a quienes han vulnerado los derechos del pueblo Zenú garantizando la participación de instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



1.3.6. Establecer las rutas pertinentes que conduzcan al reconocimiento de la remuneración integral para los capitanes indígenas en aras de retribuir su función social, política y cultural.

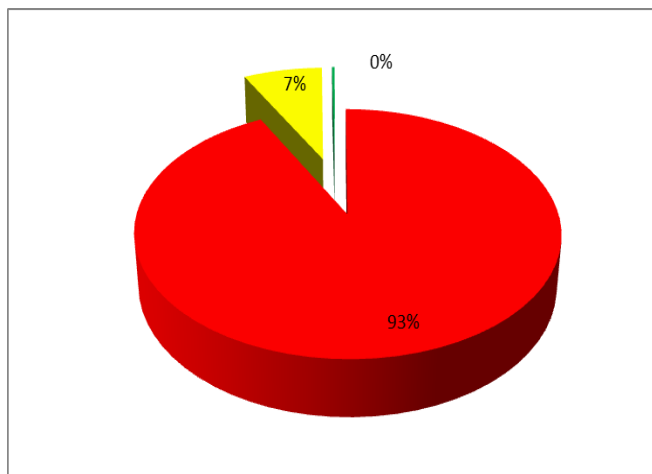


1.3.7. Apoyar la construcción de Planes de Vida para los resguardos del pueblo Zenú, con el fin de garantizar el cumplimiento de las formas de comportamiento y pervivencia como pueblo indígena asegurando el desarrollo político, económico, social y cultural propias en atención a la ley de origen y la sabiduría ancestral.

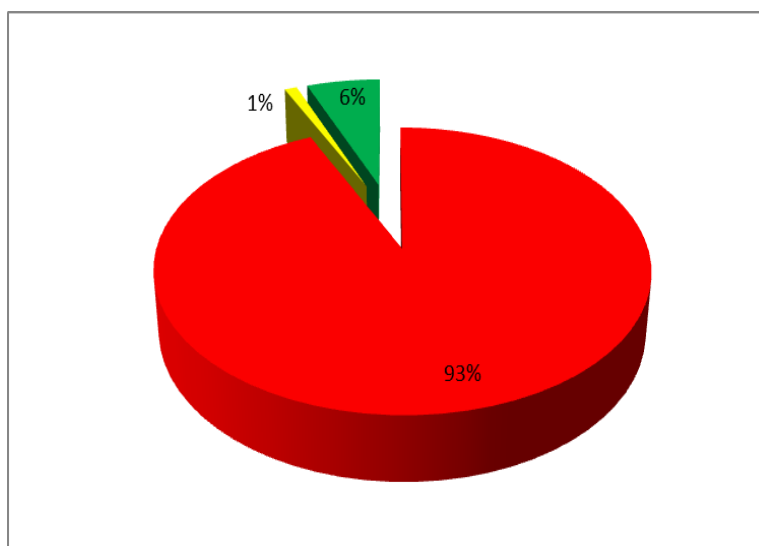


1.4. JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA

1.4.1. Establecer de manera clara y específica y bajo concertación previa con las autoridades tradicionales, las competencias de las autoridades indígenas para aplicar justicia en todo tipo de delito conceptuado por la ley ordinaria, en los territorios donde se encuentra asentado el pueblo Zenú.

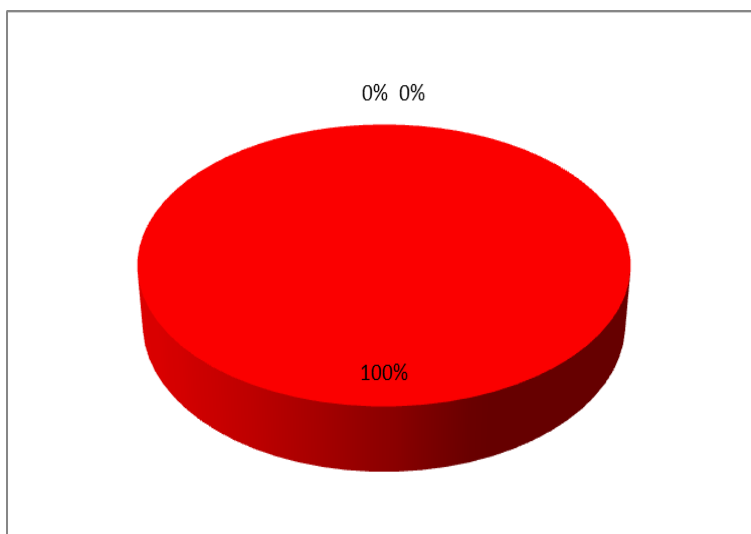


1.4.2. Concertar entre las entidades del Estado encargadas de impartir la justicia ordinaria y las autoridades indígenas mecanismos para el desarrollo y fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena en el pueblo Zenú en concordancia con la ley de origen.

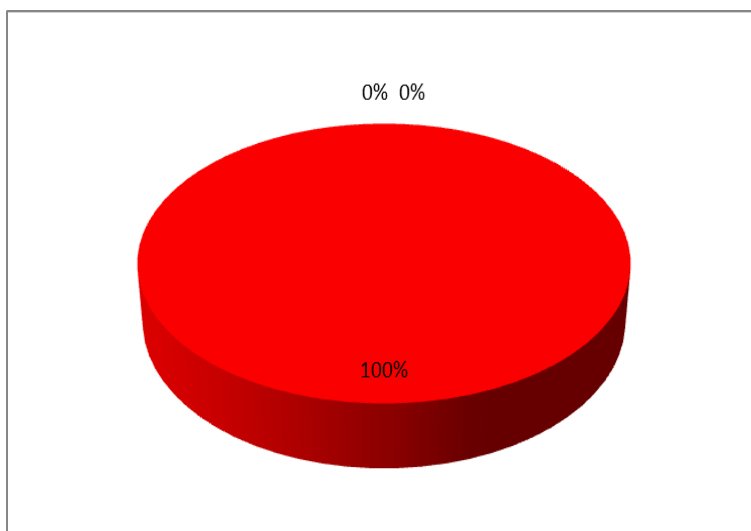


1.2. IDENTIDAD Y CULTURA

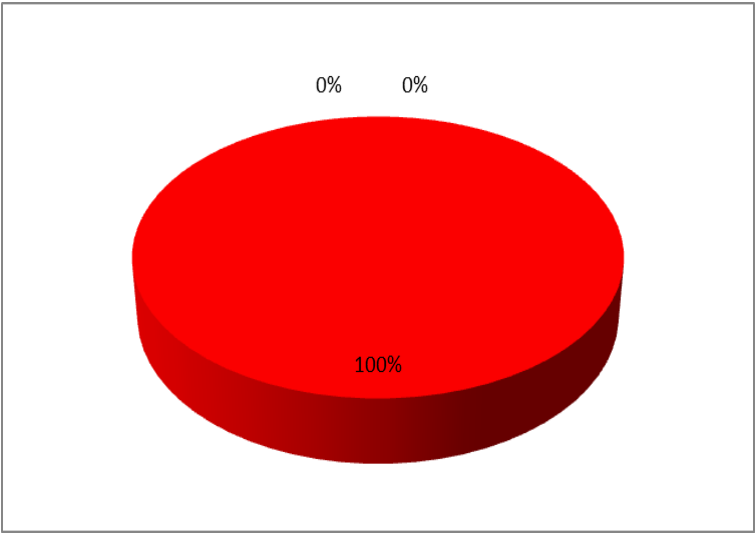
2.1.2. Garantizar los procesos de adecuación institucional con enfoque diferencial para fortalecer los procesos de recuperación cultural, en el marco de la creación de planes, programas y proyectos del Pueblo Zenú.



2.1.3. Realizar investigaciones con el fin de obtener información acerca de la lengua del Pueblo Zenú.

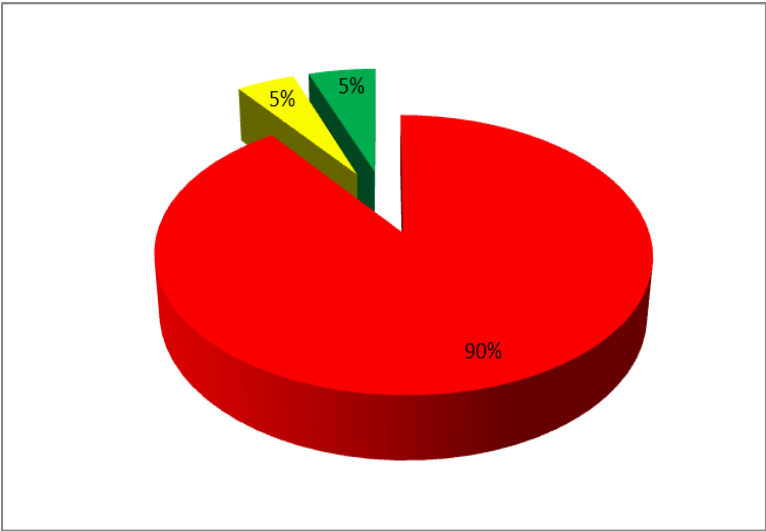


2.1.4. Establecer un instrumento para el reconocimiento y protección de territorios de importancia ancestral, ambiental y cultural para el pueblo Zenú.

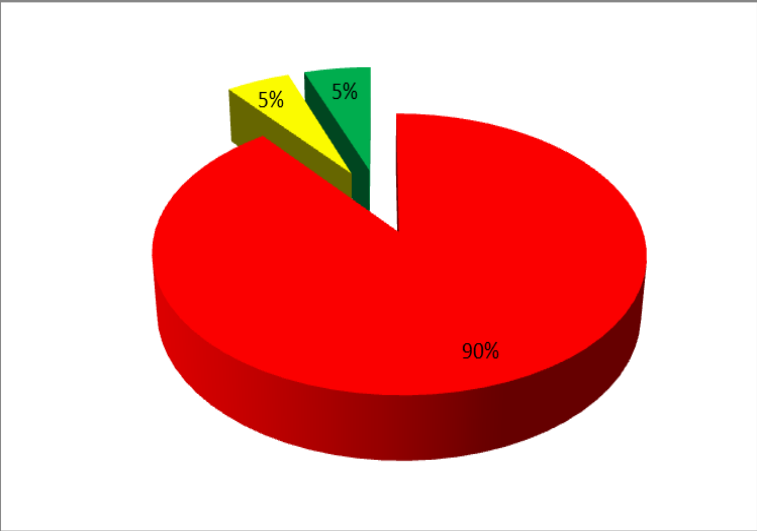


1.3. CONSULTA PREVIA

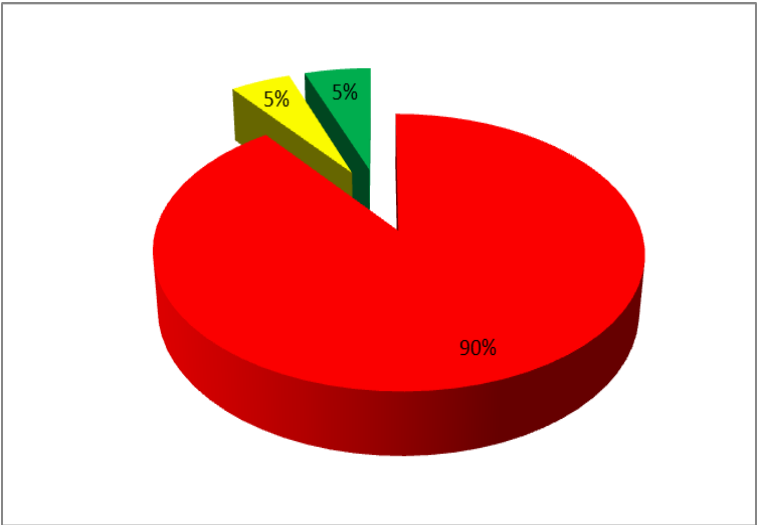
2.1.5. Promover medidas que garanticen el ejercicio del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre informado y culturalmente adaptable, siempre que se involucren derechos y territorios que afecten a comunidades del Pueblo Zenú.



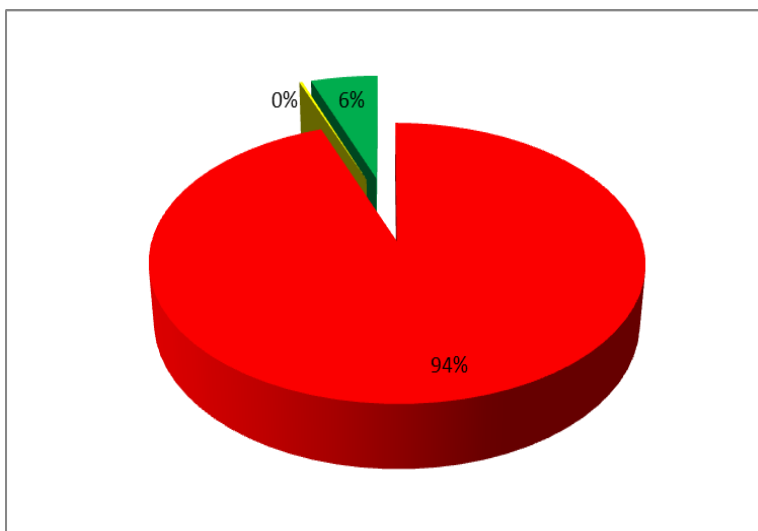
2.1.6. Prohibir y sancionar los proyectos de inversión, infraestructura, extracción y explotación de recursos naturales y desarrollo productivo, sin previa, amplia y legítima consulta a las autoridades mayores legalmente reconocidas y autoridades menores, adscritas a las organizaciones locales, regionales y nacionales de las comunidades afectadas de manera directa e indirecta.



2.1.7. Garantizar que se realicen los procesos de consulta previa de manera efectiva y que los compromisos que fueron resultados de está, se cumplan a cabalidad.



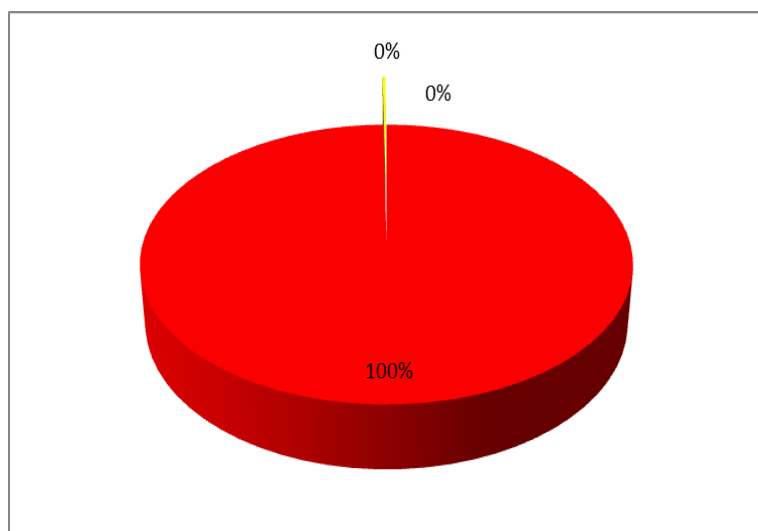
2.1.8. Crear cronogramas legislativos que garanticen la consulta previa, libre e informada de las iniciativas legislativas que se pretendan promover con el pueblo Zenú.



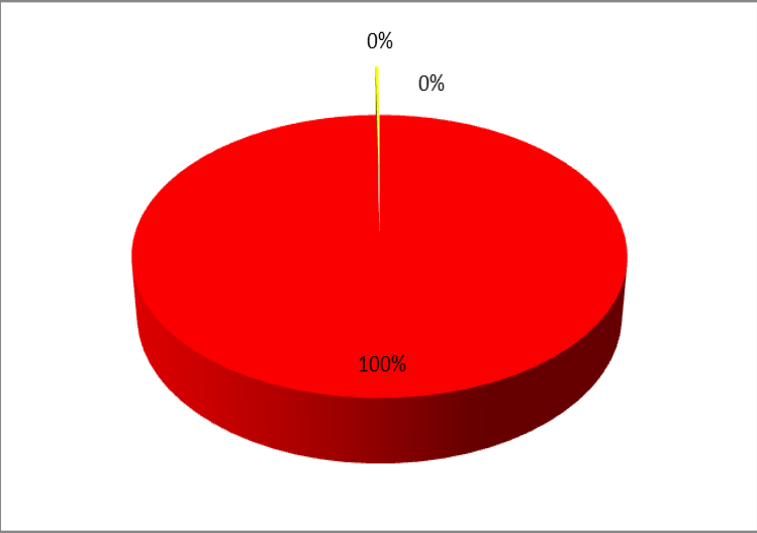
3. DERECHOS POLÍTICOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

3.1. SEGURIDAD, ORDEN SOCIAL Y PAZ

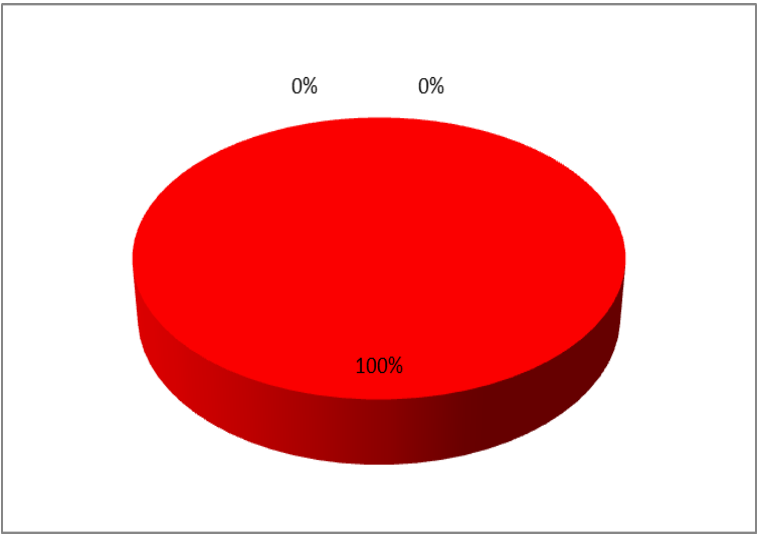
3.1.1. Exigir el respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores de conflicto armado interno.



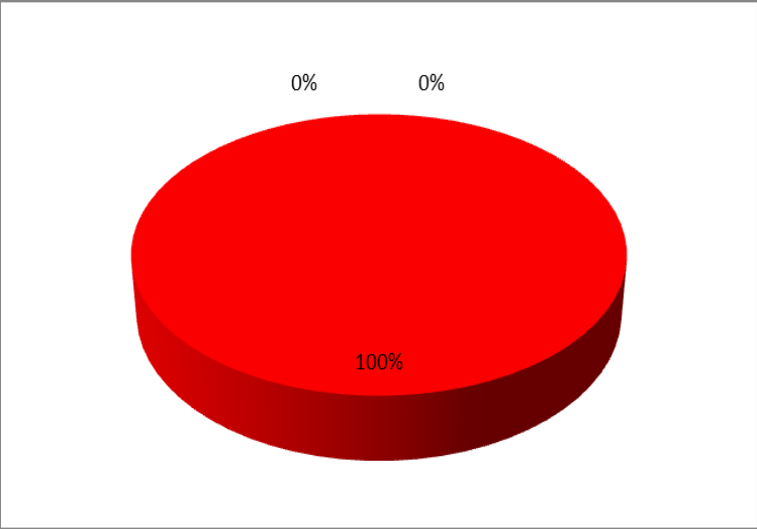
3.1.2. Generar mecanismos de participación efectiva en el proceso de paz por parte del Pueblo Indígena Zenú, garantizando el cumplimiento de los compromisos respecto a la reparación y la garantía no repetición.



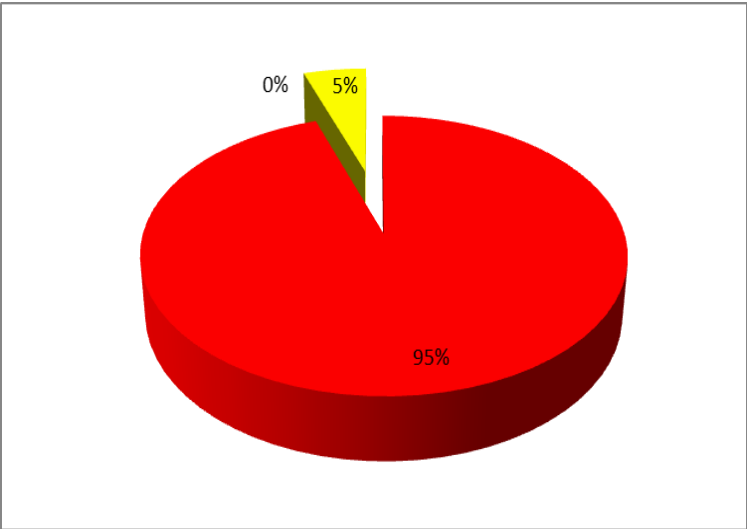
3.1.3. Generar garantías para las personas en procesos de desmovilización del conflicto armado pertenecientes al pueblo Zenú. (Justicia transicional con enfoque diferencial)



3.1.4. Fomentar y fortalecer la creación y funcionamiento de las escuelas de paz, que capacite a niños, niñas y adolescentes indígenas del Pueblo Zenú en el diálogo, la concertación y las soluciones pacíficas a los conflictos.

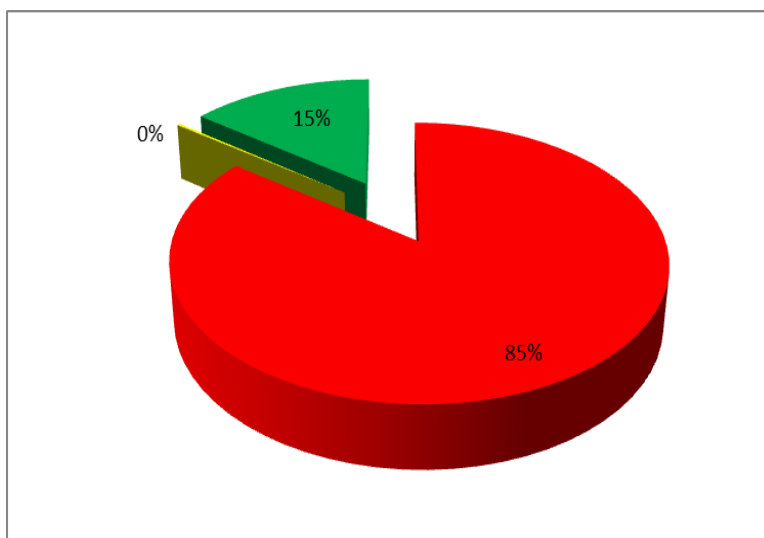


3.1.5. Adoptar medidas presupuestales y operativas que permitan fortalecer los esquemas de protección, incluyendo las medidas cautelares y provisionales emitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las medidas de protección otorgadas por la Corte Suprema de Justicia para el Pueblo Zenú.

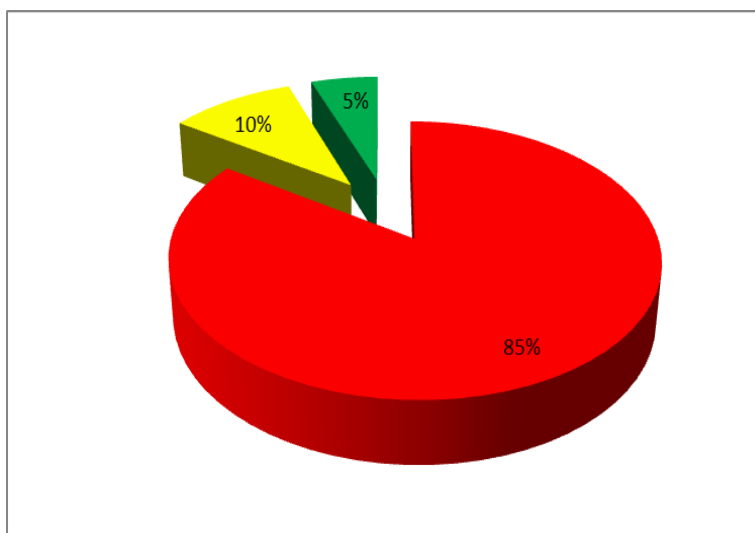


3.2. LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN

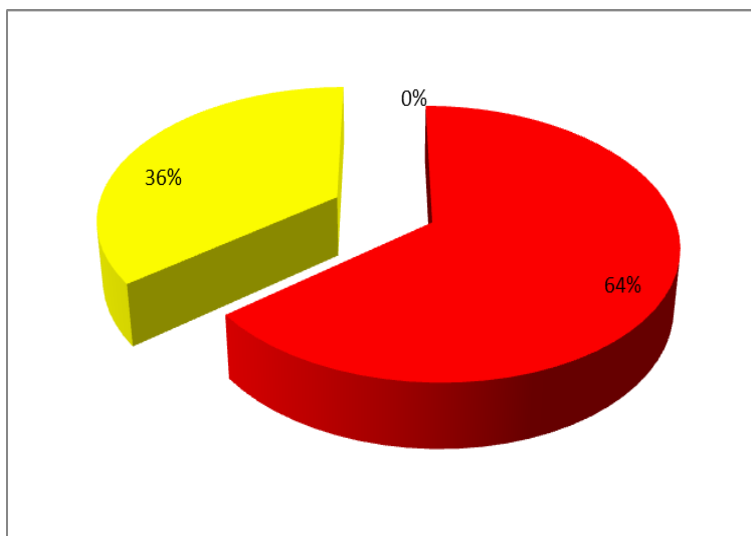
3.2.1. Promover un programa de desminado (Minas anti-persona (MAP) y munición sin explotar (MUSE)) en los territorios del pueblo Zenú, contando con la asistencia de organismos internacionales.



3.2.2. Generar medidas de protección de los territorios colectivos, asentamientos y lugares sagrados indígenas Zenú asegurando el libre paso por la totalidad de la extensión del territorio ancestral.

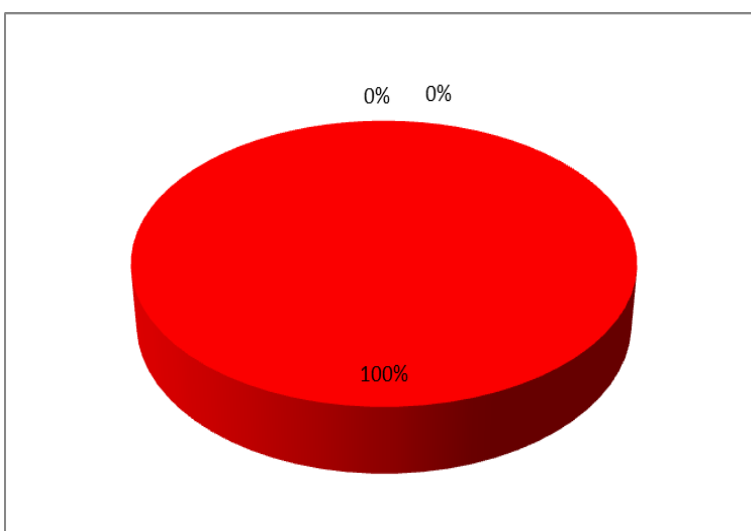


3.2.3. Apoyar y Fortalecer la sistematización y actualización del censo poblacional del pueblo Zenú, identificando el perfil socio-económico, a través de una consolidación concertada de un sistema de información socio-demográfica con enfoque diferencial.

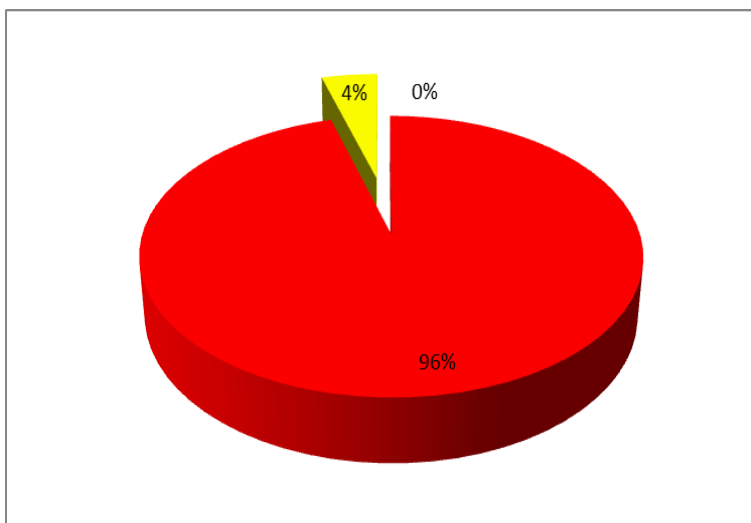


3.3. IGUALDAD ANTE LA LEY

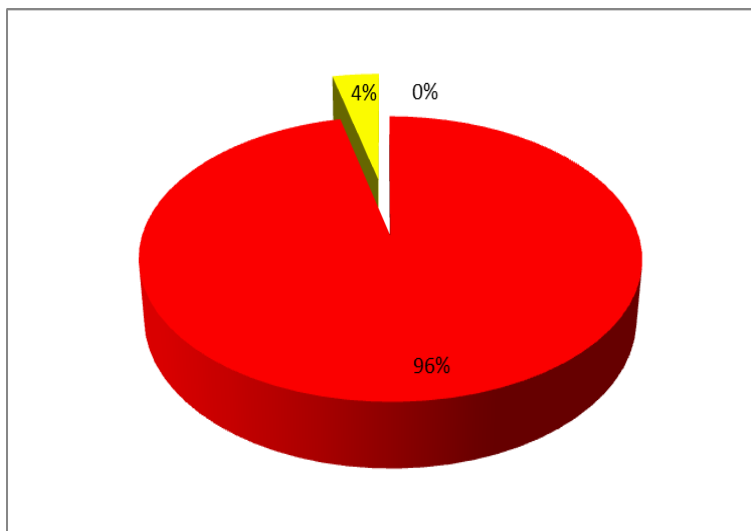
3.3.1. Establecer mecanismos que permitan la efectiva participación del pueblo Zenú en los diferentes escenarios: municipal, departamental y nacional.



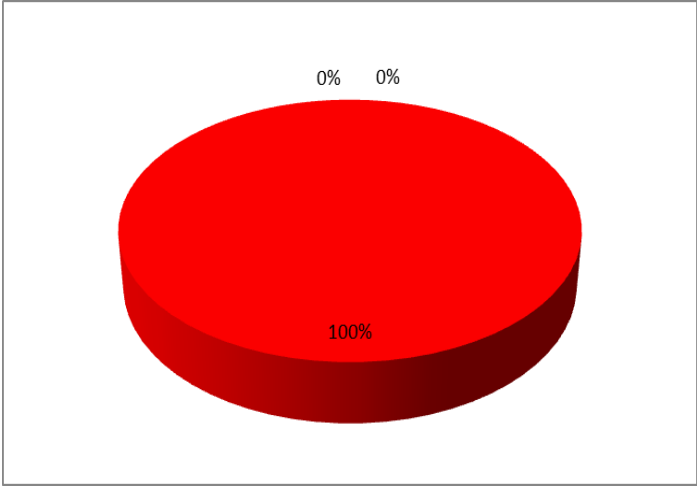
3.3.2. Reconocer y respetar el carácter público que reviste a las autoridades indígenas en su calidad de representantes del Pueblo Zenú.



3.3.3. Establecer medidas para que el pueblo Zenú pueda garantizar la atención humanitaria dentro de sus territorios.

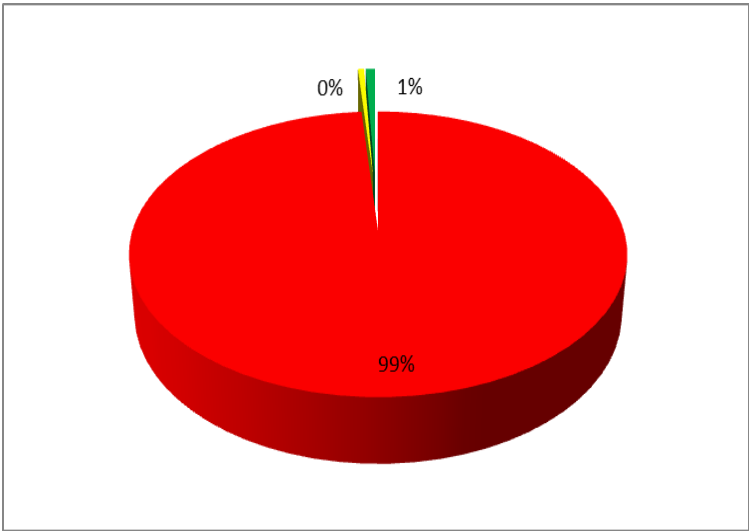


3.3.4. Determinar de manera conjunta con las autoridades indígenas formas de vinculación a procesos de participación para la construcción de políticas que involucren al pueblo Zenú como en los Tratados de Libre Comercio (TLC).

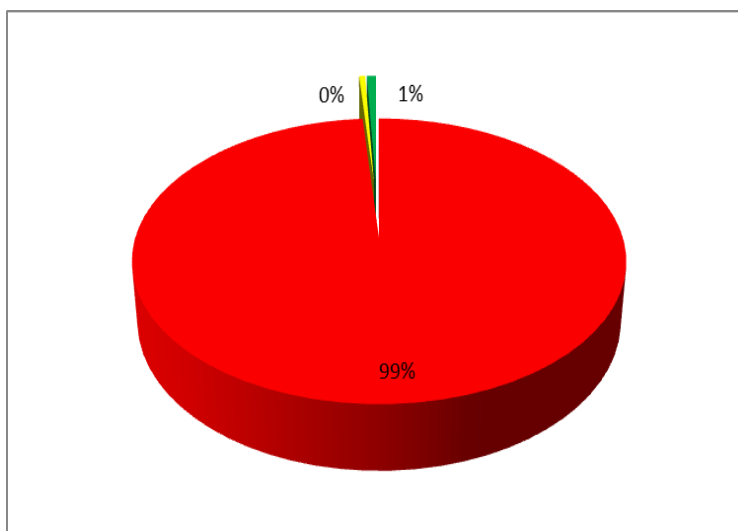


3.4. PROHIBICIÓN A LA TORTURA, TRATOS CUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES

3.4.1. Concertar con las autoridades indígenas, la adopción y ejecución de una política pública con enfoque étnico diferencial de prevención y sanción de la tortura, tratos crueles e inhumanos contra el pueblo Zenú, del mismo modo la protección a las víctimas de crímenes atroces, que contemplan garantías de reparación y de no repetición.

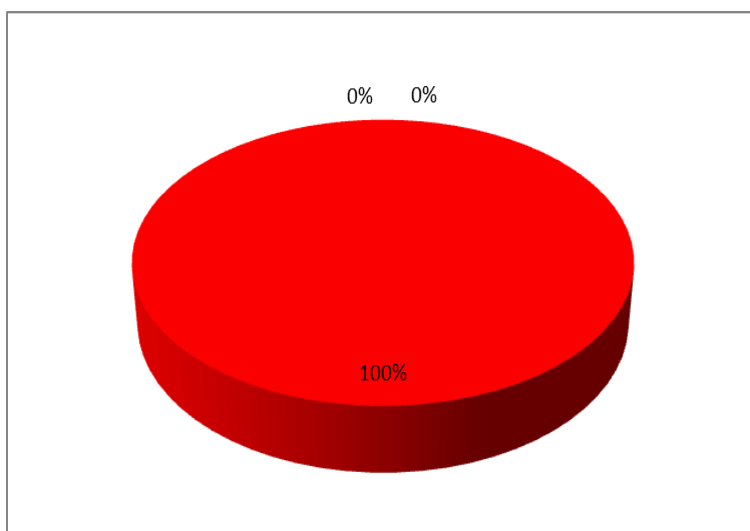


3.4.2. Concertar de manera integral con las instituciones del Estado y organismos internacionales, para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva en búsqueda de los hechos sucedidos en los territorios indígenas del Pueblo Zenú asociados del conflicto armado interno.

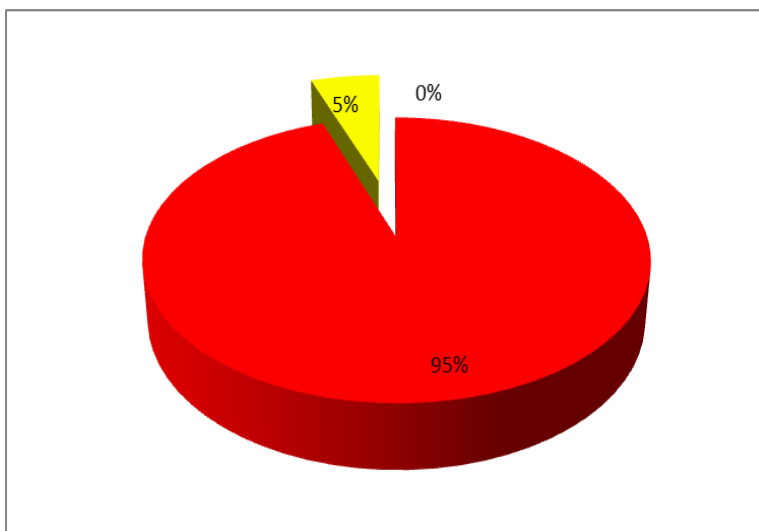


3.5. LIBERTAD DE EXPRESIÓN

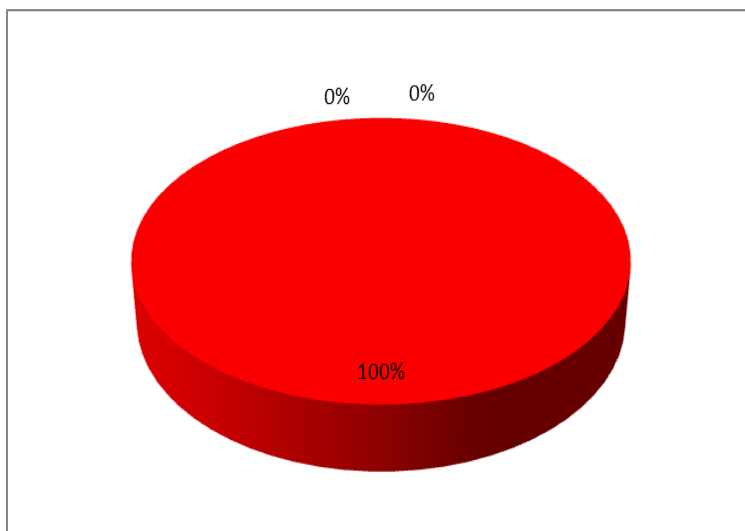
3.5.1. Fomentar campañas de respeto a la dignidad humana para el pueblo Zenú.



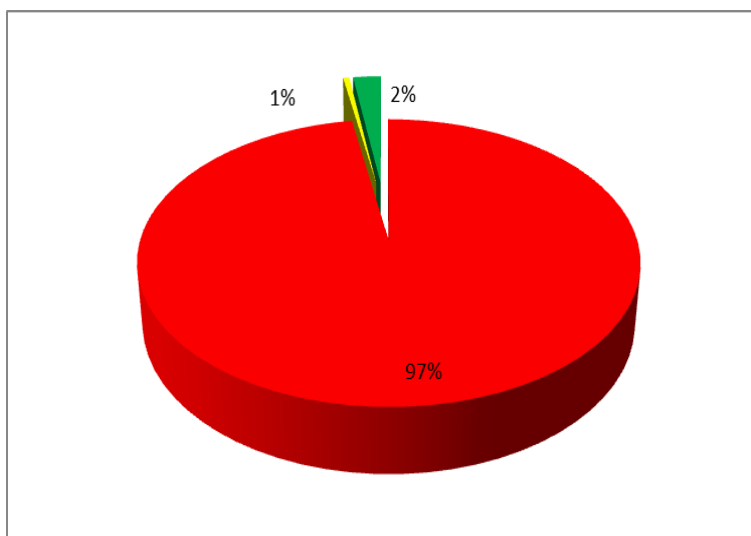
3.5.2. Promover y difundir los acervos culturales, las ideas políticas y reivindicaciones en derecho del pueblo Zenú y las organizaciones indígenas por los medios, canales y estructuras de difusión nacional.



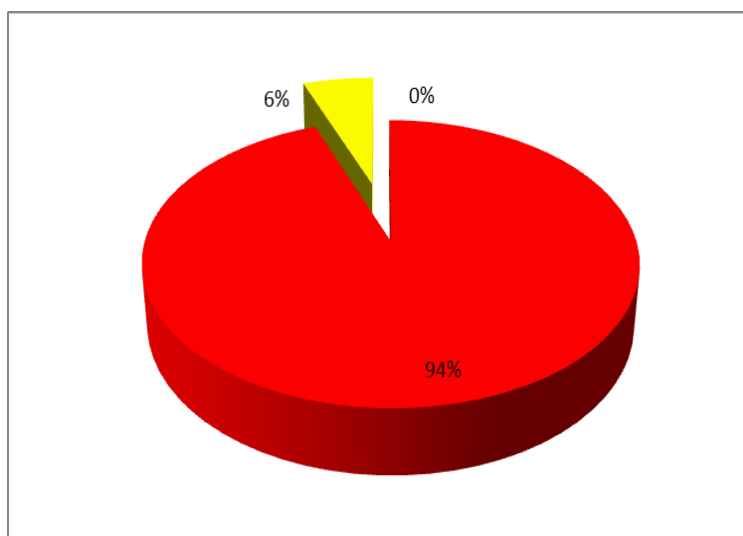
3.5.3. Fortalecer los procesos de formación de los miembros del pueblo Zenú en las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como también en investigación y documentación histórica de los procesos propios.



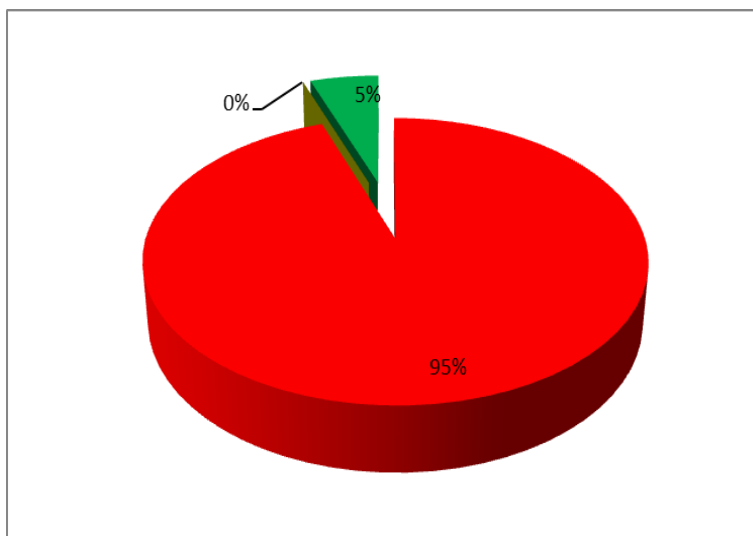
3.5.4. Establecer estrategias para que las instituciones encargadas de los procesos de justicia, verdad y reparación, escuchen a las víctimas acompañadas de las autoridades tradicionales y reporten de manera verídica los hechos victimizantes que han afectado la integridad del pueblo Zenú a asociados del conflicto armado.



3.5.5. Concertar estrategias normativas en la búsqueda de la protección de las expresiones culturales en los territorios indígenas del pueblo Zenú.

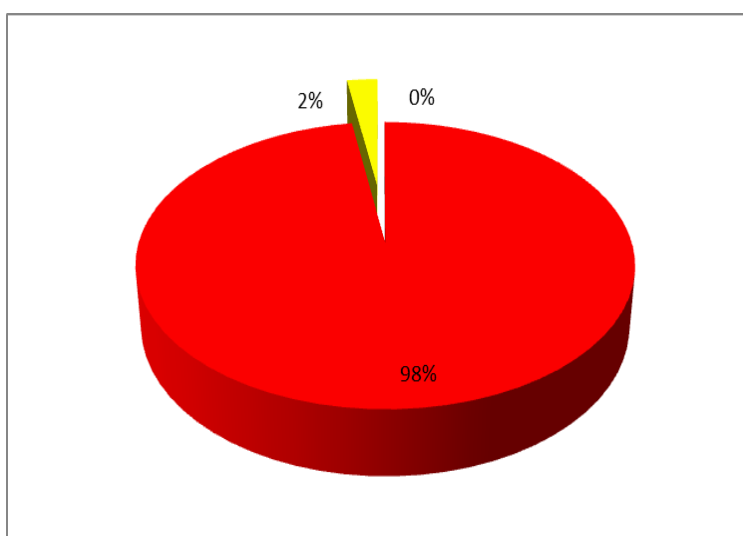


3.5.6. Implementar medidas que obliguen a las entidades y funcionarios del Estado a respetar los espacios que el pueblo Zenú adelanta en la búsqueda del ejercicio de los derechos colectivos.

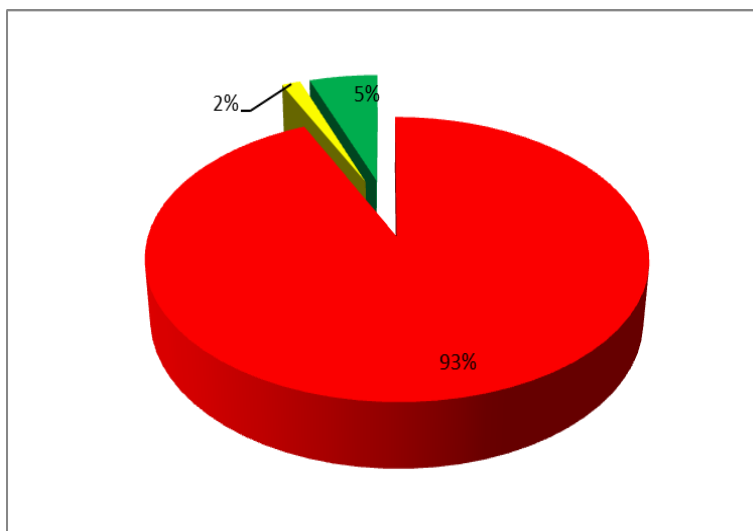


3.6. LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y CONCIENCIA

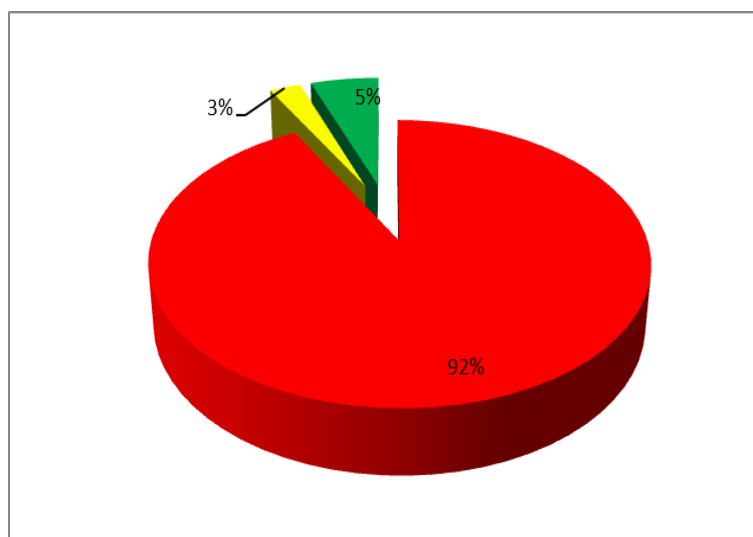
3.6.1. Concertar medidas de protección especial para los médicos ancestrales, parteras, sobanderos y líderes políticos del pueblo Zenú.



3.6.2. Establecer medidas de control y sanción para las acciones y actos de proselitismo político en territorios y comunidades del pueblo Zenú; de igual forma para las instituciones que limiten los saberes ancestrales.

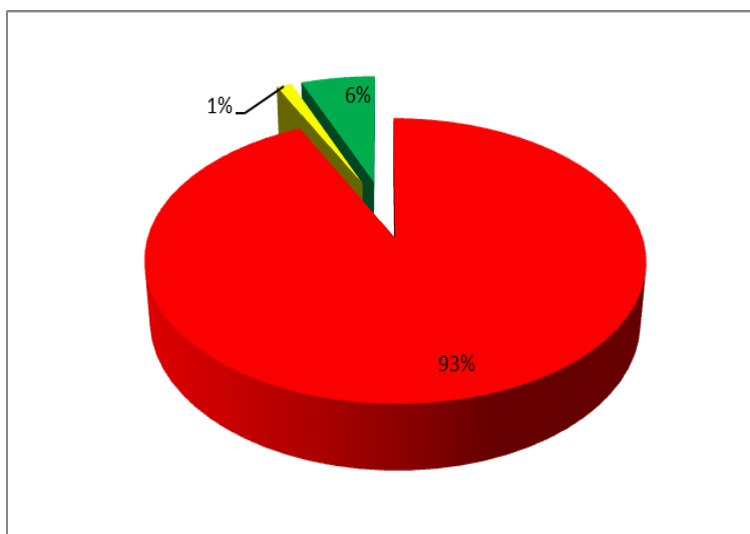


3.6.3. Fortalecer, reconocer y desarrollar los sistemas espirituales y medicinales del pueblo indígena Zenú.

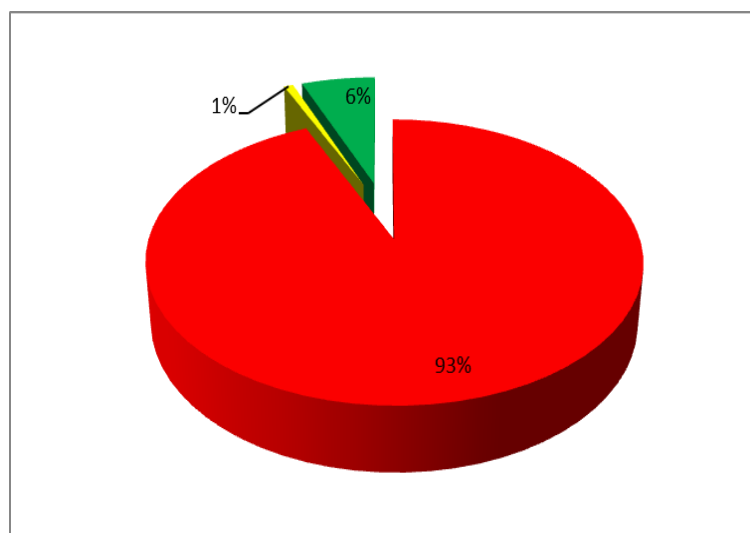


3.7. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y MOVILIZACIÓN

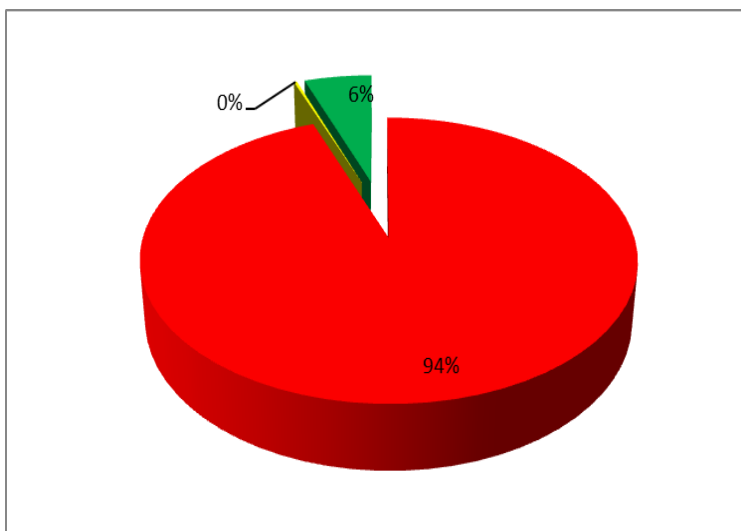
3.7.1. Establecer mecanismos de protección y respeto, para que el pueblo Zenú y sus autoridades puedan con autonomía determinar en el marco del derecho propio, con quien establecer alianzas políticas, organizativas o programáticas.



3.7.2. Proteger y defender del movimiento indígena sin ningún tipo de retaliación ni discriminación por parte de las entidades del Estado colombiano.



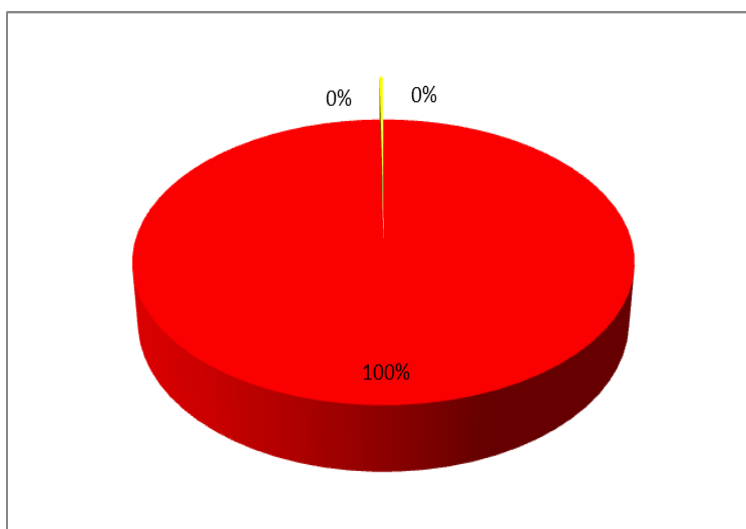
3.7.3. Proteger y evitar las represalias por parte de los actores armados, en las movilizaciones sociales y étnicas del Pueblo Zenú.



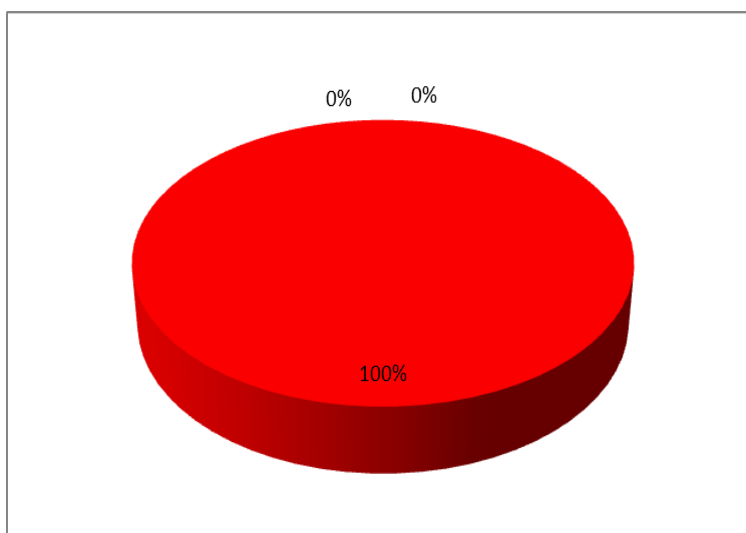
4. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES

4.1. SOBERANÍA Y AUTONOMÍA ALIMENTARIA

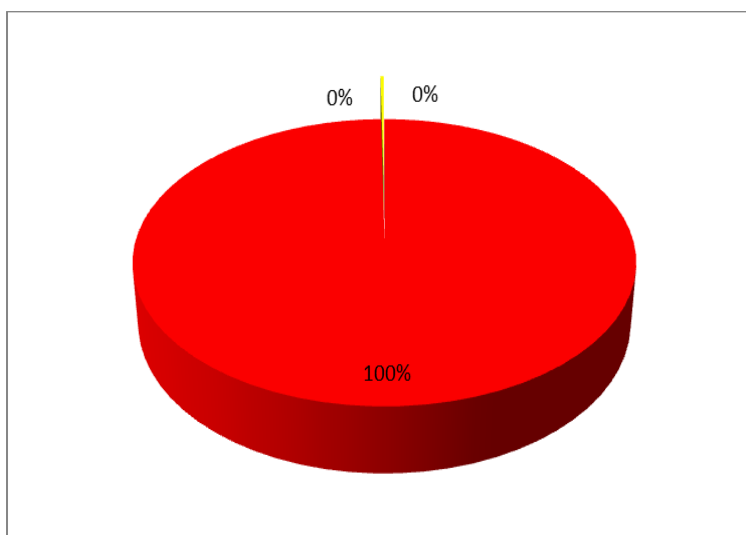
4.1.1. Concertar y desarrollar una política pública de soberanía alimentaria que dé prioridad de atención a las comunidades del pueblo Zenú.



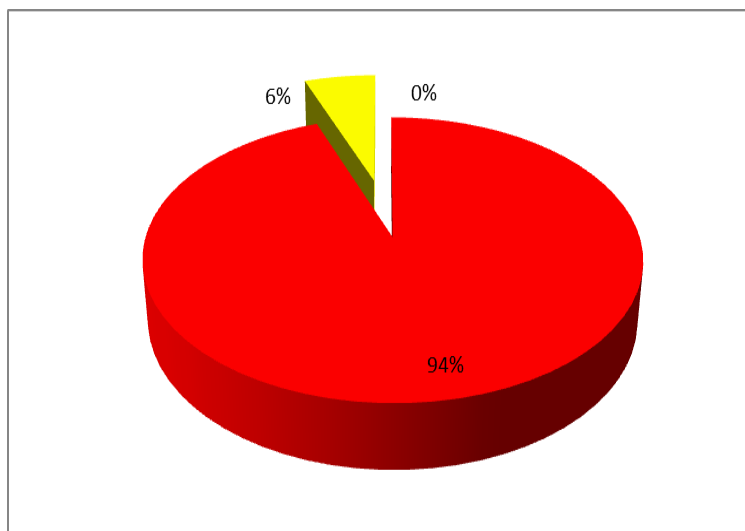
4.1.2. Garantizar el enfoque diferencial étnico en los planes, programas y políticas agrarios del Estado relacionadas con el pueblo Zenú.



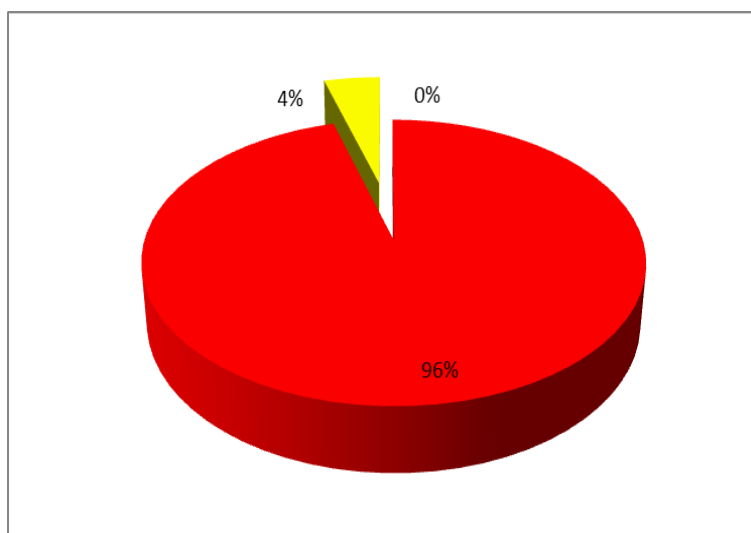
4.1.3. Fomentar procesos productivos y de economía solidaria entre el pueblo Zenú y el resto de la nación.



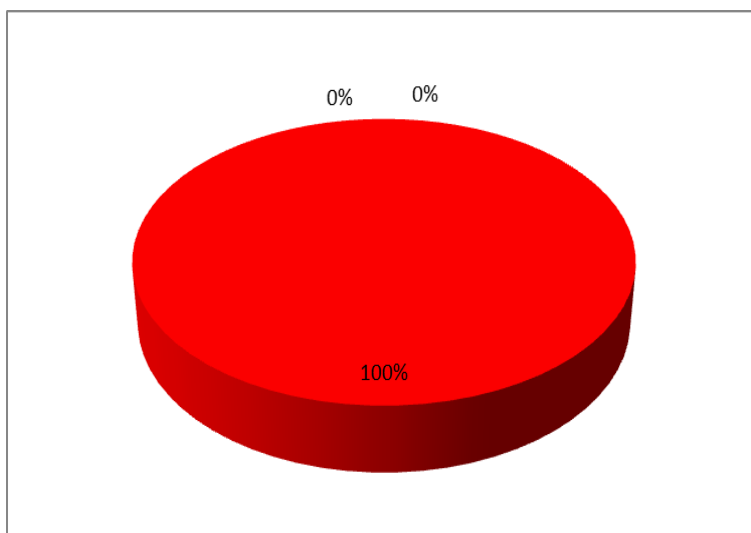
4.1.4. Establecer y fomentar proyectos para la adecuación de suelos, sistemas de riego e infraestructura necesaria, para la producción agrícola de los territorios del pueblo Zenú.



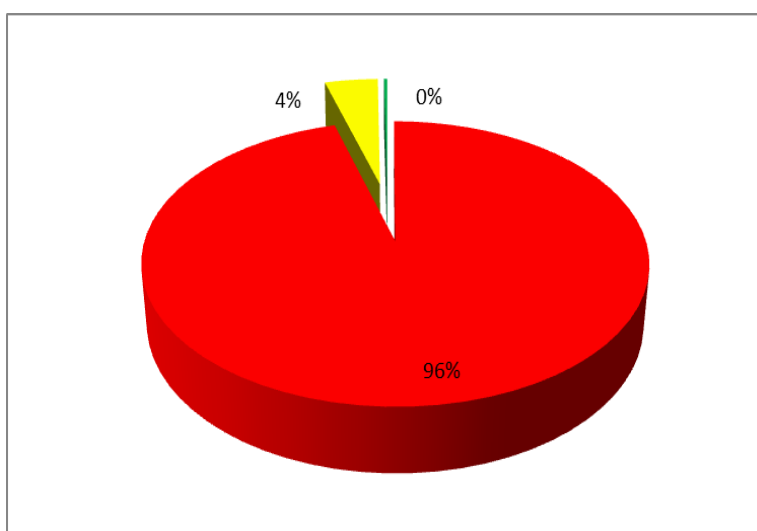
4.1.5. Generar medidas y condiciones que garanticen un territorio Zenú libre de transgénicos.



4.1.6. Implementar políticas públicas estratégicas que permitan una seguridad alimentaria basada en la soberanía alimentaria y la producción tradicional del pueblo Zenú.

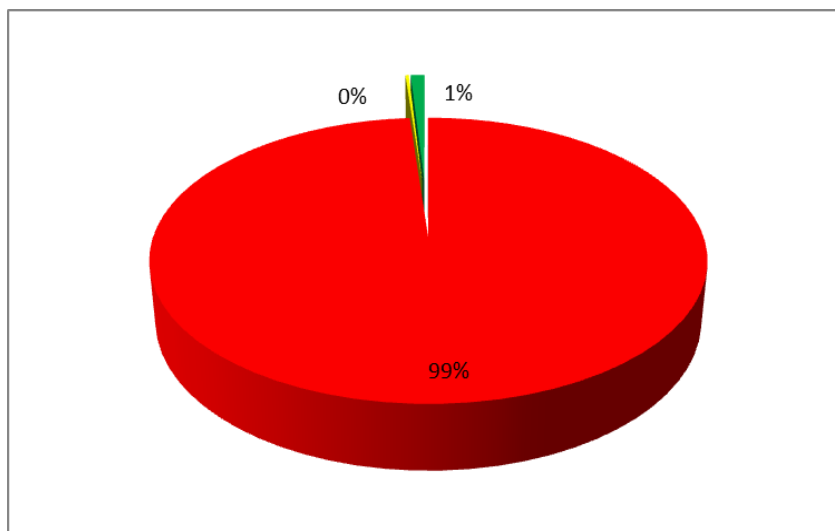


4.1.7. Fomentar en el pueblo indígena Zenú el desarrollo de prácticas tradicionales de cultivo y uso de las semillas tradicionales.

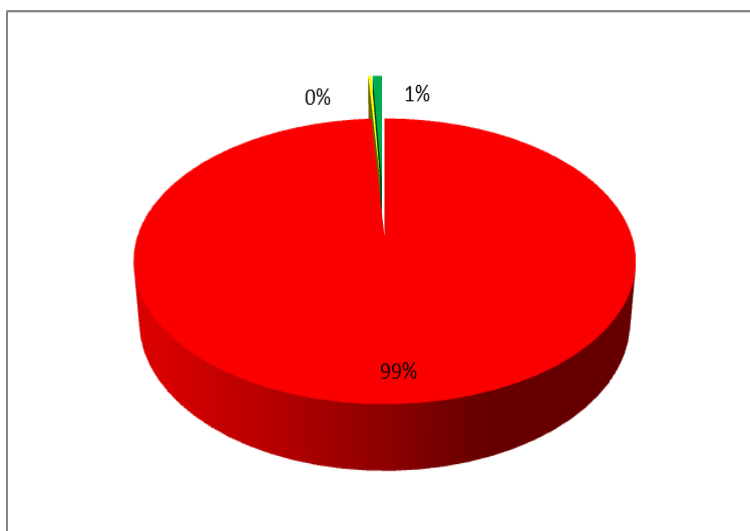


4.2. ATENCIÓN PSICOSOCIAL

4.2.1. Crear líneas de atención psicosocial para comunidades indígenas en condición de desplazamiento con personal profesional capacitado en enfoque diferencial étnico.

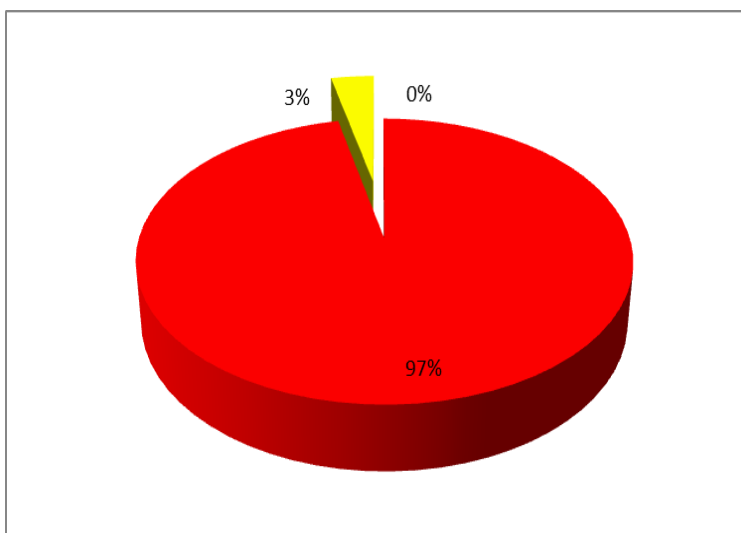


4.2.2. Garantizar la atención psicosocial individual y colectiva a las víctimas del conflicto armado pertenecientes al pueblo Zenú, en cabeza de sus médicos tradicionales con el acompañamiento de un equipo profesional.

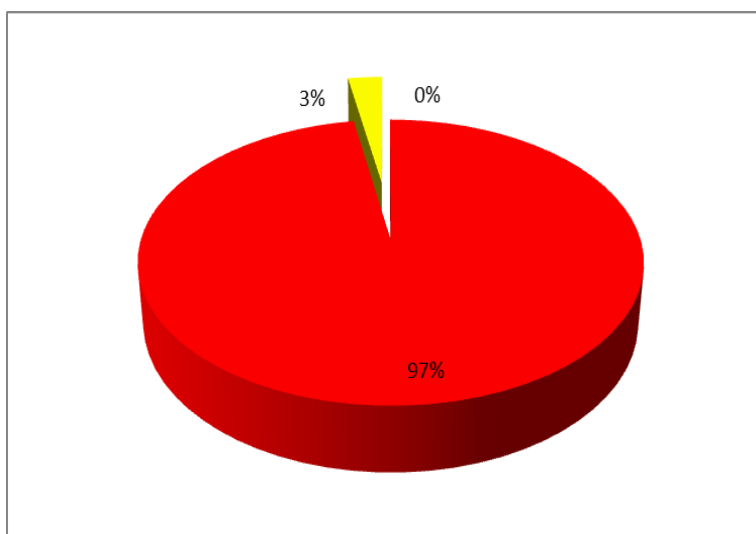


4.3. DOMINACIÓN Y EXPLOTACIÓN

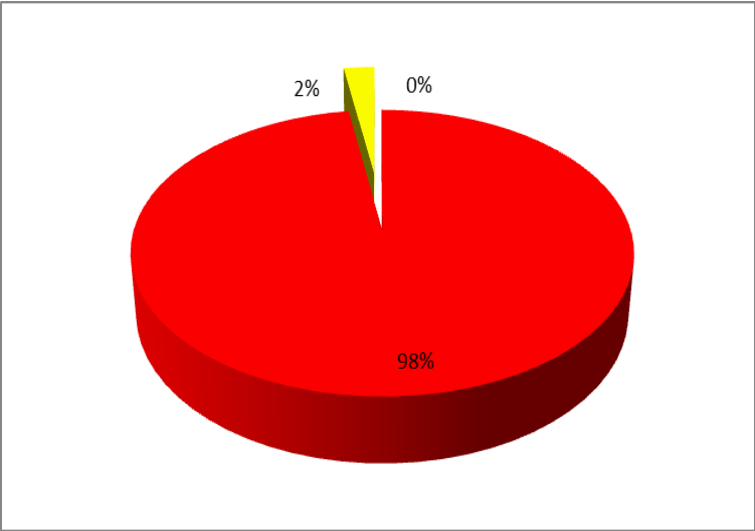
4.3.1. Diseñar una estrategia político-administrativa de manera concertada con las autoridades del pueblo Zenú, que visibilice, prohíba y promueva sancione; y repare al pueblo indígena por toda forma de racismo o formas conexas de intolerancia y exclusión, que afecten los derechos individuales y colectivos del pueblo.



4.3.2. Asegurar acompañamiento jurídico permanente para recepción y procesamiento de casos por acoso laboral discriminatorio; y establecer un marco sancionatorio correspondiente.

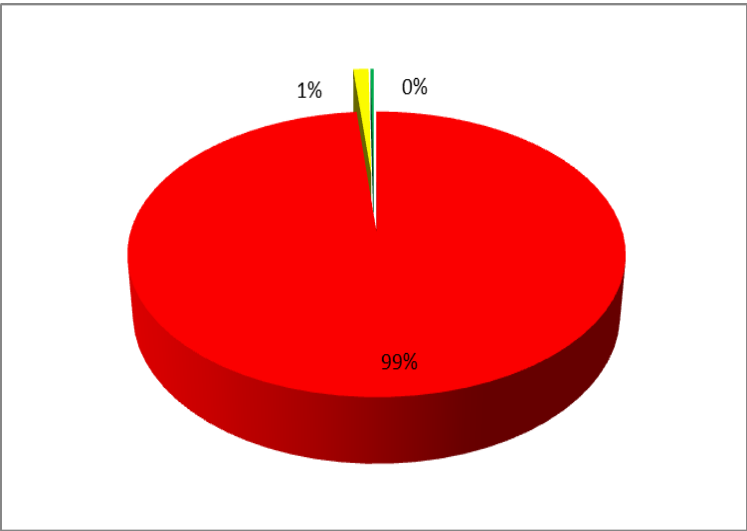


4.3.3. Concertar una estrategia político-administrativa con la participación de las autoridades indígenas, donde se establezca un protocolo para la prohibición de cualquier tipo de explotación económica, cultural, laboral, social, política, militar y sexual del pueblo Zenú.

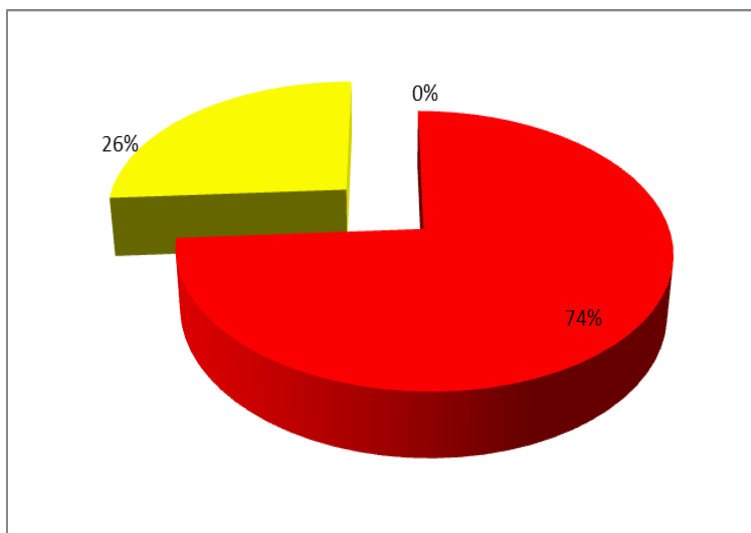


4.4. EDUCACIÓN

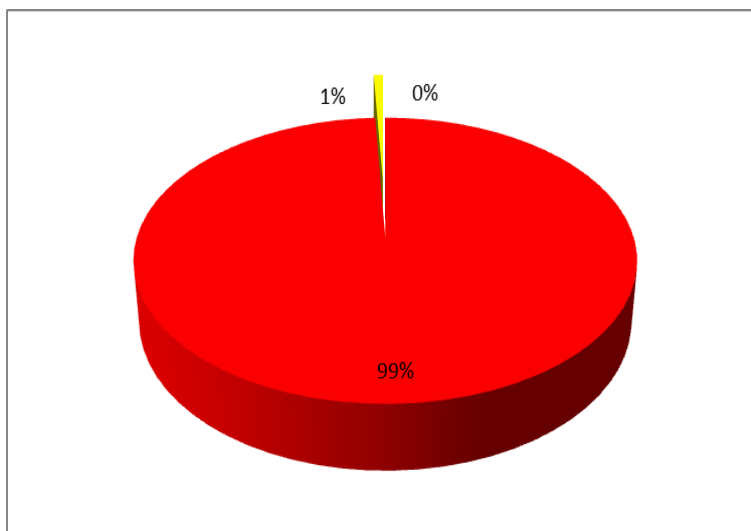
4.4.1. Exigir la implementación del Proyecto Educativo Cultural y Comunitario (PECC), asegurando que sea construido de acuerdo a las bases de educación propia ancestral del pueblo Zenú.



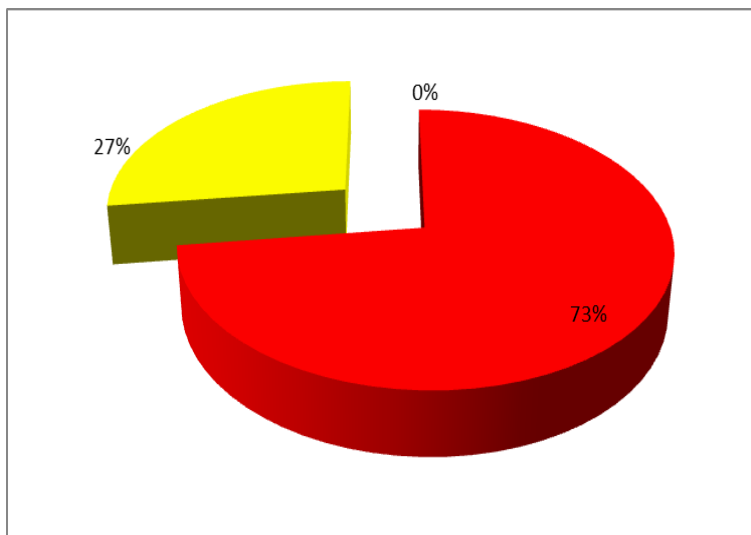
4.4.2. Dotar al pueblo Zenú de la infraestructura necesaria que le permita garantizar una educación propia de conformidad al Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP).



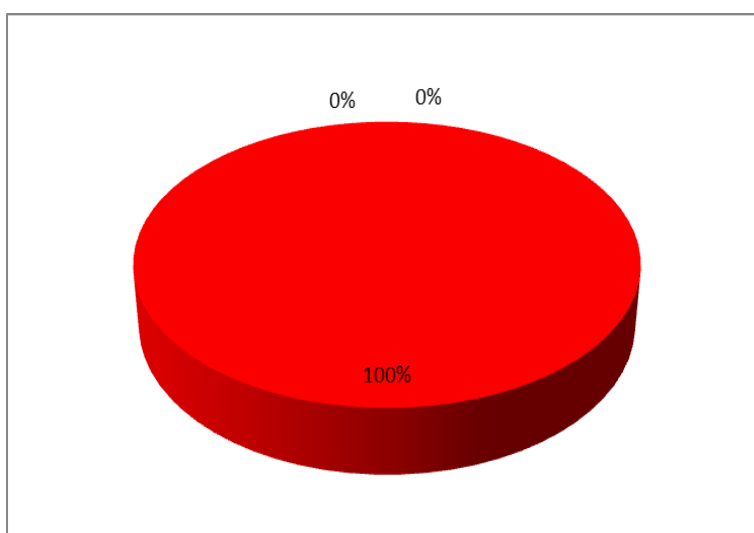
4.4.3. Diseñar programas y servicios educativos para el pueblo Zenú, con la finalidad de gozar una educación propia de alta calidad con estrategias de seguimiento, evaluación y control, con enfoque diferencial.



4.4.4. Asegurar el acceso a los cupos estudiantiles a nivel nacional, departamental y municipal en los procesos de admisión a la educación superior, técnica o tecnológica, tanto en instituciones públicas o privadas, con condiciones de equidad, bajo criterio de priorización, gratuidad, así como becas, subsidios y líneas de crédito especiales para la población indígena Zenú.

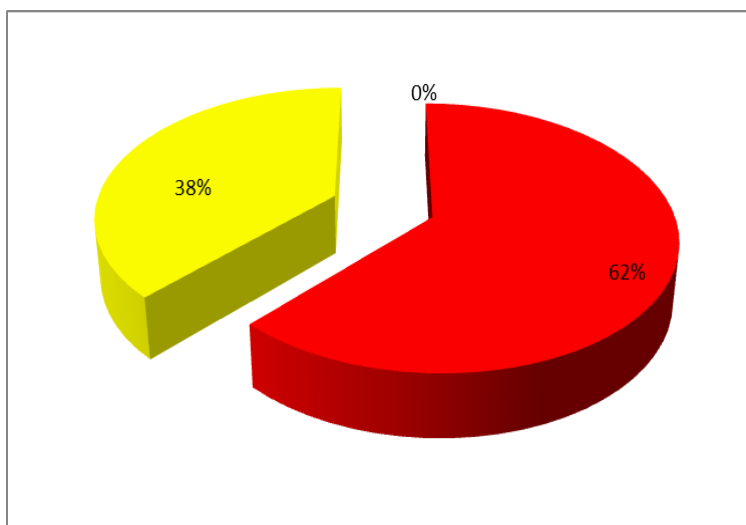


4.4.5. Garantizar la formación de profesionales pertenecientes al pueblo Zenú, para la ejecución del PECC, además de la infraestructura necesaria para el desarrollo del mismo.

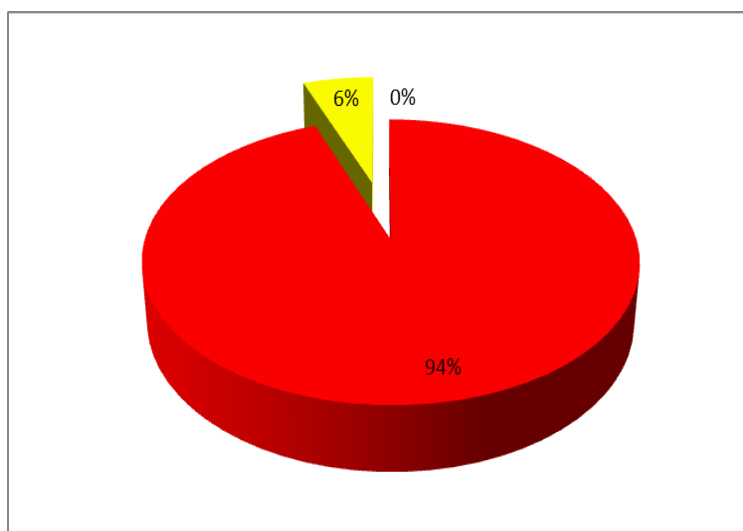


4.5. SALUD

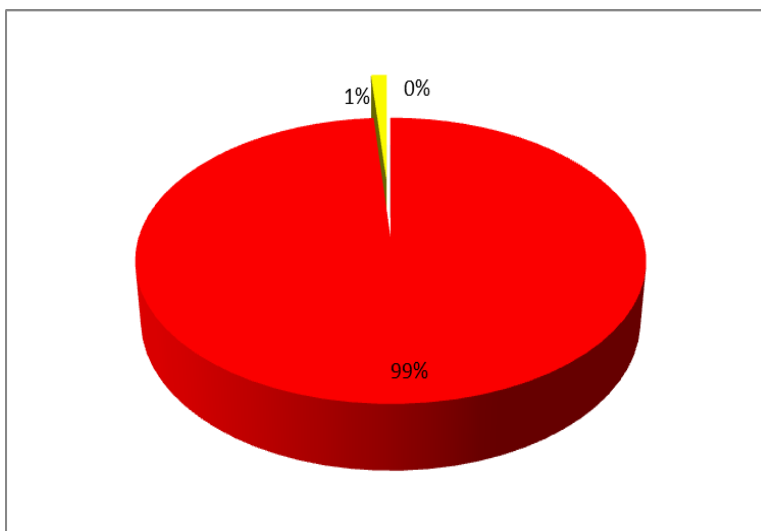
4.5.1. Asegurar la construcción de infraestructura necesaria y la contratación de personal idóneo que permita cubrir plenamente las necesidades de salud del pueblo Zenú de acuerdo al Sistema Intercultural de Salud de los Pueblos Indígenas (SISPI).



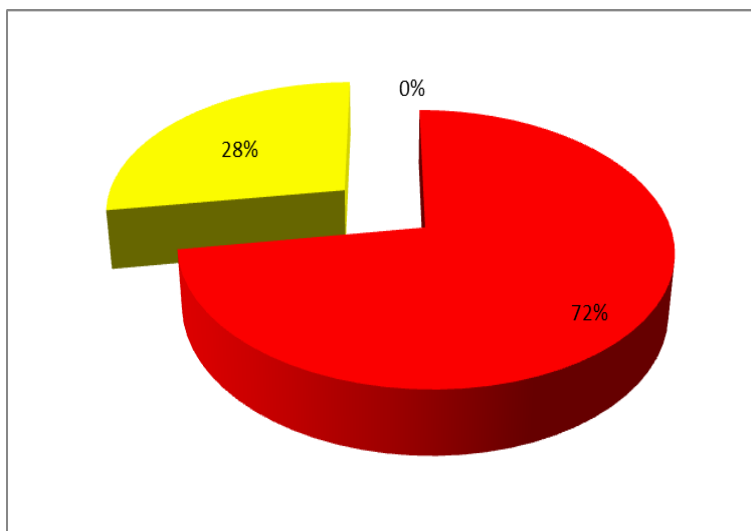
4.5.2. Respetar las estrategias culturales, administrativas y fiscales para la defensa, protección, fortalecimiento y reconocimiento de la medicina tradicional Zenú.



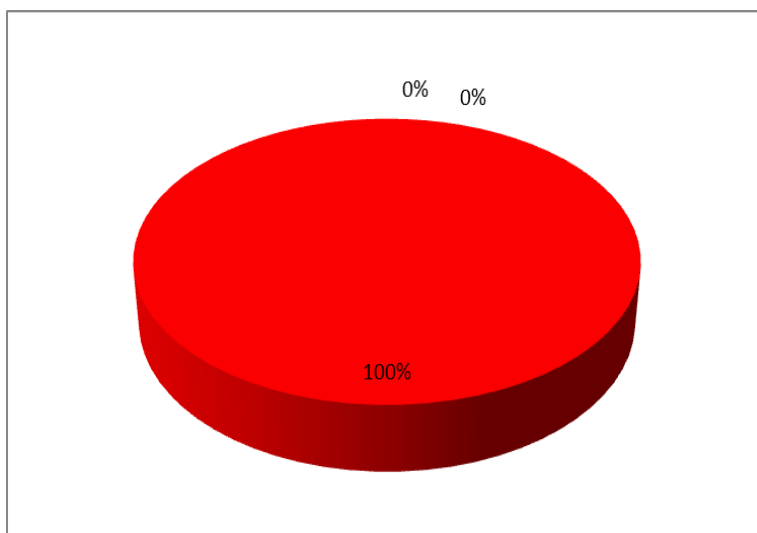
4.5.3. Contar con recursos estatales y/o gubernamentales que apoyen procesos de sensibilización y formación de niños y jóvenes indígenas en el conocimiento de las medicinas tradicionales.



4.5.4. Promover la adecuación institucional para la atención y la prestación del servicio de salud con enfoque diferencial étnico, garantizando el acceso al derecho a la salud bajo la prestación de un servicio con calidad, efectivo y respetuoso de la diferencia.

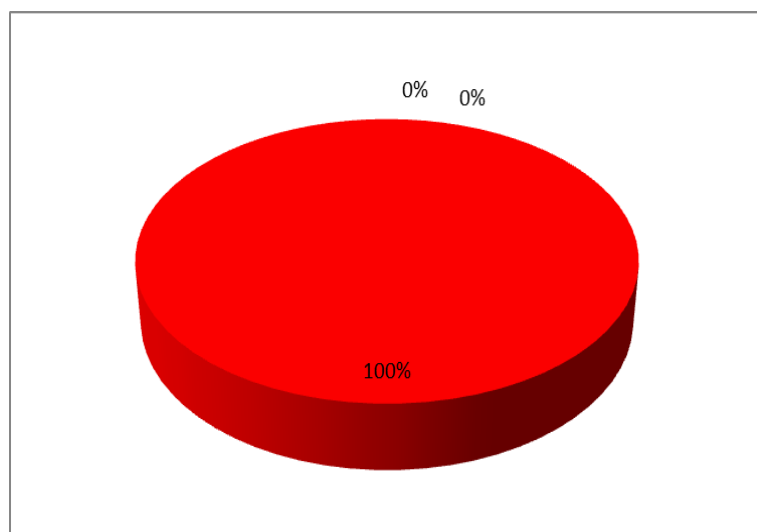


4.5.5. Generar las garantías para la atención integral en salud del pueblo Zenú.

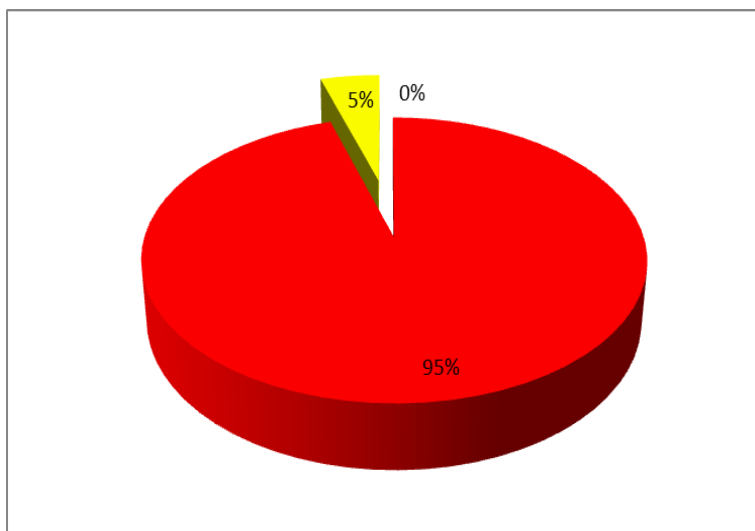


3.6 GENERACIÓN Y LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS RIQUEZAS

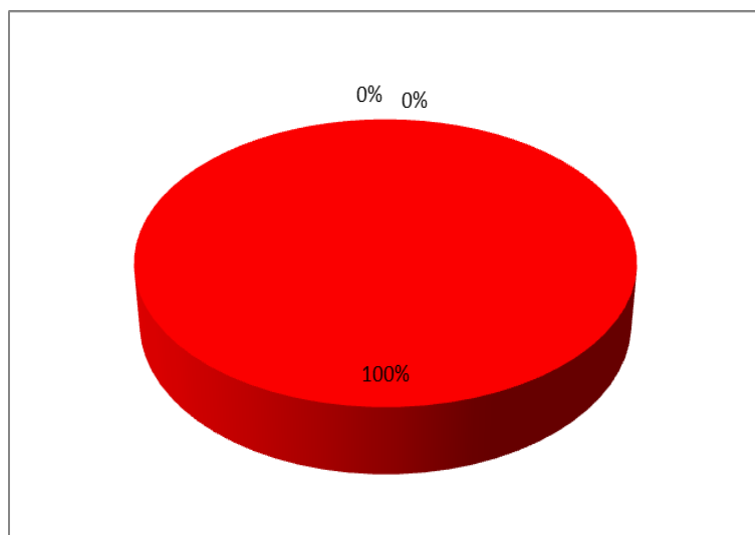
3.6.1. Establecer medidas de protección a la propiedad intelectual colectiva indígena, sobre sus bienes y valores intangibles.



3.6.2. Respetar y proteger la propiedad del suelo y el subsuelo y el espacio electromagnético en los territorios del pueblo Zenú (Convenio 169 de la OIT).

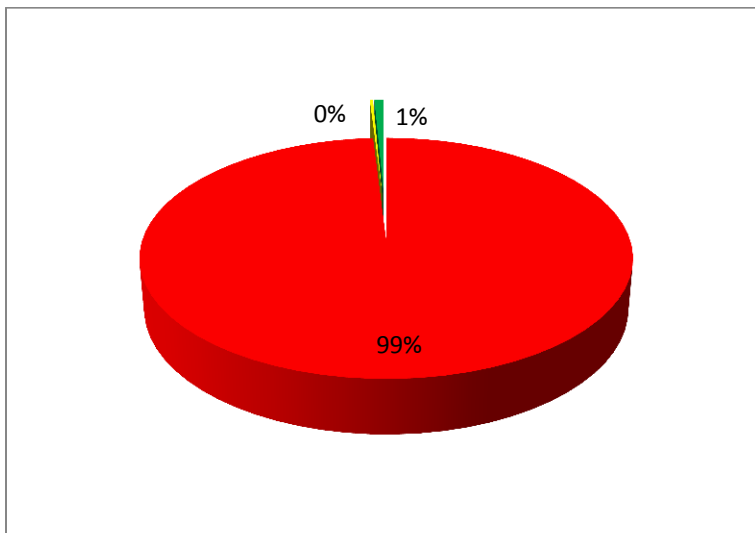


3.6.3. Concertar y desarrollar una política pública que incorpore el concepto de desarrollo propio desde la concepción del pueblo Zenú, en aras de la armonía y la disposición natural del territorio.

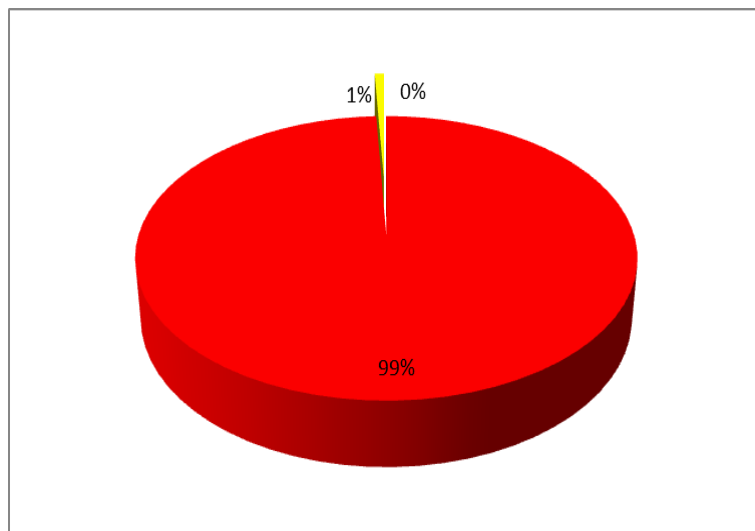


3.7. DERECHO AL DESARROLLO

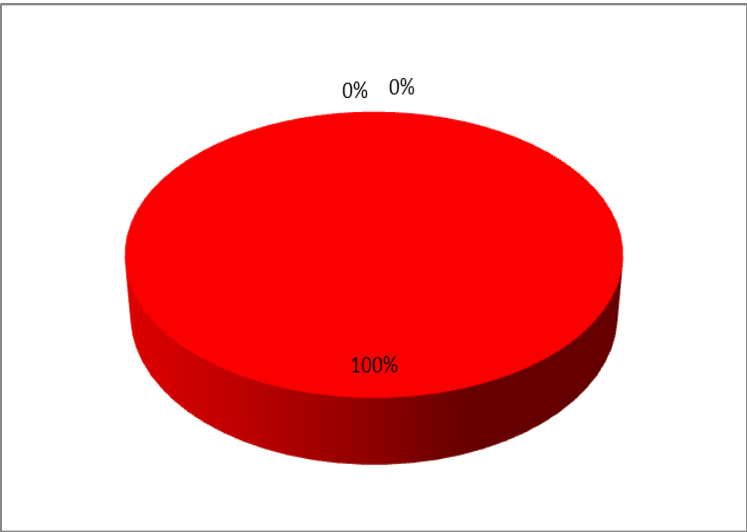
3.7.1. Establecer mecanismos para la generación de empleo en los resguardos y comunidades asegurando el acceso a crédito y el fortalecimiento de los lazos de comercialización.



3.7.2. Asegurar el acceso a la tierra y la creación de empresas propias donde se implementen proyectos productivos acordes a los usos, costumbres y territorialidades del pueblo indígena Zenú.

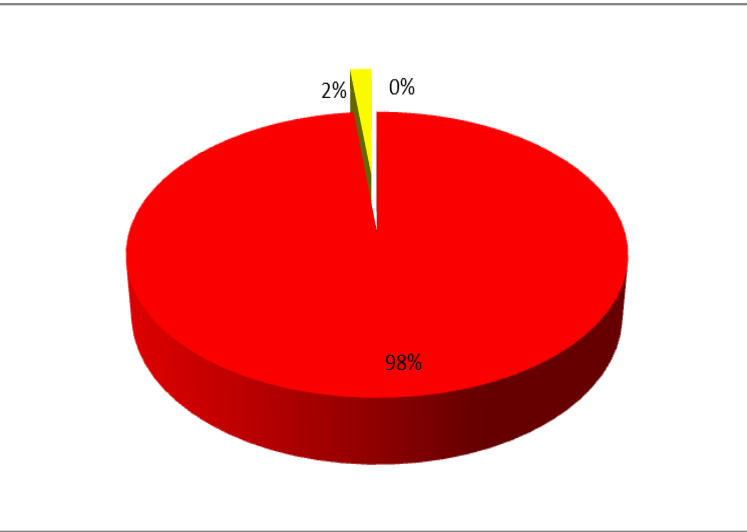


3.7.3. Diseñar propuestas de desarrollo que emerjan de las necesidades productivas del pueblo Zenú, teniendo en cuenta la diversidad cultural y el enfoque diferencial.

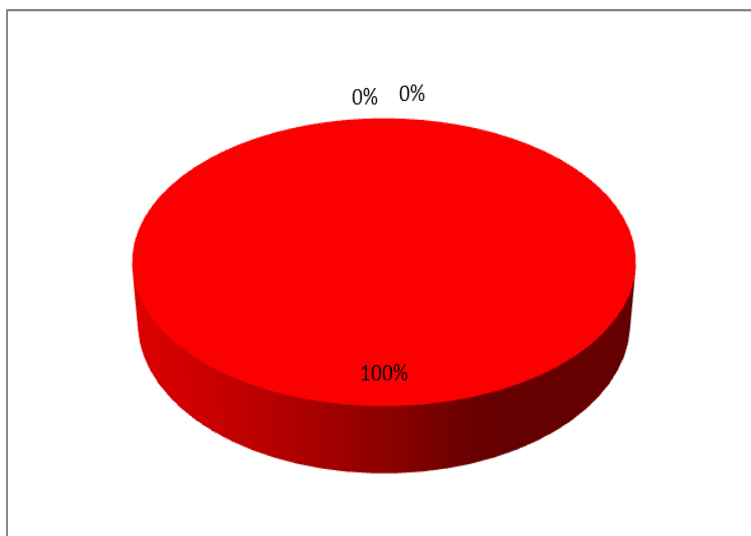


3.8. BIENES CULTURALES

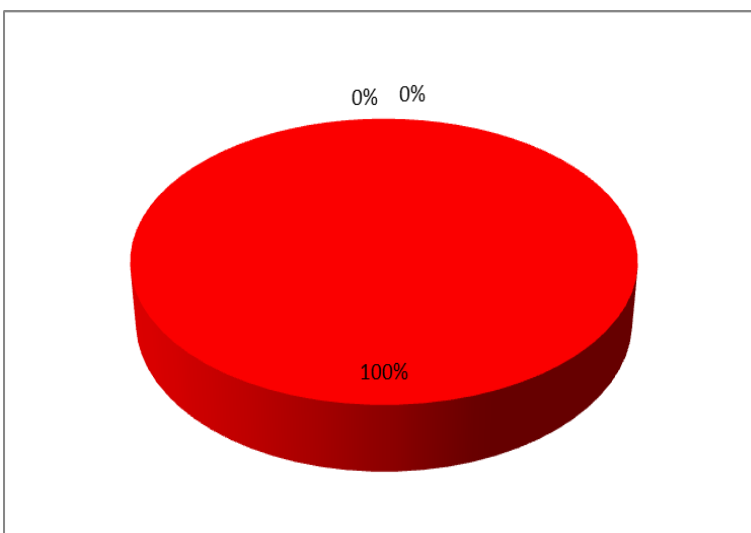
3.8.1. Establecer políticas y medidas que protejan la construcción de viviendas tradicionales del pueblo Zenú, teniendo en cuenta el uso de materiales propios.



3.8.2. Exigir al Estado colombiano el cumplimiento de los acuerdos, pactos y convenciones internacionales sobre el derecho del pueblo Zenú a sus patrimonios y valores culturales, históricos, colectivos y sociales.

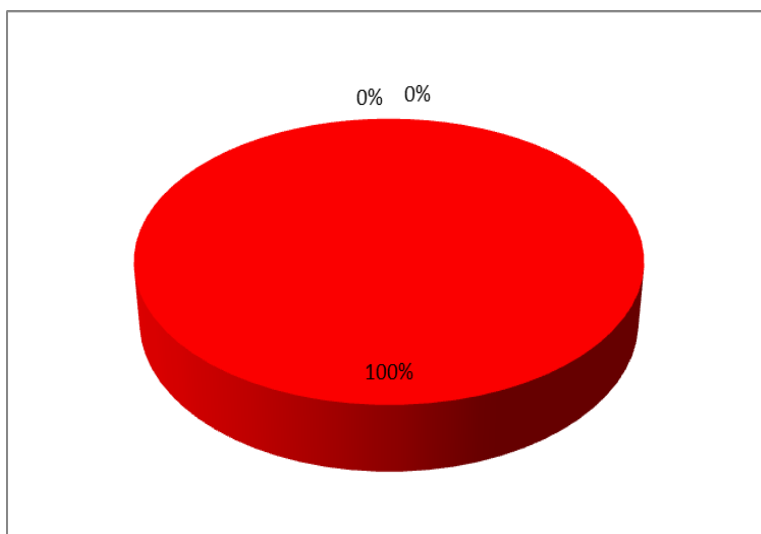


3.8.3. Emitir sanciones y medidas de protección que eviten el tráfico de mercados negros, explotación comercial o aprovechamiento intelectual indebido de los bienes culturales del pueblo indígena Zenú.

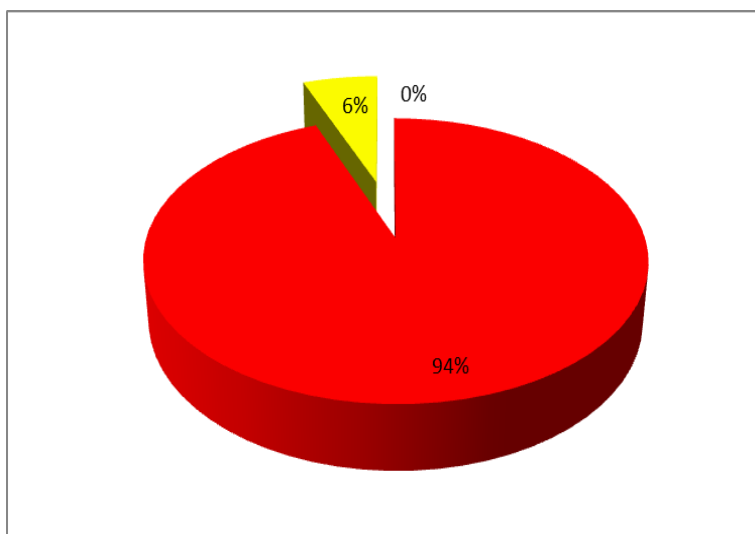


3.9. AMBIENTE.

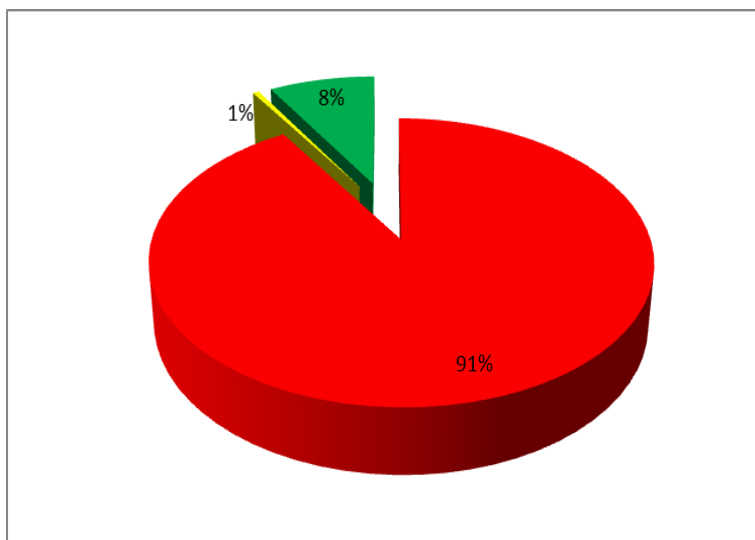
3.9.1. Coordinar entre las autoridades indígenas y las autoridades ordinarias el diseño y aplicación de medidas dirigidas a la protección de recursos naturales y de biodiversidad presentes en el territorio Zenú.



3.9.2. Coordinar entre las Autoridades Indígenas del pueblo Zenú y las Autoridades Ambientales Estatales el diseño de planes de ordenamiento, manejo y restauración de los ecosistemas pertenecientes al territorio.

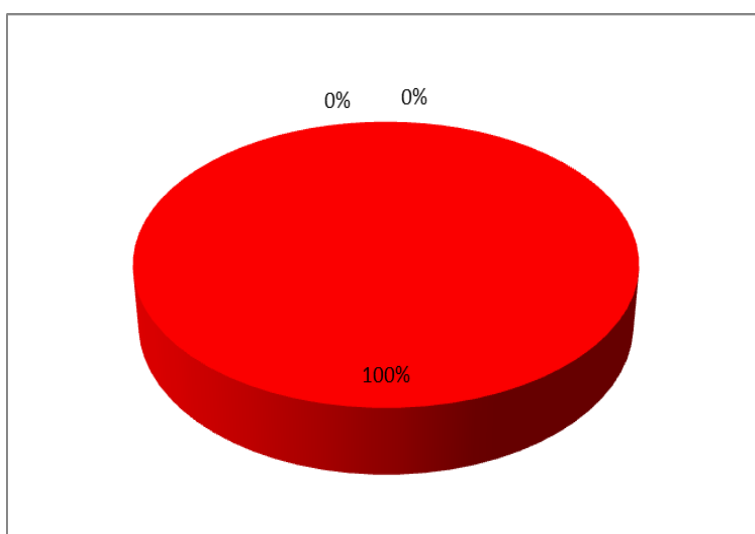


3.9.3. Reparar y reducir las afectaciones de impacto negativo sobre el territorio por causa directa o indirecta de los megaproyectos de extracción y explotación de recursos naturales.

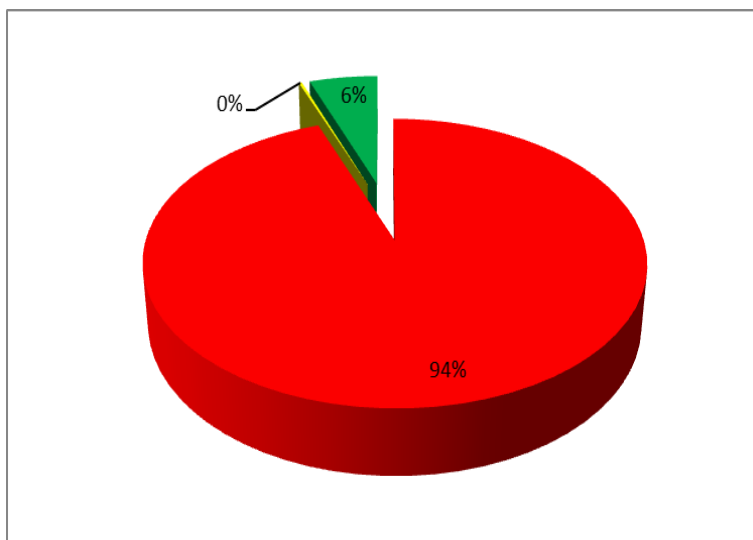


3.10. RECREACIÓN.

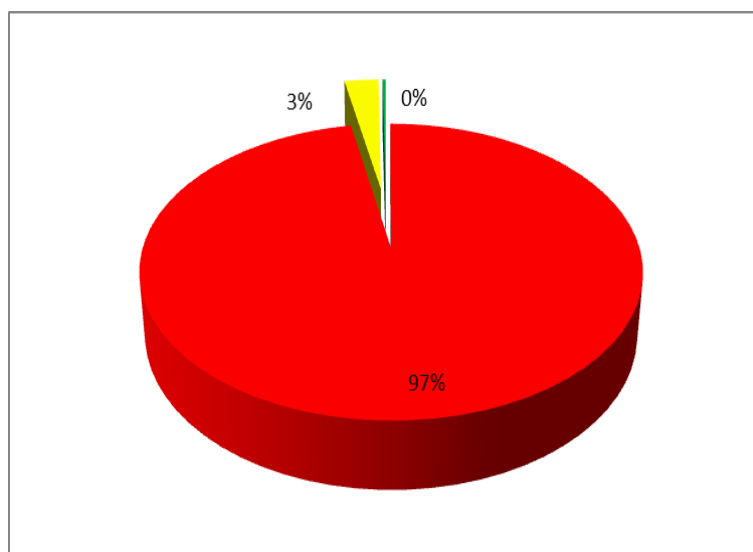
3.10.1. Diseñar programas de recreación que estén articulados con las construcciones de identidad cultural que permitan la pervivencia física y cultural del pueblo indígena Zenú.



3.10.2. Fomentar la creación de espacios y escenarios deportivos dentro de las comunidades, para desarrollar las olimpiadas y práctica de juegos tradicionales teniendo en cuenta las costumbres propias como pueblo Zenú.

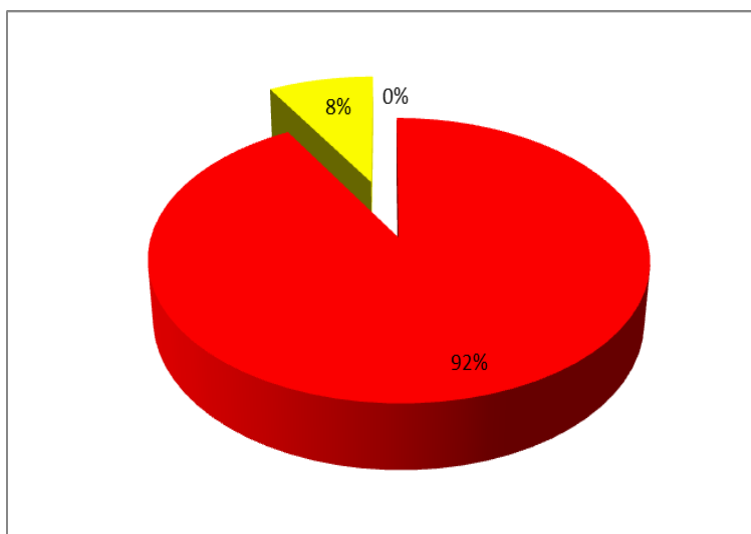


3.10.3. Destinar y ejecutar recursos para festivales relacionados con las danzas, música y narración oral, como parte de la recreación del pueblo Zenú.

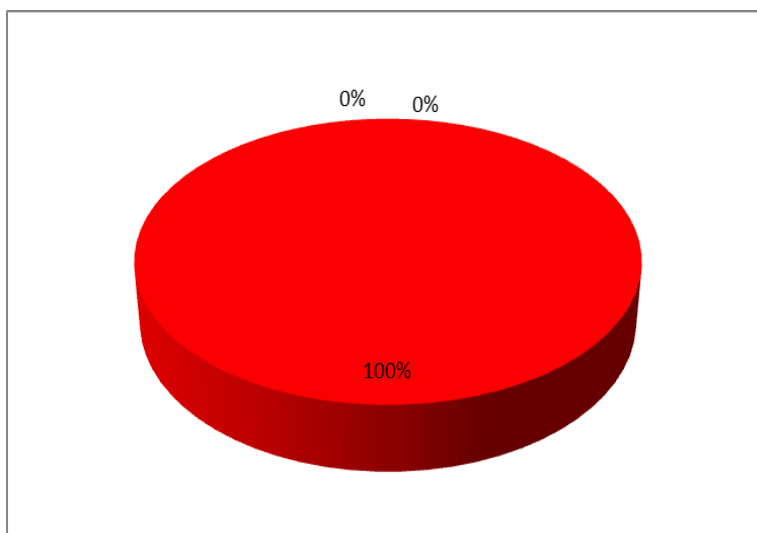


3.11. FAMILIA.

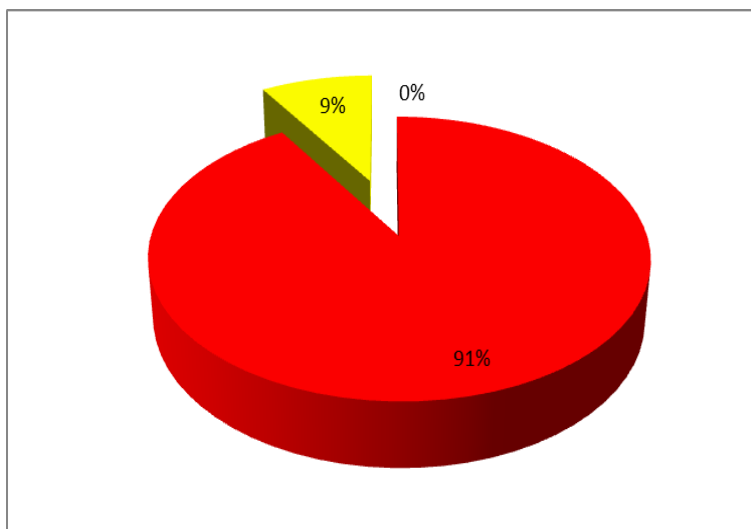
3.11.1. Fomentar programas donde se reconozca un mínimo vital de subsistencia digna, educación y salud; que contribuyan al bienestar de la familia Zenú, con una cobertura total cumpliendo con el enfoque diferencial.



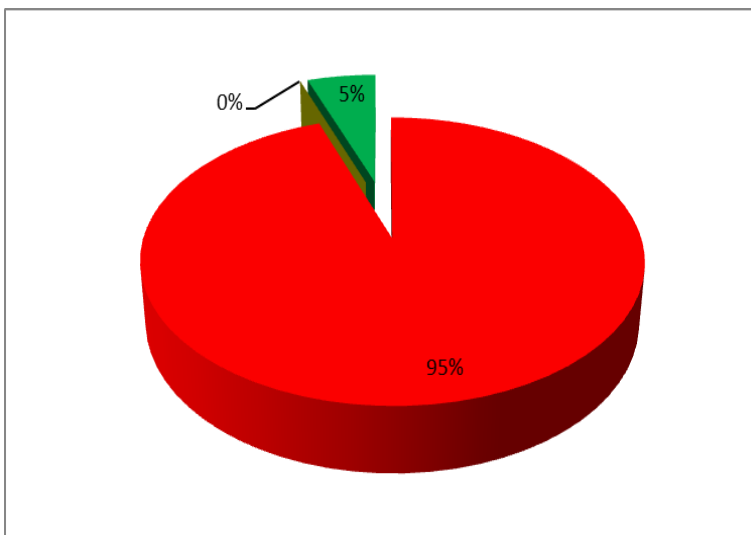
3.11.2. Garantizar que los planes, programas y proyectos relacionados con el bienestar social, sean administrados por las autoridades tradicionales del pueblo Zenú.



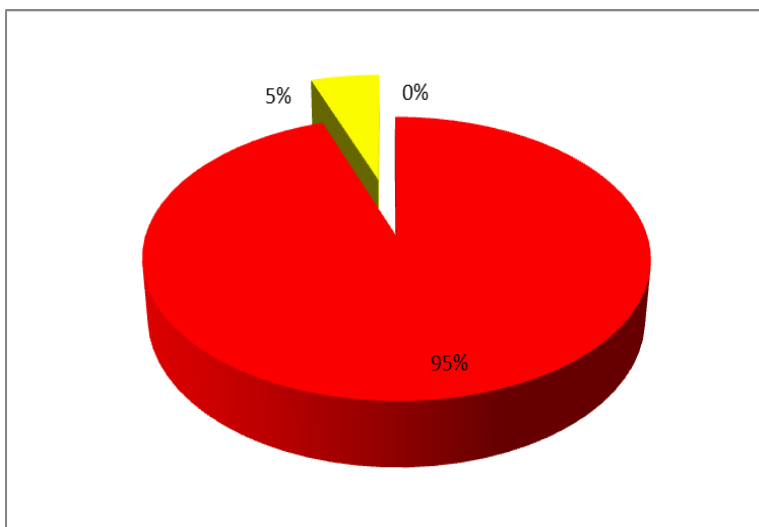
3.11.3. Exigir el acceso a los programas, subsidios, auxilios y plataformas de créditos a mujeres cabeza de familia del pueblo Zenú.



3.11.4. Diseñar estrategias con la participación de las autoridades tradicionales para erradicar el maltrato intrafamiliar en la población Zenú.



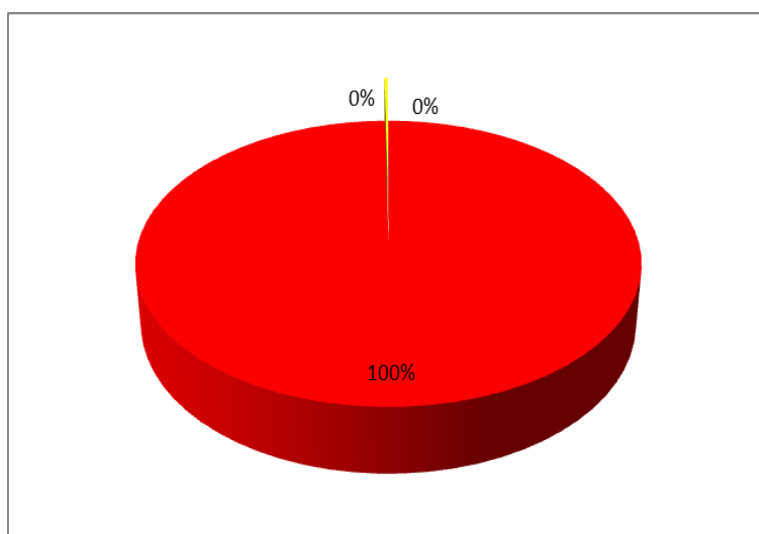
3.11.5. Fomentar planes, programas y proyectos que permitan el fortalecimiento del capital social y el mejoramiento de los ingresos de las familias indígenas Zenú.



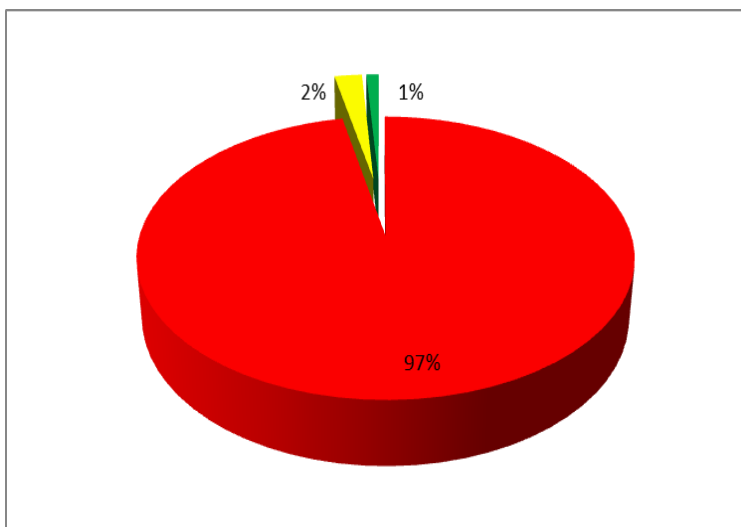
4. DERECHO AL CUIDADO Y TRATO PREFERENCIAL.

4.1. MUJERES INDÍGENAS.

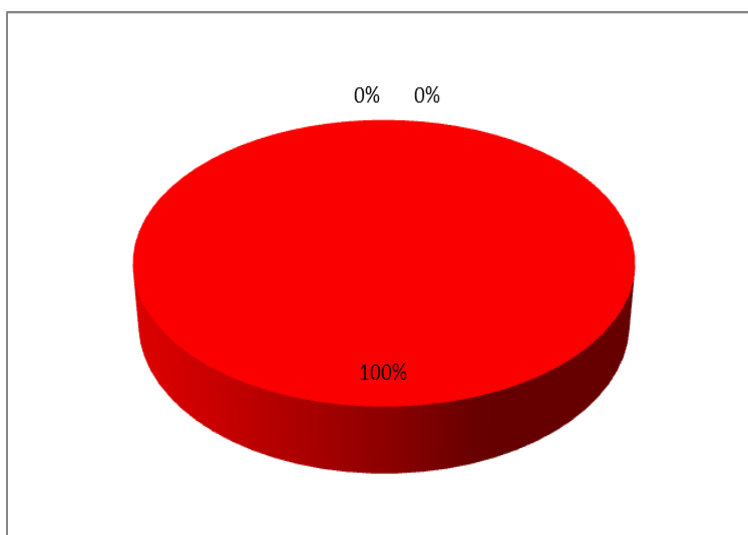
4.1.1. Establecer medidas de prevención, control y castigo contra todo tipo de violencia y abuso a la mujer indígena Zenú. Además de garantizar apoyo económico para la defensa de los derechos de la mujer y el acceso de ésta a la educación formal, técnica, tecnológica y profesional.



4.1.2. Crear rutas de acción y mecanismos donde las mujeres indígenas víctimas del conflicto armado, de las violencias (físicas, psicológicas y sexuales), y del desplazamiento forzado puedan exigir sus derechos y el goce efectivo de los mismos.

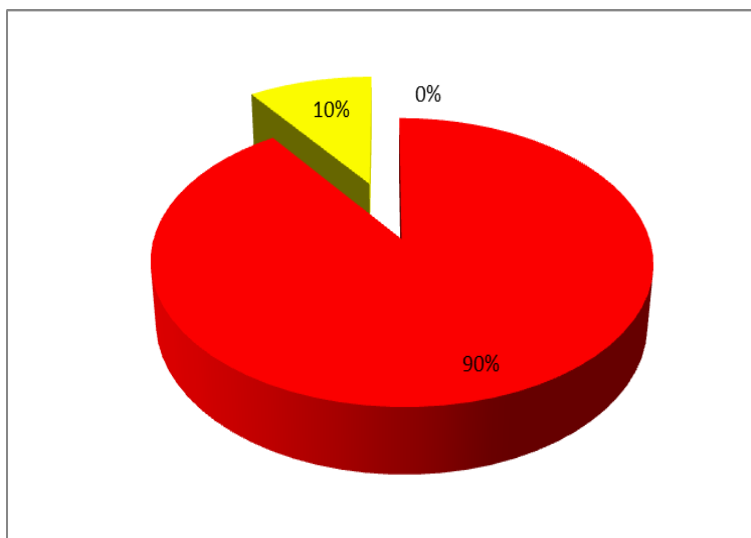


4.1.3. Generar y fortalecer mecanismos de participación político-administrativa para la mujer Zenú.

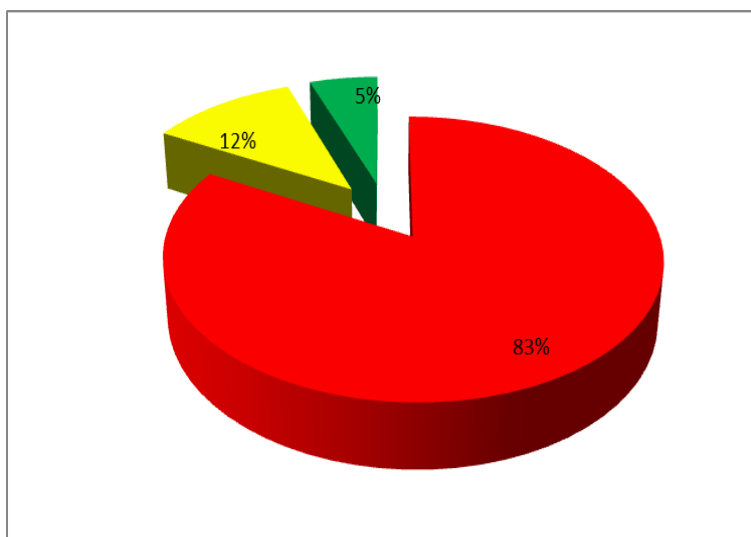


4.2. NIÑOS Y NIÑAS INDÍGENAS.

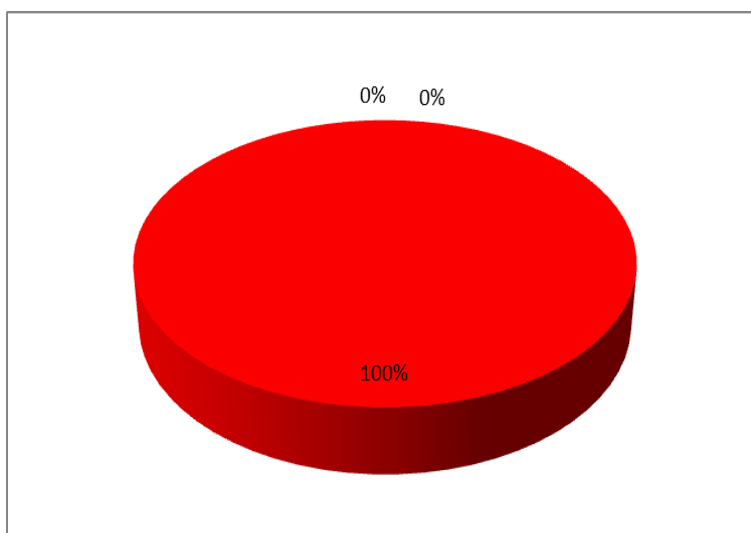
4.2.1. Realizar campañas con enfoque étnico diferencial para la desmovilización de niños, niñas y adolescentes indígenas de los grupos armados.



4.2.2. Establecer y desarrollar en concertación con las autoridades tradicionales medidas especiales y urgentes para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes indígenas por parte de los grupos armado.

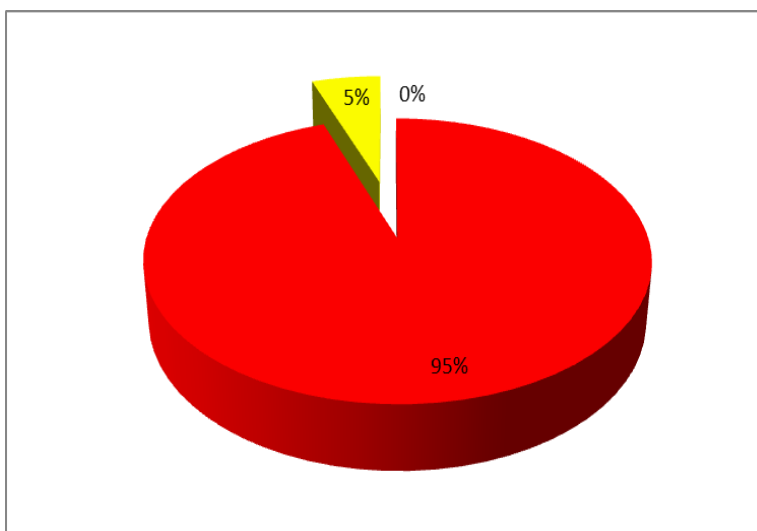


4.2.3. Generar espacios que permitan el libre desarrollo de los usos y costumbres del pueblo Zenú, para la población infantil.

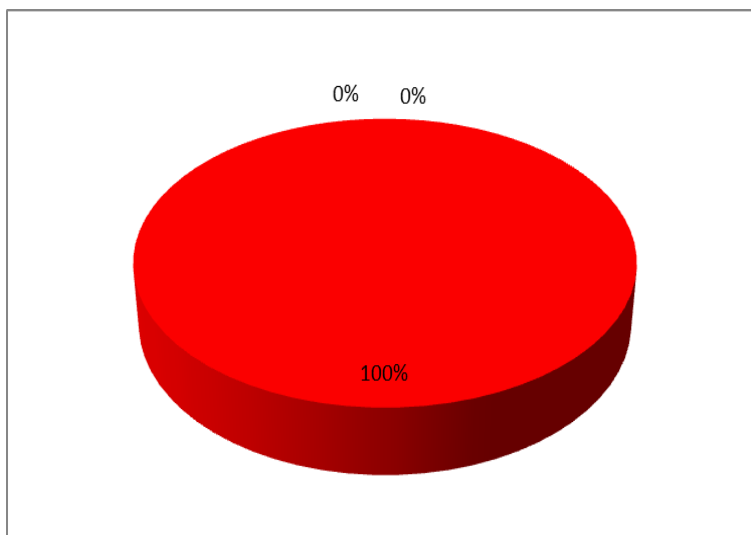


4.3. DISCAPACITADOS INDÍGENAS.

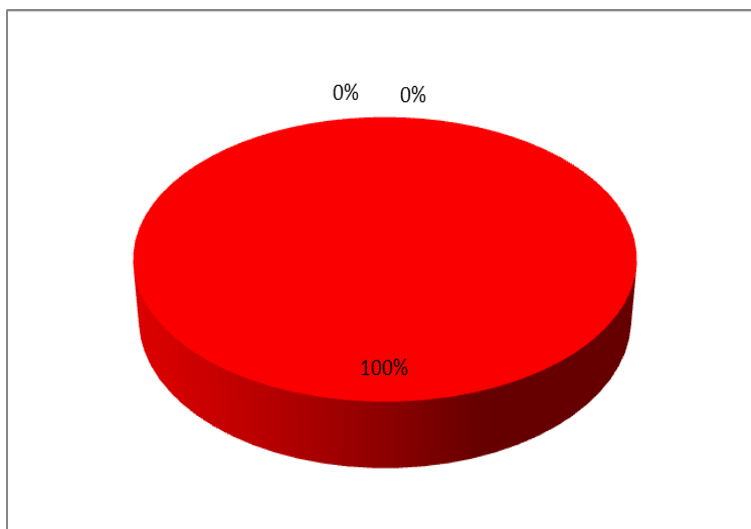
4.3.1. Generar acciones que permitan la preservación de un mínimo vital, seguridad social y educación de la población en situación de discapacidad.



4.3.2. Implementar una caracterización de la población indígena Zenú en situación de discapacidad para garantizar la sostenibilidad integral.

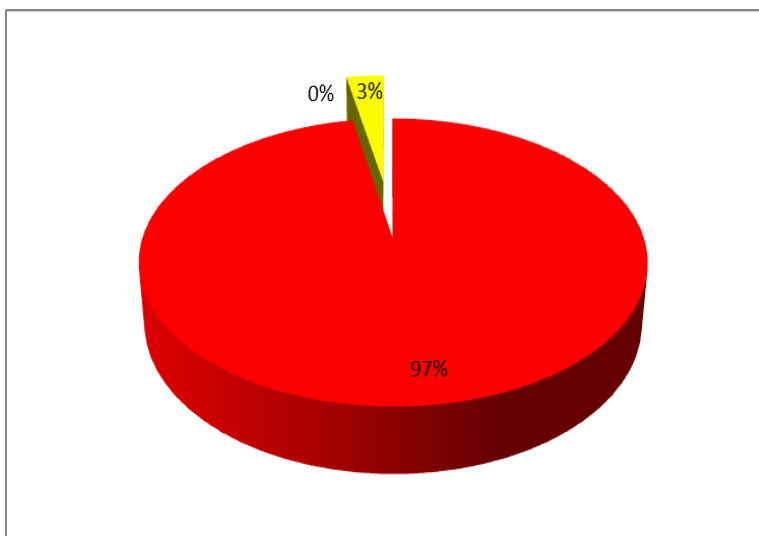


4.3.3. Implementar mecanismos de sensibilización por medio de programas y proyectos pedagógicos dirigidos hacia el respeto y la inclusión de la población indígena en situación de discapacidad.

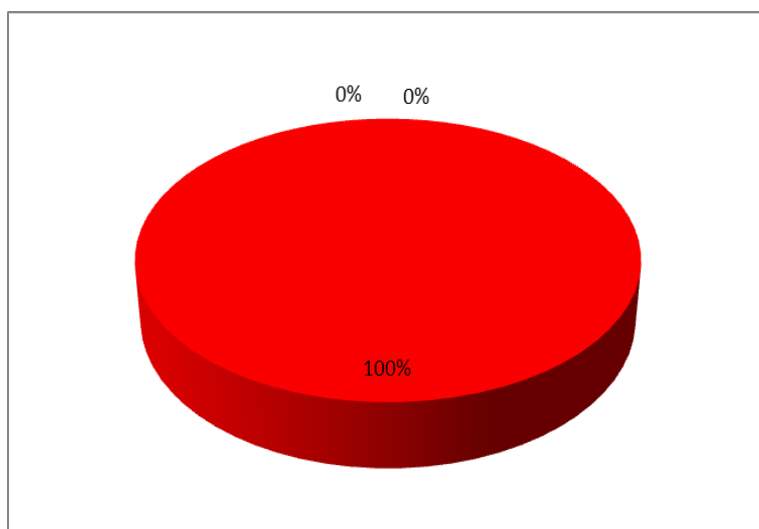


4.4. INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO.

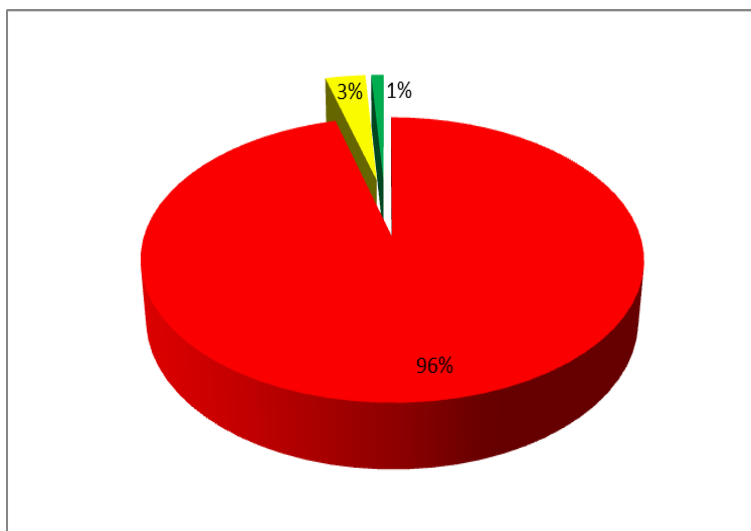
4.4.1. Asegurar los recursos necesarios para la sostenibilidad de las comunidades del pueblo Zenú, y así, prevenir el desplazamiento forzado.



4.4.2. Fomentar mecanismos de autoprotección frente a posibles escenarios de desplazamiento.



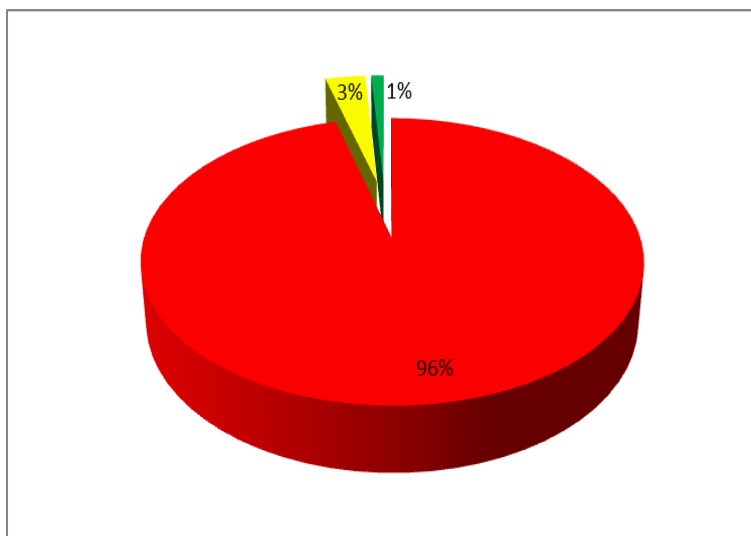
4.4.3. Diseñar mecanismos que posibiliten la sostenibilidad integral para las víctimas en situación de desplazamiento del pueblo Zenú, en lo que respecta a programas que los beneficien en cuanto a Infraestructura, atención, tratamiento y sostenibilidad.



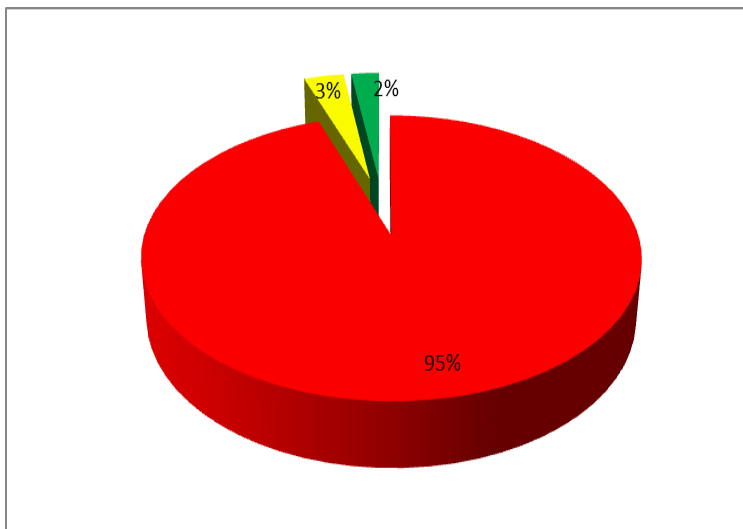
5. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL.

5.1. ATENCIÓN HUMANITARIA.

5.1.1. Generar las medidas necesarias para dar efectivo e inmediato cumplimiento del Decreto Ley 4633 de 2011.

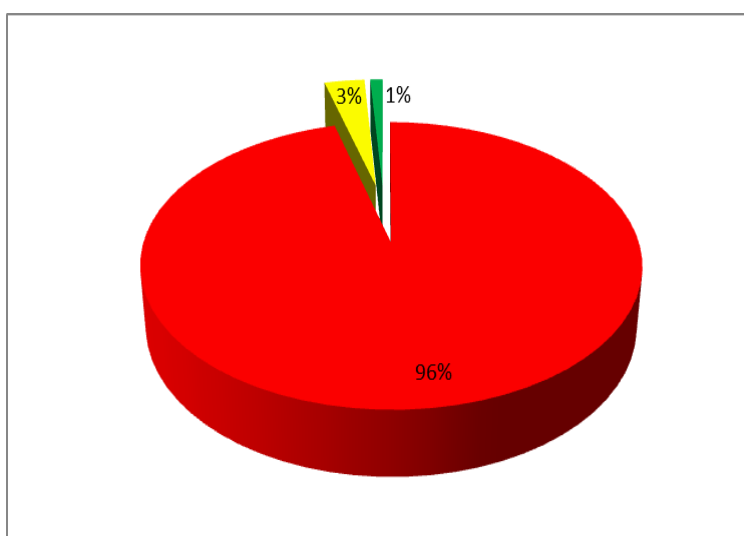


5.1.2. Generar una campaña de emergencia para la atención humanitaria inmediata de las víctimas pertenecientes al pueblo Zenú en situación de riesgo o desplazamiento forzado.

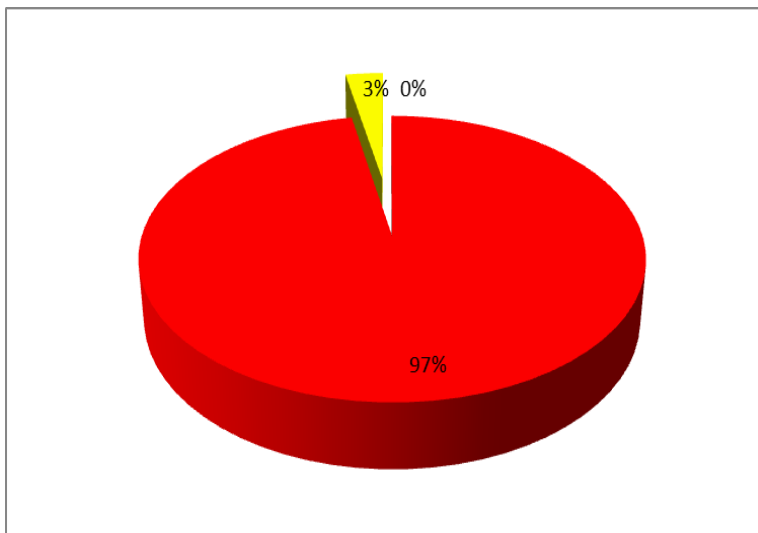


5.2. RESTITUCIÓN Y RETORNO.

5.2.1. Implementar una directriz que proteja la propiedad privada de quienes han sido víctimas de desplazamiento forzado, en aras de amparar los predios denominados como falsas tradiciones, con fundamento de venta de tierras, posesiones y mejoras sobre los asentamientos del pueblo Zenú.

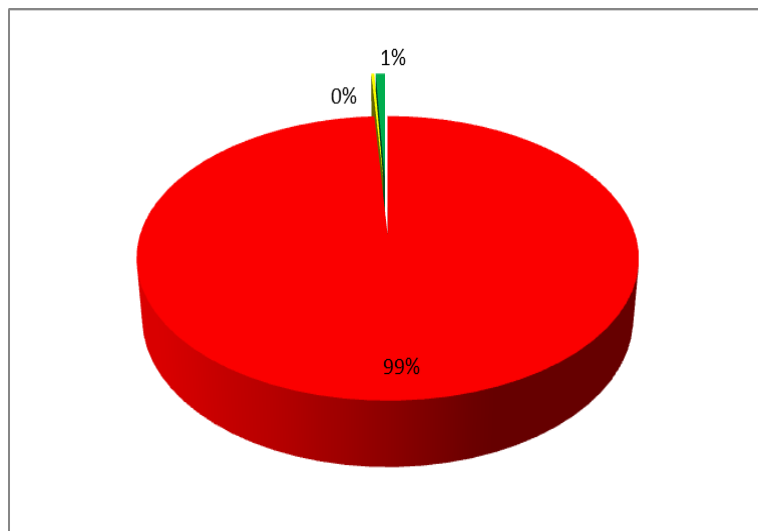


5.2.2. Generar las medidas para garantizar el retorno seguro y permanente a los territorios.



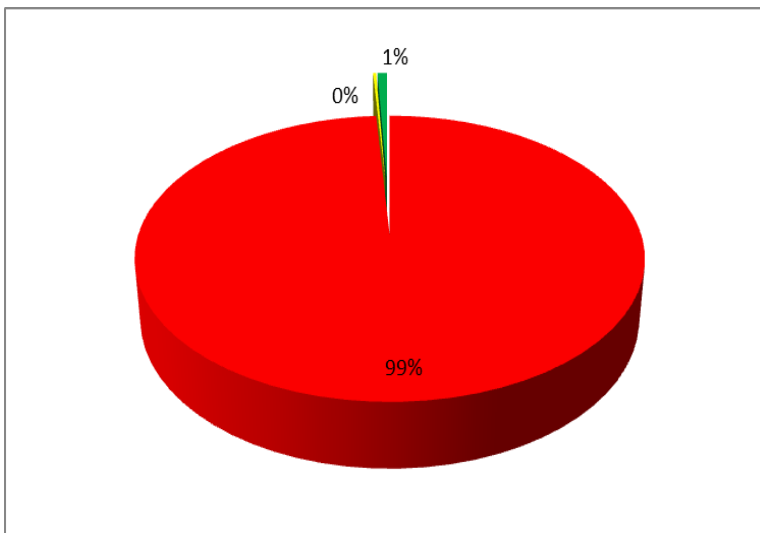
5.3. VERDAD.

5.3.1. Generar medidas de cumplimiento para los procesos de reparación, indemnización, compensación y recuperación al pueblo indígena Zenú por las pérdidas territoriales, sufridas a causa del conflicto armado.



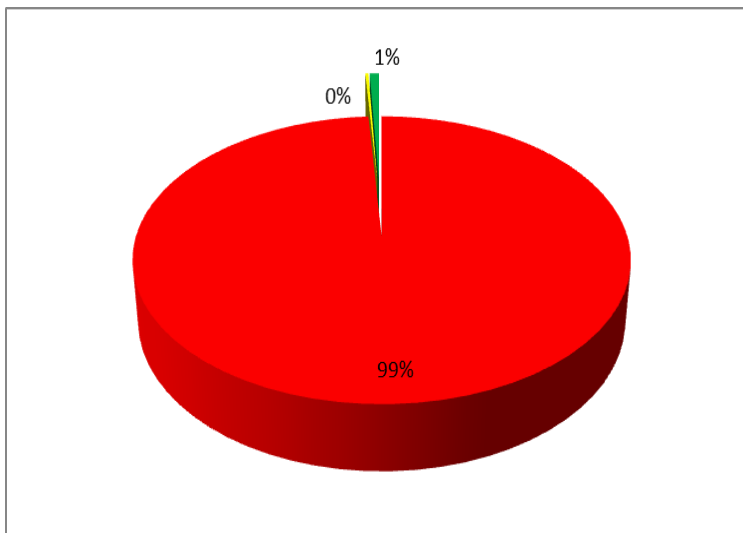
5.4. JUSTICIA.

5.4.1. Garantizar la implementación de los procesos de verdad, para que las víctimas del pueblo Zenú conozcan la realidad de los hechos y lo actores responsables de los actos victimizantes.

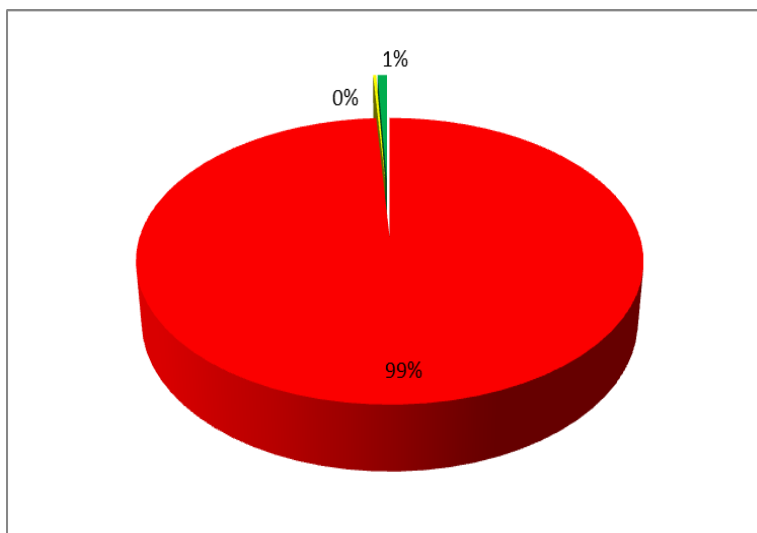


5.5. REPARACIÓN.

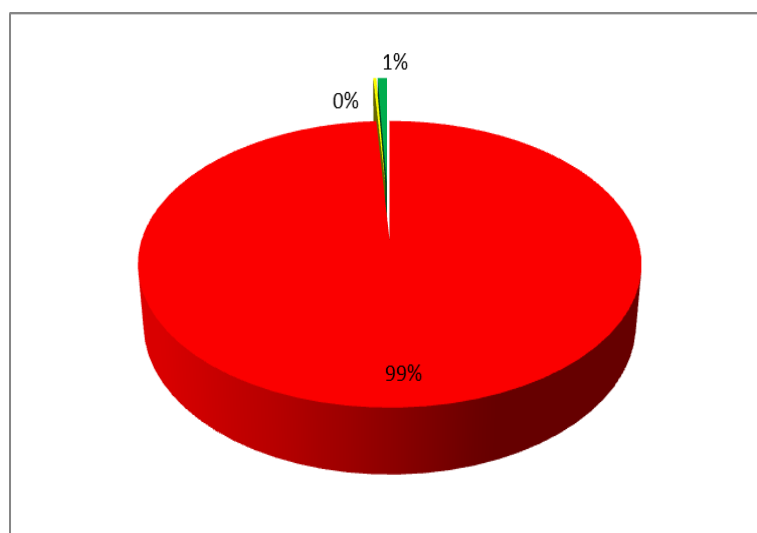
5.5.1. Garantizar el cumplimiento de las condenas, a quienes fueron actores de hechos victimizantes, aplicando lo alusivo al Derecho Internacional Humanitario en cuanto a delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado y que trajeron como resultado despojo, desaparición forzada y homicidios del pueblo Zenú



5.5.2. Reparar de manera integral al pueblo Indígena Zenú, por los sucesivos actos de violación a sus derechos colectivos e individuales.



5.5.3. Establecer y desarrollar en concertación con las autoridades indígenas, medidas especiales para proteger y garantizar los derechos a la verdad y la reparación del derecho a la propiedad colectiva.



CAPÍTULO VI

MARCO GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DE DERECHOS DEL PUEBLO ZENÚ

DERECHOS FUNDAMENTALES A GARANTIZAR	ACCIONES AFIRMATIVAS DE GARANTÍA DEL DERECHO	TIPO DE ACCIÓN							PRIORIDAD			VARIABLES					RESPONSABLE INSTITUCIONAL Y/O GUBERNAMENTAL
		ADMINISTRATIVA	LEGISLATIVA	JURÍDICA	POLÍTICA	EDUCATIVA	ÉTICA	FISCAL	CORTO	MEDIANO	LARGO	ATENCIÓN	PREVENCIÓN	PROTECCIÓN	PROMOCIÓN		
1. Título a la Propiedad Colectiva	Concertar y desarrollar con las autoridades indígenas una estrategia efectiva para garantizar la formalización y titulación de todos los territorios indígenas del Pueblo Zenú.	X	X				X	X	X	X		X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INCODER.	
	Concertar y desarrollar con las autoridades indígenas una estrategia efectiva para garantizar la constitución de Resguardos solicitados por el Pueblo Zenú	X	X				X	X	X	X		X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INCODER.	
	Concertar y desarrollar con las autoridades indígenas medidas estratégicas para la ampliación de los territorios del Pueblo Zenú.	X	X				X	X	X	X		X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO,	

															PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INCODER.
	Concertar y desarrollar con las autoridades y organizaciones indígenas medidas estratégicas para el saneamiento de territorios indígenas de Pueblo Zenú.	X	X			X	X	X	X		X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INCODER.
	Concertar y desarrollar con las autoridades indígenas los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por el Pueblo Zenú.	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INCODER.
	Concertar y desarrollar con las autoridades y organizaciones indígenas medidas de protección de sitios sagrados, lugares rituales y de culto del Pueblo Zenú.	X		X	X	X		X	X		X			X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INCODER, PARQUES NACIONALES.
	Concertar, establecer y desarrollar medidas especiales de Protección de la personalidad jurídica e inviolabilidad de la propiedad colectiva del pueblo Zenú frente a terceros no indígenas.	X		X	X	X		X	X		X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INCODER.

	Establecer y desarrollar medidas especiales para la defensa del carácter imprescriptible, inembargable e inalienable de la propiedad colectiva del pueblo Zenú facultando de competencias a las autoridades públicas con el fin de proteger los territorios en procesos administrativos, legislativos y judiciales.	X	X			X	X	X	X		X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INCODER.	
	Establecer y desarrollar con la participación de las autoridades indígenas, sistemas de información y registro veraz y efectivo sobre los procesos de constitución de la propiedad colectiva.	X			X	X	X	X	X		X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, , DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INCODER.	
	Establecer y desarrollar con la participación de las autoridades indígenas, un plan de emergencia para responder las demandas de constitución, titulación, saneamiento y, ampliación de resguardos indígenas con demoras en sus tramites a la fecha.	X	X			X	X	X	X		X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, , DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INCODER.	
2.AUTONOMIA	Apoyar con medidas especiales a las autoridades indígenas en sus iniciativas de establecer o fortalecer sistemas de autoprotección para los territorios indígenas	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, MINISTERIO DE DEFENSA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

	Concertar con las autoridades indígenas medidas preventivas para disuadir acciones de los grupos armados en los territorios y asentamientos indígenas observando las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario	X	X		X	X			X		X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Concertar con las autoridades indígenas normas que invoquen el respeto y reconocimiento de las FFMM y funcionarios públicos hacia las autoridades indígenas del pueblo Zenú, como autoridades públicas reconocidas constitucionalmente atendiendo a sus disposiciones políticas, culturales y sociales propias.	X	X		X	X			X		X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE DEFENSA, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Establecer una estrategia nacional de capacitación a funcionarios públicos y contratistas del Estado colombiano para que conozcan, respeten y pongan en práctica el marco normativo del derecho a la Autonomía y Gobierno propio del Pueblo Indígena Zenú.	X			X	X			X		X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Establecer y desarrollar en concertación con las autoridades indígenas, un plan de ordenamiento ambiental-territorial en los territorios indígenas del pueblo Zenú, reconociendo el papel de autoridad ambiental que reviste a los Pueblos indígenas.	X				X	X	X	X		X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INCODER.

	Generar apoyo y asesoría a las autoridades indígenas para el fortalecimiento de la gobernabilidad y administración propia de los territorios indígenas y los recursos asociados.	X	X			X	X	X			X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, MINISTERIO DE DEFENSA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Fortalecer la interlocución y articulación de los planes de desarrollo municipales, departamentales y nacionales y otros instrumentos de política pública con las necesidades del pueblo Zenú y sus planes de vida.	X	X			X	X	X			X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, MINISTERIO DE DEFENSA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Implementar mecanismos de coordinación e información entre las autoridades del pueblo Zenú y los poderes públicos del Estado, dirigidos a ejecutar las decisiones y actuaciones de las autoridades indígenas en materia legislativa, cultural, administrativa, política, económica, y de jurisdicción especial.	X	X	X			X		X		X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, MINISTERIO DE DEFENSA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Generar medidas que brinden celeridad de forma efectiva en el proceso administrativo de registro del reconocimiento étnico de las comunidades del pueblo Zenú.	X			X	X		X			X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, MINISTERIO DE DEFENSA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA

															NACIÓN.
3. GOBIERNO PROPIO	Concertar estrategias de promoción institucional, política cultural y social del derecho fundamental al gobierno propio que asiste al pueblo Zenú, en la búsqueda de fortalecer el ejercicio de la justicia y demás temas relacionados, para mantener la convivencia y sostenibilidad social.	X	X		X	X			X		X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE JUSTICIA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Fortalecer la Guardia Indígena Zenú, como autoridad territorial para la protección del territorio colonial y ancestral.	X			X	X			X		X			X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE DEFENSA, MINISTERIO DE JUSTICIA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Generar un ejercicio de coordinación entre las autoridades indígenas y las FFMM, para fomentar el respeto hacia los territorios, evitando las intromisiones en las decisiones de Gobierno Propio del Pueblo Zenú.	X			X	X			X		X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE DEFENSA, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Fortalecer la Escuela de Derecho Propio "Eusebio Feria", para la formación política y cultural de las autoridades indígenas.	X			X	X	X		X		X			X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE JUSTICIA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Exigir garantías al Estado colombiano para el cumplimiento efectivo de	X	X			X			X		X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE JUSTICIA,

	las penas judiciales impuestas a quienes han vulnerado los derechos del pueblo Zenú.														DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Establecer las rutas pertinentes que conduzcan al reconocimiento de la remuneración integral para los Capitanes indígenas en aras de retribuir su función social y política.	X				X	X			X	X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE DEFENSA, MINISTERIO DE JUSTICIA, MINISTERIO DE HACIENDA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Apoyar la construcción de planes de vida para los resguardos del pueblo Zenú, con el fin de garantizar el cumplimiento de las formas de comportamiento y pervivencia como pueblo indígena asegurando el desarrollo político, económico, social y cultural propias en atención a la ley de origen y la sabiduría ancestral.	X				X	X	X			X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE HACIENDA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
4 JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA	Establecer de manera clara y específica y bajo concertación previa con las autoridades tradicionales, las competencias de las autoridades indígenas para aplicar justicia en los territorios donde se encuentra asentado el pueblo Zenú.		X				X		X		X	X			PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE JUSTICIA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Coordinar entre las entidades del Estado encargadas de impartir la justicia ordinaria y las autoridades indígenas		X				X		X		X			X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE JUSTICIA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES

	mecanismos para el desarrollo y fortalecimiento de la Jurisdicción especial indígena en el pueblo Zenú en concordancia con la ley de origen.														TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
5. IDENTIDAD CULTURAL	Garantizar los procesos de adecuación institucional con enfoque intercultural para fortalecer los procesos de recuperación cultural, en el marco de la creación de planes, programas y proyectos del Pueblo Zenú.	X				X	X		X		X		X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE CULTURA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, CENTRO DE MEMORIA HISTORICA, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Establecer un instrumento para el reconocimiento y protección de territorios de importancia ancestral, ambiental y cultural para el pueblo Zenú.	X				X	X		X		X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE CULTURA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, MINISTERIO DE AMBIENTE, NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
6. CONSULTA PREVIA	Promover medidas que garanticen el ejercicio del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre informado y culturalmente adaptable, siempre que se involucren derechos y territorios que afecten a comunidades del pueblo Zenú.	X				X	X	X			X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE AMBIENTE, AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Prohibir y sancionar los proyectos de inversión, infraestructura, extracción y explotación de recursos naturales y desarrollo productivo sin previa, amplia y legítima consulta con participación de las	X		X		X	X		X		X			X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE AMBIENTE, AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA

	comunidades afectadas de manera directa e indirecta.														GENERAL DE LA NACIÓN.
	Garantizar que se realicen los procesos de consulta previa de manera efectiva y que los compromisos que fueron resultados de está, se cumplan a cabalidad.	X		X		X	X		X		X	X		X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE AMBIENTE, AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Crear cronogramas legislativos que garanticen la consulta previa, libre e informada de las iniciativas legislativas que se pretendan promover con el pueblo Zenú.		X			X	X		X		X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE AMBIENTE, AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
7. Seguridad, orden social y paz	Exigir el respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores de conflicto armado interno.	X	X			X	X		X		X			X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE JUSTICIA, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Generar mecanismos de participación efectiva en el proceso de paz por parte del pueblo indígena Zenú, garantizando el cumplimiento de los compromisos respecto a la reparación y la no repetición.	X					X		X		X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE JUSTICIA, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Fomentar y fortalecer la creación y funcionamiento de las escuelas de paz, que capacite a niños, niñas y adolescentes indígenas del Pueblo Zenú en el diálogo, la concertación y las soluciones pacíficas a los	X				X	X			X	X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE JUSTICIA, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

	conflictos														
	Adoptar medidas presupuestales y operativas que permitan fortalecer los esquemas de protección, incluyendo las medidas cautelares y provisionales emitidas por el el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las medidas de protección otorgadas por la Corte Suprema de Justicia para el pueblo Zenú.	X					X			X	X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE JUSTICIA, MINISTERIO DE HACIENDA, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
8. LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN	Promover un programa de desminado (MAP y MUSE) en los territorios del pueblo Zenú, contando con la asistencia de organismos internacionales.	X					X	X			X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE DEFENSA, MINISTERIO DE JUSTICIA, MINISTERIO DE HACIENDA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Generar medidas de protección de los territorios colectivos, asentamientos y lugares sagrados indígenas Zenú asegurando el libre paso por la totalidad de la extensión del territorio ancestral.	X	X				X	X			X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE JUSTICIA, MINISTERIO DE HACIENDA, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Apoyar y Fortalecer la sistematización y actualización del censo poblacional del pueblo Zenú, identificando el perfil socio-económico, a través de una consolidación concertada de un sistema de información socio-demográfica con enfoque diferencial.	X					X	X	X		X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, , ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Establecer mecanismos que permitan la efectiva	X					X	X		X		X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, ,
9. Igualdad ante la ley															

	participación del pueblo Zenú en los diferentes escenarios: municipal, departamental y nacional.														ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Reconocer y respetar el carácter público que reviste a las autoridades indígenas en su calidad de representantes del Pueblo Zenú.	X				X	X	X			X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Establecer medidas para que el pueblo Zenú pueda garantizar de manera acorde las medidas para la atención humanitaria dentro de sus territorios.	X	X			X			X		X			X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Determinar de manera conjunta con las autoridades indígenas formas de vinculación a procesos de participación para la construcción de políticas que involucren al pueblo Zenú, como Tratados de Libre Comercio.	X				X				X	X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE COMERCIO, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
10. Prohibición a la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes	Concertar con las autoridades indígenas, la adopción y ejecución de una política pública con enfoque étnico diferencial de prevención y sanción de la tortura, tratos crueles e inhumanos contra el pueblo Zenú, del mismo modo la protección a las víctimas de crímenes atroces, que contemplan garantías de no repetición.				X	X		X			X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE JUSTICIA, UNIDAD DE VÍCTIMAS, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Concertar de manera integra con las instituciones del Estado y organismos internacionales, para que se	X		X				X			X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE JUSTICIA, UNIDAD DE VÍCTIMAS, ENTIDADES

	lleve a cabo una investigación exhaustiva en búsqueda de los hechos sucedidos en los territorios indígenas del Pueblo Zenú po causa del conflicto armado interno.														TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
11. LIBERTAD DE EXPRESIÓN	Fomentar campañas de respeto a la dignidad humana para el pueblo Zenú.	X			X	X			X		X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE JUSTICIA, UNIDAD DE VICTIMAS, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Promover y difundir los acervos culturales, las ideas políticas y reivindicaciones en derecho del pueblo Zenú y las organizaciones indígenas por los medios, canales y estructuras de difusión nacional.	X			X	X			X		X			X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE CULTURA, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Fortalecer los procesos de formación de los miembros del pueblo Zenú en las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como también en investigación y documentación histórica de los procesos propios.	X			X	X	X	X			X	X		X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Establecer estrategias para que las instituciones encargadas de los procesos de justicia, verdad y reparación que escuchen a las víctimas y reporten de manera verídica los hechos victimizantes que han afectado la integridad del pueblo Zenú a causa del conflicto armado.	X	X	X	X	X		X			X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE JUSTICIA, UNIDAD DE VICTIMAS, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Concertar estrategias	X			X	X		X			X			X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,

	normativas en la búsqueda de la protección de las expresiones culturales y religiosas en los territorios indígenas del pueblo Zenú.													MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE CULTURA, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	
	Implementar medidas que obliguen a las entidades y funcionarios del Estado a respetar los espacios que el pueblo Zenú adelanta en la búsqueda del ejercicio de los derechos colectivos.	X			X	X		X			X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE JUSTICIA, MINISTERIO DE DEFENSA, MINISTERIO DE AMBIENTE, MINISTERIO DE TRABAJO, MINISTERIO DE SALUD, UNIDAD DE VICTIMAS, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	
12. LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y CONCIENCIA	Concertar medidas de protección especial para los médicos ancestrales, parteras, sobanderos y líderes políticos del pueblo Zenú.	X			X	X	X		X		X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE CULTURA, MINISTERIO DE SALUD, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Establecer medidas de control y sanción para las acciones y actos de proselitismo religioso y político en territorios y comunidades del pueblo Zenú; de igual forma a la injerencia de credos, iglesias e instituciones religiosas, que limiten los saberes ancestrales.	X	X	X		X		X			X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE CULTURA, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Fortalecer, reconocer y desarrollar los sistemas espirituales y medicinales del pueblo indígena Zenú.	X			X	X		X			X		X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE CULTURA, MINISTERIO DE SALUD, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA

															GENERAL DE LA NACIÓN.
13. Libertad de asociación y movilización	Establecer mecanismos de protección y respeto, para que el pueblo Zenú y sus autoridades puedan con autonomía determinar en el marco del derecho propio, con quien establecer alianzas políticas, organizativas o programáticas.	X				X		X			X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, , ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Proteger y defender del movimiento indígena sin ningún tipo de retaliación ni discriminación por parte de las entidades del Estado colombiano	X				X		X			X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, , ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Proteger y evitar las represalias por parte de los actores armados, en las movilizaciones sociales y étnicas del Pueblo Zenú.	X		X		X		X			X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, , ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
14. Soberanía y autonomía alimentaria	Concertar y desarrollar una política pública de seguridad alimentaria que de prioridad de atención a las comunidades del pueblo Zenú.	X			X	X	X	X			X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE AGRICULTURA,INCODER, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Garantizar el enfoque diferencial étnico en los planes, programas y políticas agrarios del Estado.	X			X	X		X			X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE AGRICULTURA,INCODER, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Fomentar procesos productivos y de economía solidaria entre el pueblo Zenú y el resto de la nación.	X			X	X	X	X	X		X	X		X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE AGRICULTURA,INCODER, ENTIDADES TERRITORIALES DE

															CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Establecer y fomentar proyectos para la adecuación de suelos, sistemas de riego e infraestructura necesaria, para la producción agrícola de los territorios del pueblo Zenú				X	X	X		X		X			X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE AGRICULTURA, INCODER, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Fomentar en el pueblo indígena Zenú el desarrollo de prácticas tradicionales de cultivo y uso de las semillas tradicionales.	X			X	X	X	X			X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE AGRICULTURA, INCODER, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
15. Atención psicosocial	Crear líneas de atención psicosocial para comunidades indígenas en condición de desplazamiento con personal profesional capacitado en enfoque diferencial étnico.					X	X		X		X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE SALUD, ICBF, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Garantizar la atención psicológica a las personas afectadas por el conflicto armado en articulación con la medicina tradicional.					X	X		X		X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE SALUD, ICBF, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
16. DOMINACIÓN Y EXPLOTACIÓN	Diseñar una directiva legislativa, judicial o presidencial que prohíba, visibilice y promueva sanciones para toda forma de racismo o formas conexas de intolerancia y exclusión que afecten los derechos individuales y colectivos del pueblo Zenú	X	X	X		X		X			X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE AGRICULTURA, INCODER, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

	Asegurar acompañamiento jurídico permanente para recepción y procesamiento de casos por acoso laboral discriminatorio y establecer marco sancionatorio correspondiente.	X	X	X		X			X		X		X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DEL TRABAJO, INCODER, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Concertar una directiva legislativa, judicial o presidencial con la participación de las autoridades indígenas, donde se establezca un protocolo para la prohibición de cualquier tipo de explotación económica, laboral, social, política, militar y sexual del pueblo Zenú.	X	X	X		X		X		X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DEL TRABAJO, INCODER, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
17. EDUCACIÓN	Exigir la implementación del PECC asegurando que sea construido de acuerdo a las bases de educación propia ancestral del pueblo Zenú.	X			X	X	X	X		X			X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Dotar al pueblo Zenú de la infraestructura necesaria que le permita garantizar una educación propia de conformidad al SEIP				X	X	X	X		X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Diseñar programas y servicios educativos para el pueblo Zenú, en consulta y cooperación con éstos, con la finalidad de gozar con estrategias de seguimiento, evaluación y control de manera diferencial.	X			X	X	X	X		X			X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Asegurar el acceso a los cupos estudiantiles a nivel	X			X	X	X	X		X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR,

	nacional, departamental y municipal en los procesos de admisión a la educación superior, técnica o tecnológica, tanto en instituciones públicas o privadas, con condiciones de equidad, bajo criterio de priorización, gratuidad, así como becas, subsidios y líneas de crédito especiales para la población indígena Zenú.														MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
18.SALUD	Fomentar la construcción de infraestructura necesaria y la contratación de personal idóneo que permita cubrir plenamente las necesidades de salud del pueblo Zenú de acuerdo al SISPI.	X			X	X	X	X			X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Respetar las estrategias culturales, administrativas y fiscales para la defensa, protección, fortalecimiento y reconocimiento de la medicina tradicional Zenú.	X				X	X		X		X			X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE CULTURA, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Contar con recursos estatales y/o gubernamentales que apoyen procesos de sensibilización y formación de niños y jóvenes indígenas en el conocimiento de las medicinas tradicionales.				X	X		X			X		X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE CULTURA, MINISTERIO DE SALUD, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Promover la adecuación institucional para la atención y la prestación del servicio de salud con enfoque diferencial étnico, garantizando el acceso al derecho a la salud bajo la	X			X	X	X		X		X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE SALUD, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

	prestación de un servicio con calidad, efectivo y respetuoso de la diferencia.														
19.LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS RIQUEZAS	Establecer medidas de protección a la propiedad intelectual colectiva indígena, sobre sus bienes y valores intangibles.	X				X		X			X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, MINISTERIO DE CULTURA, INVIMA, ICAN, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Respetar y proteger la propiedad del suelo y el subsuelo donde se encuentran asentadas las comunidades (Convenio 169 de la OIT).	X	X	X		X			X		X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE AMBIENTE, AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Concertar y desarrollar una política pública que incorpore el concepto de desarrollo propio desde la concepción del pueblo Zenú, en aras de la armonía y la disposición natural del territorio, teniendo en cuenta que los proyectos extractivitas están en contra de la pervivencia física y cutural de nuestro pueblo.	X		X		X			X		X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE AMBIENTE, AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
20.DERECHO AL DESARROLLO	Establecer mecanismos para la generación de empleo en los resguardos y comunidades asegurando el acceso a crédito y el fortalecimiento de los lazos de comercialización.	X			X	X	X		X		X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE TRABAJO, MINISTERIO DE HACIENDA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Asegurar el acceso a la tierra y la creacion de empresas propias donde se	X			X	X	X		X		X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE TRABAJO, MINISTERIO DE HACIENDA,

	implementen proyectos productivos acordes a los usos, costumbres y territorialidades del pueblo indígena Zenú.														DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	
	Diseñar propuestas de desarrollo que emerjan de las necesidades productivas del pueblo Zenú, teniendo en cuenta la diversidad cultural y el enfoque diferencial.					X	X	X	X			X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE TRABAJO, MINISTERIO DE HACIENDA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	
21.BIENES CULTURALES	Establecer medidas que protejan la construccion de viviendas tradicionales del pueblo Zenú, teniendo en cuenta el uso de materiales propios.					X	X	X		X		X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, MINISTERIO DE HACIENDA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	
	Exigir al Estado colombiano el cumplimiento de los acuerdos, pactos y convenciones internacionales sobre el derecho del pueblo Zenú a sus patriomonios y valores culturales, históricos, colectivos y sociales	X					X		X			X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	
	Emitir sanciones y medidas de protección que eviten el tráfico de mercados negros, explotación comercial o aprovechamiento intelectual indebido de los bienes culturales del pueblo indígena Zenú	X	X				X		X			X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, MINISTERIO DE COMERCIO, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Articular entre las autoridades indígenas y las autoridades estatales el	X				X	X		X			X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, MINISTERIO DE AMBIENTE,

	diseño de los lineamientos de protección de los recursos de biodiversidad y genéticos presentes en el territorio Zenú.													ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Coordinar entre las Autoridades Ambientales Indígenas del pueblo Zenú y las Autoridades Ambientales Estatales para el diseño de planes de ordenamiento, manejo y restauración de los ecosistemas pertenecientes al territorio.	X	X		X	X	X	X			X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, MINISTERIO DE AMBIENTE, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Reparar y reducir las afectaciones de impacto negativo sobre el territorio por causa directa o indirecta de los megaproyectos de extracción y explotación de recursos naturales.	X	X	X		X	X	X			X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, MINISTERIO DE AMBIENTE, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
23. RECREACIÓN	Diseñar programas de recreación que estén articulados con las construcciones de identidad cultural que permitan la pervivencia física y cultural del pueblo indígena Zenú.	X			X	X	X		X		X		X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, COLDEPORTES, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Fomentar la creación de espacios y escenarios deportivos dentro de la comunidad para desarrollar las olimpiadas y práctica del deporte teniendo en cuenta las costumbres propias como pueblo Zenú.	X			X	X	X		X		X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, COLDEPORTES, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Destinar y ejecutar recursos para festivales relacionados con las danzas, música y narración oral, como parte de la recreación del pueblo Zenú.				X	X	X		X		X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, COLDEPORTES, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

24.FAMILIA	Fomentar programas donde se reconozca un mínimo vital de subsistencia digna, educación y salud, que contribuyan al bienestar del adulto mayor.	X			X	X	X		X		X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, MINISTERIO DE TRABAJO, MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Exigir el acceso a los auxilios de los programas municipales, departamentales y nacionales de apoyo a mujeres cabeza de familia.	X			X	X	X	X			X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, MINISTERIO DE TRABAJO, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Diseñar estrategias para erradicar el maltrato intrafamiliar en la población Zenú.	X	X		X	X		X			X	X			PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, ICBF, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Fomentar planes, programas y proyectos que permitan el fortalecimiento del capital social y el mejoramiento de los ingresos de las familias indígenas Zenú.				X	X	X		X		X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, MINISTERIO DE TRABAJO, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
25.MUJERES INDÍGENAS	Establecer medidas de prevención, control y castigo contra todo tipo de violencia y abuso contra la mujer indígena Zenú. Además de garantizar apoyo económico para la defensa de los derechos de la mujer y el acceso de ésta a la educación formal, técnica, tecnológica y profesional.	X			X	X			X		X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, ICBF, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Crear organizaciones y mecanismos donde las mujeres indígenas víctimas del conflicto armado, de las	X			X	X			X		X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, ICBF, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA

	violencias (físicas, psicológicas y sexuales), y del desplazamiento forzado puedan exigir sus derechos y el goce efectivo de los mismos.														DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
26. NIÑOS Y NIÑAS INDÍGENAS	Realizar campañas con enfoque étnico diferencial y para la desmovilización de niños, niñas y adolescentes indígenas de los grupos armados.	X			X	X		X			X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, ICBF, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Establecer y desarrollar en concertación medidas especiales y urgentes para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes indígenas por parte de los grupos armados.	X			X	X		X			X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, ICBF, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
27. DISCAPACITADOS INDÍGENAS	Generar acciones que permitan la preservación de un mínimo vital, seguridad social y educación de la población en situación de discapacidad.	X	X			X	X			X	X	X			PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, ICBF, MINISTERIO DE SALUD, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Implementar una caracterización de la población indígena Zenú en situación de discapacidad para garantizar la sostenibilidad integral.	X				X	X		X		X	X		X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, ICBF, MINISTERIO DE SALUD, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
28. INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Asegurar los recursos necesarios para la sostenibilidad de las comunidades del pueblo Zenú, y así, prevenir el desplazamiento forzado.				X	X	X	X			X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, MINISTERIO DE AGRICULTURA, MINISTERIO DE HACIENDA ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Diseñar mecanismos que posibiliten la sostenibilidad				X	X	X	X			X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR,

	integral para las víctimas en situación de desplazamiento del pueblo Zenú, en lo que respecta a programas que los beneficie en cuanto a Infraestructura, atención, tratamiento y sostenibilidad.														MINISTERIO DE AGRICULTURA, MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE VICTIMAS, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
29.ATENCIÓN HUMANITARIA	Generar las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento efectivo e inmediato del Decreto Ley 4633 de 2011.	X			X	X	X	X			X	X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, MINISTERIO DE AGRICULTURA, MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE VICTIMAS, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Generar una campaña de emergencia para la atención humanitaria inmediata de las víctimas pertenecientes al pueblo Zenú en situación de riesgo o desplazamiento forzado.	X	X	X		X	X	X			X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, MINISTERIO DE AGRICULTURA, MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE VICTIMAS, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
30.RESTITUCIÓN Y RETORNO	Implementar una directriz que proteja la propiedad privada de quienes han sido víctimas desplazamiento forzado, en aras de amparar los predios denominados como falsas tradiciones, con fundamento de venta de tierras, posesiones y mejoras sobre los asentamientos del pueblo Zenú.	X			X	X			X		X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, MINISTERIO DE AGRICULTURA, UNIDAD DE VICTIMAS, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
31.VERDAD	Generar medidas de cumplimiento para los procesos de reparación, indemnización, compensación y recuperación al pueblo	X			X	X	X	X			X	X	X		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, MINISTERIO DE AGRICULTURA, UNIDAD DE VICTIMAS, UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRA, ENTIDADES TERRITORIALES DE

	indígena Zenú por las pérdidas territoriales, sufridas a causa del conflicto armado.														CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
32.JUSTICIA	Garantizar la implementación de los procesos de verdad, para que las víctimas del pueblo Zenú conozcan la realidad de los hechos y lo actores responsables de los actos victimizantes.	X					X		X			X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, UNIDAD DE VÍCTIMAS, UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRA, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
33.REPARACIÓN	Garantizar el cumplimiento de las condenas, a quienes fueron actores de hechos victimizantes, aplicando lo alusivo al Derecho Internacional Humanitario en cuanto a delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado y que trajeron como resultado despojo, desaparición forzada y homicidios del pueblo Zenú	X					X		X			X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, UNIDAD DE VÍCTIMAS, UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRA, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Reparar de manera integral al pueblo Indígena Zenú, por los sucesivos actos de violación a sus derechos colectivos e individuales.	X					X	X	X			X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, UNIDAD DE VÍCTIMAS, UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRA, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
	Establecer y desarrollar en concertación con las autoridades indígenas, medidas especiales para proteger y garantizar los derechos a la verdad y la reparación del derecho a la propiedad colectiva.	X					X	X	X			X	X	X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, UNIDAD DE VÍCTIMAS, UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRA, ENTIDADES TERRITORIALES DE CÓRDOBA Y SUCRE, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

